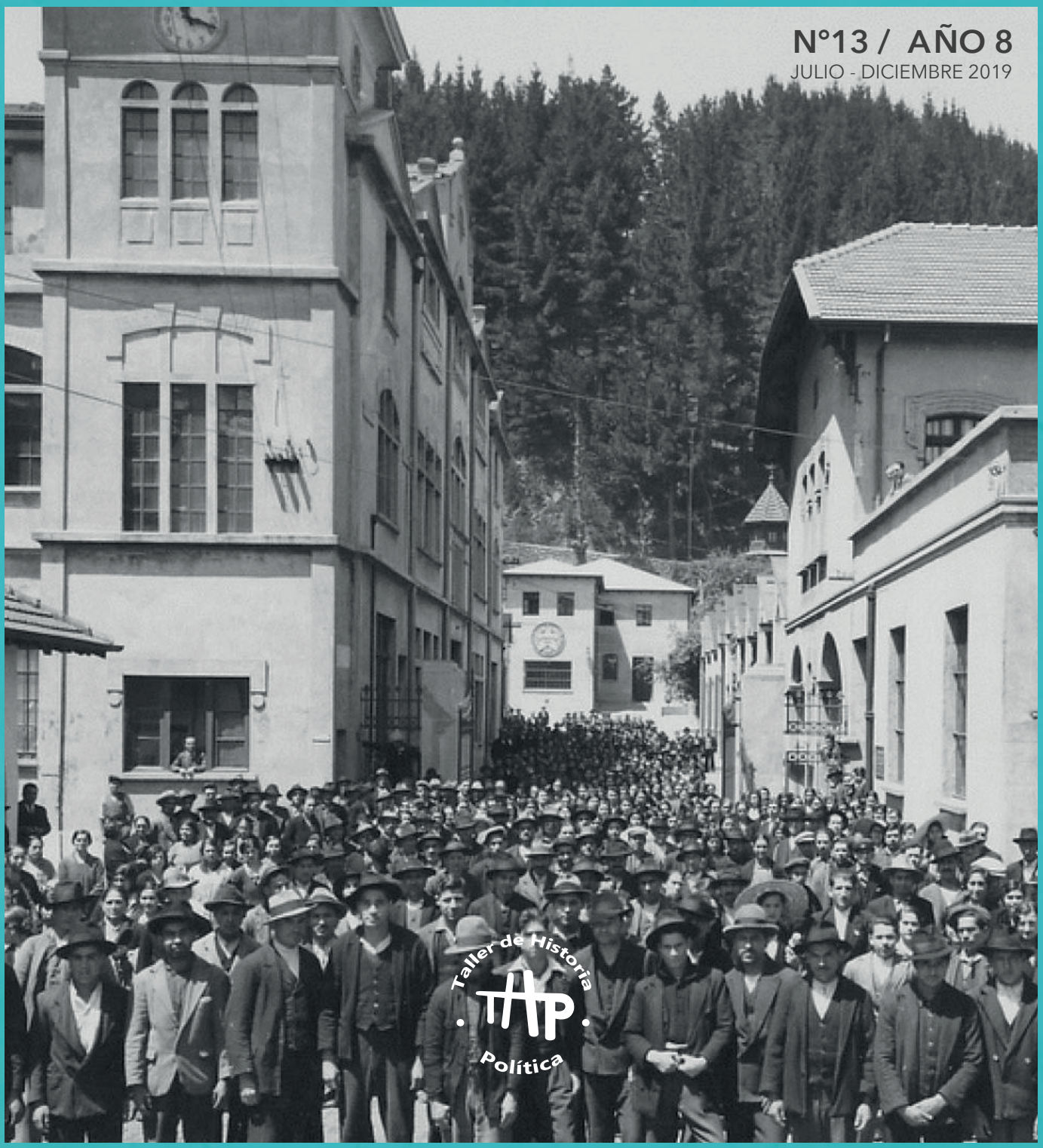
Revista de Historia y Ciencias Sociales

divergencia

ISSN 0719-2398
VERSIÓN ELECTRÓNICA



N°13 / AÑO 8
JULIO - DICIEMBRE 2019

REVISTA DIVERGENCIA

ISSN (electrónico): 0719-2398
Taller de Historia Política O.F.C. (THP)
e-mail: contacto@revistadivergencia.cl
www.revistadivergencia.cl

n° 13 | año 8
Julio - Diciembre 2019

EQUIPO RESPONSABLE

Editor responsable
José Ponce López
j.ponce@revistadivergencia.cl

Editor asociado
Jorge Valderas Villarroel
j.valderas@revistadivergencia.cl

Editor asociado
Anibal Pérez Contreras
a.perez@revistadivergencia.cl

Traductor
Alejandro Torres Vergara

Diseño y diagramación
Esteban Vásquez Muñoz

Fotografía de portada:
Obreros en la fábrica textil Bellavista Oveja,Tomé, Región del Biobio, Chile.
Actualmente, el edificio es Monumento Nacional.

CONSEJO EDITORIAL

A la fecha, el Consejo Editorial de DIVERGENCIA
se encuentra compuesto por los siguientes académicos:

INTERNACIONALES

PhD. Ronaldo Munk
Dublin City University.
Dublin, República de Irlanda.

Dra. Teresa Basile
Universidad Nacional de la Plata.
Buenos Aires, Argentina.

Dra. Mabel Thwaites
Universidad de Buenos Aires.
Buenos Aires, Argentina.

PhD. Margaret Power
Illinois Institute of Technology.
Chicago, Estados Unidos.

Dr. James Osorio Urbina
U. Autónoma Metropolitana Xochimilco.
Ciudad de México, México.

Dr. Atilio Boron
Universidad de Buenos Aires.
Buenos Aires, Argentina.

Dr. Aldo Marchesi
Universidad de la República, Uruguay.
Montevideo, Uruguay.

Dr. Frank Gaudichaud
Universidad de Stendhal Grenoble 3.
Grenoble, Francia.

NACIONALES

Dr. Rolando Álvarez Vallejos
Universidad de Santiago de Chile.
Santiago, Chile.

Dr. Luis Corvalán Marquez
Universidad de Valparaiso.
Valparaíso, Chile.

Dr. Igor Goicovic Donoso
Universidad de Santiago de Chile.
Santiago, Chile.

Dr. Juan Carlos Gómez Leyton
Universidad Central.
Santiago, Chile.

Dr. Gabriel Salazar Vergara
Universidad de Chile.
Santiago, Chile.

Dr. Claudio Pérez
Universidad de Valparaíso, Chile.
Valparaíso, Chile.

Dr. Danny Monsálvez Araneda
Universidad de Concepción.
Concepción, Chile.

Dra. Cristina Moyano Barahona
Universidad de Santiago de Chile.
Santiago, Chile.

Dr. Luis Pacheco Pastene
U. Academia de Humanismo Cristiano.
Santiago, Chile.

Revista de Historia y Ciencias Sociales

divergencia

DIVERGENCIA
Revista de Historia y Ciencias Sociales

Número 13, Año 8
Julio a Diciembre, 2019

Taller de Historia Política

Órgano de difusión y discusión político-académica,
impulsado por el Taller de Historia Política.

Valparaíso, Chile.

ÍNDICE / Index

7 -8 **Presentación** / Presentation

Dr. Danny Monsálvez Araneda, Dr. Aníbal Pérez Contreras

ARTÍCULOS / Articles

11 - 28 Del trabajo industrial a la organización política. Movimientos huelguísticos de los obreros textiles de Tomé entre 1919 y 1921
From Industrial work to political organization. Strike movements of the textile workers of Tomé between 1919 and 1921

Nicole Fuentealba Romero

29 -49 Intelectuales del Cono Sur en Chile. Perfil de los cientistas sociales brasileños y argentinos radicados en la Universidad de Concepción (1967-1973)
Intellectuals of the Southern Cone in Chile. Profile of Brazilian and Argentine social scientists based at the University of Concepción (1967-1973)

Pedro Altamirano Castillo

51 -70 La relegación como control social y exilio interno bajo la dictadura cívico-militar chilena, 1973 a 1986
Relegation as social control and internal exile under the Chilean civic-military dictatorship, 1973 to 1986

Javier González Alarcón, Danny Monsálvez Araneda

71 -92 ¿Pobres de derecha? La señora Jacqueline y el mundo popular de Concepción. Trabajo de terreno, clientelismo y movilización electoral 1992-2013
Poors of the right-wing? Mrs. Jacqueline and the popular world of Concepción. Field work, clientelism and electoral mobilization, 1992-2013

Aníbal Pérez Contreras

93 -113 Participación obrera, democracia y elecciones. Las luchas por la democratización del Partido Obrero Socialista y el Partido Comunista. Chile, 1912-1925
Workers' participation, democracy and elections. The struggles for the democratization of the Socialist Workers Party and the Communist Party. Chile, 1912-1925

Jorge Navarro López

115 -134 ¿Un racismo en la izquierda? El Partido Socialista, las organizaciones *Mapuche* y la colonización agrícola (1932-1941)
A racism on the left? The Socialist Party, Mapuche organizations and agricultural colonization (1932-1941)

Nicolás Acevedo Arriaza

135 -151 Los usos del discurso anticomunista del peronismo durante el periodo 1951-1955: La infiltración gremial, la cuestión internacional y el conflicto con la Iglesia
The uses of the anti-communist discourse of Peronism during the period 1951-1955: Guild infiltration, the international issue and the conflict with the Church

Pedro Simunovic Gamboa

153 -172 ¿Violencia política o política violenta? Un debate acerca del uso de los conceptos, a partir del análisis del "Trelewazo" - Trelew, Chubut, Patagonia Argentina, 1972 -
Political violence or violent politics? A debate about the use of concepts, based on the analysis of "Trelewazo" – Trelew, Chubut, Argentine Patagonia, 1972 -

Axel Binder, Gonzalo Pérez Álvarez

COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS / Book review

175 - 178 Mario Andrés González, Gonzalo Vial Correa, Las sinuosidades de una trayectoria intelectual, 1969-1991. Valparaíso: RIL Editores, Octubre de 2017. 193 páginas
Gorka Sebastián Villar Vásquez

PRESENTACIÓN / Presentation

Ocho son los artículos y una reseña los que están presentes en este nuevo número de la Revista Divergencia, en su versión 13, los cuales se distribuyen de la siguiente forma. Los tres primeros artículos constituyen estudios que dicen relación con la historia política del Gran Concepción, entre ellos podemos mencionar el trabajo de Pedro Altamirano, alumno del Programa de Magíster en Historia de la Universidad de Concepción, quien analiza la importante presencia de algunos cientistas sociales brasileños y argentinos en la Universidad de Concepción para el periodo 1967 a 1973. La contribución que estos realizaron al desarrollo e impulso de las Ciencias Sociales en la zona penquista y el país, específicamente en el campo de la sociología y como estos cientistas sociales se vincularon políticamente en su estadía en Chile, constituyen los ejes centrales de la investigación desarrollada por Altamirano. El segundo de los artículos aborda el proceso de politización del movimiento obrero y sindical de los años 1919 a 1921 en una de las localidades más significativas de la zona de Concepción, no estamos refiriendo a la comuna textil de Tomé. Específicamente la autora, Nicole Fuentealba, estudiante de Licenciatura en Historia de la Universidad de Chile, se adentra en el estudio de cómo el movimiento obrero tuvo en aquellos años una importante influencia política de parte del Partido Democrático y desde el punto de vista económico del denominado "Paternalismo Industrial"; ambos desempeñaron un papel central a la hora de la politización que tuvo el movimiento obrero del periodo de estudio. Finalmente en la línea de los trabajos sobre Concepción y desde una mirada de la Historia Reciente, el Dr. Aníbal Pérez analiza quizás uno de los fenómenos que se ha visibilizado con fuerza en los últimos años en nuestro país, no referimos al "clientelismo". El autor propone entenderlo como una costumbre política entre patrones mediadores y clientes, quienes la utilizan como parte de una economía moral. El artículo de Pérez hace un giro en aquel análisis, descentralizando la mirada para ver cómo el clientelismo opera fuera de Santiago, específicamente en la ciudad de Concepción con la figura de la ex alcaldesa Jacqueline van Rysselberghe. Allí se destaca las redes que fue tejiendo esta emblemática dirigente de la UDI, el trabajo en terreno hacia el mundo popular y un liderazgo combativo y conservador que la posicionó a nivel nacional, no sólo en su partido sino también en todo el abanico político partidista chileno.

Luego de estos trabajos, nos encontramos con tres contribuciones que abordan problemas de carácter nacional. Entre ellos podemos mencionar los artículos de Nicolás Acevedo, Jorge Navarro y Danny Monsálvez en coautoría con Javier González. En el primer de ellos, Acevedo, candidato a Doctor en Historia por la Universidad de Santiago, plantea la interrogante sobre si existió racismo en el Partido Socialista en relación al tema mapuche y la colonización agrícola entre los años 1932 a 1941. Para el autor, si bien el Partido Socialista, por medio de una propuesta agraria, buscó una integración de los pueblos indígenas a la sociedad nacional, esto pasaba por una invisibilización de sus costumbres y reivindicaciones que eran propias del pueblo mapuche, con lo cual la propuesta de una política agraria de los socialistas de aquellos años generaba "un racismo inconsciente". Por su parte, Navarrete realiza un estudio comparado del Partido Obrero Socialista y del Partido Comunista de Chile en su lucha por una demo-

Revista Divergencia: N° 13 / Año 8
Julio - Diciembre 2019
ISSN 0719-2398

cratización de la sociedad entre los años 1912 a 1925. Específicamente, ambas colectividades lucharon incansablemente por "fomentar la participación política de la clase obrera y para denunciar y contrarrestar las acciones represivas del Régimen Parlamentario" imperante en aquellos años. Por último el artículo del Dr. Monsálvez, académico de la Universidad de Concepción y González, Magíster en Historia por dicha casa de estudios, realizan un análisis de uno de los mecanismo represivos poco estudiados en la dictadura de Pinochet, pero que fue muy utilizado por dicho régimen, nos referimos a la relegación como control social y exilio interno entre los años 1973 a 1986.

Para finalizar la presentación del presente número de Revista Divergencia, situamos dos contribuciones provenientes de Argentina. La Primera de ellas corresponde a Axel Binder en conjunto con Gonzalo Pérez de la Universidad Nacional de la Patagonia, los cuales analizan conceptualmente las nociones de violencia y violencia política para el estudio de las protestas populares en Argentina de fines de la década del sesenta y comienzo de los años setenta, concentrándose en el caso conocido como el "Trelewazo", aquel levantamiento popular ocurrido en octubre de 1972 en Trelew, Chubut. El segundo artículo es de Pedro Zimunovic de la Universidad Nacional de Lujan, quien analiza el discurso anticomunista bajo el gobierno de Perón, entre los años 1951 a 1955. De cómo este discurso fue utilizado por el peronismo en tres campos de acción: "para desacreditar las protestas en el ámbito gremial, para tomar posición en la situación internacional durante la naciente Guerra Fría y como elemento descalificador para caracterizar a sus enemigos políticos internos, entre ellos, la Iglesia".

En la última parte del presente número, situamos una reseña de Gorka Sebastián Villar Vásquez, quien analiza el libro de Mario González: "Gonzalo Vial Correa, Las sinuosidades de una trayectoria intelectual, 1969-1991", trabajo sobre uno de los intelectuales de derecha más importantes del siglo XX.

Con esto queremos agradecer a cada una y uno de los autores, quienes desde distintas miradas, visiones, interpretaciones y compromisos han contribuido con sus reflexiones y artículos para dar vida a un nuevo número de Revista Divergencia, la cual progresivamente se va consolidando a nivel nacional como un espacio abierto a la discusión y el debate de ideas -tan necesaria en los tiempos actuales-, no sólo para investigadores e historiadores consolidados, sino también entre quienes realizan sus primeras armas en la disciplina histórica.

Dr. Danny Monsálvez Araneda
Dr. Aníbal Pérez Contreras

Coordinadores de número

ARTÍCULOS

Articles

Del trabajo industrial a la organización política. Movimientos huelguísticos de los obreros textiles de Tomé entre 1919 y 1921

From Industrial work to political organization. Strike movements of the textile workers of Tomé between 1919 and 1921

Nicole Fuentealba Romero[1]

Recibido: 8 de febrero de 2019 - Aceptado: 5 de abril de 2019
Received: Febraury 8, 2019 - Approved: April 5, 2019

Resumen

En este artículo se analiza el proceso de politización en los obreros textiles tomecinos entre 1919 y 1921, años en los que se desarrollaron una serie de movimientos huelguísticos, de la mano del escenario nacional de movilizaciones, además del grado de influencia de corrientes políticas de redención social en los aparatos organizativos de estos movimientos. De esta manera, se comprueba que la dirección política de las huelgas estuvo liderada por el Partido Demócratico, convirtiéndose en la vertiente por donde la alianza política-industrial, de la mano de empresarios y autoridades, orientaría la vida social y política de los obreros tomecinos a través de un abierto paternalismo, incidiendo, sin embargo, en la transformación política de los obreros.

Palabras clave: Obreros Textiles, Politización, Industria Textil, Tomé, Paternalismo Industrial

Abstract

This article analyze the process of politization of “tomecinos” textile workers between 1919 and 1921, years in which a series of strike movements develop in a national scenario of social mobilizations in which political currents of social redemption had significant influence. In this way, it is stablished that the political leading of the strikes was the “Partido Democrático”, this party becoming where the industrial and political alliance of enterprises and authorities would trace the social and political life of Tomé workers through an open paternalism influencing however, in these workers their political transformation.

Keywords: Textile workers, Politization, Textile Industry, Tomé, Industrial Paternalism

1 Chilena, Estudiante de Licenciatura en Historia, Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile, Santiago, Chile. Correo electrónico: nicoleafr@gmail.com

INTRODUCCIÓN[2]

Ante el último contexto de movilizaciones, en que los portuarios de Valparaíso recurrieron una vez más a levantar demandas laborales en pleno siglo XXI y, con ello, la articulación de otros sectores de los trabajadores, tanto en apoyo de estos, como para exigir petitorios propios, resulta inevitable mirar hacia atrás y descubrir cierta consonancia con las primeras décadas del siglo anterior. Prácticamente dos décadas llevaron a los trabajadores en el 1900 a articularse con tal fuerza que hacia 1920 una seguidilla de huelgas unificó a portuarios, estudiantes, profesores, mineros y obreros urbanos, demostrando que la "política" aparecía mientras su naturaleza esencial de ser humano desaparecía mediante la alienación (Salazar, 2012, p. 233).

En ese mismo contexto, los obreros textiles de la ciudad de Tomé vivieron sus primeras movilizaciones. Precisamente, en esas décadas, el puerto tomecino estaba viviendo sus mejores años a través de un crecimiento económico impulsado por la industria, fundamentalmente por medio de la fábrica Bellavista fundada en 1865 y la Sociedad Nacional de Paños de Tomé que comenzó a funcionar en 1918. La ciudad se transformaba socialmente y tanto comerciantes, industriales, políticos y obreros acaparaban los espacios y exigían el protagonismo que ese proceso industrial exitoso ameritaba. A través de trabajos de investigación previos nos percatarnos de la particularidad del caso tomecino, especialmente en cuanto al crecimiento económico y las relaciones industriales resultantes, las que estuvieron conducidas por un incipiente paternalismo industrial (Fuentealba, 2019). Este fue un sistema de relaciones industriales gestado principalmente en algunos establecimientos fabriles europeos durante el siglo XIX y que permitió su repercusión en algunas industrias americanas, entre ellas las fábricas textiles de Tomé. Las estrategias desplegadas por los industriales revisten una suerte de control sobre los obreros en torno a la captación y fijación de la mano de obra (Sierra, 1991, p. 7), en un ambiente en que la oferta y demanda no logran suplir esa precariedad, y dependiendo de las condiciones, también busca disciplinar a la masa trabajadora, todo diseñado bajo parámetros en que el control social se revista de beneficencia y fidelización hacia la figura "paterna" del patrón o bien hacia el establecimiento (Sennet, 1982, p. 59). Este mecanismo como concepto teórico ha sido desarrollado en Chile en los últimos años con gran profundidad (Vergara, 2013; Venegas, Godoy y Videla, 2016; Montaner, 2005; Lira, 1996; Peñafiel, 2015; Godoy, 2015; Artaza, 2016) pero ha tendido a recaer en un análisis más bien contextual. En el caso tomecino el paternalismo industrial no se limitó solo al mundo de la fábrica, sino que comprometió a la ciudad en general, otorgándole beneficios y convirtiéndola en una vía de control fuera de los establecimientos.

En ese sentido, las huelgas que comenzaron en 1919 permitieron analizar en la presente investigación el surgimiento de este movimiento entre los obreros con sus respectivas características, las que no asumieron las condiciones radicales de sus vecinos, y, junto con ello, el proceso de politización de los textiles tomecinos que se ve desmarcado del desarrollo general que el país ya vivía en la década del '20. De este modo creemos que incluso, en la aparente pasividad de las movilizaciones tomecinas los obreros textiles vivieron un proceso de politización inserto en un sistema paternalista por parte de los industriales, en que la presencia de elementos abiertamente socialistas fue más bien escasa, y la dirección del movimiento estuvo liderada por el Partido Democrático lo que permitió la influencia de una alianza política-industrial, en la que participaban radicales, liberales y los mismos demócratas. De esta manera, se delineó la vida social y política de los obreros tomecinos a través de la vía conciliadora. Sin embargo, a través de la presente investigación cada elemento propuesto será

2 Este trabajo es fruto de los Seminarios de Investigación: "Anarquismo y Comunismo en Chile (1890-1941)" del profesor Sergio Grez, y "Metodología de la investigación aplicada a la historia social del movimiento chileno 1850-1920" del profesor Pablo Artaza, impartidos en la Universidad de Chile el segundo semestre del 2018. Agradezco a ambos por las contribuciones de este artículo, además de su constante apoyo en el camino de escribir la historia.

analizado con detalle a través de fuentes periodísticas e institucionales, intentando dilucidar en profundidad las características de la politización obrera de los textiles.

Como primer acápite se analizará la conformación de la Alianza Político-Industrial, la que está constituida por dos elementos esenciales. Por una parte, el Paternalismo Industrial permitirá dar cuenta de las estrategias de control social utilizadas por los empresarios con el cual lograron impregnar a los establecimientos de ciertos valores y diseñar el control bajo la entrega de beneficios a los trabajadores. Por otra, la constitución de la Alianza Liberal se presenta como segundo mecanismo de control, el que se conformó a nivel nacional y tuvo su traspaso a la comuna por medio de la militancia de los partidos Radical y Democrático. Luego, como segundo apartado, se detallará el desarrollo de los movimientos huelguísticos en que se puntualizará en el protagonismo de los trabajadores, y especialmente en la presencia del Partido Democrático, ya que este resultará la vía por la que se insertará la alianza político-industrial en la vida de los obreros.

Al respecto, la pasividad como respuesta de los trabajadores ante movimientos huelguísticos ha sido trabajada por Robinson Lira (1996) para el caso de los obreros de la Refinería de Azúcar de Viña del Mar, sin embargo, se hace necesario una profundización por medio de otros casos. Por otra parte, la organización y el desarrollo de estas paralizaciones, así como el proceso mismo de politización obrera en la comuna, no son temas tratados por la historiografía, la que, hasta el día de hoy, en general, sigue siendo escasa. Solo unos pocos autores (Ortiz, 2005; Saavedra, 2006; Rodríguez, 2016; Pérez et al ed., 2010; Cartes et al ed., 2012) se han referido al periodo, pero sin profundizar en la movilización. Con todo esto pretendemos otorgar a la historiografía, especialmente a la historia política chilena un nuevo aporte que complemente lo ya trabajado, intentando armar progresivamente el pasado de una ciudad ignorada y que con los años se ha esmerado en avivar su memoria solo entre sus muros.

1. ALIANZA POLÍTICO INDUSTRIAL

En el inicio del siglo XX chileno el escenario social daba cuenta de las terribles consecuencias de la industrialización y urbanización nacientes (Grez, 1995, p. 9). Las paupérrimas condiciones de vida de los trabajadores chilenos, significó una profundización en su articulación social y política en pos de su subsistencia, a la vez que, empañaban la careta de éxito y progreso defendida por las elites. La nula respuesta estatal ante la grave crisis social fue aprovechada por el liberal Arturo Alessandri Palma que en 1920 llegó a la presidencia prometiendo el fin del vicioso sistema político dominado por la "canalla dorada" y apelando a la mejora de las condiciones de vida de la "querida chusma" (Collier y Sater, 1998, p.185), a través de las relaciones armónicas entre el Trabajo y el Capital. De este modo, la elección de Alessandri representaba abiertamente la vertiente "conciliatoria" de politización de la llamada "Cuestión Social" chilena (Pinto y Valdivia, 2001, p. 11).

No obstante, ningún discurso pudo frenar la crisis en la que estaban sumergidos los trabajadores, ni tampoco, la crisis moral que se vivenciaba en las elites gobernantes. La disputa por arriba entre conservadores y aliancistas, no se había convertido en un factor de desmedro para nuevas facciones y corrientes que venían desarrollándose abiertamente desde los mismos trabajadores. La vía "rupturista" de politización (Pinto y Valdivia, 2001, p.11) descansaba en las llamadas corrientes de redención social (Grez, 2000, p. 205) como socialistas y anarquistas, las que se habían gestado dentro del mundo popular y apelaban a conceptos nuevos que emergían desde las condiciones materiales de estos sujetos, mayoritariamente obreros. La fundación del Partido Obrero Socialista en 1912 representó la ruptura interna con los planteamientos del Partido Democrático y el dominio que este había ostentado hasta ese momento dentro de los trabajadores. Para 1920, el POS prácticamente ya había entrado a liderar un buen número de organizaciones. Por su parte, el

anarquismo seguía vigente aún en pequeños núcleos obreros. Además, en 1909 se fundó la Gran Federación Obrera de Chile la que en la práctica funcionó como una organización de socorros mutuos hasta 1917 cuando Recabarren planteó el carácter sindical de esta en la II Convención Federal (DeShazo, 2007, pp. 223-224), pero fue en 1919 cuando la III Convención realizada en Concepción planteó de manera más drástica los márgenes de la Federación, en la que adquirió el carácter de confrontación con el sistema capitalista imperante, asumiendo los planteamientos internacionales de la lucha de los trabajadores simbólicamente a través de la bandera roja (Ortiz 2005, pp. 186-187), lo que a juicio de Hobsbawm (1983, p.231), para cualquier comunista o socialista de nuestros días, ese gesto constituía "una síntesis representativa de su movimiento: su programa y sus aspiraciones, sus triunfos, su existencia colectiva y su fuerza emocional".

Ese mismo año la Industrial Workers of the World (I.W.W.) de inspiración anarcosindicalista comenzó a desarrollarse en Chile principalmente entre portuarios (Ortiz, 2005, p.180), referido a eso, la historiografía local prácticamente no menciona la presencia de la I.W.W. en la comuna[3]. Sin embargo, la influencia de corrientes más radicales había acaparado para ese entonces gran parte de la esfera política de los trabajadores a nivel nacional.

La crisis social desató entre 1917 y 1921 una nueva "oleada de huelgas" que coincidió con una nueva alza de precios (Matus, 2012, p. 129). Esta vez la "querida chusma" se unificó (Garcés, 2004, p. 20) y así en julio de 1917 comenzó la huelga general de los obreros de los puertos del país, "organizada como protesta por la implantación del carnet de identificación" (Barría, 1971, p. 34) dentro de la llamada "Huelga del Mono" (Godoy, 2014), luego el 5 de noviembre de 1918, los obreros de la mina El Teniente se declararon en huelga debido al despido de 28 obreros federados, por lo que se exigía su restitución (Ortiz, 2005, p. 176). Del mismo modo, al año siguiente los profesores primarios de Santiago exigieron un aumento en sus sueldos en 1919, además, las organizaciones obreras, estudiantiles y políticas organizaron mítines en todo el país debido a la carestía de la vida y en Puerto Natales una huelga de miles obreros terminó en masacre. (Ortiz, 2005, p. 180)

Específicamente en la región del Biobío, el número extenso de industrias tanto en el plano central como Concepción y el puerto de Talcahuano dio cuenta de este movimiento que se estaba gestando entre los trabajadores. Pero fue en la llamada zona del carbón donde la actividad política de los obreros se desarrolló con mayor intensidad, probablemente por la "posición estratégica" (Womack, 2007) de los trabajadores respecto a la industria nacional, pues su paralización afectaba al transporte ferroviario y marítimo como a las diversas tareas industriales y el consumo doméstico del recurso (Venegas, 2011, p.107). Esta región minera vivió en 1920 una extensa huelga general, que fue diseminándose por cada compañía minera hasta paralizar la zona completa dentro de un largo periodo, que no mermó hasta finales del mismo año y que "abrió una etapa que, por lo menos hasta 1927, presentó a la región carbonífera como el escenario de conflictos económicos y laborales cada vez más agudos" (Venegas, 1997, p. 133). En esta zona, la politización obrera ya estaba dominada abiertamente por corrientes socialistas representadas en la FOCH, la que se transformó en "el agente promotor más importante de las movilizaciones obreras, dado que, a partir de los primeros meses de 1920, se había logrado extender en los centros mineros de la Provincia" (Morales, 2016, p. 140). El nivel de sus organizaciones sindicales, la rapidez de la articulación para generar una huelga general en la zona y el número de huelguistas que se adherían día a día dan cuenta que el proceso de politización de los obreros del carbón estaba consolidado y se había gestado desde los mismos obreros. Al respecto, Enrique Figueroa y Carlos Sandoval (1987, p. 99) indican que ya en los primeros cinco años del siglo, los obreros experimentaron una transformación política, respecto a

3 La única mención la realiza Morales, D. (2013) *El paternalismo industrial en la Fábrica de Paños Bella-Vista Tomé, 1910-1935*, Tesis de maestría en Historia, Universidad de Santiago de Chile. P. 135., sin especificar mayormente.

la centuria anterior, estableciendo "sin temor a equívocos" el surgimiento del Movimiento Obrero del Carbón en 1900.

Arrinconada al norte de la provincia de Concepción, la ciudad de Tomé vivenció la prosperidad de sus fábricas textiles, albergando cerca de mil obreros en sus tres establecimientos fabriles. Mientras el país vivía los mayores años de efervescencia del movimiento obrero y popular, Tomé comenzaba a experimentar sus primeros movimientos huelguísticos en 1919, en un particular contexto de crecimiento económico y el desarrollo de un sistema paternalista por parte de las industrias que ordenó, tanto, el comportamiento de los operarios como de la comunidad tomecina en general.

2. PATERNALISMO INDUSTRIAL

Las estrategias paternalistas en Tomé tuvieron un inicio temprano, a través de la construcción de viviendas gratuitas para los obreros, escuelas nocturnas y la consiguiente transformación del entorno de la fábrica en un barrio adelantado dentro de la comuna. Con esto, se dio inicio a un largo periodo en que la lógica de los propietarios por otorgar beneficios sociales a los trabajadores actuaría con "el propósito de fidelizar y disciplinar a los trabajadores en una perspectiva de largo plazo que permitiera la reproducción de mercado eficiente y seguro" (Venegas y Morales, 2014, p. 120).

Al respecto, en Bellavista la primera población obrera "La Rana", comenzó a construirse en 1905 bajo la administración de la Sociedad Federico Wolf y Cía. De la cual era socio Carlos Werner (Brito et al, 2018). La construcción de este tipo de beneficios se ampliaría con el tiempo, construyendo alrededor del establecimiento una verdadera pequeña ciudad textil con escuelas, gimnasio, clubes sociales e incluso su propia iglesia fundada en 1923 (Saavedra, 2013, p.11). En 1919, *El Sur* de Concepción refiriéndose a la huelga que se producía en abril, mencionaba que "la fábrica de paños de Bellavista es, tal vez, uno de los únicos establecimientos industriales que han abordado resueltamente, sin aguardar exigencias ni revueltas, el aspecto del bienestar y comodidad de sus obreros (...) gradualmente construye habitaciones apropiadas, de las mejores que en la región se han construido para obreros; ha instalado un gimnasio más o menos completo para los jóvenes y una Gota de Leche que funciona sin interrupción, atendida por un personal especial, a cuyas secciones las operarias de los diferentes talleres están facultadas para entrar a determinadas horas del día, con el objeto de que atiendan a sus hijos pequeños" (El Sur, 23 de abril de 1919, p.7). Todo esto, si bien buscó una mejora en las condiciones de vida de los trabajadores, pronto estableció "un discurso y práctica paternalista sustentado en la creación de lazos entre la directiva empresarial y sus operarios", pues lo fundamental para la mantención de esta fidelidad era el establecimiento de una "comunidad textil" (Venegas y Morales, 2017, p. 284) que no se respaldara únicamente en un lazo salarial y retributivo, pues este era un eslabón débil, que venía en crisis desde inicios de siglo. Con esto los propietarios establecieron temprana y exitosamente un régimen paternalista de control social, expandiéndose más allá de los límites de su adelantado barrio. Entre 1918 y 1920 surgieron unas series de propuestas por mejorar la Avenida Latorre, que conectaba la población de Bellavista con la ciudad, las que no tuvieron mayor repercusión en el Municipio, por lo que en 1922 el propietario de la fábrica de dicha población, Sr. Carlos Werner, solicitó a la Municipalidad la rectificación de este camino, apelando a que este trazo respondía en un total beneficio para la comunidad (Archivo Nacional de Santiago, Municipalidad de Tomé, Sesión Ordinaria del 14 de septiembre de 1922, Volumen n°2, foja 321). Este modelo de paternalismo escaparía de nuestra definición inicial, pues su incumbencia en asuntos municipales, en el mejoramiento de la ciudad en general, respondería a una lógica más amplia que la mera fidelización y disciplina de los obreros[4].

4 Al respecto, este tema conviene tratarlo con mayor profundización en investigaciones posteriores.

De este modo, no parece extraña la sorpresa de la prensa y las autoridades al comienzo de la huelga de abril de 1919, pues esta significó más una ofensa al altruismo de Werner que una petición legítima de derechos laborales, aun cuando este tipo de petitorios se estaban llevando a nivel nacional. Hasta el partido que apoyaba y organizaba a los obreros alababa la gestión del dueño de la fábrica para la finalización del conflicto, llevándose el mérito de los resultados y reduciendo todo a un "noble gesto del señor Carlos Werner" (La Divisa, 30 de abril de 1919). No obstante, su bondad se puso en juego en la huelga de mayo de 1920, pues todo el esfuerzo por implementar un exitoso paternalismo exigió de ellos una respuesta de buenos hijos por quien "lo había dado todo", pero estos no respondieron conforme a lo esperado. Pese a la interrupción de este sistema que buscó mantener el orden y delineara su comportamiento social, no lograron romperlo, pues las prácticas se intensificarían al desarrollar otra nueva serie de políticas internas y externas.

Al respecto, las experiencias agrícolas previas de los obreros se convirtieron en un asunto que los industriales buscaron erradicar, pues la mano de obra se comportaba de manera inestable dependiendo del periodo de cosechas (Morales, 2013, p.82), por lo que el propietario ideó mecanismos con el fin de urbanizar la población y desarraigarlos de esas experiencias previas, lo que pudo significar un impulso para ampliar su radio de acción a la comunidad tomecina en general, y no solo a su núcleo bellavistano.

En este sentido, las industrias textiles de la comuna aportaron recursos económicos al municipio de dos formas concretas, una realizada de manera indirecta a través del pago de impuestos y patentes, y otra de manera voluntaria mediante aportes directos a las diferentes construcciones modernizadoras de la comuna; ésta última, por ser el modo más explícito de contribución directa a la ciudad, será la que analizaremos con más detalles. De este modo, el pago de patentes de "profesiones e industrias" a la Municipalidad, presupuestaba anualmente entre $14.000 y $19.000 para 1919 y 1925 (Municipalidad de Tomé, Volumen n°2, Presupuestos anuales entre 1919-1925), con sus respectivas variaciones en la medida que se incluyeran o restaran industrias. Para 1920 este monto alcanzó los $17.000 lo que significó el 16,6% de todo el presupuesto comunal (Municipalidad de Tomé, Volumen 2, 6 de junio de 1918). En ese mismo año, el periódico Avanzad publicó el listado completo de los 400 contribuyentes (Avanzad, 18 de septiembre de 1920) entre los que destacaba la casa Gibbs, Ward, Hinrischen, León e Hijo, Werner, la Sociedad Nacional de Paños en su conjunto, entre otros, a excepción de Marcos Serrano quien explícitamente anunció que se presentaba como mayor contribuyente en la localidad vecina de Rafael (Avanzad, 29 de agosto de 1920). En este listado se apreció el aporte realizado por cada uno de los industriales, destacando un valor muy superior al presupuestado por la Municipalidad, a la vez de dar muestra más clara de la variedad industrial por la que atravesó Tomé. Ahora bien, el aporte directo de estas industrias lo podemos encontrar en las actas municipales del periodo, en las que acordaron financiar algunas construcciones nuevas o reparaciones de caminos como la ya mencionada Avenida Latorre, la que en 1929 fue financiada por la fábrica Bellavista con el 50% de los gastos totales (Municipalidad de Tomé, Volumen 3, 11 de noviembre de 1929). Además, para el mejor funcionamiento de la Escuela Nocturna establecida en Bellavista, nuevamente la fábrica costeó la instalación de luz eléctrica en este establecimiento (Municipalidad de Tomé, del 27 de agosto de 1928, foja 118). Por su parte, los mejoramientos en que esta participó no necesariamente fueron de su incumbencia directa, pues en 1928 esta proveyó gratuitamente de los mecánicos necesarios para arreglar la pila de la plaza de armas de la comuna, todo en vigilancia y dirección de ellos mismos (Municipalidad de Tomé, 13 de agosto de 1928, foja 114). En base a esto, el aporte de los dueños de las industrias se tradujo en un accionar político y social a través de su participación directa en las sesiones municipales, tanto del regidor Marcos Serrano, como también de la presencia ocasional como invitado de Carlos Werner, lo que plasmó la enorme influencia que estos tuvieron como los principales industriales de la comuna. Desde otra arista, estos aportes simbolizaron la conexión y arraigo que las fábricas tuvieron por la comunidad, ya sea por mantener las condiciones básicas

de subsistencia de sus trabajadores, como por un sentimiento filial hacia el territorio. Esto último podría ser mera especulación si no nos detuviésemos en el hecho que ambos líderes industriales mantuvieron su conexión con la comuna más allá de finalizada su labor en las fábricas, a través de funciones políticas, la residencia de sus familiares, e incluso la existencia de mausoleos en los que estos permanecieron.

Por otra parte, ambos propietarios de filiación liberal desarrollaron una labor política fuera de la ciudad, Marcos Serrano fue diputado por el Departamento de Coelemu, Talcahuano y Concepción entre 1924 y 1932 (Venegas y Morales, 2017, p. 279) y Carlos Werner llegó a ser Senador por Arauco, Cautín y Malleco entre 1923 y 1926 (Pérez, 2010, p.17). Esto les permitió establecerse en el municipio como benefactores y aliados políticos de los alcaldes, regidores y gobernadores, quienes eran en su mayoría radicales y demócratas. La coincidencia discursiva respecto a la armonía entre el Trabajo y el Capital, especialmente entre radicales y liberales, posibilitó una ayuda recíproca entre los industriales y las autoridades, los primeros aportaron los recursos, mientras que los segundos, aprobaron y ejecutaron los proyectos de beneficio mutuo. En función de aquello el periódico radical de la comuna se presentó a sus lectores insistiendo que su partido "desea el mejoramiento social progresivo, que reine entre los hombres la mayor armonía (...) sintetizando todos estos anhelos, en una palabra: solidaridad", "que ella presida las relaciones económicas, armonizando el capital y el trabajo, y que el primero llene su misión social, contribuyendo en forma progresiva a todos los sacrificios que es necesario hacer para que la cultura llegue a todas las mentes, para que se mejore la salud pública, para que haya amplia previsión social" (La Divisa, 8 de noviembre de 1919). Por su parte, los industriales, procuraron cumplir con sus trabajadores dicha misión social, a través de múltiples beneficios sociales y para ello lograron conseguir la aprobación de adoquinamientos de calles e iluminación de ciertos sectores de la comuna, especialmente necesario en Bellavista, tal como estimó el demócrata Manuel Vallejos (Municipalidad de Tomé, 6 de junio 1918). En cuanto a los demócratas, estos cumplieron una doble función dentro de la comunidad, por una parte, mantuvieron puestos de importancia en la Alcaldía y la Gobernación, a la vez que lideraron los movimientos huelguísticos, sin embargo, los dos grupos reconocieron en las gestiones de Werner un verdadero espíritu de altruismo para la solución de los conflictos (La Divisa, 30 de abril de 1919) y estimaron resolver las paralizaciones de la mejor forma posible tanto para los obreros como los industriales. Basándonos en estas premisas, podríamos establecer el nacimiento de una alianza político-industrial integrada y funcional al régimen paternalista.

Es probable que, gracias a esta expansión del paternalismo, las repercusiones en torno al bienestar de los obreros y el crecimiento tomecino en pos de la industria fueron más generalizadas, pues los beneficiados de este sistema no fueron solo unos pocos, sino una gama amplia de ciudadanos: obreros, comerciantes, intelectuales, políticos y los mismos industriales. Posiblemente por esta razón se convirtió en un sistema difícil de quebrar, pues sus defensas estaban en muchos frentes y aunque un gran grupo de obreros paralizó sus labores y exigió nuevos beneficios, el compromiso implícito hacia los patrones estuvo más consolidado que su propia politización, lo que significó que estos asumieran una postura más moderada alejada de la confrontación directa frente a los industriales.

3. ALIANZA LIBERAL

La Alianza política establecida entre liberales, radicales y demócratas, entre otros, llevó a la presidencia en 1920 al liberal Arturo Alessandri Palma. Su discurso que apelaba a las clases populares y medias logró calar en ellas y estas respondieron con su apoyo. Tal fue su impacto discursivo respecto a ellos que el periódico demócrata de la comuna exponía que "Alessandri más que un ungido a la Presidencia por la voluntad soberana del pueblo laborioso, es un símbolo de redención social y enseña sacra de la transformación de un régimen que ha caducado en la vida nacional de Chile" (La Divisa, 6 de noviembre de 1920). En

términos concretos, el apoyo del pueblo "laborioso" tomecino para el candidato aliancista se tradujo en una victoria comunal esperable, pues Tomé manifestaba de manera clara esta alianza en su gobierno municipal. En 1920 tenía una representación municipal con cuatro radicales, cuatro demócratas y uno nacional (La Divisa, 28 de febrero de 1920). El primer y segundo alcalde de la comuna pertenecían al PR y el tercero era demócrata. La presencia liberal, en cambio estaba en los industriales y un gran número de comerciantes locales. Hacia 1919 la Gobernación recibió como gobernador a un coalicionista, al respecto *La Divisa* expresó su molestia y extrañeza de una decisión como esa en "un pueblo netamente liberal" como el tomecino, ante lo que arengó a sus compañeros de alianza a "ponerse de pie, porque la doctrina legada por los Matta y los Gallo; por Errázuriz (el grande), Pinto, Santa María y Balmaceda, unida con la del mártir Francisco Bilbao está pidiendo a gritos que el Gobernador de Coelemu debe salir de sus filas, ya sea radical, demócrata o liberal. (…)", más aún cuando las labores y logros de la administración radical-demócrata de la comuna eran "el mejor exponente de que este pueblo debe estar gobernado por miembros de la alianza Liberal" (La Divisa, 8 de febrero de 1919).

Es importante mencionar, además, que esta alianza municipal contó con la ventaja de ser parte de la etapa de crecimiento económico de la comuna, lo que benefició de manera considerable su capacidad para transformarla urbanísticamente, contando con el apoyo de los industriales. Por esta razón, la alianza político-industrial se sustentó en una etapa de desarrollo económico.

El orgullo por sus logros no tardó en aparecer y vieron "con verdadera satisfacción" como "el pueblo entero mira con la más íntima complacencia las iniciativas de la administración radical-demócrata para hacer obras de progreso local" (La Divisa, 22 de enero de 1919). Asimismo, la estima por sus aliados se pudo leer en algunas páginas, como a la muerte del político radical tomecino José del C. Zapata, en que los demócratas expresaron que este "pertenecía a aquellas instituciones que hacen el bien desinteresadamente y, más que eso, a aquella colectividad política que se formara a los albores de nuestra Independencia con el objeto único de hacer de esta pobre y querida patria una nación independiente y grande por la solidez de sus instituciones y por la probidad de sus hijos" (La Divisa, 12 de febrero de 1919). No obstante, el crecimiento a la par de los partidos y probablemente su lucha silenciosa por integrar más afiliados, evidenció ciertas desavenencias entre ellos. Comenzando el año 1920 y luego de dos movimientos huelguísticos, la alianza entre radicales y demócratas se rompió, sin embargo, no fue un quiebre definitivo, pero mantuvo las relaciones en ese periodo de manera tensa y el lenguaje de sus periódicos cambiaron de tono. *Avanzad* de los radicales insistió cada vez más en el carácter conciliatorio que debía estar presente en las huelgas, en que esta no debía ser, sino el último recurso, e incluso dedicó largas páginas luego de las paralizaciones a expresar su enojo ante las federaciones obreras, las que pasaron a ser, según ellos, centros de agitadores (Avanzad, 8 de enero de 1920). Por su parte, *La Divisa*, se dedicó a expresar con detalle la ruptura y como, en una situación algo confusa, el primer alcalde, señor Desiderio Muñoz (radical) suspendió de sus funciones al inspector municipal Sr. Chandía (demócrata), interviniendo en el caso el presidente del PD en Tomé, Sr. Froilán Cisternas y el tercer alcalde Sr. Vallejos (La Divisa, 27 de marzo de 1920). Otro conflicto breve se dio igualmente entre Vallejos y Marcos Serrano, administrador de la fábrica Sociedad Nacional de Paños y regidor de la comuna, por un asunto de presupuesto (Municipalidad de Tomé, Junta de Pavimentación, 4 de julio de 1919). Sin embargo, ningún conflicto fue conveniente en aquellos momentos, menos cuando juntos habían llevado a un candidato a la presidencia.

En resumen, la alianza liberal establecida en la comuna subsistió bajo una etapa de crecimiento económico y un régimen paternalista, lo que reforzó su formación y con esto su repercusión en la comunidad tomecina desde sus diferentes roles: industriales, políticos, comerciantes y trabajadores, constituyéndose como una vía de control, esencialmente

electoral, y, además, dueña de un amplio espacio de participación política. Lo que implicó la posible tutela de esta alianza en la politización de los obreros tomecinos. Para esto hay que analizar con mayor precisión la repercusión de esta en los trabajadores.

En este caso, el triunfo de Alessandri en Tomé fue arrollador. Con un total de 723 votos la Alianza Liberal ganó las elecciones a la Coalición, que solo obtuvo 51 votos (La Divisa, 25 de junio de 1920). Pese a aquello, entre los obreros la postura respecto al nuevo presidente no quedó del todo clara. En primer lugar, los periódicos tomecinos dan muy poca información al respecto, pues su misión principal es la de motivar e invitar a los lectores a comprender los beneficios de la Alianza Liberal. Sin embargo, resulta interesante mencionar la proclama de *La Divisa* sobre "Los problemas obreros ante la Alianza Liberal" luego de las elecciones, donde expusieron que "los demócratas y los obreros no afiliados aún a este gran partido del pueblo trabajador tomaron para sí el programa de la Alianza Liberal; porque en su aspecto liberal consulta todas esas reformas que constituyen las reivindicaciones y anhelos de los hombres de trabajo" (La Divisa, 6 de noviembre de 1920), lamentablemente eso solo quedaría entrampado en lo discursivo, pues en la práctica el número de votantes efectivos siguió siendo escaso, en relación a la población nacional, y no tenemos disponibles las fuentes para precisar la participación electoral de los obreros textiles de Tomé.

Y aunque *La Divisa* expuso con seguridad ese apoyo por parte de los trabajadores, estos se debatían internamente a través de la influencia de la FOCH. La Federación a nivel provincial tuvo gran incidencia en los trabajadores y aunque por las fuentes, podemos establecer que el PD siguió manteniendo un puesto de importancia en la región, este comenzó a ser disputado fuertemente desde la zona del carbón por la radicalización del POS. De este modo, aquellos obreros abiertamente socialistas enviaron sus mensajes a todos los federados de la región, teniendo en especial consideración a Talcahuano, Lirquén y Tomé. La FOCH de la zona fue consciente de la limitación que implicaba el predominio demócrata, pues si bien, tenía gran presencia y buena voluntad para estar junto a los trabajadores, también existió un grupo dentro del partido que se opuso a esto. Por esta razón Daniel Sierra, líder de los trabajadores de la región carbonífera manifestó que "los enemigos más grandes de la clase obrera son Malaquías Concha que quiso traicionar la huelga minera, Guillermo Bañados que se ha opuesto siempre, sistemáticamente, a todas las leyes y decretos de mejoramiento obrero que se dictan en el Congreso Nacional y después siguen Gómez Carreño y todos los demás badulaques que nos vienen a disertar sobre Democracia y otras yerbas" (La Jornada, 18 de julio de 1920). Igualmente, se creyó que tanto la candidatura de la Unión Nacional como la de la Alianza Liberal "no es como se ha pretendido hacer creer al pueblo la encarnación de una nueva tendencia política, que ha de encarar desde el gobierno los problemas que agitan a nuestro país en la forma científica y racional con que en el mundo todo se resuelven los problemas sociales, sino la ascensión al poder de una nueva oligarquía que alucinando al pueblo trabajador con falsas promesas de un mentido evolucionismo pretende por este medio conseguir el apoyo de las clases trabajadoras para convertirse mañana en el amo de estas" (La Jornada, 11 de julio de 1920).

Lo concreto del caso tomecino es que la alianza de radicales y demócratas permeó a los obreros de forma diferenciada. Los demócratas tuvieron una posición de privilegio entre los trabajadores, que supieron aprovechar y mantener, mientras que la relación de estos con los radicales no estuvo ajena de dificultades. Luego de finalizadas las movilizaciones de 1921 el PR decidió acercarse a los trabajadores en búsqueda de nuevos militantes. Según *La Divisa* esta jornada fue un completo fracaso debido a las reacciones de los textiles. Para los demócratas "el pueblo de Tomé contempló con estupor (…) a una treintena de carilargos radicales que en correcta formación se dirigió a Bellavista con el Orfeón municipal a la cabeza tocando piezas de su repertorio y convenientemente escoltados por los carabineros de ese barrio y guardianes de policía de esta al mando del aspirante Jorquera que desempeñó un lúcido papel" (La Divisa, 30 de abril de 1921). Precisamente el último elemento marcó la

incoherencia discursiva de los radicales pues, aunque buscaron un acercamiento directo con el mundo de los obreros, lo hicieron con cautela y miedo ante el comportamiento de estos. Respecto a esto, Alan Angell indica que los radicales, si bien anhelaban integrarse en el mundo obrero, deseaban atraer preferentemente a trabajadores de "cuello blanco" (Angell, 1972, pp.13-14), lo que no encontraron en los obreros tomecinos. Ante la invitación radical, estos solo se dedicaron a comer y tomar, y "los supuestos numerosos obreros de que algunos hacían alarde que iban a concurrir al lugar de las empanadas y tragos a armar registros, brillaron por su ausencia acudiendo algunos borrachines inconscientes y uno que otros ciudadanos", otorgando su firme respuesta al momento que se les invitó a firmar por el partido: "nosotros hemos venido a comer y a tomar y no a firmar libros" (La Divisa, 30 de abril de 1921). De este modo, mientras que el PD creó nuevas sociedades mutuales y consejos federales, el PR quedó recluido en su labor municipal con comerciantes e intelectuales.

Con esto podemos precisar que la influencia de la Alianza Liberal en los trabajadores textiles de Tomé solo se realizó directamente por medio de los demócratas, pues el mensaje conciliatorio entre Trabajo y Capital que profesaron liberales y radicales no tuvo mayor incidencia en lo que los obreros estaban experimentando entre 1919 y 1921, por esta razón estos grupos fueron un ente ajeno con escaso componente obrero. No obstante, los trabajadores federados se debatieron entre los lineamientos de la FOCH de la provincia que avanzó con un ritmo diferente en cuanto radicalización. Por lo que mientras la politización de la región carbonífera se enmarcó abiertamente en las corrientes socialistas, en Tomé, los demócratas, no alcanzaron aún tales grados. Para esto, será necesario analizar con mayor detalle las movilizaciones entre 1919 y 1921.

4. MOVIMIENTOS HUELGUÍSTICOS EN TOMÉ

El año 1919 significó para la ciudad de Tomé la ruptura con la tranquilidad acostumbrada. Dos movimientos huelguísticos, el primero en abril y luego en noviembre, modificaron lo que hasta entonces había estado caracterizado por un comportamiento sereno y laborioso. Al año siguiente, mientras la zona del carbón recién había pausado una larga huelga general, nuevamente la ciudad enfrentó un nuevo conflicto, el que se repitió en menores proporciones en 1921, para continuar en relativa calma por algunos años.

Sin embargo, el surgimiento de estos movimientos trajo consigo un aprendizaje previo. Al respecto, para Mario Garcés la política popular ha estado siempre condicionada desde abajo, es decir, primero es "la práctica social de quienes organizaron la solidaridad y luego la resistencia a la explotación económica y social", en este sentido, la política es posterior a la sociabilidad, y, por tanto, el partido "un segundo momento en la gestación de una política popular" (Garcés, 2003, pp. 8-9). En el caso tomecino, algunos años antes de las movilizaciones, la actividad colectiva de los obreros, especialmente de los hombres, se centró en los días de pago de jornal en los llamados "sábados alegres", donde estos se reunían en cantinas o en las mismas calles y cantaban a destajo "hasta muy avanzadas durante la madrugada" (La Divisa, 30 de agosto de 1917). Los periódicos constantemente recordaron la cantidad de "casas de juegos" que estaban establecidas especialmente en Bellavista insistiendo en la pertinencia de una Ley de Alcoholes que recién comenzaba a entrar en vigor, pero que no dió muy buenos resultados. Así mismo el futbol comenzó a arraigar simpatías entre los pobladores, tomando "un auge desbordante y captado las simpatías de nuestro pueblo, aumentando día a día el entusiasmo y número de expectadores" (La Divisa, 22 de octubre de 1916), además de otorgar un sentido de pertenencia tanto a las fábricas como a los barrios que estos representaron. A través de agrupaciones más organizadas, la creación de escuelas nocturnas significó un importante espacio de educación y promoción, especialmente para las obreras, así en 1917, Emma Buston, fundó la Organización Femenina de Salvación Nacional en la comuna, que velaba esencialmente por el desarrollo de estas (La Divisa, 9 de septiembre de 1917). Por su parte, el surgimiento de clubes deportivos,

batallones infantiles y centros culturales fomentó en los obreros textiles la identificación a las fábricas respectivas. Sin embargo, el tipo de organizaciones mencionadas escapó de lo puramente político, y a juzgar por el comportamiento fuera de estas, podemos estimar que antes de 1919, la sociabilidad tomecina estaba aún en una etapa primaria, influenciada por las vetas en que el paternalismo se desarrollaba en la comuna, a través de sus inserciones en el plano cultural y autónomo de los obreros. Más concretamente, unos meses antes de la primera huelga, surgieron algunas sociedades mutuales de filiación demócrata, pero gran parte de la afiliación política se desarrolló entre los años que hemos trabajado.

Durante los años de mayor conflictividad social en el país, Tomé los recorrió en medio de un repunte de su economía, gracias al crecimiento de la industria textil. Los ingresos de los establecimientos no solo representaron una acumulación propiamente patronal, pues también parte de ellos estuvieron destinados al municipio a través del aporte de los industriales en obras públicas y las contribuciones de haberes, lo que permitió que desde la década de 1910 Tomé comenzara a experimentar una serie de trasformaciones sociales gracias al mencionado impulso económico. Sin embargo, esto no fue impedimento para el surgimiento de la movilización obrera. El periódico local radical Avanzad, manifestó con sorpresa que "el pueblo de Tomé ha presenciado en estos días con no poca extrañeza un movimiento social definido, homogéneo, completamente ajeno a sus prácticas de vida tranquila y laboriosa (...) Hoy es una cuestión enteramente nueva la que se ha presentado, convulsionando a una población entera" (Avanzad, 4 de mayo 1919). Los radicales vieron en él una experiencia "a semejanza de esos grandes movimientos que en pueblo más cultos y más viejos que el nuestro se operan de día en día y amenazan transformar por completo los intereses de la humanidad" y destacaron, además, su carácter pacífico (Ídem). Por su parte, los demócratas, quienes cumplieron un rol determinante en la huelga, manifestaron que "los huelguistas han guardado toda compostura y ello es un aliciente para creer que sus peticiones serán acogidas favorablemente" (La Divisa, 23 de abril de 1919). Es decir, en una primera instancia el mantenimiento del orden, si bien, fue interrumpido por la huelga, aún no se vio amenazado del todo. Esto cambió en los días siguientes, cuando los obreros recurrieron a nuevos mecanismos. Respecto a esto, la Intendencia de Concepción recibió un telegrama de parte del Gobernador Suplente el segundo día de huelga, en el que indicaba: "representante fábrica de paños haceme presente que demás operarios desean continuar sus faenas, pero huelguistas les impiden llegar a la fábrica" y agrega que "habiendo llegado elementos extraños desde Talcahuano, témese profundamente [que] huelga Tomé [adquiera] mayores proporciones" (Intendencia de Concepción, Volumen n°1532, Telegramas año 1919, del 22 de abril de 1919). Por su parte, *El Sur* expresó abiertamente que ese día el movimiento pudo haber llegado a su fin, pero "en las horas de la tarde el acuerdo favorable a que se arribó en la mañana dejaba de ser respetado por el personal, el que hacía una segunda presentación solicitando nuevas ventajas", esto se debió, según un "caracterizado vecino de Tomé", a que ese día llegaron al pueblo "dos sujetos de Concepción y Talcahuano, quienes han comenzado una obra de agitación entre los obreros, perturbando las gestiones que se realizaban en favor de ellos" (El Sur, Miércoles 23 de abril de 1919, p. 7). Este cambio de actitud por parte de los huelguistas transformó la admiración del primer día en una desconfianza y temor que recorrería las siguientes publicaciones periodísticas y las discusiones interna de los partidos. Sin embargo, el movimiento ya estaba instalado y había que aclarar de qué se trataba y quiénes eran los responsables de intranquilizar al pueblo tomecino. En este sentido, el Comité de Huelga estuvo formado por obreros pertenecientes a la Federación Obrera de Chile, que en ese momento contaba con solo un Consejo de Federación en la comuna, el que, en su mayoría lideraron militantes del Partido Democrático. Los obreros Aníbal Navarrete, Isabel Ramírez, Manuel Reyes, Petronila Aguayo, Primitivo Garrido, Nieves Parra, Fermín Quiroga, Víctor M. Reyes, María Caamaño, Osterlina Ramírez y Rosalba P. de Reyes, compusieron este organismo en primera instancia (La Divisa, 21 de mayo de 1919), los que, además, un mes antes de la huelga fundaron dos Sociedades de

Socorros Mutuos en la comuna, de clara filiación demócrata (La Divisa, marzo-abril 1919), paradójicamente cuando el movimiento obrero urbano del país tendía a la declinación de las organizaciones mutuales, debido a las nuevas condiciones de la lucha social y el avance de ideologías más radicales como el anarquismo y socialismo (Grez, 1994, p.306). Cabe destacar, la presencia de obreras en el liderazgo de la Federación Obrera tomecina, sin embargo, las fuentes no tenderán a mencionar otras ocasiones de participación. La principal petición de los huelguistas en los dos primeros días descansó en la reducción de la jornada laboral, que hasta ese momento excedió las diez horas de trabajo diarias. Luego de la llegada de los "agitadores", se incluyó además el aumento del salario en un 25% a nivel general (La Divisa, 23 de abril de 1919). Si bien el carácter pacífico nunca fue abandonado, la alarma ante los elementos foráneos generó más expectación entre quienes hablaban de la huelga, que quienes la llevaron a cabo. Después de siete días y sin perder la calma, más allá del suceso nombrado, las labores de los textiles se reanudaron (Intendencia de Concepción, Telegramas, Tomé el 28 de abril de 1919). La junta conciliadora compuesta por obreros federados, el propietario señor Carlos Werner y como árbitro designado el presidente del Partido Democrático don Froilán Cisternas, lograron llegar al acuerdo de reducir la jornada laboral de diez horas y media a nueve horas y media; en cuanto al aumento salarial, las versiones son distintas. El periódico La Divisa (30 de abril de 1919) de filiación demócrata, dio por aprobadas ambas peticiones, alabando en todo momento el altruismo y generosidad del señor Werner, por su parte, el periódico radical expuso que el aumento salarial no se pudo realizar de manera general, por lo que los obreros no aceptaron esta propuesta, retardando el fin de la huelga (Avanzad, 4 de mayo de 1919), idea que se entiende al leer la serie de telegramas enviados al Intendente (Intendencia de Concepción, Volumen N°1532, Telegramas, del 24 al 28 de abril de 1919). Finalmente, el diario *El Sur*, detalló con mayor claridad el fin del suceso: precisamente, la petición sobre el aumento del 25% en los salarios, no fue aceptada de forma general, pues la administración de la fábrica no veía en ello una posibilidad, por lo que se esperó la llegada de Carlos Werner, quién solo advirtió que lo estudiaría si al día siguiente todos volvían a sus trabajos, lo que efectivamente fue aceptado por los obreros (El Sur, miércoles 30 de abril de 1919, p. 9). En este sentido, no podemos hacer una lectura respecto a un movimiento radicalizado en Tomé, al menos en esta primera huelga. La prudencia de los obreros, que solo se vio interrumpida por la llegada de algunos "agitadores" foráneos, no mermó en gran parte la actitud conciliadora de los federados a cargo de la organización, posiblemente porque el mismo PD se debatió internamente entre sus relaciones en los cargos del Municipio y la Gobernación y su liderazgo con los obreros. Respecto a los agitadores populares y su procedencia, no podemos inferir mayores detalles con las fuentes disponibles.

Más tarde en agosto del mismo año, el Comité de Sociedades Obreras de la comuna celebró un "comisio público pro-abaratamiento" de los artículos de consumo, el que se llevó a cabo en perfecto orden (Intendencia de Concepción, Volumen 1532, Telegramas, 21 de agosto de 1919), de esta forma respondió al llamado que la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional hizo desde 1918, agrupando a las diferentes organizaciones obreras del país, ante la carestía de los artículos básicos de alimentación.

Finalmente, en noviembre, nuevamente el pueblo de Tomé experimentó un nuevo movimiento huelguístico, del que no hay mención en ningún periódico tomecino, silencio que nos parece extraño. Solo *El Sur* expuso que la manifestación se produjo para exigir el cumplimiento de las promesas hechas en abril (El Sur, 29 de noviembre de 1919, p.8). Por su parte, la información del Gobernador al Intendente da cuenta de un conflicto que adquirió nuevas proporciones, pues esta vez, los obreros exigieron el despido de dos trabajadores "tomados de fuera", pues la fábrica incumplió su promesa de dar preferencia a obreros cesantes de la comuna para nuevas contrataciones (Intendencia de Concepción, Volumen 1532, Telegramas, 26 de noviembre de 1919), además de exigir el compromiso de no despedir a los obreros federados que encabezan la huelga (Intendencia de Concepción, Volumen

1532, Telegramas, 28 de noviembre de 1919). Dos días después, el Gobernador anunció la solución del conflicto, pero al día siguiente "llegaron más de doscientos obreros de otros pueblos" (Intendencia de Concepción, Volumen 1532, Telegramas, 30 de noviembre de 1919). Lamentablemente, las fuentes, no continúan explicando el caso y no podemos especificar el final de esta. Lo que sí podemos analizar es el cambio que se produjo en siete meses. Por una parte, las exigencias por parte de los obreros fueron más drásticas, ya que no solo apelaron al petitorio general que se estaba dando a nivel nacional, sino que incluyeron demandas específicas. Las autoridades vieron con mayor temor el movimiento y cerraron las cantinas y otros lugares públicos. Ahora no solo vinieron algunos agitadores foráneos, sino que aparecieron más de doscientos. Siguiendo esta idea, la movilización tomecina adquirió un nuevo grado de profundización, en tanto que su organización y coordinación por parte de los federados se desarrolló de forma más compacta, al punto que la comunicación con grupos obreros de otras ciudades donde la FOCH tenía una presencia abiertamente protagónica, fue más expedita y mejor articulada por los federados tomecinos, lo que demuestra que en siete meses esta organización tomó en Tomé un cariz distinto.

En mayo de 1920 el puerto presenció una nueva paralización. Nuevamente el periódico demócrata guardó silencio y no realizó más que un escueto párrafo anunciando el fin de esta (La Divisa, 5 de junio de 1920), mientras que su par penquista detalló más ampliamente los sucesos que rodearon, de principio a fin, esta movilización. Al parecer un grupo de obreros habían solicitado permiso para asistir al funeral de una compañera de trabajo recientemente fallecida, la autorización les fue dada con la condición de que ese día ingresaran a la fábrica "a las 10 de la mañana, en lugar de las 7, como es costumbre", sin embargo, la gran mayoría de los obreros no asistió en toda la jornada. Al día siguiente solo se presentaron al trabajo unos veinte trabajadores, lo que encendió la voz de alerta. Ante ello se presentó una comisión exigiendo a través de un pliego anónimo el reingreso a las labores del fogonero José M. Espinoza despedido anteriormente, entre otras peticiones (El Sur, 27 de mayo de 1920. p. 9). A través de un comunicado enviado a la gobernación, Carlos Werner expresó que "la actitud de los obreros ha degenerado en una verdadera chacota, indigna de obreros que durante una larga serie de años no han recibido de su patrón y propietario de la fábrica otra cosa que un cuidado verdaderamente paternal por el bienestar personal de todos ellos" (Intendencia de Concepción, Volumen 1589, 25 de mayo de 1920). No obstante, más adelante los trabajadores darían a conocer que José M. Espinoza era un obrero federado y que sus compañeros de Federación llevarían la manifestación adelante, ampliando el petitorio a 11 puntos, los que exponemos a continuación:

1° La vuelta al trabajo del compañero José M. Espinoza y de Lorenza Riffo.

2° Aumento de un 50% sobre los actuales jornales para los obreros al día en general.

3° Que se reconozca el Consejo F.M N°1, dependiente de la Federación Obrera de Chile de Bellavista.

4° No se admita dentro de la fábrica todo obrero que no sea federado, siempre cuando el Consejo sea reconocido por el propietario de esa.

5° Ocho horas de trabajo.

6° La separación del empleado Ricardo Langer por no hacer acta para los trabajadores del barrio y además por cometer atropellos con los obreros José Moraga y Antonio Aguayo y otros.

7° No se deje dinero detenido en la quincena del Establecimiento, esto se hiciera si en caso los clientes obreros echaran en olvido sus deudas.

8° Se debe dar agua al barrio del estanque denominado Floripondo y no de las canoas por ser agua arrastrada de verdadera inmundicia.

9° El mejoramiento para la sección Hilandería en un 50%, lo mismo que los al día.

10° Sobre sección Telares un aumento de 50%, como a los obreros al día en general y se ponga una pizarra de tarifa para saber a cuanto se paga el metro de paño o sea la pieza.

11° Para los trabajadores de la Fábrica de Tejas, a los que ganas $5 y $6, el 40%, a los que ganas $4.50, 3.50 y 2.50, el 50% (Intendencia de Concepción, Volumen 1589, 10 de junio de 1920).

Este documento nos otorga interesantes elementos a analizar. En primer lugar, la insistencia en las 8 horas de trabajo diarias y el aumento del salario en un 50% a nivel general, dan cuenta de un nuevo grado de radicalización, pues tan solo un año atrás la exigencia de un aumento del 25% pareció incomodar a los administradores de la fábrica, por lo que accedieron a ello parcialmente. Por otra parte, la FOCH tomecina dio el salto a los lineamientos propios de la Federación a nivel nacional al exigir radicalmente que no se admitiera para el trabajo ningún obrero que no fuera federado, con lo que pretendía convertirse en el único medio de sindicalización obrera, además de presionar con ello a todos los obreros para integrarse a sus filas, lo que podría significar que el número de trabajadores federados en la fábrica habría alcanzado una posición mayoritaria. Además, la exigencia sobre al agua del "barrio del estanque", resulta un dato interesante, pues representa que tanto los obreros como los patrones asumían que la fábrica tenía el deber de resolver las necesidades básicas no solo al interior de los establecimientos, sino que en sus propios barrios o en aquellos espacios donde el Municipio debía considerarse el gran responsable, evidenciando con ello una concepción paternalista que se tenía respecto a la industria. En este sentido, así como noviembre significó un nuevo aprendizaje por parte de los federados tomecinos, la experiencia de junio comenzó a resquebrajar nuevos elementos y a distanciarse de la actitud inicial de 1919. El mismo Werner expresó el dolor que le causó que precisamente su fábrica "haya tenido el mayor número de huelgas", luego de que él estimara todo por mantener el bienestar de los trabajadores, además, de considerar que la causa de estas estaba "en la falta de criterio, de dirección sensata de la Federación de obreros del establecimiento" (Ídem). Este dolor y enojo, iba abiertamente acompañado de temor, pues los mecanismos paternalistas con los que había logrado mantener el control y orden por casi una década estaban sufriendo serias interrupciones. De este modo, la huelga de junio de 1920 significó una nueva reflexión por parte de los obreros y un nuevo grado de crecimiento político.

Finalmente, en junio de 1921 se registró la cuarta huelga en tres años, de la que solo sabemos que finalizó el 4 de julio, durando más días de lo ya acostumbrado, interviniendo en las soluciones el gobernador demócrata Ignacio Franco y el diputado por Coelemu y Talcahuano Manuel J. Navarrete, también de filiación demócrata (La Divisa, 9 de julio 1921). Para este año el rol del PD no estaba del todo claro en la organización de la huelga, si bien las manifestaciones anteriores habían sido detalladas por el periódico demócrata, respecto a la últimas solo hicieron alusión a su término. Sin embargo, el papel jugado por el partido entre los obreros revistió especial importancia, pues este constituyó la delgada vía por donde la Alianza Liberal llegó a los trabajadores y como se ha visto, la conexión que estos tuvieron con la FOCH.

Refiriéndonos a ello, el origen social de los militantes del PD en Tomé fue variado y pudo establecerse un grupo de obreros y otro de comerciantes. Esto representó una disyuntiva para el partido, pues una parte de sus afiliados trabajaron abiertamente tanto en la Gobernación como en el municipio, luchando por mantener su alianza con el Partido Radical y Liberal. De este modo José Francisco Jara trabajó como Subdelegado de la novena (delegación), siendo el único demócrata entre diez radicales, cinco liberales, dos conservadores y dos nacionales (Intendencia de Concepción, Volumen 1514, 25 de septiembre de 1918); por otra parte, Manuel J. Vallejos lideró la tercera alcaldía de la comuna entre dos radicales

(La Divisa, 11 de enero de 1919). O bien, el Gobernador don Ignacio Franco (La Divisa, 25 de enero de 1919.), quién debía lidiar directamente con todo proceso huelguista, buscar los medios conciliatorios y mantener el orden público de toda la gobernación, todo aquello mientras, el componente obrero de su mismo partido organizó los movimientos. Al respecto, Aníbal Navarrete, Manuel Reyes y Primitivo Garrido, quienes compusieron el primer Comité de Huelga en 1919 (La Divisa, 23 de abril de 1919), además, de Serafín Cuevas y otros obreros, fundaron las dos nuevas Sociedades de Socorros Mutuos mencionadas anteriormente, lo que el obrero Adolfo Galdames repetiría al formar por esos días en su propia casa, con la presencia de 70 obreros del puerto una nueva Sociedad Gremial de "hombres de mar" (La Divisa, 15 de marzo de 1919). Luego de las paralizaciones de 1919, el partido expresó en la prensa la alegría de los numerosos nuevos integrantes de las filas demócratas (La Divisa, 28 de enero de 1920), lo que demostró el momento de euforia que se vivía al interior del partido, al punto que, casi en misión adoctrinadora, fundaron nuevos centros en los alrededores de Tomé (La Divisa, 21 de febrero de 1920). Pero este crecimiento se dio principalmente entre los obreros. Quienes engrosaron sus filas eran los más de 50 integrantes por cada mutual demócrata y el grupo de federados de los tres consejos comunales. De este modo, el partido debía lidiar con estas dos vías, lo que aparentemente logró hacer hasta 1921. Para ese entonces, el periódico La Rejión Minera de la provincia de Arauco anunció un interesante conflicto que se dio entre los federados tomecinos. Ante las elecciones del candidato a diputado que iría por la zona de Talcahuano y Tomé, se presentaron dos opciones: el comerciante tomecino y presidente del PD de la comuna: Froilán Cisternas y el ciudadano Manuel J. Navarrete, demócrata miembro del Consejo Federal N°4 de Talcahuano. Ocurriendo lo imprevisto, los Consejos Federales de Tomé acordaron apoyar por amplia mayoría a Navarrete el que "durante la última huelga sostenida por este, le cupo brillante actuación", esto desató la furia de los demás demócratas de la comuna que comenzaron a exigir la expulsión del partido a los "traidores" (La Rejión Minera, 16 de enero de 1921). Ante esto, la disputa de los dos grupos de demócratas puso en suspenso los planteamientos del mismo partido.

Sin embargo, el avance del PD en los movimientos huelguísticos fue un factor determinante para establecer a la FOCH en Tomé. Pese al conflicto, los obreros federados mantuvieron su militancia, pues el partido continuó siendo una posibilidad para conseguir victorias electorales en la ciudad, debido a la escasa participación de otros partidos de corrientes progresistas de izquierda en el municipio. De esta forma, la radicalización en su acción colectiva se transformó gracias a la influencia de la FOCH, pero no logró traspasar la barrera de lo medianamente moderado, pues al no existir una clara ruptura entre demócratas, sino que una serie de disputas, la vertiente por la que se trasladó la alianza político-industrial a los obreros no se agotó.

Finalmente, lo concreto de todo esto, es que este periodo de movilización social permeó gran parte de las esferas sociales, transformó a un pueblo tranquilo y "laborioso", en uno que experimentaría en tres años una evolución política importante. El paso de una federación de obreros que apeló a la transformación social mediante el diálogo, a una confrontación más directa frente a los administradores de las fábricas a través de los métodos de huelga, indicó que los obreros textiles de Tomé experimentaron una radicalización de su acción colectiva. Sin embargo, no alcanzó los niveles organizativos de sus pares de la región o de los grandes centros urbanos de la región y el país, ya que estaban alineados bajo un sistema paternalista exitoso y un partido político que, a pesar de experimentar serias disputas internas, logró conciliar los ánimos entre aliancistas y obreros. En consecuencia, mientras que la huelga del carbón de 1920 significó "el comienzo del fin de la influencia del partido Democrático entre esos mineros y el inicio del ascenso de los socialistas a sus organizaciones" (Grez, 2011, p.111), para Tomé las huelgas entre 1919 y 1921 dieron cuenta del protagonismo de este partido entre los obreros. Sin embargo, la moderación que caracterizó a los movimientos de los obreros textiles también significó que a pesar de los esfuerzos

de los industriales, comerciantes y políticos por mantener predominante el discurso armónico, la esencia autónoma de los trabajadores podía expresarse en cuanto su nivel organizativo creciera, por lo que ni el paternalismo, ni mucho menos la alianza político-industrial, se podían sentir seguros en la trinchera que hasta entonces llevaban en construcción.

CONCLUSIONES

La politización de los obreros textiles en Tomé entre 1919 y 1921 estuvo impregnada de una gran variedad de elementos. En primera instancia, como proceso integrado dentro de un régimen paternalista por parte de los propietarios de la fábrica, adquirió un carácter menos radicalizado que en sus pares del carbón, probablemente debido al compromiso que estos adquirieron hacia el patrón a través de beneficios sociales gratuitos, que se venían otorgando previo al período de movilización, esto incidió en una sociabilidad regida por el sistema de control social ejercido por los patrones, logrando mantenerla en una etapa primitiva, sin mayor organización social y política previa a los movimientos. En segundo lugar, el rol del Partido Democrático, que a nivel nacional ya no acaparaba con gran fuerza los espacios de los trabajadores, en Tomé inició su etapa de mayor auge. A través de la organización de los movimientos huelguísticos y de su filiación a la Federación Obrera de Chile, logró integrarse ampliamente entre los obreros y crecer en los tres años de movilización. Si bien la presencia de la FOCH significó que Tomé no fuera un ente ajeno a las movilizaciones nacionales, que esta estuviera liderada por demócratas le otorgó características propias, que provocaron al interior del partido local una serie de disputas entre los militantes obreros y los que accedían a espacios de poder político local, entre ellos algunos comerciantes. Los primeros se establecieron junto a los trabajadores y los otros en los puestos administrativos de la comuna, sin embargo, ambos delinearon en cierto sentido, la politización de los trabajadores estableciéndose como vínculo directo entre la alianza político-industrial y los obreros. Precisamente esta, como tercer elemento, fue un astuto mecanismo utilizado por los industriales y autoridades para beneficiarse mutuamente, tanto por el aporte en mejoras urbanas como para permitir la expansión del paternalismo a la comunidad en general y de este modo delinear el desarrollo comunal y disfrutar de forma más completa las ventajas del crecimiento económico generado por la industria. Así los lineamientos sobre la relación entre Trabajo y Capital permanecieron conciliados, provocando un distanciamiento respecto a la radicalización, inclusive en las paralizaciones. Como cuarto y último elemento, conviene destacar el rol ejercido por las obreras textiles, quienes estuvieron desde el primer momento de la movilización como sujeto fundante, pese a que las fuentes tendieron a opacar posteriormente su labor. Al respecto, tanto las fuentes como la historiografía social y política no le han hecho justicia a las mujeres textiles, lo que nos interpela a saldar la deuda con nuevos estudios.

Con todo la huelga de 1919 marcó el inicio de una nueva etapa en la vida tomecina, especialmente para los obreros textiles quienes no habían utilizado el recurso de la paralización. Los tres años de movilizaciones otorgaron un carácter particular a la politización tomecina ligándola más a la vía democrática heredada por el PD que a la radicalización socialista, además de constituirse bajo características paternalistas. Con todo, hace cien años los obreros descubrieron una nueva dimensión de su acción política, y los industriales, temerosos, comprendieron que por más control social que ejerciesen, existiría una vertiente autónoma por la que los trabajadores se nutrirían desde ese momento.

BIBLIOGRAFÍA

· Angell, A. (1972). *Partidos políticos y movimiento obrero en Chile. De los orígenes hasta el triunfo de la Unidad Popular*. México: Ediciones Era.

- Artaza, P. (2016). *El reverso del Bienestar. La creación del Departamento de Bienestar Social y el reforzamiento del control social en el norte grande a principios de los años veinte*, en Estudios Atacameños, N°52. San Pedro de Atacama. Pp. 49-68.
- Barría, J. (1971). *El Movimiento Obrero en Chile*. Santiago: Ediciones de la Universidad Técnica del Estado.
- Brito, A. et al. (2018). *Industria y habitar colectivo*. Editorial STOQ. Concepción.
- Cartes, A. et al. (2012). *Bellavista Oveja Tomé, una Fábrica en el Tiempo*. Concepción: Ed. USS.
- Collier, S. y William F. S. (1998). *Historia de Chile 1808-1994*. Madrid: Cambridge University Press.
- Fuentealba, N. (2019). *Crecimiento y transformación de una ciudad industrial. El caso tomecino entre 1910 y 1930*. En Revista Historia (N°26), 83-114.
- Garcés, M. (2003). *Crisis Social y Motines populares en el 1900*. Santiago: LOM Ediciones.
- Garcés, M. (2004). *Los Movimientos Sociales Populares en el siglo XX: balance y perspectivas*. En Política (N°43), 13-33.
- Godoy, E. (2014). *La "Huelga del Mono": Los anarquistas y las movilizaciones contra el retrato obligatorio (Valparaíso, 1913)*. Santiago: Editorial Quimantú.
- Godoy, M. (2015). *Las casas de la empresa: paternalismo industrial y construcción de espacio urbano en chile. Lota, 1900-1950*, en Universum, Vol. 30, N°1. Talca, 2015. Pp. 115-136.
- Grez, S. (2004). *La Trayectoria histórica del mutualismo en Chile (1853-1990): apuntes para su estudio*. En Mapocho (N°35), 293-315.
- Grez, S. (2000). *Transición en las formas de lucha: motines peonales y huelgas obreras en Chile (1891-1907)*. En Historia (N°33), 141-225.
- Grez, S. (2011). *Historia del Comunismo en Chile. La era de Recabarren (1912-1924)*. Santiago: LOM Ediciones.
- Grez, S. (2016). *El Partido Democrático de Chile: Auge y ocaso de una organización política popular (1887-1927)*. Santiago: LOM Ediciones.
- Hobsbawm, E. (1983). *Rebeldes Primitivos: Estudio Sobre las Formas Arcaicas de los Movimientos Sociales en los Siglos XIX y XX*. Barcelona: Editorial Ariel.
- Lira, R. (1996). *Un modelo de relaciones industriales y orientación sindical. El caso de la Refinería de Azúcar de Viña del Mar, 1930-1973*, en Proposiciones, Santiago: SUR Ediciones
- Matus, M. (2012). *Crecimiento sin desarrollo: precios y salarios reales durante el ciclo salitrero en Chile (1880-1930)*. Santiago: Ed. Universitaria.
- Miranda, R. (1926). Monografía geográfica e histórica de la comuna de Tomé. Tesis para optar al grado de Profesor de Estado en Historia y Geografía, Universidad de Chile.
- Montaner, L. (2005). "Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar CRAV: Ícono y ejemplo de industria nacional durante su desarrollo. Silencios, memorias y verdades de su quiebra. 1970-1981", Tesis para optar al grado de Licenciatura en Historia, Universidad de Valparaíso, Valparaíso

Revista Divergencia: N° 13 / Año 8
Julio - Diciembre 2019
ISSN 0719-2398

- Morales, D. (2013). El paternalismo industrial en la Fábrica de Paños Bella-Vista Tomé, 1910-1935, Tesis de maestría en Historia, Universidad de Santiago de Chile.
- Morales, D. (2016). *Crisis de autoridad patronal y el surgimiento de la Federación del Trabajo en Lota*. En Videla, E. et al. *El Orden Fabril. Paternalismo Industrial en la minería chilena 1900-1950*. (pp.135-165). Valparaíso: Editorial América en Movimiento.
- Ortiz, F. (2005). *El Movimiento Obrero en Chile*. Santiago: LOM Ediciones.
- Peñafiel, O. (2015). *Violencia patronal, mayordomos, policías: paternalismo patriarcal en la cuenca carbonífera. lota, 1910-1920*, en Revista Tiempo Histórico, N°11. Santiago. Pp. 41-60.
- Pérez, S. et al. (2010). *Bellavista, Historia Oral de un Pueblo Industrial*. Concepción: Memoria Bellavista.
- Rodríguez, D. (2016). *Tomé: Breve Historia*. Tomé: Ed. Al aire Libro.
- Saavedra, R. (2006). *Visión histórica y geográfica de Tomé*. Concepción: Ediciones Perpelén.
- Saavedra, R. (2013). *Parroquia Cristo Rey y los Werner en Bellavista-Tomé*. Concepción: Ediciones Perpelén.
- Salazar, G. (2012). *Movimientos Sociales en Chile: trayectoria histórica y proyección política*. Santiago: Uqbart Editores.
- Sennett, R. (1982). *La Autoridad*, Alianza Editorial, Madrid.
- Sierra, J. (1990). *El Obrero Soñado. Ensayo sobre el Paternalismo Industrial (Asturias, 1860-1917)*. Siglo XXI Editores. Madrid.
- Venegas, H. (1997). *Crisis económica y conflictos sociales y políticos en la zona carbonífera*. En Contribuciones Científicas y Tecnológicas (N°116), 124-152.
- Venegas, H. (2011). *De imprescindibles a marginados. Las movilizaciones de los trabajadores del carbón en chile a mediados del siglo XX*. En Tiempo Histórico (N°3),105-126.
- Venegas, H. y Morales, D. (2014). *El despliegue del paternalismo industrial en la Compañía Minera e Industrial de Chile*. En Historia Crítica (N°58), 117-136.
- Venegas, H. (2015). *Políticas de bienestar y control social en la minería del carbón*. En Atenea (N°511), 221-245.
- Videla, E., Venegas, H. y Godoy, M. (eds). 2016. *El orden fabril. Paternalismo industrial en la minería chilena 1900-1940*, Editorial América en Movimiento, Valparaíso.
- Venegas, H. y Morales, D. (2017). *Un caso de Paternalismo Industrial en Tomé*. En Historia (N°50), 273-302.
- Vergara. A. (2013). *Paternalismo Industrial, empresa extranjera y campamentos mineros en América Latina: un esfuerzo de historia laboral y trasnacional*. Avances del Cesor. Año X, N°10. Pp. 113-128.
- Womack, J. (2007). *Posición Estratégica y Fuerza Obrera. Hacia una nueva historia de los movimientos obreros*. México D.F: FCE-Fideicomiso Historia de las Américas, Colegio de México.
- Figueroa E. y Sandoval C. (1987) *Carbón: Cien años de historia (1848-1960)*. Santiago: CEDAL.

Intelectuales del Cono Sur en Chile. Perfil de los cientistas sociales brasileños y argentinos radicados en la Universidad de Concepción (1967-1973)[1]

Intellectuals of the Southern Cone in Chile. Profile of Brazilian and Argentine social scientists based at the University of Concepción (1967-1973)

Pedro Altamirano Castillo[2]

Recibido: 10 de marzo de 2019 - Aceptado: 18 de abril de 2019
Received: March 10, 2019 - Approved: April 18, 2019

Resumen

El objetivo de este artículo es examinar el perfil de los cientistas sociales argentinos y brasileños radicados en la Universidad de Concepción entre la reforma universitaria y el golpe militar, considerando y problematizando tres variables: nacionalidad, rango etario y militancia política. A través del entrecruzamiento de cuestionarios aplicados a informantes clave, documentos institucionales y prensa local, intentaremos mostrar que estos cientistas sociales sudamericanos se articularon social e intelectualmente en función de sus sensibilidades y militancias políticas, identificándose con las izquierdas, y que lo anterior diversificó el ambiente intelectual de la ciudad y reforzó la idea de Concepción como "provincia roja".

Palabras clave: Cientistas sociales, militancia política, nueva izquierda, pensamiento latinoamericano, Universidad de Concepción, Cono Sur

Abstract

The objective of this article is to examine the profile of Argentine and Brazilian social scientists based at the University of Concepcion between university reform and the military coup, considering and problematizing three variables: nationality, age range and political militancy. Through the cross-linking of questionnaires applied to key informants, institutional documents and local press, we will try to show that these South American social scientists were socially and intellectually articulated based on their sensitivities and political militancies, identifying with the left, and that the above diversified the environment intellectual city and reinforced the idea of Conception as "red province".

Keywords: Social scientists, political militancy, new left, Latin American thought, Universidad de Concepción, Cono Sur

1 El presente artículo se enmarca en el proyecto VRID-Multidisciplinario código 219.064.050- M, del cual el profesor Danny Monsálvez Araneda es el investigador responsable. Además, el artículo forma parte del proyecto de tesis del Magister en Historia por la Universidad de Concepción. Investigación que cuenta con el apoyo del Programa Ciencia, Desarrollo y Sociedad de la Universidad de Concepción (CIDESAL).

2 Chileno. Estudiante del programa de Magister en Historia, Universidad de Concepción

INTRODUCCIÓN

Hacia la segunda mitad del siglo XX eran pocos los países latinoamericanos que registraban una estabilidad institucional sostenida en el tiempo. Los sesenta centroamericanos estuvieron marcados por una nueva ola represiva que sólo en 1963 avanzó sobre Honduras, Guatemala y República Dominicana, manifestándose años más tarde en la matanza de Tlatelolco en México[3]. Del mismo modo la inestabilidad política creció en el Cono Sur de América, donde los golpes militares en Brasil (1964) y Argentina (1966) sentaron las bases de las dictaduras de nuevo cuño o "autoritarismo burocrático" que desde los setenta comenzaron a esparcirse con vigor por la región (O' Donnell, 2003, p.11). En cuanto a Chile, éste contaba con alrededor de cuatro décadas de estabilidad institucional, estabilidad que, en lo formal, lo hacía resaltar dentro del subcontinente y desperdigar la idea del particularismo y originalidad chilena[4].

En ese contexto miles de personas, sobre todo latinoamericanas, desembocaron en el Chile de Frei y Allende. Los motivos iban desde intereses personales hasta razones de fuerza mayor, esto es: exilio político. Pues bien, entre la masa latinoamericana un grupo específico fue el de los cientistas sociales, los cuales aterrizaron en la capital chilena atendiendo, básicamente, razones estratégicas: Santiago constituía un verdadero centro de operaciones –"el nicho de Chile", en palabras de Devés Valdés (2004)– de las ciencias sociales latinoamericanas (Franco, 2007)[5]. En efecto, desde la instalación en Santiago de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en 1948, la capital pasó a adquirir marcados tintes de laboratorio intelectual, aspecto perceptible con mayor fuerza en los sesenta luego de la instalación y maduración de otra importante cantidad de instituciones especializadas en las áreas de ciencias sociales: la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en 1957, y desde los sesenta el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), el Instituto de Educación y Capacitación para la Reforma Agraria (ICIRA), entre otros organismos, además de la presencia formativa e investigativa de la Universidad de Chile y la Universidad Católica a través de dos influyentes espacios político-intelectuales: el Centro de Estudios Socio-Económicos (CESO) y el Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN), respectivamente (Cárdenas, 2015; Rivera, 2015).

El testimonio de distintas personalidades que pisaron Santiago durante este periodo (1967-1973) es unánime en señalar la condición cosmopolita de la capital (Frank, 1991; Dos Santos, 1996; Frenz, 2006; Furtado, 2014; Marini, 2012 D'Alessio, s.f). Dadas las magnitudes de esta experiencia intelectual creemos que es pertinente interrogarse acerca de sus proyecciones hacia lugares distintos de la capital, aunque en contacto con ella. Al llegar a este punto surgen múltiples preguntas que todavía no han sido visitadas por la historiografía chilena, de marcada tendencia centralista: ¿qué ocurrió en las provincias de Chile con las ciencias sociales?, ¿por qué razones llegaron a la Universidad de Concepción más de una quincena de antropólogos, sociólogos y economistas brasileños y argentinos entre 1967 y 1973?, ¿qué entregaron y aprendieron?, ¿de qué manera la experiencia intelectual y política en sus países de origen se expresó en Concepción?, ¿qué peso tuvo la coyuntura

3 Una interesante interpretación de la historia reciente de América Latina y el Caribe, debido a la formación científico-social de los que participan y la cercanía con los golpes militares de los setenta es *América Latina: historia de medio siglo*, dos tomos coordinados por Pablo González Casanova. Algunos de los colaboradores son Thetonio Dos Santos y Vania Bambirra (Brasil), Marcos Kaplan (Argentina), entre otros.

4 La relativa estabilidad institucional de Chile de ninguna manera quiere decir que por debajo no se expresaran otros males como la cuestión de la "legitimidad" respecto a la construcción del Estado, como sostienen Gabriel Salazar y Julio Pinto (1999, p.13-19).

5 Refiriéndose al CESO, el brasileño Ruy Mauro Marini (2012, p.78) sostiene: "La mayoría de la intelectualidad latinoamericana, europea y estadounidense, principalmente de izquierda, pasó por ahí, participando mediante charlas, conferencias, mesas redondas y seminarios". A su vez, el CEREN de la Universidad Católica acompañó desde 1969 las discusiones nacionales a través de la revista del centro y seminarios de discusión.

política en sus labores? Así, este artículo tiene por objetivo examinar el perfil de un grupo de cientistas sociales brasileños y argentinos que por distintas razones desarrollaron sus actividades en Chile, específicamente en la Universidad de Concepción, entre 1967 y 1973.

Nos centramos en la provincia de Concepción y su universidad homónima porque estimamos que durante el periodo de estudio (1967-1973) es particularmente notable la articulación entre vida intelectual y vida política[6]. Desde aproximadamente 1952 en Concepción advertimos una activa movilización social, donde la izquierda fue adquiriendo una presencia notable en las contiendas electorales que se mantuvo hasta los días de Allende (Monsálvez, 2017, p.70-71). Además, buena parte de los referentes del MIR –la "generación joven" (Palieraki, 2014)– vivían en la ciudad[7]. De este modo, sobre todo desde la segunda mitad de los sesenta la provincia de Concepción fue adquiriendo una cierta mística asociada a las *izquierdas*, pasando a identificarse hacia fuera como una "zona roja" y "bastión de la izquierda" (Monsálvez, 2017, p. 68). En ese cuadro, la llegada de los intelectuales argentinos y brasileños a la Universidad de Concepción coincidió con la coyuntura nacional de reforma universitaria, que en la universidad penquista enfrentó el dominio de la masonería sobre el cuerpo docente y el equipo directivo (Huneeus, 1988, pp. 69-78), y el descontento estudiantil debido a las falencias de los anteriores hitos reformistas del rectorado de González Ginouves (1962-1968) (Araneda, Aravena y Márquez, 2015, p. 217).

Para dilucidar el perfil del grupo de sudamericanos consideramos la conjunción de tres variables: nacionalidad, rango etario y militancia política. Consideramos que a partir del entrecruzamiento de estos tres elementos podremos obtener un perfil mínimo del grupo de cientistas sociales sudamericanos en Concepción, iluminando así las dinámicas intelectuales y políticas de la provincia. La identificación de la nacionalidad[8] permite recuperar las redes intelectuales y políticas de origen, enmarcándolas dentro de su particular contexto y articulándolas con el ambiente del Gran Concepción. Por otro lado, y estrechamente ligado a la variable *nacionalidad*, la delimitación de los *rangos etarios*[9] es relevante para entender las trayectorias de los científicos sociales sudamericanos en Chile y el peso que más tarde tuvo la política en sus actividades intelectuales. Las dos variables anteriores, pues, ayudan a comprender la gravitación que tuvo la *militancia política* para estos intelectuales[10].

Tal como indica la bibliografía actualizada sobre el fenómeno del exilio en América Latina, las experiencias exiliares también son espacios reflexivos atravesados por la autocrítica, la evaluación de las trayectorias y los esencialismos políticos (Sznajder y Roniger, 2013), de ahí la relevancia de acercarse a la complejidad de estos fenómenos –exilio, mili-

6 Hay que considerar, a su vez, que Concepción es una de las ciudades más importantes del país en términos estratégicos –sólo debajo de Santiago– y que desde la década del cuarenta tuvo un lugar destacado como polo industrial y económico en el contexto de la modernización desarrollista (Espinoza y Brito, 2008).

7 El MIR lideró durante años (1967-1972) la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, a través de su bramo estudiantil MUI, siendo el sector hegemónico del movimiento estudiantil que llevó adelante la reforma universitaria dentro de la universidad penquista (Araneda, Aravena y Márquez, 2015).

8 En el caso argentino, los intelectuales que llegaron a Chile después del golpe de 1966 estuvieron traspasados por el "hecho peronista", no tanto debido a una filiación política con éste sino por las tensiones que la proscripción del peronismo imprimió sobre la sociedad argentina desde 1955 y muy especialmente sobre las fuerzas de izquierda (Altamirano, 2011; Tortti, 2014; Calveiro, 2013). La proscripción del peronismo abrió un periodo de prolongada inestabilidad (1955-1976), con alternancia de gobiernos civiles y militares. Al igual que en Brasil (Ridenti, 2010; Wasserman, 2017), en los primeros años de la década del sesenta hubo un severo cuestionamiento contra las antiguas dirigencias políticas, conformándose nuevos liderazgos y, dentro de la izquierda, dando paso a la proliferación de la "nueva izquierda" que se distinguirá de las tendencias más tradicionales –léase partidos comunistas–.

9 En términos generales, el periodo de formación universitaria de estos cientistas sociales sudamericanos coincidió con un momento histórico marcado por el acercamiento de la juventud latinoamericana con la política. Es decir: la juventud se fue constituyendo como grupo de presión y portavoz de nuevos proyectos de sociedad (Faletto, 2016, pp.213-215).

10 Prácticamente todo el grupo objeto de este artículo formó parte de organizaciones políticas en sus países de origen, o bien estando en Chile se sumó a alguna. Por consiguiente, la instalación de las dictaduras en Brasil y Argentina los puso en una situación compleja: sus militancias políticas provocaron la sospecha de las fuerzas militares y que éstas torcieran la mirada hacia las universidades y centros de investigación (Morero, 1996; Penchaszadeh, 2016), obligándolos a exiliarse o entrar en la clandestinidad dentro de sus propios países.

tancias, redes, trayectorias, lenguajes políticos, debates intelectuales, circulación de ideas– desde enfoques historiográficos que problematicen la experiencia de los objetos-sujetos de estudio, en este caso la intelectualidad científico-social brasileña y argentina[11]. En este sentido, recogimos los aportes de la nueva historia política (NHP) y la historia intelectual. La NHP por cuanto amplifica los significados de lo político, reconociendo la subjetividad que horada las militancias y descentrando el foco del Estado y sus instituciones; y la historia intelectual por cuanto reexamina el lugar del lenguaje, contextualizando los textos y discursos políticos dentro de marcos históricos concretos, entendiendo el lenguaje, en fin, como estructurante de las experiencias individuales y colectivas (Polgovsky, 2010).

Del mismo modo, en lo que respecta al marco teórico-conceptual y la hipótesis, partimos de la definición de "intelectual orgánico" de Gramsci debido al papel que da a los intelectuales en la construcción hegemónica y contra hegemónica (Gramsci, 1967)[12] y en las pretensiones (implícitas) de ser vanguardia del movimiento histórico[13]. En lo tocante a la hipótesis, a lo largo de estas páginas intentaremos mostrar que estos cientistas sociales sudamericanos radicados en la Universidad de Concepción entre 1967 y 1973 se habrían articulado social e intelectualmente en función de sus sensibilidades y militancias políticas, identificándose con las izquierdas en un sentido amplio; lo anterior habría diversificado el ambiente intelectual de la ciudad y reforzado la idea de Concepción como "zona roja" o "provincia roja". De esta manera, buscamos ampliar lo que podríamos llamar el circuito de las ciencias sociales chilenas durante el tercer cuarto del siglo XX, insertando esta experiencia de institucionalización de las ciencias sociales dentro de las dinámicas nacionales y continentales.

La metodología de trabajo consistió en el entrecruzamiento de cuestionarios aplicados a informantes clave del periodo, documentos institucionales y revisión de prensa local. Los cuestionarios[14] fueron aplicados entre agosto del 2018 y marzo del 2019 a tres protagonistas del periodo: se trata, en ese orden, de las respuestas de Fernando Mires[15], Marta Zabaleta[16] y

11 La bibliografía sobre la experiencia de científicos sociales latinoamericanos en el tercer cuarto del siglo XX chileno es escasa, lateral, destacándose Eduardo Devés Valdés (2006; e Ivette Lozoya (2013). Si adicionamos el ingrediente espacial, centrado en la provincia de Concepción, el listado empequeñece todavía más. A diferencia de lo que ocurre en Argentina –una de las banderas de la historia intelectual latinoamericana–, en Chile no existen libros de conjunto que estudien desde la NHP y la historia intelectual la experiencia de cientistas sociales, pese a ser este (1967-1973) un "momento estelar de la cultura política chilena", al decir de Norbert Lechner. Creemos que ello se debe no sólo a que el cultivo de la historia intelectual en nuestro país es reciente, y en consecuencia escuálido, sino también a que éste se ha concentrado en el estudio del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Lo anterior explica el hecho de que las investigaciones de historia intelectual existentes estén referidas a lo que Horacio Tarcus (2015, p.15) denomina los "intelectuales faro" –los grandes pensadores–, o bien a los intelectuales políticos o escritores-artistas. Esta orientación de la historiografía redunda en un tratamiento de las ideas desplazado hacia el pensamiento político tradicional, filosófico y cultural, en desmedro de las expresiones científico-sociales de las ideas y sus actividades intelectuales (Altamirano, 2019, p.55-56).

12 Esto abre la posibilidad para que los intelectuales cumplan no sólo funciones de legitimación de los gobiernos establecidos; los intelectuales también pueden cumplir una función de compromiso con la sociedad y ponerse al servicio de determinados proyectos, actuando como "interlocutor en sus sociedades" (Lozoya, 2013, p.185). Dentro de las ciencias sociales latinoamericanas la politización de los intelectuales y las discusiones acerca de su papel en los procesos de transformación fueron notables (Lozoya y Moyano, 2019): el cientista social latinoamericano de este periodo está comprometido en términos políticos con el cambio de sus sociedades e intenta aportar desde la especificidad de sus disciplinas, actuando como "organizador", "educador".

13 Nos referimos a la idea, en Gramsci, del intelectual como "dirigente", "organizador", "educador", etc., cuestiones que Michel Foucault criticó en cuanto éstas suponen ser la voz y "saber" de "las masas".

14 Cada cuestionario está compuesto de cinco preguntas generales de respuesta libre acerca del ambiente intelectual y político de la Universidad de Concepción durante el lapso 1968-1973.

15 Fernando Mires (Chile, 1943) fue docente del Instituto de Sociología de la Universidad de Concepción entre 1969 y 1973. Estudio un postgrado en Alemania entre 1967-1968 y luego se radicó en la Universidad de Concepción hasta el golpe de 1973. Tras su regreso a Chile en 1969, ingresó al MIR en Concepción y durante un tiempo estuvo a cargo de la tribuna teórica de la Revista *Punto Final*.

16 Marta Zabaleta Gerlo (Argentina, 1937) fue docente de la Escuela de Economía y Administración de la Universidad de Concepción desde abril de 1968 hasta el golpe de septiembre de 1973. Oriunda de la provincia de Santa Fe, en 1963 partió a la capital de Chille a estudiar un postgrado en ESCOLATINA, recibiéndose en 1964. Trabajó en instituciones como CELADE e ICIRA. El segundo semestre de 1966 ingresó al MIR.

Ricardo Alberto Hinrichsen[17]. Los documentos institucionales analizados fueron la revista *Economía y Administración*, la revista *Atenea* y la revista *Rehue*; y las Memorias universitarias[18]. La prensa consultada fue el Diario El Sur entre enero de 1967 y septiembre de 1973.

El artículo está estructurado en torno a dos grandes apartados y, hacia el final, breves observaciones a modo de conclusión. En el apartado primero entregamos un contexto general sobre el estado de las ciencias sociales en la Universidad de Concepción antes de la reforma universitaria y el significado que tuvo la reforma para el desarrollo de las ciencias sociales de la provincia. A continuación, examinamos y problematizamos las variables *nacionalidad* y *rango etario* en el grupo de cientistas sociales sudamericanos. En el apartado segundo nos centramos en el análisis de la variable *militancia política*.

ENTRE EL DESCONOCIMIENTO, LA ATRACCIÓN Y EL EXILIO POLÍTICO

En el último tramo de los sesenta, en especial después del ascenso de Allende a la Moneda, la izquierda latinoamericana puso los ojos en Chile y coherente con ello aterrizó un amplio contingente de militantes y simpatizantes de los más distintos rincones del subcontinente, siendo especialmente notable la concurrencia de cientistas sociales brasileños y argentinos. Algunos de estos cientistas sociales radicados en Chile dejaron valiosos testimonios sobre la actividad política e intelectual de Santiago y Concepción. Para los fines de este artículo los recuerdos de Marini resultan reveladores:

> Si el nivel de politización era alto en Santiago, adquiría en Concepción connotaciones explosivas. Una de las principales ciudades del país, de antigua tradición industrial e íntimamente vinculada con los centros mineros de Lota y Coronel, cuna del Partido Comunista, esa ciudad diera origen, en 1965, a una nueva fuerza de izquierda [el MIR]. (Marini, 2012, p.75).

A las que se suman, para la capital, las palabras del argentino Sergio Bagú

> En una ciudad pequeña como era Santiago, todos estábamos en contacto intelectual pero también en contacto físico, porque estábamos unos cerca de otros y a Santiago llegaban no digo grupos de latinoamericanos, sino torrentes de latinoamericanos que querían ver la experiencia chilena de cerca o que iban a participar de estos cursos y a especializarse (Lozoya, 2014, p.308)

Y por último, consultada sobre las referencias que tenía acerca de Concepción, las palabras de la argentina Marta Zabaleta

> era notorio que Santiago era un centro de experimentación internacional en varios sentidos [...] No sabía nada de Concepción, hasta que entré en el MIR a mediados de 1966 [...] Para mí el medio era profundamente chato, provinciano, conservador, prejuicioso [...] También me habían dicho en Santiago que tenía un clima atroz, con lluvias y frío casi todo el año [...] E incluso hablaban con modismos locales y una entonación que era nueva para mí, pero que imité y aprendí con rapidez y entusiasmo (Zabaleta, 2019, p.1-3)

Hay varios puntos en común entre Marini, Bagú y Zabaleta. Coincidiendo con la bullente actividad intelectual de Santiago, los tres enfatizan aspectos destacados para este artí-

17 Ricardo Alberto Hinrichsen (Chile, ¿1946?) estudió ingeniería comercial entre 1964 y 1968 en la Escuela de Economía y Administración y tras egresar pasó a integrar la planta docente. Participó activamente en la reforma de la Escuela e ingresó a fines de los sesenta en el MIR, vinculándose a intelectuales sudamericanos como Ruy Mauro Marini, Marta Zabaleta, Luis Vitale, Miguel Murmis, entre otros.

18 *Economía y Administración* es el órgano oficial de la Escuela de Economía y Administración entre 1964-1972. *Atenea* es el órgano oficial de la universidad, publicado desde 1924. *Rehue* perteneció al Instituto de Antropología y fue publicado entre 1968 y 1972. Por último, en las *Memorias* se lleva el registro de las actividades académicas, publicaciones, intercambios, entre otros.

culo: el nivel de politización de Concepción y su ambiente chato y provinciano, por un lado, y la convergencia de grandes cantidades de latinoamericanos en Chile, por otro. En efecto, las dictaduras de Seguridad Nacional en Brasil (1964) y Argentina (1966) redundaron en una fuga de cerebros y en la conformación de lo que podríamos llamar *rutas o geografías exiliares*: el lugar de destino. Las geografías exiliares no fueron homogéneas y en no pocos casos se constituyeron por mucho más que la suma del país de origen con el de destino (Rollemberg, 1999, p. 65).

Entonces, ¿por qué Concepción? Sin duda un factor tuvo que ver con el vacío que dejó la reforma universitaria en el cuerpo docente del área de las ciencias sociales y la necesidad de contar con profesionales de calidad para cubrir esos puestos y sostener la institucionalización de carreras como sociología, antropología e ingeniería comercial. Creada en 1919, la Universidad de Concepción mantuvo hasta mediados de siglo una "homogeneidad considerable en su campo académico", el que estaba compuesto por profesores de orientación radical y/o masones (Huneeus, 1988, p. 71). Al respecto, el sociólogo Fernando Mires (2018) recuerda: "como en ninguna otra parte [en la Universidad de Concepción] reinaba una masonería cerrada y todopoderosa, la que hasta la Reforma usaba las ciencias sociales como campo de repartición de puestos académicos".

En términos comparativos, exceptuando antropología, las carreras de ciencias sociales de la Universidad de Concepción comenzaron a institucionalizarse desde 1957 –es el caso de ingeniería comercial–, es decir, cuando el país estaba madurando en tanto polo intelectual de las ciencias sociales latinoamericanas (Altamirano, 2019, p.71,). Esta institucionalización "tardía" provocó que la modalidad que se conoce como "sociología de cátedra" –que podríamos hacer extensible a las otras disciplinas: "economía de cátedra" y "antropología de cátedra"– sobreviviera un tiempo más en Concepción, estirándose incluso hasta la reforma universitaria (ídem). En ese contexto, uno de los tantos dilemas que la rectoría post reforma universitaria se propuso enfrentar fue la contratación y capacitación de personal docente para desempeñar las labores que el cambio de orientaciones requería[19]. Lo más difícil fue retener al personal incorporado, en un medio competitivo nacionalmente y desigual para las regiones. Según palabras del rector Edgardo Enríquez, el plan universitario aplicado después de la reforma perseguía

> la conquista de los profesores e investigadores formados por la Universidad [de Concepción] mediante el ofrecimiento de mejores sueldos y laboratorios, o de mayor número de ayudantes y técnicos, o de becas al extranjero, o de mayor agrado y bienestar para ellos y sus familiares, etc., etc., etc. (Revista Nueva Atenea, 1971, p.76.).

Otras de las autoridades universitarias, como el vicerrector Galo Gómez, también estaba consciente de la delicada situación por la que atravesaba el profesorado sudamericano: "El hecho [los exilios de intelectuales en el Cono Sur] se puede comprobar en Chile, donde existen numerosos profesores de ideas avanzadas, de nacionalidad argentina y brasileña, que prefieren permanecer en este país y enseñar en sus universidades", dijo en una asamblea de la comunidad universitaria (El Sur, 23 de octubre de 1969, p.8).

En definitiva, la fuga de cerebros de intelectuales brasileños y argentinos fue inteligentemente atraída por las universidades del país, pero en el campo intelectual nacional resultaba claro que el centro de interés y las luces descansaban en Santiago debido a su condición de centro latinoamericano de las ciencias sociales. Así las cosas la Universidad

19 Durante la década del sesenta, los esfuerzos de la Universidad de Concepción tuvieron que ver con la articulación de redes, la firma de convenios y la distribución de becas de estudio en el campo de las ciencias sociales locales. Así, por ejemplo, el proceso de formación de la disciplina sociológica en la Universidad de Concepción contó con el apoyo de fundaciones y organismos tales como Fundación Fullbright, Fundación Ford, Universidad de Minnesota, Universidad de Rutgers, FLACSO, entre las que más se repiten en las *Memorias* del periodo 1963-1968. Véase: Altamirano, 2019, p. 81.

de Concepción, ubicada 500 kilómetros al sur de la capital[20], la tercera del país en antigüedad, tuvo que hacer esfuerzos adicionales para captar la atención de los cientistas sociales sudamericanos y luego retenerlos. El desafío fue mayúsculo, máxime porque se necesitaba contar con cientistas sociales de experiencia para que colaboraran con el proceso de institucionalización de las ciencias sociales que se estaba llevando adelante en los tres institutos del área: el Instituto de Antropología (1966), el Instituto de Sociología (1965) y la Escuela de Economía y Administración (1957).

Según nuestras investigaciones (Altamirano, 2019), la cantidad de cientistas sociales brasileños y argentinos que llegó a la Universidad de Concepción entre 1967 y 1973 ascendió a por lo menos veinte personas. Los escasos intentos de la historiografía por detectar la presencia de los intelectuales sudamericanos en Santiago entre ambas coyunturas (1967-1973) han valorado el aporte del grupo brasileño compuesto por Dos Santos, Bambirra, Furtado, Marini, Cardoso, Ribeiro, Freire, entre otros, lo que hasta cierto punto opaca la presencia y el aporte de otros grupos de latinoamericanos. Sobre la actividad del grupo brasileño en Chile, Salinas sostiene que

> Sin duda que el grupo de extranjeros de mayor influencia, sobre todo a través de su reflexión académica, en el efervescente proceso social conducido por los sectores populares y la izquierda entre 1960 y 1973, fue el proveniente desde Brasil (Salinas, 2015).

Sin embargo, en provincias como Concepción si bien también hubo presencia e influencia de connotados cientistas sociales brasileños –en una breve temporada: Ruy Mauro Marini y Evelyn Pape–, no hay duda de que el grupo más influyente en materia intelectual y política fue el argentino (Altamirano, 2019; Lozoya, 2014, p.309). De esta manera, la composición según nacionalidad de la Escuela de Economía y Administración[21] y el Instituto de Antropología estuvo distribuida, en distintos momentos de 1967-1973, como indica el cuadro 1 y 3.

ESCUELA DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

Nombre	Nacionalidad
Gutman, Pablo	Argentina
Minian, Isaac	Argentina
Nowersztern, Marcelo	Argentina
Troksberg Miller, Carlos	Argentina
Zabaleta, Marta	Argentina

Cuadro 1. Nacionalidad de cientistas sociales en la Escuela de Economía y Administración (1967-1973). Fuente: elaboración propia.

A diferencia de la superioridad numérica incontrastable del grupo argentino en la Escuela y el Instituto de Antropología, en el Instituto de Sociología observamos una leve diferencia en cuanto a las distribuciones nacionales. Como muestra el cuadro 2, de un total de once cientistas sociales –con permanencia desigual, como Miguel Murmis, quien estuvo sólo un

20 La distancia no fue óbice para que algunos cientistas sociales argentinos y brasileños viajaran algunos días a la semana para hacer clases en la Universidad de Concepción. Es el caso, entre otros, de los argentinos Luis Vitale, Norberto García, Armando Di Filippo y Pedro Paz, vinculados al Instituto de Sociología y la Escuela de Economía y Administración. Agradezco este dato a Marta Zabaleta.

21 Desde ahora en adelante "Escuela".

semestre como profesor visitante[22]– siete son argentinos[23]. Por su parte, en el Instituto de Sociología el grupo de brasileños ascendió a por lo menos cuatro en el lapso 1967-1973.

INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA

Nombre	Nacionalidad
Álvarez, Horacio Traful	Argentina
Vitale, Luis	Argentina
Cunha Sader, Regina	Brasileña
D'Alessio, Néstor	Argentina
Marín, Juan Carlos	Argentina
Marini, Ruy Mauro	Brasileña
Murmis, Miguel	Argentina
Pape, Evelyn	Brasil
Szankay, Zoltán[24]	Hungara-Argentina
Sader, Eder	Brasileña
Torales, Ponciano	Argentina

Cuadro 2. Nacionalidad de cientistas sociales en el Instituto de Sociología (1967-1973). Fuente: elaboración propia.

Dentro del numeroso grupo de cientistas sociales argentinos que arribó a Santiago y Concepción a mediados de los sesenta, hubo un puñado que lo hizo antes de la "noche de los bastones largos", por lo tanto, vivieron desde dentro de la sociedad el ascenso del peronismo (1943) y posteriormente su proscripción (1955). A este respecto, sin duda el hito que disparó la llegada del grupo argentino a Santiago y Concepción fue la instalación de la dictadura militar de Juan Carlos Onganía (1966-1970). La "noche de los bastones largos" (Morero, 1996) forzó la renuncia de miles de docentes universitarios, en especial de las áreas de ciencias exactas, arquitectura y filosofía y letras[25]. Un poco antes de la proscripción del peronismo, en febrero de 1954, arribó a Chile el historiador Luis Vitale Cometa[26] con el argumento de escribir una historia comparada del movimiento obrero chileno y argentino (González, 2019, p.114). De este modo, del listado de nombres que poseemos Vitale es el cientista social argentino que más tempranamente pisó tierras chilenas. A éste se suma el sociólogo y folklorista Horacio Traful Álvarez, también afincado en Santiago de Chile antes de la "noche de los bastones largos", y la economista Marta Zabaleta (Zabaleta, 2019)[27].

22 Agradezco este dato a Fernando Mires.

23 El caso del filósofo y sociólogo húngaro-argentino Zoltán Szankay resulta interesante, puesto que antes de pisar la Universidad de Concepción atraído por la Unidad Popular había pasado un tiempo considerable en la UBA (D'Alessio, s.f).

24 Szankay pertenecía al Instituto de Filosofía, sin embargo por razones prácticas lo consideramos como parte del Instituto de Sociología.

25 Sobre estos hechos, el investigador Lucas Lanusse escribe: "Con motivo de la intervención universitaria renunciaron cinco de los ocho rectores de universidades nacionales y alrededor de mil quinientos docentes, muchos de los cuales continuaron sus carreras en el exterior. Desde aquella lúgubre jornada del 29 de julio de 1966, la universidad pública argentina no volvería a ser la misma". Véase: Lanusse, pp.139-144, 2009.

26 Según su amigo Meschkat, sociólogo alemán, Vitale estuvo impartiendo clases en Concepción de manera intermitente desde 1958 (Meschkat, 2010).

27 Zabaleta se instaló en Santiago de Chile en 1963 para especializarse en Escolatina, de donde se recibió como experta

Otro puñado de cientistas sociales argentinos llegó a Santiago y Concepción después del golpe de 1966: es el caso, entre otros, de Néstor D'Alessio, Juan Carlos Marín[28] y Edgardo Garbulsky; a este grupo se sumó la llegada antes de 1970 de la brasileña Evelyn Pape y la de Ruy Mauro Marini a comienzos de 1970[29]. Néstor D'Alessio pasó a radicarse de inmediato en la provincia de Concepción en agosto de 1969, tras recibir en mayo del mismo año una llamada de Juan Carlos "Lito" Marín que ya trabajaba en el Instituto de Sociología (D'Alessio, s.f). El antropólogo Garbulsky se integró al Instituto de Antropología por contactos con la profesora Zulema Seguel en 1967[30].

Un tercer grupo de cientistas sociales latinoamericanos, más numeroso, arribó atraído por la experiencia de la vía chilena al socialismo: los brasileños Eder Sader y Regina Cunha Sader, y los argentinos Pablo Gutman, Isaac Minian, Carlos Alberto Troksberg y el filósofo-sociólogo y argentino-húngaro Zoltán Szankay, entre otros[31]. Según Néstor D'Alessio, Szankay pidió licencia en la Universidad de Aachen para seguir de cerca el proceso chileno, por eso es que "sabiendo de su propósito" D'Alessio realizó distintas gestiones y así consiguió traerlo al Instituto de Filosofía de la Universidad de Concepción (D'Alessio, s.f, p.15). Szankay, discípulo de G. Lukács y experto en Hegel y Heidegger –a quién conoció–, había estudiado Sociología y Economía en la Universidad de Buenos Aires (Mires, 2018), de modo que vivió varios años en el Cono Sur antes de radicarse en Concepción. Allí, en Buenos Aires, fue cuando Néstor D'Alessio lo conoció (D'Alessio, s.f.).

Por último, en el Instituto de Antropología también se dejó sentir la mayoría argentina sobre el resto de las nacionalidades, por cierto también presentes según advertimos de la revisión de las *Memorias* y la revista *Rehue* –en los primeros años de la década del sesenta, detectamos la presencia de antropólogas francesas y una venezolana–. De acuerdo a Mires (2018) y Zabaleta (2019), Edgardo Garbulsky fue el argentino con mayor influencia en la disciplina antropológica, y, de hecho, uno de los impulsores del proceso de institucionalización de la misma dentro de la Universidad de Concepción a través del impulso de la revista *Rehue* y otras actividades académicas como seminarios, congresos e investigaciones.

Y aquí hacemos un alto: interpretando los itinerarios, las motivaciones y la distribución nacional de los cientistas sociales argentinos y brasileños radicados en la Universidad de Concepción resulta llamativo, y creemos que, de ninguna manera aleatorio, que dos sociólogos que se conocían con anterioridad –Juan Carlos Marín y Néstor D'Alessio, además del economista Marcelo Nowersztern– hayan acabado reuniéndose en la Universidad penquista. A finales de la década del sesenta, en 1968, estos tres cientistas sociales, además de José Nun y Miguel Murmis, participaron en la capital chilena en el controvertido Proyecto Marginalidad (Tortti, M., y Soprano, G., 2004, pp.229-231). Independientemente de la polémica que suscitó el conocimiento

en Desarrollo Económico y Social de América Latina; luego trabajó en el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) y entre 1966 y 1967 en el Instituto de Educación y Capacitación para la Reforma Agraria (ICIRA). Más tarde, en abril de 1968, se incorporó a la Escuela de Economía y Administración de la Universidad de Concepción (Zabaleta, ídem).

28 No poseemos mayor información sobre la llegada de Juan Carlos Marín al Instituto de Sociología de la Universidad de Concepción. Sin embargo, es posible que haya llegado debido a sus contactos como masón y militante de la izquierda revolucionaria. Con el tiempo, "Lito" Marín se convirtió en uno de los "intelectuales orgánicos" del MIR en la provincia de Concepción. Todos coinciden en el enorme influjo que causó.

29 En sus *Memorias*, el brasileño Marini cuenta que estando exiliado en la capital mexicana fue contactado por el entonces senador Salvador Allende y el presidente de la FEC, el estudiante mirista de sociología Nelson Gutiérrez, para ocupar un puesto vacante como profesor en el Instituto de Sociología (Marini, 2012, p.74-75).

30 Un poco antes, en septiembre de 1966, se había celebrado en Mar del Plata el Congreso de Americanistas en donde Any Tual, de la Universidad de Concepción, se puso en contacto con los antropólogos Pablo Aznar y Mirta Gerber para que trabajaran en el reciente Instituto. A principios de 1967 Garbulsky acompañó a su amigo el antropólogo José Najenson, recientemente contratado, a la Universidad de Concepción y ahí es cuando tuvo lugar el encuentro con Zulema Seguel y la propuesta de integrarse al Instituto de Antropología (Garbulsky, 1998 y 2001; Altamirano, ob. cit., p.182-183).

31 Otros europeos animosos de la Unidad Popular que llegaron más tarde fueron el sociólogo alemán Klaus Meschkat (Meschhkat, 2010) y el economista inglés Brian Pollit (Zabaleta, 2019).

de las fuentes de financiamiento de este proyecto (Fundación Ford), lo cierto es que sus miembros aportaron una línea de investigación inusitada para la comprensión de los procesos de migración campo-ciudad y la modernización contradictoria en América Latina, a más de desplegar metodologías de avanzada aprendidas con Gino Germani en la UBA durante la segunda mitad de los cincuenta (Gilbert, 2012, p.597-600; O'Donnell, 2003, p.11). A nuestro juicio, debido al itinerario político e intelectual de los integrantes del proyecto Marginalidad es que es tan decisor que parte de este grupo haya acabado reuniéndose en la Universidad de Concepción desde 1969, pues colaboraron con la institucionalización de la sociología en Concepción[32].

INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA

Nombre	Nacionalidad
Aznar, Pablo	Argentina
Garbulsky, Edgardo	Argentina
Gerber, Mirta	Argentina
Petruzzi, Susana	Argentina
Najenson, José	Argentina

Cuadro 3. Nacionalidad de cientistas sociales en el Instituto de Antropología (1967-1973). Fuente: elaboración propia.

Los datos anteriores y la repetición de grupos de trabajo originan incógnitas en relación a la dinámica de las ciencias sociales latinoamericanas y el contacto mutuo entre las culturas políticas de Chile, Brasil y Argentina, ya que desde las dictaduras de 1964 y 1966 el campo científico-social chileno pasó a relacionarse de manera creciente y cada vez más intensa con otros campos intelectuales latinoamericanos.

Volviendo con la composición del grupo de cientistas sociales sudamericanos, además de agruparlos por nacionalidad y problematizar sus contextos de origen creemos necesario recurrir a dos selecciones más: el rango etario y las sensibilidades y militancias políticas. En este sentido en los años sesenta, después del simbolismo de la Revolución Cubana –como es sabido sus referentes no superaban en promedio los treinta años–, la juventud pasó a ocupar un papel protagónico en los movimientos sociales[33]. La historia de América Latina muestra que los sectores juveniles, particularmente los procedentes del mundo universitario, han estado "fuertemente ligados a los procesos populares" (Faletto, 2016, p.213). En los sesenta florecieron en todas partes del subcontinente agrupaciones que se reconocieron como integrantes de una "nueva izquierda", y, como corolario, miembros de una "nueva generación". Como indica Ponza (2010, p.113) "la idea de *nueva generación* [sic] remite también a una negación de los referentes, a una sensación de disconformidad, a un sentido crítico con el orden establecido y las opciones tradicionales de representación política".

Pues bien, ciertamente la idea de pertenecer a una *nueva generación* estuvo presente en el grupo de cientistas sociales brasileños y argentinos que aquí estudiamos. Al clasificar a la veintena de cientistas sociales –sólo pudimos conocerlas fechas de nacimiento de la

32 Juan Carlos Marín fue discípulo de Gino Germani en el segundo lustro de los cincuenta y estuvo implicado, junto a otros jóvenes sociólogos, como Miguel Murmis, en la creación de la carrera de sociología en la UBA. Además, desde joven fue consejero estudiantil de la Reforma en la UBA, junto a un joven Ernesto Laclau. Véase: Altamirano, ob. cit., pp.175-179.

33 Uno de los libros que a nuestro entender expresa de mejor manera la expectación de las ciencias sociales por la irrupción de la "juventud" en Chile –entendiendo la juventud en su complejidad sociológica y lejos de las explicaciones biológicas como la edad– es el del "matrimonio Mattelart", Michèlle y Armand: *Juventud chilena. Rebeldía y conformismo* (Mattelart, 1970).

mitad– según el rango etario al momento de ingresar a la Universidad de Concepción, se observa de inmediato que todos/as tienen menos de 45 y que la mayoría frisaba los 31-40 años, como indica el cuadro 4. Los casos más llamativos son el del joven economista y profesor argentino Carlos Alberto Troksberg[34], "Carli" o "Antonio", establecido en Chile entre 1972 y 1973, con un poco más de 25 años, y el del joven antropólogo también argentino Edgardo Garbulsky, con alrededor de 28 años.

Edad	Número
25-30	2
31-35	4
36-40	3
41-45	2

Cuadro 4. Distribución según rango etario de los cientistas sociales argentinos y brasileños en la Universidad de Concepción (1967-1973). Fuente: elaboración propia.

El grupo de cientistas sociales argentinos y brasileños distribuidos en el rango etario 31-40 estaba compuesto, entre otros, por Marta Zabaleta, Néstor D'Alessio, Horario Traful Álvarez, y en los bordes de los 40, Miguel Murmis, Ruy Mauro Marini y Juan Carlos Marín. Se trataba, pues, de dos grupos que ya habían tenido experiencias intelectuales y políticas en sus países de origen y que sin embargo seguían siendo parte de la *nueva generación* en tanto se identificaban con esa "negación de los referentes" que refiere Ponza (2010). Y la negación estaba clara: la concepción política de la izquierda tradicional –el etapismo y la caracterización feudal de América Latina– y los coletazos que esto traía para el quehacer de los cientistas sociales. Coherente con aquello, como veremos en el siguiente apartado, la gran mayoría de la veintena de cientistas sociales argentinos y brasileños pasó a militar en la agrupación que en Chile expresó de mejor manera el espíritu y las ideas de la *nueva generación*: el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Los más longevos del grupo fueron Luis Vitale y Zoltán Szankay, con más de cuarenta años, quienes no obstante también permanecieron cercanos a la órbita del MIR.

En suma, en la composición del grupo de cientistas sociales latinoamericanos que trabajó en la Universidad de Concepción es importante la consideración de la nacionalidad, por un lado, y el rango etario, por otro[35]. Como mencionamos, el primero de estos aspectos influye sobre el quehacer intelectual y político del grupo debido a que no es posible hacer abstracción del contexto sociopolítico. En cuanto al rango etario, si bien el concepto de *juventud* es entendido de manera sociológica antes que biológica –con lo cual apuntamos a la construcción permanente e histórica del mismo–, lo cierto es que no hay que perder de vista que en los largos sesenta existe una potente identificación entre juventud y cambio social. A continuación, examinamos la variable articuladora de las dos: la *militancia política*.

34 De regreso a la Argentina y a escasos meses del golpe, Carlos Alberto Troksberg fue secuestrado y desaparecido en plena vía pública el 27 de noviembre de 1976. Tenía 28 años. Disponible en: http://www.robertobaschetti.com/biografia/t/96.html

35 Desde luego, la relación entre juventud y política que establecemos no tiene que ver con la edad biológica sino, como dice Bourdieu (2002), con las lógicas de poder implicadas detrás de la confrontación entre generaciones, donde la "nueva generación" y la "nueva izquierda" se enfrentan a una serie de proyectos políticos –la "vieja generación"; la "vieja izquierda"– que identifican como caducos.

EL INVOLUCRAMIENTO CON LA COYUNTURA POLÍTICA

Dos coyunturas de la relación intelectual-política en Concepción, coyunturas que por cierto son transversales en el desarrollo de las ciencias sociales en Chile, fueron la reforma universitaria y el proceso de la vía chilena al socialismo. La cálida recepción del triunfo de la Unidad Popular en la Universidad de Concepción quedó expresaba sólo unos días después de la victoria de septiembre, cuando el Consejo Superior organizó unas jornadas de "Análisis y Defensa del Triunfo de Salvador Allende" a través del Consejo de Difusión que encabezaba el poeta y docente del Instituto de Lenguas Gonzalo Rojas[36]. En cuanto a las ciencias sociales y las humanidades, también se advirtió la celebración del triunfo popular. La revista más importante de la Universidad, *Atenea*, decidió cambiar de nombre a *Nueva Atenea* entendiendo que la reforma universitaria –que interrumpió por vez primera su continuidad–, primero, y luego la victoria de la Unidad Popular, abrían precisamente una *nueva* época

> Después del 4 de septiembre, la política asumida por Nueva Atenea, no puede ser más clara, pero sí menos expectante en lo que se refiere a la especificidad de su tarea. Desde hoy, el quehacer teórico y creador del país puede incidir en una praxis revolucionaria que apunte, desde todos los niveles de la actividad social, a erradicar nuestro subdesarrollo. (Revista Nueva Atenea, 1970, p.1)

Además del Consejo Superior de la Universidad, el Instituto de Sociología y la Escuela de Economía y Administración también se plegaron a los saludos de la victoria popular. Es más, la Escuela transparentó su compromiso, como recogieron las *Memorias* de 1971: "El Gobierno Popular ha planteado la necesidad de llevar a cabo un proceso profundo de transformaciones fundamentales en la estructura económica, social y política de nuestro país, tendiente a la creación de una sociedad socialista" (Memorias de la Universidad de Concepción, 1971, p.63). Aprovechando la coyuntura, en la Escuela se levantó un ambicioso proyecto: el Instituto de Investigación de la Zona Sur, justificado por los desafíos que imponía la victoria de la Unidad Popular, sobre todo a nivel de la provincia de Concepción.

> La Universidad de Concepción, y particularmente la Escuela de Economía y Administración, estiman que para colaborar concretamente en el cumplimiento de las medidas propuestas por el Gobierno Popular, es necesario crear un organismo a nivel de la Zona Sur del país que realice investigaciones socio-económicas y proporcione la información que el proceso de cambios requiere (Memorias de la Universidad de Concepción, 1971, p.63).

Asimismo, la Escuela levantó un proyecto de investigación sobre "El socialismo y los problemas de transición", con lo cual se unieron a la discusión nacional disparada desde las ciencias sociales para aportar desde sus especialidades a la coyuntura política. En efecto, entre el 17 y el 23 de octubre de 1971 se llevó a cabo en Santiago de Chile el primer congreso sobre Transición al Socialismo, al cual asistió Marta Zabaleta como representante de la Escuela (Zabaleta, 2019).

Desde luego, la victoria de la Unidad Popular significó un cambio de prioridades en las actividades de los cientistas sociales latinoamericanos. Así recuerda Hinrichsen el efecto que tuvo la Unidad Popular en la Universidad de Concepción y sus ciencias sociales:

> se hacían estudios para actualizar y debatir reorientaciones en los procesos de desarrollo del sector social o mixto de la economía urbana; o del progreso de la

36 Dirigida por el poeta Enrique Lihn, la revista Nueva Atenea señala en su publicación número 424, 1970: "más de cincuenta horas de diálogo entre universitarios y los invitados –figuras representativas de nuestra vida política y cultural, de la ciencia, del periodismo y del cine chileno– diálogo o franca discusión contrado [sic] en la perspectiva abierta por el cuatro de septiembre".

> reforma agraria; o de la formación y estructura de los cordones industriales o del sector poblacional urbano [pero estas investigaciones se elaboraban] para ser usado mañana, la próxima semana, o para tal fecha en tal frente (Intercambio vía correo electrónico, 20 de marzo de 2019)

Una breve mención de los proyectos llevados adelante por los investigadores argentinos de la Escuela –véase el cuadro 5– concede una idea respecto de las preocupaciones que los inquietaban (Revista Economía y Administración, 1971-1972, pp.165-167). Basándonos en el cuadro 5, es posible colegir que el grupo de los cinco economistas argentinos también se hizo partícipe, a través de sus puestos intelectuales, en el proceso de transición chilena al socialismo. Por cierto, estas preocupaciones estuvieron asociadas a otras relacionadas con los desafíos teóricos y políticos de la vía chilena al socialismo, aspectos también presentes en los espacios científico-sociales de Santiago y sus órganos de difusión, como los Boletines del CESO, los *Cuadernos* del CEREN y revistas como *Punto Final*, entre otras.

Encargados/as	Título del proyecto	Objetivos
Isaac Minian	El intercambio entre naciones de distinto grado de desarrollo.	Esta investigación se propone realizar un análisis crítico de las teorías del intercambio desigual.
Marta Zabaleta y Ricardo Alberto Hinrichsen	Cambios recientes en las relaciones de la agricultura chilena.	Analizar la estructura agraria, sus cambios y contradicciones.
Pablo Gutman y Carmen Alveal (ayudante).	Utilización de la capacidad instalada en la región del Bio-Bío	No especifica.

Cuadro 5. Proyectos de investigación de cientistas sociales argentinos en la Escuela de Economía y Administración (1971-1973). Fuente: Economía y Administración, 1971-1972, p.165-1967.

Dentro de la Escuela, el involucramiento con la coyuntura política se vio reflejado en los nuevos planes de estudio, en las materias impartidas, en los seminarios y en las temáticas del órgano oficial: la revista Economía y Administración [37]. Según recuerda Hinrichsen, durante el periodo 1969-1973 "se crearon, desarrollaron y ofrecieron una gama impresionante de materias" (2019, p.7). Tal es así que "para dar una idea indicativa de lo que ello significó, se acabó enseñando *El Capital*[38] en varios semestres –en cursos sucesivos–, incluyendo debates y contribuciones recientes sobre teoría del valor" (ídem). Uno de los profesores de estos cursos fue el sociólogo argentino Néstor D'Alessio[39] (Altamirano, ob. cit., p.270). Por esos años (1970), el sociólogo argentino Miguel Murmis se desempeñaba como profesor visitante en la Universidad de Concepción[40] y uno de sus pertrechos teóricos básicos, precisamente, procedía de la atenta lectura y traducción de los borradores de Karl Marx (Tarcus, 2018) conocidos como los *Grundrisse*[41].

37 Está en prensa un libro sobre la historia reciente del Gran Concepción en el que colaboramos con el capítulo "Redes intelectuales y circulación de ideas económico-sociales en Concepción: una mirada a través de la Revista 'Economía y Administración' (1964-1970)".

38 En Santiago habían por lo menos tres líneas de lectura de *El Capital* que convergieron alrededor de los exiliados brasileños, la interpretación influida por Althusser de Marta Harnecker, y la de los viceministros del Che Guevara. Dos Santos recuerda esta experiencia formativa en *Memorial* (1996) y en las entrevistas de Lozoya (2015, p.263) y Vidal (2013, p.190).

39 Según los recuerdos de D'Alessio (s.f, p.6), desde la reforma universitaria el Instituto de Sociología de la Universidad de Concepción "carecía de plan de estudios y cada cual hacía lo que le parecía". Y de inmediato agrega que "fue así como comencé a dar mis cursos sobre *El Capital*".

40 Agradezco esta información a Fernando Mires.

41 Marini había participado tempranamente en los grupos de lectura de *El Capital* junto a Dos Santos y otros militantes

Las palabras de Hinrichsen son claras en relación a la concepción que los simpatizantes de las izquierdas tenían en torno al papel del economista en los procesos de transformación, como cuando dice (2019, p.3): "Nosotros íbamos a recibir el título de 'Ingeniero Comercial', pero para mí de lo que se trataba era de formar 'Ingenieros del Cambio Social'. Había que entender rigurosamente cómo la economía había llegado a ser lo que era, y qué y cómo transformarla". Y al punto agrega, a propósito de la identificación con la *nueva generación*: "Esta era nuestra parte de la misión, del deber histórico que le correspondía urgentemente a nuestra generación [...] Y no había nada ni nadie que pudiera intentar oponerse con éxito a tales cambios".

1968, pues, fue un año en el que se intentó dar los primeros pasos para reestructurar las ciencias sociales de la Universidad de Concepción según las necesidades que la coyuntura política iba exigiendo. No obstante las trabas y jugarretas desplegadas por el cuerpo de docentes –sólo contaron con el apoyo de la recién incorporada Marta Zabaleta, militante del MIR–, en la Escuela el movimiento reformista logró sus tres cometidos fundamentales: separación de las carreras de Economía y Administración de Empresas; el cambio del plan de estudios; y la evaluación del personal docente por los estudiantes (Hinrichsen, 2019)[42]. La reforma universitaria, entonces, estimuló la búsqueda de ciertas orientaciones intelectuales y políticas que acogieran las nuevas teorías en materia de Economía Política para así sumarse desde la especialidad a las movilizaciones en curso, y ello se logró con la renovación del personal[43]. De modo que los cambios cuantitativos y cualitativos de la reforma universitaria encontraron en la victoria de la Unidad Popular un nuevo momento en la historia de la formación de la disciplina económica en la Universidad de Concepción, muy distinta tanto del primer (1957-1963) como el segundo periodo (1964-1967) (Altamirano, ob. cit., p.139-140).

Otra de las publicaciones de la Universidad, esta vez referida al campo de la Antropología, fue la Revista *Rehue* que desde su cuarto número, correspondiente a los años 1971-1972 –los tres anteriores habían sido anuales–, pasó a ser dirigida por el joven argentino Edgardo Garbulsky, de amplias simpatías para con la Unidad Popular. La Editorial, a cargo de Garbulsky, dice sobre la victoria del "gobierno popular"

Vivimos momentos definitorios, en un proceso fundamental para el destino del pueblo. Este ha elegido un camino, el camino de la liberación, el camino de la eliminación de las bases de una sociedad cuyas normas de conducta estaban expresadas en el egoísmo, la alienación y la explotación. La aventura humana tiene en el Chile de hoy una de sus expresiones más fecundas (Revista Rehue, 1971-1972, p.7).

En el mismo número, Garbulsky se hace cargo del supuesto "doble carácter" que de ahí en más *Rehue* aspiraba a tener: "de comunicación del conocimiento y de palestra polémica",

de Polop. En el exilio mexicano continuó estas labores, liderando grupos de lectura, según Dos Santos. Para Dos Santos (Vidal, 2013, p.191), estas experiencias "eran un movimiento [de] relectura del marxismo, una vuelta a Marx porque había una insatisfacción muy grande con la lectura estalinista o incluso trotskista. Porque estas corrientes no tenían una substancia muy fuerte con el marxismo en su base original. Entonces este movimiento fue muy importante y marcó mucho el proceso chileno". De ahí la importancia de la circulación de los escritos y traducciones de Marx y la incorporación de sus ideas para discutir la coyuntura política desde las ciencias sociales y las militancias políticas –los modos de producción, dependencia, el cambio social, el concepto de enajenación, entre otros puntos acuciantes–. Sobre el periplo de la traducción de *El Capital* en Hispanoamérica véase: Tarcus (2018).

42 En lo sucesivo, dice Hinrichsen (2019), los resultados fueron viéndose y los docentes evaluados negativamente desahuciados: "estos últimos [...] se contaron con los dedos de una mano –si mal no recuerdo, un full-time y unos pocos part-times que llegaban a enseñar desde sus puestos en empresas de la zona–".

43 Luego de la reforma, desde 1969, comenzaron a regresar los jóvenes docentes con estudios de postgrado en Polonia y Rusia: Alexis Guardia Baso, Julio López Gallardo y José Valenzuela Feijóo (Altamirano, ob. cit., p.136-137; Memorias de la Universidad de Concepción, 1967-1973), Marta Zabaleta con estudios de postgrado en Escolatina, y los jóvenes recientemente egresados Ricardo Alberto Hinrichsen y Carlos Samur H., activos en el movimiento estudiantil penquista; más adelante los argentinos Carlos Troksberg, Pablo Gutman, Isaac Minian y Marcelo Nowersztern, el británico Brian Pollit, entre otros. Los testimonios de Zabaleta y Hinrichsen coinciden en señalar que el triunfo de Allende no hizo más que acelerar y consolidar muchos de estos cambios.

y esa línea escribe un ensayo titulado Algunas ideas acerca del papel de la *Antropología en el proceso de cambio de la sociedad latinoamericana*. Según Garbulsky, en Chile hay un "proceso de transformación revolucionaria [que] requiere y facilita la formación de científicos sociales" (Garbulsky, ibídem, p.22). El papel de éstos en los procesos de cambio tiene que ser aportar a ellos, "desde un carácter científico objetivo y de servicio a los intereses de los sectores populares[44]". Vemos, pues, una declaración de intenciones explícita sobre el diálogo entre labor intelectual y compromiso político.

> Estos científicos sociales, no reemplazan, de ninguna manera, a los líderes naturales de un proceso que es, en primera y en última instancia, un problema *político* [sic]. Pueden ser asesores en cuanto a su conocimiento de un medio a los efectos de plantear un diagnóstico de la situación (Revista Rehue, 1971-1972, p. 22).

Pero no se trató de un esfuerzo aislado de la Escuela y ciertas individualidades por participar de la gran discusión sobre la transición al socialismo: el Instituto de Sociología y fuerzas políticas estrechamente vinculadas al Instituto, como el MIR, también participaron. Así, una vez que finalizó el mencionado congreso en Santiago, el Instituto de Sociología y la Escuela organizaron un "ciclo de conferencias" precisamente sobre "La Transición al Socialismo" (Memorias de la Universidad de Concepción, 1971, p.144). El ciclo se realizó en la Casa del Arte el 27 y 28 de octubre y fue inaugurado por el destacado economista Paul Sweezy (El Sur, 28 de octubre de 1971, p.8) con una exposición sobre "Economía mundial, crisis monetaria y países subdesarrollados", seguida de dos conferencias el día 28 a cargo de la italiana Rosanna Rosanda y el francés Michel Gutelman con presentaciones sobre "Poder obrero y democracia socialista" y "Reformas agrarias y transición al socialismo", respectivamente.

Otra variante del involucramiento con la coyuntura fueron las sensibilidades y militancias políticas. En este sentido, no hay duda de que el Instituto más "militante" de las ciencias sociales en la Universidad de Concepción fue el de Sociología, en un momento histórico en el que las ciencias sociales latinoamericanas transitaban desde las teorías de la modernización y las aspiraciones de cientificidad y objetividad hacia los estudios marxistas sobre Dependencia y Subdesarrollo, lo cual supuso un mayor compromiso de las labores intelectuales (Gilbert, 2014, p.603-604).

En el cuadro 6 se especifican las militancias políticas y el año de llegada aproximado al Instituto de Sociología del grupo de brasileños y argentinos. Un primer aspecto destacable es que el asentamiento fue paulatino, pero coincidente con el proceso de reforma universitaria: a diferencia de lo que sucedió en Santiago, donde atraídos por la actividad intelectual los cientistas sociales latinoamericanos se radicaron en la ciudad desde mucho antes de la reforma universitaria, en la provincia de Concepción su llegada muchas veces se debió a los intereses de la Universidad y el movimiento estudiantil por llevar adelante las reformas en el área de las ciencias sociales.

INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA

Encargados/as	Oficio	Militancia	Estadía
Álvarez, Horacio Traful	Sociólogo	MIR	1969-1973
Cunha Sader, Regina	--	--	1970-1973

44 Garbulsky establece una distinción del rol del cientista social según se trata de un gobierno perteneciente al campo socialista o capitalista. "Entendemos que el papel del antropólogo debe jugar en los procesos de cambio, presente características diferentes según se trate de un sistema económico-social ligado al imperialismo, o por el contrario, liberado de este o en vías de liberación". *Rehue*, n.4, 1971-1972, p.19.

Encargados/as	Oficio	Militancia	Estadía
D'Alessio, Néstor	Sociólogo	MIR	1969-1973
Marín, Juan Carlos	Sociólogo	MIR	1967 o 1968-1971
Marini, Ruy Mauro	Economista	Ex ORM-Polop-MIR	1970
Murmis, Miguel (profesor visitante[45])	Sociólogo	Simpatizante MIR	1970
Pape, Evelyn	Socióloga	Ex ORM-Polop Simpatizante MIR	¿1967-1969?
Sader, Eder	Sociólogo	Ex ORM-Polop -MIR	1971-1973
Torales, Ponciano	Sociólogo	---	¿1967-1968?
Vitale, Luis[46]	Historiador	MIR/ Trotskismo	1968-1970

Cuadro 6. Militancias de los cientistas sociales argentinos y brasileños del Instituto de Sociología y estadía (1967-1973). Fuente: elaboración propia.

Igualmente, la cuestión de las militancias del grupo de argentinos y brasileños es sugerente, debido a que al estar en un país distinto al de sus nacionalidades podría pensarse que la extranjería impedía inscribirse en organizaciones y partidos de las izquierdas chilenas; empero, la situación fue muy distinta tal como se advierte en el cuadro 6 y 7. En este sentido, como estudió Ivette Lozoya en su tesis doctoral (2014), una de las organizaciones más destacadas de la nueva izquierda chilena, el MIR, no tuvo mayores problemas en incluir dentro de sus filas a los latinoamericanos exiliados o migrantes en Chile. Lo anterior se entiende debido a la política latinoamericanista de esta organización, advertible en publicaciones cercanas como *Chile Hoy* y *Punto Final*, plagadas de referencias y guiños hacia las luchas de América Latina y el Tercer Mundo. En la Escuela de Economía y Administración las militancias del grupo extranjero fueron un poco más variadas, como muestra el cuadro 7, pero siempre adscribiéndose dentro del universo de las izquierdas. A este grupo se sumaron las militancias propias de los economistas chilenos[47].

En el Instituto de Antropología destacamos a los argentinos Edgardo Garbulsky y Pablo Aznar: Garbulsky del Partido Comunista (Zabaleta, 2019) y Pablo Aznar del MIR[48]. Debido a sus actividades como antropólogos ambos se vieron implicados en malentendidos en los que se los acusaba de politizar a las comunidades que visitaban. Siguiendo los pasos de Garbulsky, que es de quien más información poseemos, notamos las sospechas que tempranamente despertó su militancia comunista en Concepción: en uno de los primeros trabajos de campo que realizó en la Universidad de Concepción, hacia 1967, se propuso investigar a las comunidades mapuches de Collipulli y Victoria con ayuda de los alumnos Pilar Campaña y Patricio León (Memoria de la Universidad de Concepción, 1968, p.103); sin embargo, sus trabajos en terreno se vieron interrumpidos por una notificación procedente del Ministerio del Interior en los tiempos de Frei (Garbulsky, 1998, p.204). El documento informaba

45 Estuvo sólo un semestre, pero se relacionó con el MIR.

46 Vitale dejó el MIR en junio-julio de 1969.

47 Algunos nombres destacados durante este periodo fueron Julio López Gallardo (MAPU), José Valenzuela Feijóo (Partido Comunista Revolucionario), Joaquín Undurraga Correa (Izquierda Cristiana), María Eugenia Moraga (Partido Socialista), entre otros.

48 Agradezco esta información a Mario Garcés Durán.

que se le "revocaba la visa de residencia temporaria y se [le] daba un plazo perentorio para salir del país". ¿De qué había sido acusado?

> A través de diversas gestiones, pude saber del entonces subsecretario del interior, Enrique Krauss, que había sido acusado de participar en la provincia de Arauco en los trabajos de verano de la Federación de Estudiantes de Concepción, y que habría manifestado que 'la raza chilena estaba en decadencia y que era necesario un cambio de gobierno' (Garbulsky, 1998, p.204).

ESCUELA DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

Nombre	Nacionalidad	Oficio	Militancia	Estadía
Gutman, Pablo	Argentina	Economista	MIR	1970-1973
Minian, Isaac	Argentina	Economista	--	¿1971-1973?
Nowersztern, Marcelo[49]	Argentina	Economista	Trotskismo	1969-1973
Troksberg Miller, Carlos	Argentina	Economista	Montoneros	1972-1973
Zabaleta, Marta	Argentina	Economista	MIR	1968-1973

Cuadro 7. Militancias de los cientistas sociales de la Escuela de Economía y Administración y estadía (1967-1973). Fuente: elaboración propia.

Ciertamente, durante la implementación de la reforma agraria en el país hubo varias acusaciones de la prensa chilena sobre de la injerencia de organizaciones políticas de las izquierdas dentro de las comunidades mapuches y campesinas[50]. Los cientistas sociales no escaparon a estas sospechas, menos los sudamericanos radicados en Chile. Garbulsky (1998, p.204) menciona que su nombre estuvo vinculado "a un pretendido plan de agitación ideológica en comunidades indígenas [donde] se dejaba trascender que en ese plan estaba relacionado un [supuesto] eje internacional Moscú-Pekín-La Habana, y que en Radio Moscú había programas en mapuche".

Otro sudamericano que participó en los polémicos "cursos de verano" de la FEC fue el brasileño Marini. Apenas instalado en Chile, en febrero de 1970, se integró a la comitiva de los más de veinte profesores inscritos para ofrecer cursos en Puerto Montt y Loncoche ese año. Su exposición llevaba el nombre de "Reforma o Revolución en América Latina" (El Sur, 5 de febrero de 1970, p.9), en medio de las discusiones nacionales acerca de la posibilidad o imposibilidad de transitar al socialismo desde la institucionalidad burguesa. Más tarde, una vez electo Allende, Marini formó parte de las iniciativas de discusión promovidas por las autoridades universitarias y con motivo de la victoria de la Unidad Popular apareció en una actividad como "informante" de la situación política mundial junto al estadounidense y director de cine Saul Landau en las jornadas de "Análisis y Defensa del Triunfo Popular" (El Sur, 25 de septiembre de 1970, p.7).

49 Pertenecía a una facción distinta a la de Luis Vitale.

50 Como botón de muestra: El Mercurio publicó en octubre de 1971 una noticia titulada "Denuncia de grupos armados en el campo", en la que se señala que "durante las últimas horas se ha constatado la intensificación de toma de predios por extremistas del Movimiento Campesino Revolucionario o rama rural del MIR, Partido Comunista Revolucionario y elementos socialistas que han derivado en atropellos y hechos de sangre, y que es indudable que la acción concertada corresponde a un intento de precipitar un enfrentamiento destinado a provocar un desborde institucional". El Mercurio, 20 de octubre de 1971, p.19.

CONCLUSIONES

Nos hemos propuesto examinar el perfil de los cientistas sociales argentinos y brasileños que desarrollaron sus actividades en la Universidad de Concepción entre 1967 y 1973. Una primera conclusión es que las motivaciones para radicarse en un espacio del interior de Chile como Concepción fueron diversas: la atracción generada por la experiencia de Allende, el exilio político, las posibilidades de inserción, el desconocimiento, entre otras. Pese a este punto de partida distinto, un rasgo común tuvo que ver con sus militancias políticas: las militancias permitieron que el grupo se articulara social e intelectualmente. El MIR fue la organización más concurrida de los cientistas sociales argentinos y brasileños en Concepción[51].

Una segunda conclusión dice relación con las respuestas a las que llegamos preguntándonos por las tres variables que esta investigación consideró en el examen del grupo de cientistas sociales sudamericanos. Así, y disintiendo con lo que ocurrió en la capital, en Concepción la nacionalidad de intelectuales científico-sociales más numerosa e influyente fue la argentina, si bien también hubo, aunque efímera, presencia brasileña. Asimismo, el grupo de cientistas sociales pertenecía a un rango etario relativamente joven puesto que sus edades oscilaban entre los 31 y 40 años. Esto quiere decir, grosso modo, que su formación intelectual y política se llevó a cabo en el contexto de la transición cincuenta-sesenta, en plena dispersión del proceso cubano, lo cual explicaría la fuerza que tuvo la tercera variable de nuestra investigación: la identificación con una militancia política y el peso de ésta en las labores intelectuales. Así pues, debido a la particular situación política por la que atravesaba el Cono Sur, entre 1967 y 1973 la Universidad de Concepción recibió una cantidad importante de intelectuales de la nueva izquierda, sin perjuicio de otras militancias políticas, también pertenecientes a las izquierdas; la presencia de este contingente provocó una "latinoamericanización" de la Universidad. Ello explicaría, en parte, el verdadero *proceso* que hubo contra los cientistas sociales, docentes y estudiantes, de la universidad.

Todo lo anterior nos lleva a plantear unos comentarios finales acerca del ambiente intelectual y político de Concepción antes del golpe de Estado. Resulta evidente la existencia de una suerte capas de las actividades intelectuales, donde el centralismo de la capital o "magnetismo metropolitano" –la expresión original es de Ricardo Alberto Hinrichsen– actuó sobre las labores de este grupo de cientistas sociales sudamericanos: las dirigencias de los partidos y los seminarios principales de las ciencias sociales tuvieron lugar en Santiago. El caso emblemático es la reubicación de Marini en el CESO, además de Juan Carlos Marín, ambos "intelectuales orgánicos" del MIR. De aquí surge la necesidad de avanzar hacia marcos teóricos y conceptuales y una historia intelectual crítica que discuta la jerarquización de los espacios y cómo éstos intervienen en el quehacer intelectual, en la política y en la circulación de ideas.

En suma, y según se vio, el Concepción del periodo 1967-1973 no sólo se caracterizó por una intensa vida política sino también por su ambiente intelectual, en especial científico-social. Ambos elementos fueron representativos de la provincia entre 1967 y 1973, con lo cual a nuestro juicio hubo un reforzamiento de la idea de Concepción como "zona roja" o "provincia roja". El golpe, pues, cortó dramáticamente esta experiencia y desdibujó dos de los aspectos característicos de la ciudad durante los largos sesenta. En los días posteriores al 11 de septiembre los cientistas sociales sudamericanos fueron defenestrados de Concepción, llevados a centros de detención… y obligados a dejar nuevamente otro país del Cono Sur.

51 Por su parte, ninguna de las fuentes indica que dentro de las ciencias sociales de la Universidad de Concepción haya habido una presencia significativa de sensibilidades o militancias políticas adscritas a las derechas. A nuestro juicio, este es un hecho característico que distingue a las ciencias sociales penquistas respecto a las practicadas en Santiago, especialmente comparando la disciplina económica con el caso de la Universidad Católica.

BIBLIOGRAFÍA

FUENTES PRIMARIAS

- Cuestionario a Fernando Mires, agosto de 2018.
- Cuestionario a Marta Zabaleta, marzo de 2019.
- Cuestionario a Ricardo Alberto Hinrichsen, marzo de 2019.
- D'Alessio, Néstor, *Poesía y Verdad. Recuerdos miristas de un extraño en Concepción*, s/f. (inédito).
- Diario El Sur (1967-1973).
- Memorias de la Universidad de Concepción (1963-1973).
- Revista Atenea (1970-1973).
- Revista Economía y Administración (1964-1972).
- Revista Rehue (1968-1972).

FUENTES SECUNDARIAS

- Altamirano, C. (2011). *Peronismo y cultura de izquierda*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Altamirano, P. (2019). *Redes intelectuales y circulación de ideas en y desde la Universidad de Concepción (1968-1973)* (tesis para optar al grado de licenciado en Educación), Universidad de Concepción.
- Altamirano, P. (capítulo de libro en prensa). *Redes intelectuales y circulación de ideas económico-sociales en Concepción: una mirada a través de la Revista Economía y Administración (1964-1970).*
- Araneda, P.; Aravena, Y.; Márquez, M. (2015). *La reforma es solo un paso. La vinculación sociopolítica del movimiento estudiantil de la Universidad de Concepción con las ciudades de Coronel y Tomé durante la vía chilena al socialismo* (tesis para optar al grado de licenciado en educación). Universidad de Concepción.
- Bourdieu, P. (2002). *La 'juventud' no es más que una palabra*. En Sociología y cultural (pp.163-173). México D.F.: Grijalbo.
- Calveiro, P. (2013). *Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrillera de los años setenta*, Buenos Aires: Siglo XXI.
- Cárdenas, J.P. (2015). *Una historia sepultada: el Centro de Estudios Socioeconómicos de la Universidad de Chile, 1965-1973 (a 50 años de su fundación)*. De Raíz Diversa, vol. 2, núm. 3, enero-junio, 121-140.
- Devés, E. (2004). *La circulación de las ideas y la inserción de los cientistas económico-sociales chilenos en las redes consureñas durante los largos 1960*, Revista Historia, n.37, II, 337-366.
- Dos Santos, T. (1996). *Memorial*. Disponible en: https://www.imperialismoedependencia.org/textos-para-baixar/theotonio-dos-santos/
- Faletto, E. (2016). *Faletto Latinoamericano. Artículos y ensayos*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
- Franco, R. (2007). *La FLACSO clásica (1956-1973): vicisitudes de las ciencias sociales latinoamericanas*. Santiago de Chile: Catalonia.

Revista Divergencia: N° 13 / Año 8
Julio - Diciembre 2019
ISSN 0719-2398

- Frank, A.G. (1991). *El subdesarrollo del desarrollo: un ensayo autobiográfico*. Caracas: Nueva Sociedad.
- Frenz, H. (2006). *Mi vida chilena: solidaridad con los oprimidos*. Santiago de Chile: Lom. Fuenzalida.
- Furtado, C. (2014). *Obra autobiográfica: fantasia organizada, a fantasia desfeita, os ares do mundo*. São Paulo: Grupo Companhia das Letras.
- Garbulsky, E. (1998). *La Antropología en la Universidad de Concepción (1967-1973). Apuntes de un Participante*. III Congreso Chileno de Antropología. Temuco, 200-210.
- Gilbert, J. (2014). *Introducción a la sociología*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- González, P. (coordinador). (1977). *América Latina: historia de medio siglo*, Tomo I. América del Sur. México D.F: Siglo XXI.
- González, S. (2019). *Trayectoria de vida y redes intelectuales en Luis Vitale: Argentina, Chile y el exilio*. Palimpsesto. N.15, 108-134.
- Gramsci, A. (1967). *La formación de los intelectuales*. México D.F: Grijalbo.
- Lanusse, L. (2009). *Sembrando vientos. Argentina: del primer peronismo a la masacre de Ezeiza*. Buenos Aires: Javier Vergara Editor.
- Lozoya, I. (2013). *Pensar la revolución: pensamiento latinoamericano e intelectuales en el MIR chileno 1965-1973. Propuesta teórica y metodológica para su estudio desde la historia intelectual y la historia de la violencia*. Revista de Humanidades, n.27 (enero-junio), 183-197.
- Lozoya, I. (2014). *Pensar la revolución: intelectuales y pensamiento latinoamericanos en el MIR chileno 1965-1973* (tesis para optar al grado de doctora en Estudios Americanos con Mención en Historia), Universidad de Santiago de Chile.
- Lozoya, I. (2015). *Theotonio Dos Santos, un intelectual revolucionario*. Revista Izquierdas, n.25, 258-275.
- Lozoya, I. y Moyano, C. (2019). *"Intelectuales de izquierda en Chile". ¿De la politización a la tecnocracia? Debates sobre la función política y el ser del intelectual entre 1960 y 1990*. Signos Históricos, vol. XXI, núm. 42, enero-junio, 192-229.
- Marini, R.M. (2012). *El maestro en rojo y negro. Textos recuperados*. Quito: Editorial IAEN.
- Mattelart, A. y Mattelart, M. (1970). *Juventud Chilena: rebeldía y conformismo*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
- Meschhkat, K. (2010). *Las ciencias sociales en un mundo globalizado*. Revista Sociedad Hoy, n.18, pp.131-142.
- Monsálvez, D. (2017). *El golpe de Estado de 1973 en Concepción: violencia política y control social*. Concepción: Editorial Universidad de Concepción.
- Morero, S. (1996). *La noche de los bastones largos. Treinta años después*, Buenos Aires: Página/12.
- O'Donnell, G. (2003). *Ciencias sociales en América Latina: mirando hacia el pasado y atisbando el futuro*. Forum. Latin American Studies Association. Vol. XXXIV (1).
- Palieraki, E. (2014). *¡La revolución ya viene! El MIR chileno en los años sesenta*. Santiago de Chile: Lom.
- Penchaszadeh, P. (comp.) (2016). *Exactas exiliada*. Buenos Aires: EUDEBA.

- Polgovsky, M. (2010). *La historia intelectual latinoamericana en la era del "giro lingüístico"*. Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Questions du temps présent. Disponible en: https://journals.openedition.org/nuevomundo/60207#quotation
- Ponza, P. (2010). *Intelectuales y violencia política, 1955-1973: historia intelectual, discursos políticos y concepciones de lucha armada en la Argentina de los sesenta-setenta*. Córdoba: Babel.
- Ridenti, M. (2010). *O fantasma da revoluçao brasileira*. Sao Paulo: UNESP.
- Rivera, C. (2015). *Diálogos y reflexiones sobre las comunicaciones en la Unidad Popular, 1970-1973*. Historia y Comunicación Social. Vol. 20, núm.2, 345-367.
- Rollemberg, D. (1999). *Exílio: entre raízes e radares*. Río de Janeiro: Record.
- Salazar, G y Pinto, J. (1999). *Historia contemporánea de Chile, tomo I*. Santiago de Chile: LOM.
- Salinas, S. (2015). *Brasileños y ciencias sociales en el Chile de la Unidad Popular*. Revista Electrónica da ANPHLAC. N.18, pp.121-138.
- Sznajder, M. y Roniger, L. (2013). *La política del destierro y el exilio en América Latina*. FCE: México.
- Tarcus, H. (2015). *Una invitación a la historia intelectual. Palabras de apertura del II Congreso de Historia Intelectual de América Latina*. Revista Pléyade, n.15, 9-25.
- Tarcus, H. (2018). *La biblia del proletariado: traductores y editores de El Capital en el mundo hispanohablante*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Tortti, M. C. (dir.). (2014). *La nueva izquierda argentina (1955-1976). Socialismo, peronismo y revolución*. Rosario: Prohistoria.
- Tortti, M., y Soprano, G., (2004). *Materiales para una historia de la sociología en la Argentina (1950-1970). Entrevista a Miguel Murmis*. Cuestiones de Sociología, 197-245.
- Huneeus, C. (1988). *La reforma universitaria. Veinte años después*. CPU: Santiago.
- Vidal, P. (2013). *Theotonio dos Santos en el Chile de la Unidad Popular*. Cuadernos de Historia, n.39, 185-200.
- Vivallos, C. y Brito, A. (2008). *Los sectores populares ante el proceso modernizador del Gran Concepción (Chile 1880-1940): perspectivas de análisis*. Revista de humanidades, vol-17-18, junio-diciembre, 51-66.
- Wasserman, C. (2017). A teoria da dependência: do nacional-desenvolvimentismo ao neoliberalismo. Rio de Janeiro: FGV Editora.

Revista Divergencia: N° 13 / Año 8
Julio - Diciembre 2019
ISSN 0719-2398

La relegación como control social y exilio interno bajo la dictadura cívico-militar chilena, 1973 a 1986

Relegation as social control and internal exile under the Chilean civic-military dictatorship, 1973 to 1986

Javier González Alarcón[1]
Danny Monsálvez Araneda[2]

Recibido: 30 de marzo de 2019 - Aceptado: 5 de mayo de 2019
Received: March 30, 2019 - Approved: May 5, 2019

Resumen

El siguiente artículo tiene como objetivo analizar uno de los mecanismos de control social que utilizó la Junta Militar chilena contra los opositores a la dictadura cívico-militar. Se trata de la relegación. El interés por este tema se basa en los escasos estudios que existen sobre la temática en el campo de la disciplina histórica. Para aquello daremos cuenta de dos momentos en los cuales se impulsó dicho proceso represivo. El primero entre 1973 y 1979, en el cual los niveles de relegación fueron más bien puntuales y acotados, y el segundo momento durante la década de los ochenta, específicamente entre 1983 y 1986, periodo de protestas y altas movilizaciones sociales.

Palabras clave: Chile, dictadura cívico-militar, control social, relegación

Abstract

The aim of the following article is to analyze one of the social control mechanisms that used the Chilean military junta against the opponents of the civil-military dictatorship. It is about relegation. The interest in this subject is based on the lack of studies that exist about the subject in the field of historical discipline. For that reason we will give account of two moments in which this repressive process was promoted. The first moment between 1973 and 1979, in which the levels of relegation were rather punctual and limited, and the second one during the eighties, specifically between 1983 and 1986, a period of protest and high social mobilizations.

Keywords: Chile, civil-military dictatorship, social control, relegation

1 Chileno, Magister en Historia, Universidad de Concepción, Chile. jgonzalezalarcon1@gmail.com

2 Chileno, Doctor en Historia. Académico en el Departamento de Historia, Universidad de Concepción, Chile. Integrante del Programa Ciencia, Desarrollo y Sociedad de América Latina, Universidad de Concepción. monsalvez@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Desde el momento mismo en que se produjo en Chile el golpe de Estado del martes 11 de septiembre de 1973, se inició un proceso institucional e ininterrumpido de graves violaciones a los derechos humanos con resultado de muertes y desapariciones (Acuña, 2015, p. 7).

Durante los primeros años de dictadura cívico-militar se dispusieron regimientos, estadios, cuarteles y campos de concentración para recibir a los miles de detenidos. La Junta Militar chilena, convencida de la urgencia de avanzar en un proceso de "limpieza interna" y "purificación ideológica nacional", consideró que era imprescindible un combate a fondo contra los partidos, militantes y adherentes de izquierda, responsables de la "destrucción" del país durante la gestión de la Unidad Popular encabezada por Salvador Allende. En ese contexto surgió la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), como la organización encargada de llevar a cabo tareas de inteligencia y operativos destinados a exterminar al marxismo y sus seguidores en una primera etapa y posteriormente a todos aquellos que fueron sindicados como enemigos del régimen[3].

Uno de los primeros dispositivos de control social que emprendió la Junta Militar fue la relegación de los prisioneros; ésta entendida como la permanencia obligada de una persona en una determinada localidad del territorio nacional, de ahí que nos preguntemos ¿qué papel desempeñó la relegación como dispositivo de control social durante la dictadura chilena?

Las primeras manifestaciones de relegación se dieron transcurrida la intervención militar. Un grupo significativo de dirigentes de izquierda fueron enviados a un campo de concentración ubicado en Isla Dawson, al sur de Chile (Bitar, 1990). Bajo esta premisa, se hace necesario identificar y comprender qué medidas se utilizaron para que ésta práctica se cumpliera, qué sujetos fueron sometidos y hacia qué lugares fueron enviados, ya sea al extremo norte o sur de Chile.

A partir de la relegación como mecanismo de control social se dieron dos procesos sociales; por una parte, muchos de los relegados que fueron enviados a poblados pequeños fueron vistos como personajes peligrosos y temidos por los lugareños, creyendo que eran terroristas; por otra, los relegados fueron trasladados de la noche a la mañana, sin previo aviso, teniendo que abandonar por completo sus vidas y familias.

Pero no fue todo, la relegación como problema de investigación durante la dictadura chilena, ha sido poco indagada. Si bien el exilio, es decir, la expulsión del territorio nacional de compatriotas ha concitado algo más de atención de investigadores y estudiosos[4]; los procesos de relegación o también denominado "exilio interno", cuentan con acotados trabajos. De ahí el interés por dar cuenta en una mirada de conjunto sobre lo que fue este proceso represivo o de control social como lo hemos denominado. En vista de lo anterior, planteamos como hipótesis de trabajo que la relegación se convirtió en uno de los principales dispositivos de control social empleados por la dictadura durante los años ochenta. Dicha relegación no sólo fue una medida punitiva, sino también disciplinaria y correctiva en el sentido de buscar enderezar conductas de quienes eran vistos como sujetos peligrosos para la sociedad y para el orden interno del país.

Las fuentes para construir esta investigación se nutren principalmente de los archivos de Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), información de prensa y revistas de la época, especialmente de aquellas que se situaron en una postura de crítica oposición a la dictadura, la Revista Solidaridad de la Vicaría de la Solidaridad dependiente de la Iglesia Católica, así como las fichas sociales de condenados a relegación del Proceso rol 69-80 de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y la entrevista al dirigente sindical Juan Polizzi, una de las personas que fue víctima de la relegación en la región del Biobío.

3 Sobre los aparatos represivos de la dictadura chilena véase entre otros: (Dorat y Weibel, 2012); (Salazar, 2011; 2012).

4 Ver: (Del Pozo, 2006) y (Rebolledo, 2006).

LA RELEGACIÓN COMO MECANISMO DE CONTROL SOCIAL

Un primer aspecto del presente trabajo remite al campo conceptual. Al respecto resulta pertinente aproximarnos al concepto de control social, el cual no ha sido homogéneo dentro de la historiografía. Como señala Juan Marín Hernández (2001, p. 5) existen diversos enfoques, no obstante aquello, y desde un punto de vista expositivo, éste se puede dividir en tres grandes perspectivas: macro, micro e interaccionistas. El primero dice relación con el control social como estructura general que se propaga por toda la sociedad, instituyendo una hegemonía de una clase social sobre el resto del cuerpo social. De esta manera, los discursos, ideologías y conductas de los grupos subalternos se organizan sobre la base del principio unificador dado por las clases dominantes. Así el control social, se convierte en una estructura capaz de adoctrinar, manipular y disciplinar a toda la sociedad o gran parte de ella. En el caso de la perspectiva micro, al igual que la macro, no puede reducirse a un solo enfoque, es decir, existe una diversidad de orientaciones, no obstante aquello, el enfoque micro busca rescatar el accionar de los sujetos y para el caso del control social, busca analizar el accionar de las autoridades y el peso de su conducta en los sectores vigilados como las disidencias y resistencias que impondrían éstos al control de los grupos dominantes. En la perspectiva micro se intenta situar el análisis en dos aspectos, el primero de ellos se relaciona con la microhistoria, que de acuerdo a Giovanni Levi constituye una sugerencia metodológica que busca en la reducción de la escala entender la historia general, es decir, la microhistoria procura buscar la complejidad de las cosas, examinar las diferencias y luego generar preguntas que sean comparables en otros contextos sociales.

Para Levi, la microhistoria puede estudiar el control social centrándose en los intersticios que deja el poder que analiza las disidencias y la resistencia de los sectores populares. Y el segundo aspecto dice relación con el enfoque cotidiano, es decir, el estudio de las vivencias diarias son el campo donde se fermentan las contradicciones sociales y las estrategias de sobrevivencia, que se convierten en muchos casos en espacios de confrontación y réplica a las aspiraciones de los grupos dominantes. Tanto los altercados, la colaboración, las contradicciones sociales, las solidaridades como los avatares y enigmas de la vida se concentran a través del contacto cotidiano.

Finalmente está la perspectiva interaccionista, que busca situarse entre la visión macro y micro. Esta busca establecer el interés de los actores sociales. Desde ese punto de vista, Norbert Elías, uno de los principales exponentes se refiere a la categoría de configuraciones sociales para señalar que todo fenómeno social es una realidad que cambia, se modifica por el actuar de los individuos aglutinados por las fuerzas sociales que ellos mismos crean según sus propios intereses, de ahí que el concepto de configuración social expresa de mejor forma el papel del individuo, ya que al hablar de sistema (según Elías) se tiende a ver la realidad social como algo invariable e indestructible, por lo tanto resta todo valor a los individuos. En ese sentido al utilizar el concepto de configuración, se puede analizar de mejor forma cómo los individuos particulares crean constantemente redes de interdependencia. De lo anterior, se desprende el interés del investigador por estudiar la forma cómo los individuos crean nexos y a su vez obligaciones que permiten a cualquier configuración tomar una vida autónoma y sobrevivir por sí misma, a pesar del accionar de los sujetos que la crearon. En conclusión, se puede estudiar tanto a los individuos como al fenómeno (Hernández, 2001).

Sin duda que el aporte de Michel Foucault al concepto de control social ha sido uno de los más consultados por las ciencias sociales. Sin embargo, para definir este concepto, es necesario dejar en claro, según el autor, que los mecanismos represivos de las sociedades punitivas –expulsión, destierro, encierro, entre otras– (Foucault, 1996, p. 37) siguen siendo aplicados en las sociedades disciplinarias y de control. De esta manera, es indispensable distinguir entre estas dos últimas.

Para Foucault, el disciplinamiento es una forma de poder que tiene como objetivo los cuerpos en sus detalles, su organización interna y la eficacia de sus movimientos. La disciplina entonces, mantiene con el cuerpo una relación analítica, cuya finalidad es producir cuerpos dóciles (Foucault, 1976). En definitiva, el disciplinamiento está estrechamente relacionado con el poder y este último no se ejerce solo por la fuerza, sino que circula por toda la sociedad mediante diversos procedimientos o técnicas de exclusión y control, permitiendo disciplinar a la población. De esta manera, en una primera instancia el control es definido como un procedimiento de los que se sirve la disciplina. No obstante, en las sociedades de control aparece un nuevo orden cuyo sistema de dominación tiende a aumentar y a optimizar aquellas formas de poder del régimen disciplinario. De esta manera, el control que define el filosofo no necesita de la modalidad del encierro para ejercer la vigilancia sobre los sujetos. Por eso la vigilancia como dispositivo de control social está más relacionada con las formas de ejercer el poder –tecnologías–, que con quienes las ejercen –instituciones–. Ahora, si bien la sociedad disciplinaria está, en palabras de Deleuze (Deleuze, 2006) por desaparecer, sus formas conviven con las de la sociedad de control.

Finalmente, el concepto de control social según Foucault es un símil de la sociedad de vigilancia, aquella capacidad para lograr que los sujetos sigan determinados comportamientos, convirtiendo a ésta en la expresión más directa del ejercicio del poder. Por ende, lo que se busca en definitiva, es la normalización del sujeto y que este a su vez sea capaz de respetar las leyes impuestas, en otras palabras, volverlos funcional al sistema implementado.

Marín Hernández agrega que en el estudio teórico y metodológico del control social, se hace necesario superar aquella concepción absolutista y totalizadora que utiliza Althusser a través de la noción de aparatos estatales, asignando importancia o considerando aquellos valores cotidianos y el papel de los sujetos en la estructuración de un sistema de control social. En otras palabras, el control social se compone de dos tipos de mecanismos: el formal e informal y de la relación de ambos surge la especificidad de un aparato de control.

Marín, analizando el trabajo de Mark Findlay (1987, pp. 21-37), concluye que los mecanismos formales de control consisten en un conjunto de sistemas normativos establecidos (la religión, la terapéutica, el derecho, la ética y lo penal, entre otros) basados en la socialización secundaria y el apoyo de una parte de la estructura organizativa del Estado; su accionar se circunscribe a través de agentes de control específicos, como pueden ser la policía, los juzgados y los médicos, entre otros. Los mecanismos informales de control son más complejos, ya que actúan en un marco social y cultural. Estos mecanismos reproducen los valores tradicionales, tienden a sancionar como desviados aquellos que violan las normas sociales. A su vez, estos mecanismos se basan menos en las estructuras estatales, pues trabajan en el ámbito de la socialización primaria, aunque operan en concordancia con otras técnicas de control burocrático, como puede ser el caso de la policía y la vecindad. Algunos ejemplos de estos mecanismos son las costumbres y usos populares (Hernández, 2001).

Pedro Oliver Olmo definirá el control social "en términos materiales de 'control jurídico-penal del Estado' (es decir, aquel que se ejerce principalmente en términos normativo-coactivos a través de agencias de control punitivo como los cuerpos policiales, la jurisdicción y la administración penales y las instituciones penitenciarias)". Lo anterior producto del devenir conflictivo de las relaciones sociales, donde "los mecanismos de control social (y la propia acción del Estado en cuanto agencia humana desde arriba) responde en buena medida a la realidad de las dominaciones políticas, las contradicciones económicas y los conflictos de clase en las sociedades modernas" (Oliver Olmo, 2005, p. 6). El propio Oliver Olmo agrega el concepto de burorrepresión, como una nueva forma de control, vía administrativa. Por ejemplo las multas, sumarios, sanciones administrativas que se extienden de manera institucional sobre el tejido social, "no aporrea, no detiene, no tortura, no encarcela…Vigila, identifica y sanciona. Un Leviatán de proximidad. Un monstruo punitivo que vive en el subsuelo del derecho, entremezclado con la vida misma (Oliver Olmo, 2013, p 18).

Por su parte Eduardo González Calleja define teóricamente el concepto de control social, como aquel conjunto de medios de intervención positivos o negativos, que utiliza una sociedad o un grupo social para conformar a sus miembros a las normas que le caracterizan; impedir o desanimar los comportamientos desviados y reconstruir las condiciones de consenso en caso de un cambio en el sistema normativo (González, 2006, p. 555).

En el plano de la historiografía nacional, Igor Goicovic señala que la falta de disciplina de los sectores populares durante el siglo XIX, léase los reiterados actos de transgresión a la ley, eran producto, según la elite, de la falta de adecuados mecanismos de control social. De ahí que, los grupos hegemónicos apelaran a la represión como uno de los principales dispositivo de disciplinamiento; pero no fue solo aquello, también se hicieron presentes algunas construcciones discursivas que en la práctica operaron como mecanismos de poder. Por ejemplo, el discurso de la oligarquía conservadora del siglo XIX funcionaba delimitando el campo de lo que era legítimo y permitido, ya sea en el campo político, social, económico, incluso en el tema de la fe (Goicovic, 2008, pp. 39-43).

Para Marco León el orden social no es otra cosa que la extensión de las normas de convivencia y acatamiento que tiene la autoridad. Como una forma de mantener o acrecentar aquello, las elites recurren a determinados mecanismos de control social, los cuales se circunscriben de preferencia a la represión de los delitos a través de la policía y las instituciones jurídico-penal. A la par de aquel proceso, también es posible de situar una especie de "cara moderna del control social", la cual se relaciona con el sistema carcelario, en donde las personas allí presentes desarrollan tareas de aseo, ornato o talleres, con lo que se busca educar, moralizar o enderezar conductas para así formar buenos ciudadanos que aporten a la sociedad (León, 2008, pp. 55-56).

Finalmente Mauricio Rojas señala que un aspecto importante en el tema del control social es analizarlo desde el punto de vista de la persuasión o consenso vinculado a la construcción de hegemonía. Para aquello la ley, el derecho, el sistema judicial desempeñan un papel clave, ya que los grupos hegemónicos pretendían por medio del respeto a la justicia, establecer un ordenamiento social, el cual no era otra cosa que su propio orden social o visión de sociedad que ellos tenían. En este aspecto, el control social funciona cuando los sectores subalternos legitiman el discurso hegemónico, lo internalizan y con ello ilegitiman sus discursos y propios comportamientos (Rojas, 2008, 19-22).

Para el presente estudio entenderemos el control social como aquel mecanismo que ejercen los grupos dominantes a través de diversos dispositivos formales e informales, léase punitivos, costumbres y administrativos, lo anterior como una forma de castigar, sancionar y corregir aquellos actos de transgresión al orden que llevan adelante los grupos subalternos.

LA DICTADURA CÍVICO-MILITAR Y LOS DISPOSITIVOS INTITUCIONALES DE LA REPRESIÓN

El cientista político Carlos Huneeus señala que uno de los principales sellos de la dictadura chilena fue el empleo de la violencia. Ya el mismo 11 de septiembre de 1973, las medidas de fuerza se hicieron sentir en el país. Desde el bombardeo a La Moneda hasta las políticas represivas contra la población se constituyeron en una de las características de la dictadura pinochetista durante 17 años (Huneeus, 2000).

En aquel contexto, varios fueron los dispositivos institucionales de la represión y la violencia que se hicieron presente. Allí podemos situar a los bandos militares y los decretos leyes como los principales dispositivos institucionales. A estos se pueden agregar, de una manera más específica, las órdenes de detención, interrogatorios, torturas y desapariciones, los campos de concentración para los detenidos, las políticas de delación y persecución en la administración pública, los consejos de guerra y en algunos casos el respectivo fusi-

lamiento, el exilio y la relegación[5] de miles de ciudadanos que fueron catalogados por las nuevas autoridades como enemigos internos o sujetos peligrosos para la seguridad interior del país (Soto, 1998, p. 124).

En el caso de los bandos militares, éstos desempeñaron una función "ideológico-programática, normativo-institucional e informativo-propagandística" (Garretón, M; Garretón, R., y Garretón, C., 1998). Desde un primer momento, los bandos militares pasaron a constituirse en el fundamento ideológico e institucional que sirvió de marco legitimatorio y guía, tanto para los militares como para los civiles que respaldaban las acciones de violencia llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y Carabineros, y además, un mecanismo de indagación para una sociedad fuertemente militarizada.

Los bandos se constituyeron en los inicios de la dictadura, en los primeros dispositivos punitivos, con un fuerte componente ideológico y político que buscó legitimar la acción llevada adelante por los militares y los servicios de seguridad del régimen.

De esta manera, se hace necesario señalar que los bandos, entendidos como dispositivo de control social, tuvieron el objetivo de crear un clima emocional, el cual convirtió una población más vulnerable y manipulable (Garretón, M; Garretón, R., y Garretón, C., 1998). No obstante aquello y en palabras de Robert Barros, en medio de la falta de organización militar y legal, las Fuerzas Armadas "emitieron bandos para dar instrucciones a la población civil. Dichos bandos eran edictos penales y administrativos excepcionales sin fundamento constitucional y, según el Código de Justicia Militar, podían ser utilizados en tiempos de guerra para gobernar a las tropas y a los habitantes de los territorios ocupados" (Barros, 2005, p. 68).

En el caso de los Decretos Leyes, el citado Barros señala que al momento del golpe de Estado, "…las Fuerzas Armadas llegaron al poder en septiembre de 1973 con una concepción rudimentaria, en el mejor de los casos, de cómo estructurar un gobierno militar" (Barros, 2005, p. 65). Si bien, los bandos militares cumplieron en una primera etapa la función de dar instrucciones a la población, la Junta Militar consideró que se requería de otro dispositivo que diera mayor sustento y proyección a las medidas que se estaban aplicando en el país.

En ese contexto surgen los Decretos Leyes, que tal como señala el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, "la Junta Militar procedió a fijar sus propias atribuciones y a subordinar el ejercicio de otros poderes del Estado a las necesidades del momento", fue así como desplegó una intensa actividad legislativa a través de los Decretos Leyes (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2004, p. 170). Éstos Decretos sustituyeron en la práctica el ejercicio legislativo que hasta el 11 de septiembre de 1973 cumplía el Congreso Nacional, el cual fue clausurado por la Junta Militar tras el golpe de Estado.

El primer Decreto Ley fue redactado por Sergio Rillón Romani, asesor legal naval. Dicho decreto "…tenía por modelo el documento fundamente de la junta chilena anterior, la República Socialista de 1932, afirmación confirmada por la considerable similitud entre el primer decreto ley de 1973 y los dos primeros decretos de la junta de 1932". Lo cierto es que más allá de lo breve y puntual del decreto, éste se convirtió en "el primer instrumento para darle un marco legal a la Junta" (Barros, 2005, p. 69).

Horas más tarde, la Junta Militar se encaminó progresivamente en la política de ir centralizando y coordinando las facultades para crear leyes y administrarlas; es decir, darle forma legal de acuerdo a los intereses del nuevo régimen. Fue así por ejemplo como, entre otras cosas, se creó el "Comité de Asesoría y Coordinación Jurídica de la Junta de Gobierno y -prácticamente a unos días del golpe- se nombró una comisión de prominentes profesores de

5 Sobre los mecanismos de represión ver: (Rebolledo, 2012); (Bonnefoy, 2005); (Salazar, 2013); (Del Pozo, 2006) entre otros.

derecho constitucional y ex políticos, la Comisión Constituyente, con el fin de comenzar a elaborar el borrador de una nueva constitución" (Barros, 2005, p. 70). Ésta sería aprobada años más tarde, en septiembre de 1980 a través de un plebiscito al cual convocó la Junta Militar. Aquel acto estuvo marcado por la censura, los limitados espacios que tuvo la oposición para hacer presente sus críticas, a lo cual se sumaron actos de fraude por parte del oficialismo. Por ejemplo, personas que votaron dos veces apoyando el proyecto constitucional presentado por la dictadura (Fuentes, 2013).

Lo cierto es que tanto los bandos militares como los decretos leyes, fueron parte esencial de lo que hemos denominado los dispositivos institucionales de la represión; en otras palabras, los bandos y decretos como disposiciones legales y punitivas fueron creados con el objetivo de vigilar, controlar, castigar y disciplinar a la población; es decir, la dictadura cívico-militar instituyó por medio de los bandos y decretos una determinada legalidad, todo un entramado punitivo para legitimar su accionar contra los denominados "enemigos internos" de Chile. En definitiva, según Moulian (2009) existen dos vías que mantuvo la dictadura pinochetista para establecer el supuesto orden a través de la violencia. En primer lugar, la reestructuración de la economía que a través de un ordenamiento en los mercados instauró como consecuencia el sistema neoliberal, y por último, la reestructuración de la sociedad mediante la fabricación exhaustiva de normas que debía seguir la ciudadanía.

LA RELEGACIÓN DURANTE LA DICTADURA CÍVICO-MILITAR CHILENA

La relegación no fue un mecanismo utilizado solamente en el periodo de la dictadura. Los exilios, allanamientos, delaciones, entre otras, han sido recurrentes a lo largo de la historia nacional (Loveman y Lira, 2000). Estas han sido utilizadas como mecanismos de control social, formando parte importante de las prácticas punitivas, aplicadas a las personas que eran considerados -por la respectivas autoridades de la época- como peligrosas o enemigos internos de la sociedad (Foucault, 1996, pp. 37-50).

Para el presente estudio, la relegación se entenderá como el traslado obligatorio de una persona a un lugar distinto al de su residencia habitual por un plazo determinado por disposiciones administrativas o judiciales. De esta forma, la relegación se comprende como la restricción de la capacidad de traslado y movimiento en una forma de privación de la libertad de los individuos.

Las limitaciones que aquello implica, así como las graves condiciones a que las personas fueron sometidas durante el proceso de relegación conllevó dos problemas. Por una parte y mientras permanecían bajo controles periódicos por parte de fuerzas militares y carabineros, algunos de los relegados debieron cumplir sanciones en lugares inhóspitos[6] y aislados, donde los afectados debían procurarse por sí mismo los medios necesarios para su propia subsistencia. Mientras que por otro lado, la relegación implicó el quebrantamiento de todos los vínculos familiares, laborales y sociales de los afectados. Por ende, se trató de un mecanismo que atentaba en contra de la libertad de movimiento en su expresión física, es decir, coartaba el derecho de toda persona a realizar actividades según su propia voluntad.

Ahora bien, entrando de lleno en el periodo estudiado, la relegación la hemos dividido en dos grandes momentos, el primero que va desde 1973 a 1979 y el segundo de 1980 a 1986. De esta manera, dilucidamos que durante la dictadura cívico-militar la relegación tuvo

6 Según González (2019), Santiago, Antofagasta, Concepción, Valparaíso y Arica, en ese mismo orden, fueron las principales ciudades donde se detuvieron a personas que luego fueron relegadas a distintos puntos del país. Por otra parte, y también en un orden descendente, la X, II, IV, III, I y VIII región fueron las que recibieron mayor número de relegados durante los 17 años de dictadura. Estos lugares fueron: Calbuco, Porvenir, Curaco de Vélez, La Unión, Quemchi, Dalcahue, Purén, Quirihue, Trehuaco, Quillón, Pozo Almonte, El Salado, Illapel, Mamiña, Toconao, entre otras. De esta manera, los lugares alejados jugaron el papel de prisiones con el fin de mantenerlos controlados, y el constante desgaste sicológico que estos debían sufrir tenía que ser suficiente para disciplinarlos.

dos variantes, una judicial –primer momento– y otra administrativa –segundo momento–. La relegación judicial consistía en "el traslado de una persona a un lugar distinto al de su residencia habitual, por un plazo definido, en virtud de una sentencia judicial", es decir, el detenido debía ser sometido a un Consejo de Guerra que lo condenara a dicho castigo, mientras que la relegación administrativa se realiza "sin que haya intervención de un tribunal independiente e imparcial, ni existan cargos en contra de esa persona", invocando como causal, el ser sorprendidos en intentos de alteración del orden público (Acuña, 2015, p. 15).

PRIMER MOMENTO: LA RELEGACIÓN ENTRE 1973 Y 1979

A partir del mismo 11 de septiembre de 1973 se desplegó una clara estructura represiva que recurrió a todo método y forma posible de desarticular, neutralizar y eliminar al supuesto enemigo interno. En ese contexto, José Caucamán fue detenido el día 19 de septiembre de 1973 al interior de un supermercado y dejado sin comunicación. Estuvo tres meses en la prisión de Chinchin en Puerto Montt, donde fue torturado e interrogado en reiteradas ocasiones antes de ser relegado a la localidad de Taltal en la provincia de Antofagasta. Lo descrito anteriormente, permite argumentar que posterior a las detenciones se procedía al traslado de los sujetos a los respectivos centros de reclusión acondicionados para los interrogatorios a través de mecanismos vejatorios y torturas. En los primeros años de dictadura, estas detenciones duraban meses o años antes de que se decidiera relegar al detenido por sentencia "judicial" a 541 días.

De la misma manera, el estudiante universitario Sergio Jirón, fue detenido el día 18 de octubre de 1973 en la ciudad de Copiapó, sin embargo, fue relegado el 14 de enero de 1975 a la localidad de Porvenir en el sur de Chile. Estuvo detenido cerca de un año y medio. Muchas veces fue trasladado de un cuartel a otro sufriendo apremios físicos. Así, es posible constatar que el castigo desde el momento de las detenciones hasta el término de las relegaciones se constituyó en una medida, si bien, poco utilizada en este primer momento, muy dura para quienes la sufrieron

Por su parte, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), en un catastro realizado a través de sus archivos de la época, logró identificar a algunos detenidos que fueron trasladados de manera interna, personas que fueron enviadas a localidades del norte y sur del país. Dentro de los relegados se encontraban obreros, mineros, estudiantes universitarios, vendedores y comerciantes, entre otros, casi todos ellos relegados a 541 días. Los lugares más recurrentes hacia donde fueron enviados son: Curaco de Vélez, Puqueldón, Mulchén, Coihaique ubicados en el sur y Punitaqui, Chucuyo, Parinacota y Guallatire en el norte de Chile.

De esta forma, siete dirigentes sindicales fueron relegados en diciembre de 1977 a localidades del norte de Chile. Los habitantes de Chapiquiña –provincia de Parinacota–, lugar donde llegaron los prisioneros, los observaron en un primer momento con desconfianza, posteriormente se enteraron por radios extranjeras que aquellos relegados no eran extremistas ni peligrosos, sino simples dirigentes sindicales que habían tenido una actitud crítica y de oposición hacia el régimen y por ello fueron sancionados por las autoridades. Fue entonces, cuando los lugareños empezaron a acercarse a ellos con mayor confianza, incluso gestando algunas relaciones de amistad. No obstante aquello, los relegados, acostumbrados a la vida en ciudad, a un determinado tipo de alimentación y costumbres, les fue complejo adaptarse a la desolación y al severo clima de aquellos pueblos.

Héctor Cuevas, uno de los relegados, relata a Revista Solidaridad que se sintió mal desde el primer momento. Un médico que lo visitó le dijo que tenía destrozado el sistema nervioso y que debía cuidarse del corazón, pasó varios días en cama en el local del Centro de Madres

de la localidad, lugar que se había conseguido para poder dormir[7]. Señaló además, que carabineros le había informado que tenía que ir todos los días a firmar el libro a la comisaría a 5 kilómetros de donde se hospedaba, enojado le respondió que ni siquiera podía caminar 25 metros por su estado de salud, por lo tanto ¿cómo lo iba a hacer con 5 kilómetros de ida y 5 de vuelta? (Solidaridad, enero de 1978, pp. 10-11).

Casi un mes después de la relegación de los siete dirigentes sindicales, el dictador Augusto Pinochet dio orden de poner término a la relegación de estos, como una forma de contribuir a los propósitos de unidad nacional y paz interna (Solidaridad, enero de 1978, pp. 10-11); sin embargo, cabe señalar que algunas de las relegaciones se terminaron por presiones extranjeras.

Otro caso de relegación ocurrido durante los primeros años de dictadura fue el del abogado y dirigente demócrata cristiano Andrés Aylwin, quien en su libro "8 días de un relegado" da cuenta de las características básicas de este sistema.

Aylwin fue detenido en Santiago en 1978 junto a un grupo de militantes democratacristianos, enviados a lugares de detención y más tarde a varios pueblecillos de la frontera con Bolivia. Dentro de los arrestados y que acompañaron en el viaje de relegación a Aylwin, estaban Tomás Reyes Vicuña, ex Senador, Hernán Mery Toro y Belisario Velasco Barahona, ex gerente de la Radio Balmaceda (vinculada a la Democracia Cristiana) entre otros[8].

Tras su detención, los dirigentes desconocían cuál sería su destino, sólo tenían la certeza que existían tres opciones: el exilio, por lo tanto la concerniente expulsión del territorio nacional, la relegación a alguna localidad del país o bien la muerte como a la fecha ocurría con un número significativo de personas. En medio de aquella incertidumbre fueron sometidos a interrogatorios y tratados como delincuentes comunes.

Tras el interrogatorio, su destino seguía siendo incierto, hasta que el 14 de enero de 1978, alrededor de las cinco de la madrugada fueron llevados hacia el aeropuerto de "Los Cerrillos", destinado exclusivamente a vuelos nacionales. Allí se les comunicó que por disposición del Supremo Gobierno de Chile debían ser relegados a diversos lugares en el Altiplano, Codpa, Chapiquiña, Chucuyo, Parinacota y Guallatire (Aylwin, 1990, p. 33). Se les comunicó que habían sido sorprendidos en actuaciones delictuales contra la seguridad del Estado, y que el Supremo Gobierno había acordado su relegación y no encarcelamiento, como una forma de contribuir a su rehabilitación y posterior reincorporación a las tareas de la Patria.

En la Tenencia de Chucuyo a 4.400 metros de altura, se produjo la separación, Belisario y Hernán se quedaron en aquel lugar, ya que fueron trasladados al día siguiente a Parinacota; Tomás Reyes Vicuña fue dirigido a Codpa, y por su parte, Andrés Aylwin debió seguir hacia Guallatire, aproximadamente a 35 kilómetros al Sur Oriente de Chucuyo. El día lunes 16 de enero de 1978, Aylwin llegó a su lugar de relegación en la zona de Guallatire.

Al llegar el invierno Altiplánico, Andrés Aylwin incrementó sus crisis de asfixia por lo que se decidió llevarlo al pueblo de Molinos, a no más de 1.400 metros de altura. En su lugar fue remplazado por otro relegado, Juan Manuel Sepúlveda, joven dirigente sindical democratacristiano, el cual ya había estado relegado en aquel territorio.

7 Los detenidos cuando llegaban a su lugar de relegación no tenían dónde hospedarse, sin embargo, en muchos casos fueron ayudados por los curas de aquellas localidades, por algún lugareño solidario, y también gracias a la ayuda prestada por la Vicaría de la Solidaridad y la FASIC quienes a través de la solidaridad de la ciudadanía y de los familiares de los afectados lograban arrendar alguna pieza, casa o pensión, más tarde, alrededor de 1981 (fecha de creación) la Agrupación de Familiares de Relegados y Ex Relegados (AFAREL) prestó ayuda para financiar la estadía de los detenidos mediante distintas estrategias.

8 Los otros relegados fueron Guillermo Yungue, Samuel Astorga, Juan Manuel Sepúlveda, Enrique Hernández, Elías Sánchez, Ignacio Balbontín, Juan Claudio Reyes y Georgina Aceituno.

Sin embargo, la medida de relegación en este primer momento, no solo afectó a personas importantes del mundo político o a dirigentes sindicales, sino también al ciudadano común (Cuadro 1). Así, a comienzos de 1978 cuatro jóvenes universitarios de Valparaíso identificados como Manuel Cartes, René Durandeau, Alejandro Darío Zuleta Marín y Álvaro Fischer, fueron detenidos la noche del 3 de enero por repartir panfletos en oposición a la dictadura, y posteriormente sentenciados por Consejo de Guerra a penas de relegación (Solidaridad, abril de 1978, p. 8).

Cuadro 1: Tabla de algunos relegados en la década de 1970 (Archivo Fasic)

Nombre	Actividad	Lugar de detención	Fecha de detención	Lugar de relegación
Luis Álvarez	Estudiante Universitario	Antofagasta	11-09-1973	Castro
Óscar Arancibia	Chofer Mecánico	Antofagasta	23-11-1973	Tocopilla
René Covarrubias	Comerciante	Los Ángeles	24-09-1973	Molina
Ana del Canto	Técnico Desarrollo Rural	La Serena	17-09-1973	La Ligua
Solier Rojas	Sastre	Salamanca	17-09-1973	Huasco
Luis Ramírez	Administrador Hotel	Antofagasta	10-07-1974	Loncoche
Raúl Mendoza	Delegado Provincial Desarrollo Social	Osorno	29-03-1977	Chanco
Sara Mercado	Estudiante Universitaria	Antofagasta	01-06-1975	Valdivia
Sergio Jirón	Estudiante Universitario	Copiapó	18-10-1973	Porvenir
Guillermo González	Vendedor de Libros	Concepción	15-10-1975	Coihaique
Germán Fuentes	Empleado S.I.I.	Coihaique	11-09-1973	San Carlos
René Leiva	Prof. Ed. Media	San Antonio	11-09-1973	Lebu
Germán Miric	Alcalde de Antofagasta	Antofagasta	12-09-1973	Mulchén
Manuel Rodríguez	Sin datos	Punta Arenas	12-09-1973	Bulnes
Tomás Austin	Sin datos	Magallanes	18-09-1973	Chillán
Jaime Burgos	Minero Chuquicamata	Antofagasta	14-05-1974	Coronel
Héctor Abarca	Obrero	Antofagasta	02-06-1975	Cañete

Del cuadro se puede extraer alguna información relevante, como por ejemplo, es significativo mencionar que todas las detenciones y posterior relegaciones ahí manifestadas se concentraron en los años de mayor represión de la dictadura –1973-1976–, así también, algunos de ellos fueron detenidos el mismo mes del golpe cívico-militar. Por otra parte, las actividades que estos desarrollaban antes de su apresamiento se sitúan en el área obrera

o del sistema público, y finalmente, es necesario dejar en claro que la tabla solo muestra algunos casos de relegados en la década de 1970.

No obstante, después del 11 de septiembre de 1973, fue posible de apreciar como prevalecieron determinadas medidas represivas contra los detenidos, por ejemplo, se puso mayor énfasis en las detenciones, desapariciones y asesinatos de ciudadanos, así como el exilio a través de la expulsión del país o bien la conmutación de penas para quienes habían sido condenados o estaban en las cárceles cumpliendo condenas. De esta forma, la relegación como mecanismo de castigo, había quedado en segundo plano, más bien acotada a determinados casos durante estos primeros años de dictadura.

SEGUNDO MOMENTO: LA RELEGACIÓN ENTRE 1980 Y 1986

A fines de la década de 1970 el malestar social se comienza a acrecentar debido a la institucionalización de las medidas coactivas instauradas en la carta constitucional de 1980 y a la posterior crisis económica de 1982. En ese contexto fueron trastocados no sólo los sectores más vulnerables del país, sino también la denominada clase "media", los profesionales de la nación. Sin embargo, los años 80´s representaron la década en que los chilenos comenzaron a "perder el miedo". De esta forma, la sicóloga Elizabeth Lira manifestó en 1983 que el drama vivido durante diez años de manera personal y privada, se hizo solidario y colectivo, cobrando fuerza un sentimiento de "somos más", se recuperó además un espacio significativo, el de la calle y emergió la necesidad de que las cosas se debían saber, en definitiva, se entró en la ruptura del miedo (Cauce, diciembre de 1983, p. 32).

No obstante aquello, más allá de evidenciar la pérdida del miedo de la población, es necesario dejar en claro que el aumento del descontento social conllevó a una mayor represión política, aumentando la cantidad de allanamientos, detenidos, relegaciones, entre otras. De esta manera, en febrero de 1980 por medio del Decreto Ley número 3.168, se dio inició a la relegación administrativa, la cual estipulaba que el Ministerio del Interior podía disponer del traslado y permanencia de una persona "sin necesidad de sostener un trámite judicial en una localidad alejada y de poca población, generando desconexión del círculo social y teniendo que aprender a vivir, a veces en malas condiciones económicas y de salud" (Díaz, 2014, p. 3). De esta forma:

> El seis de febrero entró en vigencia el Decreto Ley número 3.168, del Ministerio del Interior. El mencionado decreto Ley faculta al gobierno para disponer la permanencia obligada en una determinada localidad del territorio nacional de las personas que alteren o pretendan alterar el orden público, por un plazo no superior a tres meses. Esta medida -agrega el Decreto- sólo podrá adoptarse mediante decreto supremo firmado por el Ministro del Interior, bajo la fórmula por orden del Presidente de la República. (Solidaridad, febrero de 1980, p. 4)

Desde aquel momento, las relegaciones se intensificaron en fechas significativas, por ejemplo el 8 de marzo (día internacional de la mujer), 1° de mayo (día del trabajador), 11 de septiembre conmemoración del "pronunciamiento militar" (en palabras de las autoridades del período), durante las jornadas de protestas nacionales, donde los organismos represivos de la dictadura las emprendieron contra los manifestantes, con el fin de detener por medio de la violencia a quienes se expresaban libremente[9]. "Muchos eran estudiantes universitarios, secundarios, obreros, pobladores y, minoritariamente, profesionales. En su mayoría eran del sexo masculino, nivel técnico, obrero, de escasos recursos económicos" (Acuña, 2015, p. 24). A diferencia de años anteriores, donde se apuntaba a personalidades importantes de la oposición a la dictadura, las relegaciones en los años ochenta fueron en

9 Para mayor información ver: (de la Maza y Garcés, 1985); (Iglesias, 2011); (Salazar, 2006) y (Lúnecke, 2000).

Revista Divergencia: N° 13 / Año 8
Julio - Diciembre 2019
ISSN 0719-2398

su mayoría de carácter administrativo y tuvieron la intención de apartar y aislar a los dirigentes sindicales, para de esa forma desarticular rápidamente los movimientos sociales de oposición al régimen cívico-militar. Así, durante el mes de febrero de 1981 fueron detenidos Juvenal Castro Martínez, propietario de venta de repuestos "IL SORPASSO" de la ciudad de Los Ángeles y José Álvarez Moscoso dependiente del mismo negocio, consignados por la prensa como "parte de la estructura clandestina del ex Partido Comunista, encargados de la agitación y propaganda, como asimismo de la recolección de dineros para financiar la llamada resistencia" (Informe mensual sobre situación de DDHH, febrero de 1981, p. 28), injustamente inculpados por efectivos policiales fueron condenados a tres meses de relegación a las localidades de Puqueldón y Queilén en la décima región.

De esta forma, la dictadura pinochetista a comienzos de los años ochenta optó, por sobre la expulsión del país, por el traslado de las personas de un lugar a otro dentro del territorio nacional; además, el régimen manifestó tener la convicción de cumplir uno de sus más elementales deberes: prevenir todo riesgo en el camino hacia la nueva democracia que pretendía construir, por ende, asegurar la paz y tranquilidad de los chilenos durante la actual administración (Solidaridad, febrero de 1980, p. 4).

Por aquellos días, apareció un artículo del periodista Ignacio González, el cual fue publicado en *Revista Hoy*, donde señalaba que el régimen de Pinochet el día 6 de febrero de 1980, había retomado una de las herramientas a las que había renunciado en términos legales dentro del estado de emergencia: se trataba de la facultad de relegar, manifestando un retroceso y un restablecimiento, de hecho, del estado de sitio y del atropello a los derechos humanos de la población.

La relegación estaba enfocada -señaló González- tanto a nacionales como también a extranjeros, en otras palabras a todos aquellos "que en alguna medida vulneren o amenacen la paz social imperante en el país" (Hoy, 13 de febrero de 1980, p. 7). Agregando, que el Ministro del Interior Sergio Fernández no descartaba totalmente el exilio, sino que se pretendía dar preferencia al traslado de una persona dentro del mismo país y con un plazo máximo de tres meses.

Manuel Sanhueza, por entonces presidente del opositor Grupo de Estudios Constitucionales, más conocido como el "Grupo de los 24", expresó a la revista "que de las declaraciones del ministro Fernández se deduce que se establecen, de partida, las armas para acallar cualquier opinión o actitud disidentes con respecto al proceso de institucionalización que pretende el gobierno" (Hoy, 13 de febrero de 1980, p. 8). Demostrándose, que el esfuerzo que se hizo por distinguir entre el estado de sitio y el de emergencia no había sido mantenido.

En consecuencia, a comienzos de la década de 1980 el régimen implementó el Decreto Ley Número 3.168, en el cual el Ministerio del Interior disponía del traslado de personas sin necesidad de trámite alguno. El Ministro tenía la facultad de detener por un plazo de 5 días a personas que eran consideradas un peligro o amenaza a la supuesta democracia que buscaba construir el régimen. Plazo que se extendió a 20 días tras promulgado el Decreto Ley Número 3.451 anunciado en la Constitución de septiembre de 1980[10] (Solidaridad, septiembre de 1980, p. 8). Los encargados de llevar a cabo las detenciones, fue en una primera instancia la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), luego de disuelta ésta en 1977 pasó a manos de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Los detenidos por parte de los citados organismos de seguridad del régimen eran llevados a los cuarteles, donde en reiteradas ocasiones eran torturados antes de ser relegados. El

10 Algunas distinciones relevantes entre la relegación judicial y la administrativa, es que la primera no estipulaba plazo de detención, a diferencia de la administrativa que variaba entre 5 a 20 días de reclusión antes de ser relegados, además, el tiempo que debía cumplir un detenido en su lugar de relegación fue distinto, en la judicial fue de 541 días aproximadamente y en la administrativa de 3 meses, por mencionar algunas.

detenido era entregado a la Policía de Investigaciones (PDI) para que ellos dispusieran de su traslado. Cabe mencionar en esta parte que las primeras relegaciones al ser menores en cantidad, eran trasladados en avión, luego que se implementa el Decreto Ley ya mencionado, la relegación aumentó gradualmente, por lo que el traslado debió ser de forma terrestre con el fin de abaratar costos.

Juan Polizzi detenido el año 1984 en la ciudad de Concepción manifiesta que:

> El tema de la relegación es que después nos llevaron a Santiago, a cómo es que se llama, a investigaciones y... investigaciones en Santiago en ese tiempo, no se ahora, pero andaban con boinas negras, armados que se yo, y era escalofriante entrar a los cuarteles, y ahí te hacen tocar el piano (las huellas digitales), fichaje de nuevo. Pero toda esta cosa de los fichajes era más para amedrentar más que nada. Y nos cargan al bus nuevamente y partimos hacia el norte. (Entrevista a Juan Polizzi, junio, 2017)

Respecto al procedimiento del detenido antes de su relegación, a éste se le informaba que sería relegado por el plazo estipulado en la ley, que consistía en tres meses, así la PDI dejaba en manos de Carabineros.

> Nos dejan en la comisaría, en la tenencia y el teniente, no, el carabinero a cargo dice, ya ustedes mañana en la mañana tienen que conversar con mi teniente, el anda en Ovalle pero vuelve mañana y hoy día tienen que buscar donde alojarse y aquí no pueden hacer nada, no pueden hablar con la gente, no pueden trabajar, no pueden hacer ninguna cosa. (Entrevista a Juan Polizzi, junio, 2017)

La custodia del relegado quedó a manos de Carabineros quienes pasaron a ser la autoridad máxima teniendo que velar por hacer cumplir las normas básicas que debía seguir un relegado. Dichas normas consistían fundamentalmente en estipular un rango de desplazamiento, ya sea, no salir del pueblo, o en casos extremos, no exceder más allá de las cuadras designadas. Para poder hacer cumplir dicha tarea, era necesario que el detenido tuviese que firmar diariamente en el retén del pueblo, ya sea 2 o 3 veces al día.

Por otra parte, en algunos casos se les posibilitó poder trabajar con el fin de costearse sus gastos básicos, pero dejando en claro que no podían ejercer labores fiscales, semi fiscales o municipales. María Graciela Acuña lo resume de la siguiente manera: "Los relegados no tienen derecho a participar en ninguna institución pública, en algunos casos no pueden trabajar y su espacio de esparcimiento es limitado. Son restricciones que fueron impuestas en las distintas localidades, que aseguraban que él relegado permaneciera ajeno a la sociabilidad" (Acuña, 2015, p. 21). De esta manera el coste de la vida se desarrollaba a través de la ayuda de la iglesia, de las fundaciones, de sus propios familiares quienes enviaban dinero, o del trabajo efectuado por ellos mismo. Julio Ángel relegado a la localidad de Pinto en la región del Biobío, hizo trabajos ocasionales como jardinero y jornalero en una construcción. Por su parte, Julio Carrillos relegado a la misma localidad, realizaba arreglos en la parroquia a cambio de su hospedaje (Fichas sociales de condenados a relegación). No obstante, lo relatado anteriormente da cuentas que la relegación no tuvo las mismas formas y características en cada una de las localidades donde llegaron los relegados[11].

Hacia 1981 se organizó la Agrupación de Familiares de Relegados y Exrelegados (AFA-

11 Para poder permitirnos una comprensión mayor del impacto y de las implicancias que la relegación tuvo para quienes fueron afectados por ella, es necesario descubrir la polisemia de la experiencia, "en tanto para unos, fue –como es predecible pensar– una violencia dolorosa, signada por la arbitrariedad, la violencia y la segregación, para otros fue una oportunidad de compartir con las comunidades locales de apartados y pequeños poblados del país, en espacios y tiempos comunitarios y solidarios" (Acuña, 2015, p. 17). Contrastes que se pueden explicar por diversos factores, como aquellos factores externos que terminaron por ser decisivos en la experiencia de los relegados. Para mayor información ver: (González, 2018; 2019)

REL) que comenzaron a dar asistencia social, ayuda solidaria y una amplia campaña de denuncia en los ámbitos internos y externos, apoyados a su vez por la Vicaria de la Solidaridad, la Comisión Chilena de los Derechos Humanos y FASIC, donde se destacó el aporte económico mensual destinado a financiar los gastos de desplazamiento y accionar de los familiares[12]. Asimismo, estas organizaciones que iban en ayuda de los afectados, solicitaron que los relegados les enviaran un relato que contuviera las circunstancias del arresto, las condiciones del lugar de detención y el trato recibido durante su permanencia en el lugar, así como las características del traslado al lugar de relegación, las condiciones en las cuales permanece y toda otra información que la persona considere conveniente.

Durante el año 1983, Sergio Onofre Jarpa, ex dirigente de derecha del desaparecido Partido Nacional y quien entonces se desempeñaba como Ministro del Interior, intensificó las medidas represivas durante las jornadas de protestas nacionales. Su objetivo no era otro que poner freno y reprimir el resurgimiento del movimiento social que se estaba gestando en el país. Una de las medidas impulsadas fue decretar el estado de sitio, aumentando los allanamientos, falsos enfrentamientos, detenciones e intensificando las relegaciones contra quienes se movilizaban (Acuña, 2015, p. 17). Sólo entre octubre y noviembre de 1984 más de 560 personas fueron relegadas a distintos puntos del país (Díaz, 2014)[13]. Los afectados eran detenidos por constituir un peligro para la paz interior o en palabras de la época por contribuir a alterar el orden interno. A los detenidos se les procesaba bajo los cargos de atentar contra la Ley de Seguridad del Interior del Estado, propagar la doctrina marxista y realizar reuniones clandestinas con el fin de promover el derrocamiento del "gobierno" constituido (Vega, 1999, pp. 379-381); lo anterior llevaba a las víctimas a sentirse presionadas, reprimidas y violentadas en sus derechos.

A tres años de impuesta la relegación administrativa y aceptada en la Constitución del año 1980, los relegados fueron aumentando considerablemente en número, tal y como lo indica el siguiente cuadro de relegados por año:

Cuadro 2: Tabla de relegados por año y sexo: 1973 a 1989 (Acuña, 2015, p. 30)

Años	Mujeres	Hombres	Totales
1973	1	13	14
1974	2	23	25
1975	1	12	13
1976	3	8	11
1977[14]	0	1	1

12 La FASIC fue una organización encargada de prestar apoyo a las víctimas de la represión, y con respecto a quienes sufrieron la relegación, fue esta fundación la que se encargó de generar un fichaje a los familiares de los relegados, permitiendo constituir la recolección de los primeros datos tanto de quienes sufrieron la condena como de su núcleo familiar. Esta ficha buscaba proporcionar la información más detallada de las familias de los relegados para así poder distribuir mejor la ayuda. Por otra parte, a través de las funciones desarrolladas por trabajadores sociales de FASIC, fue posible generar en cada momento un mapa de los relegados, ya que estos viajaban a cada uno de los lugares a donde habían sido enviado los detenidos con el fin de dar cuentas de las nuevas relegaciones, cantidad de personas condenadas, quienes eran los afectados, para así poder ir en su ayuda, y gestionar contactos con sus familiares. A su vez, a través de los informes realizados por la Comisión Chilena de Derechos Humanos se pudo evidenciar las condiciones físicas y sicológicas de los afectados, también del lugar donde se hospedarían, y que tipo de ayuda necesitaban, ya sea esta en dinero, alimentos o vestuarios. Finalmente, a las labores descritas se sumó el Proyecto de Desarrollo Nacional y Regional S.A. (PRODEN), quienes también visitaban a los afectados y elaboraban sus propios informes con el detalle de aquellas visitas. (González, 2019, pp. 246-255)

13 Es necesario dejar en claro que la cantidad de relegados puede variar con lo que se expone en el cuadro, ya que María Graciela Acuña se centra en elaborar la estadística de cantidad de relegados por año, a través de los archivos que contiene la FASIC.

14 Cabe dejar en claro que el cuadro citado fue elaborado por María Graciela Acuña a través de la revisión de archivos de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), por ende, puede existir una variación en la

Años	Mujeres	Hombres	Totales
1978	0	0	0
1979	0	1	1
1980	2	89	91
1981	8	57	65
1982	2	11	13
1983	3	44	47
1984	6	423	429
1985	20	147	167
1986	0	2	2
1987	2	0	2
1988	0	0	0
1989	0	1	1
Sin antecedentes	12	124	136
Totales	**62**	**956**	**1.018**

Como señalamos en pasajes anteriores, la relegación como mecanismo de control social fue aplicado en determinados momentos y fechas importantes para la población; cada vez se fueron conociendo nuevos casos de personas afectadas, lo cual contribuyó a visibilizar ante la opinión pública nacional e internacional la situación de desmedro y desamparo por la cual atravesaban quienes eran perseguidos por la dictadura, entre ellos las víctimas de la relegación.

Respecto al cuadro anterior, el mayor proceso de relegación se dio a contar del año 1980, justo con la puesta en marcha de la nueva Constitución y del Decreto Ley número 3.168. Más específico aun fue durante las intensas jornadas de movilización social que se desarrollaron en Chile entre los años 1983 y 1986. Asimismo, cabe señalar que hacia fines de la dictadura, específicamente previo al plebiscito de 1988, el número de relegados descendió considerablemente. Lo anterior se entiende como una estrategia del régimen, en el sentido de no proyectar una imagen dura, fuerte o represiva, más bien de apertura, conciliación y búsqueda de la paz social que le trajera réditos políticos a la hora de concitar un apoyo mayoritario por la opción Sí, aquella de continuar 8 años más en el gobierno. Para desgracia de la dictadura, la ciudadanía mayoritariamente se inclinó por la opción del No, es decir, retornar a la democracia y así poner fin a largos años de terror, miedo y represión militar.

La relegación fue sin duda uno de los procesos más complejos para quienes lo padecieron, no sólo la víctima, también sus familiares y amigos; de ahí la importancia que tuvo la ayuda que provino de parte de la iglesia a través de curas, sacerdotes y obispos, los cuales mantuvieron una preocupación constante por quienes eran víctimas de la persecución. Allí se puede destacar por ejemplo la buena voluntad del padre Fernández, quien estuvo ayudando a los relegados de Pisagua, llevándoles ropa, alimentos y materiales para las

cantidad de relegados por año al revisar otras fuentes, como sucedió con Revista Solidaridad que dio cuenta de 7 dirigentes sindicales relegados a fines de 1977. Lo que se pretende demostrar con el cuadro, es que existió un incremento significativo de relegaciones durante las jornadas de protesta nacional.

obras de artesanías que desarrollaban con el fin de generar algún dinero. También algunas cosas que eran enviadas por parientes y amigos o bien, las que se hacían llegar de otras comunidades católicas (Valle Gallardo, 10 de mayo de 1983).

De esta manera, hacia 1983 y a pesar de las relegaciones que se estaban llevando adelante producto de las constantes manifestaciones sociales, la población chilena comenzaba progresivamente a perder el miedo, por lo tanto alzaba su voz y accionar contra una dictadura que solo sabía responder a través del castigo y la punición. Lo anterior quedaba de manifiesto en algunos artículos publicados en la naciente opositora Revista Cauce. En su segundo número de diciembre de 1983, aparecieron los siguientes titulares "Tortura, todos somos culpables", "1973 - 1983, Bitácora de la tortura" y "El miedo, como instrumento de dominio: el día que los chilenos comenzaron a perder el miedo" aludiendo a un repudio hacía los actos que realizaba el régimen; todo esto en el contexto de la trágica autoinmolación de Sebastián Acevedo en el atrio de la catedral de Concepción. Trágico hecho que se conoció en todo el mundo a través de las agencias cablegráficas de la época (Cauce, diciembre de 1983, pp. 27-33).

Intentando hacer un seguimiento a la mencionada revista, esta da cuenta de la pérdida del miedo, entre otras cosas debido al aumento de la cesantía (Cauce, junio de 1984, pp. 14-16) a raíz de la crisis económica de 1982, de esta manera, las familias vivían en paupérrimas condiciones (Cauce, julio de 1984, pp. 42-45); por lo que argumentaban que ya no tenían mucho más que perder, de ahí el ímpetu para salir a las calles a protestar por un objetivo en común.

Hacia 1984 se intensificaron las jornadas y los llamados a paros nacionales (Cauce, mayo de 1984, pp. 44-46). La primera semana de septiembre del citado año se llevó a cabo uno de los paros más grandes ocurridos en dictadura, el país entero protestaba, anunciando el descontento no sólo en las ciudades más importantes, sino a nivel regional, de norte a sur, lo cual desembocó en un clima de violencia por parte de carabineros (Cauce, septiembre de 1984)[15]. Fue bajo este contexto, cuando las relegaciones se intensificaron de manera significativa.

Ahora bien, es un hecho irredargüible que durante la dictadura cívico-militar que gobernó Chile, la represión y violencia fue recurrente, se constituyó en una política institucional, en el cual el cuerpo de los detenidos estaba sometido a un sistema de coacción, privación y obligaciones. Miles de perseguidos y detenidos se encontraban mal psicológica y físicamente, con sus costillas fracturadas y sus cuerpos marcados por los golpes.

Durante las relegaciones no sólo importaba el sufrimiento físico o el dolor del cuerpo mismo, también estaba presente el sufrimiento psicológico, en el cual se fragmentaron los proyectos de vida, educativos y laborales, como en el caso de los estudiantes y trabajadores, los cuales al estar privados de libertad y lejos de sus casas, no podían aportar económicamente a su núcleo familiar[16], con lo cual generaban un clima de incertidumbre y desarraigo entre su madre, esposa e hijos.

Por último es importante agregar que los mecanismos de castigo dentro de la relegación fueron distintos a los de los campos de concentración. Aquí la tortura física se situó en un grado menor, lo que prevaleció fue la tortura sicológica, aquella que operó como dispositivo de control social, donde el cuerpo ya no es tanto el objeto de la penalidad; lo que se persigue es el castigo del alma, la voluntad y el estado de ánimo; un castigo que apunte (manipule) la subjetividad de las personas, que penetre la profundidad del corazón y el pensamiento.

15 Para mayor información ver el primer capítulo de Teleanalisis de octubre de 1984.

16 La relegación también afecto el entorno familiar. "Algunas consecuencias inmediatas que cuentan en dicho boletín son: perdida de la fuente de trabajo, su familia queda marginada de los beneficios sociales que de ella derivan. Carente de ingresos, desvinculada, y con su organización interna trastocada, la familia sufre grave deterioro en las interrelaciones del grupo familiar" (Acuña, 2015, p. 49).

COMENTARIOS FINALES

Los estudios e indagaciones de lo ocurrido bajo el Chile dictatorial, constituyen un campo siempre propicio para la inquietud de los estudiosos e investigadores del Chile reciente.

Si bien la literatura sobre lo acontecido durante el régimen de Pinochet es abundante y en algunos casos bastante profuso, siempre van quedando algunos vacíos, omisiones e intersticios de los cuales hacernos cargos. Uno de aquellos temas lo constituyen los procesos de relegación llevados adelante por la Junta Militar.

Si bien el exilio de los chilenos ha sido historiado con algunos interesantes estudios de chilenos y extranjeros, la relegación carece de investigaciones, más bien son acotados y puntuales los trabajos que se han dedicado a dar cuenta de lo ocurrido con aquellas personas que fueron víctimas de este proceso represivo.

Para el caso de nuestro estudio, hemos querido dar una mirada de conjunto a dicho proceso que va desde el momento mismo del golpe de Estado de 1973 hasta el año 1986, momento en el cual declinan las jornadas de protestas populares contra la dictadura. Asimismo consideramos pertinente situar la relegación como un mecanismo de control social de parte de los militares.

Al situar la relegación como mecanismo de control social, buscamos señalar que ésta operó en la práctica no sólo como una forma de castigo y sanción, sino también como una forma de corregir y enderezar la conducta de aquellos sujetos que en opinión de las autoridades del régimen sólo buscaba transgredir o alterar el orden interno. En otras palabras, la pena de relegación por un periodo determinado, pretendía que el relegado modelara o enderezara su conducta, aprendiera de la sanción y una vez terminada la relegación se reintegrara a la sociedad, siendo obediente y funcional a los intereses que dictaminaba la dictadura.

Si bien aquello fue uno de los objetivos que persiguió la relegación, es necesario puntualizar dos cosas. En primer lugar, un estudio pormenorizado de este proceso, conlleva analizarlo caso a caso; es decir, la relegación no fue igual en todas las situaciones y en los lugares donde fueron llevados los detenidos. Por otra parte, si bien la dictadura buscaba que el detenido compusiera su conducta, apartándose de todo tipo de actividad transgresora, en muchos casos aquello no ocurrió; más bien el relegado una vez cumplida su pena se reintegraba a su localidad de origen y seguía participando de las actividades de agitación, protesta o movilización contra la dictadura; mientras que en otros casos volvía con mayor ímpetu de rebeldía o desobediencia ante la misma autoridad que resolvió sancionarlo con la relegación.

Esto dos puntos por un tema de espacio no nos fue posible abordarlos con mayor detenimiento, no obstante aquello, nos pareció pertinente hacerlos presente en este trabajo.

Para el proceso de relegación es importante agregar que este tuvo dos grandes momentos. El primero que va desde 1973 a 1979. Etapa en la cual las relegaciones fueron más bien acotados a ciertos casos, debido a que la dictadura privilegiaba el exilio y las desapariciones por sobre las relegaciones. Un segundo momento va desde el año 1980 hasta 1986. Durante este periodo, la relegación se legitima y legaliza por medio del Decreto Ley número 3.168 del año 1980. Este decreto fue fundamental durante las jornadas de protestas en Chile, aquellas que se desarrollaron entre 1983 y 1986. Etapa que coincide con el incremento de la represión por parte de la dictadura, entre ellas con el aumento de los relegados. A diferencia del periodo 1973-1979, en esta ocasión las víctimas no fueron solamente dirigentes sindicales o sociales, varios de los cuales encabezan las movilizaciones de protesta contra la dictadura, sino también pobladores, estudiantes, obreros, entre otros.

En consecuencia, estudiar la relegación no sólo nos permite apreciar uno de los lados más crueles de la dictadura chilena, aquel de la represión directa a la población, también nos ayuda a entender de mejor forma aquellos dispositivos institucionales de la violencia

política y el control social que no sólo buscaban marcar físicamente los cuerpos de las víctimas, sino también sus estados de ánimo, convirtiéndolos en sujetos sumisos, vulnerables y tímidos; sin embargo, para desgracia de la dictadura, muchos de ellos regresaron de la relegación con mayores frenesíes y rebeldías para seguir luchando con más convicción y firmeza por recuperar la democracia para nuestro país.

BIBLIOGRAFÍA

- Acuña, M. (2015). *La relegación como exilio interno*. Santiago de Chile: FASIC.
- Aylwin, A. (1990). *8 días de un relegado*. Santiago de Chile: Ediciones Arcoíris.
- Barros, R. (2005). *La junta militar. Pinochet y la Constitución de 1980*. Santiago: Editorial Sudamericana.
- Bitar, S. (1990). *Isla 10*. Santiago: Pehuén, séptima edición.
- Bonnefoy, P. (2005). *Terrorismo de Estadio, prisioneros de guerra en un campo de deportes*. Santiago de Chile: Ediciones ChileAmérica-CESOC.
- Cáceres, J. (2008). *Experiencias de historia regional de Chile: Tendencias historiográficas actuales*. Valparaíso: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Instituto de Historia.
- Deleuze, G. (2006). *Post-scriptum sobre la sociedad de control*. En Polis, Revista Latinoamericana, (N° 13).
- de la Maza, G. y Garcés, M. (1985). *La explosión de las mayorías. Protesta nacional 1983-1984*. Santiago: ECO.
- del Pozo, J. (2006). *Exiliados, emigrados y retornados. Chilenos en América y Europa, 1973-2004*. Santiago: RIL editores.
- Díaz, E. (2014). *Relegación administrativa en Chile en el período 1980-1985*. [Tesis de Licenciatura en Historia mención Estudios Culturales]. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago.
- Dorat, C. y Weibel, M. (2012). *Asociación ilícita. Los archivos secretos de la dictadura*. Santiago: CEIBO Ediciones.
- Ehijo, O. y Seelmann, G. (2003). *Te recordamos, Quiriquina*. Santiago: CESOC.
- Findlay, M. (1987). *Para un análisis de los mecanismos informales de control social*. En Poder y Control, Revista Hispano-Latinoamericana de disciplinas sobre el control social (N° 1), 21.
- Foucault, M. (1996). *La vida de los hombres infames*. Argentina: Altamira.
- Foucault, M. (1976). *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Fuentes, C. (2013). *El Fraude. Crónica sobre el plebiscito de la Constitución de 1980*. Santiago: Huders.
- Garretón, M., Garretón, R. y Garretón, C. (1998). *Por la fuerza sin la razón. Análisis y textos de los bandos de la dictadura militar*. Santiago: LOM Ediciones.
- Goicovic, I. (2008). *Construcciones discrusivas y mecanismos de disciplinamiento social: Angol, 1900-1920*. En Cáceres, J. (Ed.), *Experiencias de historia regional de Chile: Tendencias historiográficas actuales* (pp. 39-54). Valparaíso: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Instituto de Historia.
- González Calleja, E. (2006). *Sobre el concepto de represión*. En Hispania Nova, Revista de Historia Contemporánea (N° 6), 551-579.

- González, J. (2018). *Medidas, estrategias y etapas de la relegación durante la dictadura de Pinochet como mecanismo de control y disciplinamiento social, 1973-1986*. En Folia Histórica del Nordeste (N° 32), 147-173.
- González, J. (2019). *La relegación como exilio interno durante la dictadura cívico-militar. El caso de la región del Bío-Bío, (1973-1986).* [Tesis de Magister en Historia]. Universidad de Concepción, Concepción.
- Huneeus, C. (2000). *El Régimen de Pinochet*. Santiago: Sudamericana.
- Iglesias, M. (2011). *Rompiendo el cerco. El movimiento de pobladores contra la dictadura*. Santiago: Ediciones Radio Universidad de Chile.
- León, M. A. (2008). *Discurso modernizador y control social en la provincia de Ñuble (1848-1900).* En Cáceres, J. (Ed.), *Experiencias de historia regional de Chile: Tendencias historiográficas actuales* (pp. 55-75). Valparaíso: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Instituto de Historia.
- Loveman, B. y Lira, E. (2000). *Las ardientes cenizas del olvido: vía chilena de reconciliación política 1932-1994*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Lúnecke, G. (2000). *Violencia Política (Violencia política en Chile. 1983-1986).* Santiago: Arzobispado de Santiago fundación documentación y archivo.
- Marín Hernández, J. (2001). *El control social y la disciplina histórica. Un balance teórico metodológico.* En Revista de Historia de América (N° 129). 31-71.
- Moulian, T. (1997). *Chile actual, anatomía de un mito.* Santiago de Chile: LOM ediciones.
- Moulian, T. (2009). *Contradicciones del desarrollo político chileno, 1920-1990*. Santiago de Chile: LOM ediciones.
- Oliver Olmo, P. (2005). *El concepto de control social en la historia social: estructuración del orden y respuesta al desorden*. En Revista Historia Social (N° 51), 73-91.
- Oliver Olmo, P. (2013). *Burorrepresión. Sanción administrativa y control social*. Albacete, España: Editorial Bomarzo.
- Pacheco, M. (1983) *Lonquén*. Santiago: Aconcagua.
- Rebolledo, L. (2006). *Memorias del desarraigo. Testimonios de exilio y retorno de hombres y mujeres de Chile*. Santiago: Catalonia.
- Rebolledo, J. (2012). *La Danza de los cuervos, el destino final de los detenidos desaparecidos*. Santiago de Chile: CEIBO Ediciones.
- Rebolledo, J. (2015). *A la sombra de los cuervos. Los cómplices civiles de la dictadura*. Santiago: CEIBO.
- Rojas, M. (2008). *Las voces de la justicia. Delito y sociedad en Concepción (1820-1875). Atentados sexuales, pendencia, bigamia, amancebamiento e injurias*. Santiago: Dibam, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana.
- Salazar, G. (2006). *La violencia política popular en las Grandes Alamedas. La violencia en Chile 1947-1987(Una perspectiva histórico-popular).* Santiago: Lom ediciones.
- Salazar, M. (2011). *Las letras del horror. Tomo I: La DINA*. Santiago: LOM ediciones.
- Salazar, M. (2012). *Las letras del horror. Tomo II: La CNI*. Santiago: LOM ediciones.
- Salazar, G. (2013). *Villa Grimaldi (Cuartel Terranova). Historia, testimonio, reflexión*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.

Revista Divergencia: N° 13 / Año 8
Julio - Diciembre 2019
ISSN 0719-2398

- Soto, O. (1998). *El último día de Salvador Allende: Crónica del asalto al Palacio de la Moneda contada por sus protagonistas*. Madrid: Ediciones El País.
- Vega, M. E. (1999). *No hay dolor inútil, la iglesia de Concepción y su defensa de los derechos humanos en la región del Bío-Bío entre 1973 y 1991*. Concepción.
- Witker, A. (1975). *Prisión en Chile*. México: Fondo de Cultura Económica.

FUENTES PRIMARIAS

- Fichas sociales de condenados a relegación, ítem: Proceso rol 69-80 de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
- *Revista Solidaridad* (1976-1980).
- *Revista Hoy* (1980).
- *Revista Cauce* (1983-1984).
- *Revista Ercilla* (1973).
- Valle Gallardo, José del C., Carta del Obispo de Iquique al Señor Sergio Rallón Romaní, Jefe Of. Asuntos Especiales Gobierno, del día 10 de mayo de 1983.
- Vicaria de la Solidaridad. (2005). *Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura*. Santiago de Chile.
- Vicaría de la Solidaridad. (1981). *Informe mensual sobre situación de DDHH de febrero, situación jurídica observada en el mes de febrero*, Santiago de Chile.
- Entrevista a Juan Salvador Polizzi, 16 de junio de 2017.

¿Pobres de derecha? La señora Jacqueline y el mundo popular de Concepción. Trabajo de terreno, clientelismo y movilización electoral 1992-2013

Poors of the right-wing? Mrs. Jacqueline and the popular world of Concepción. Field work, clientelism and electoral mobilization, 1992-2013

Aníbal Pérez Contreras[1]

Recibido: 21 de marzo de 2019 - Aceptado: 27 de abril de 2019
Received: March 21, 2019 - Approved: April 27, 2019

Resumen

El presente artículo analiza la trayectoria política de Jacqueline Van Rysselberghe en Concepción. A través del caso de estudio, reflexiona sobre el impacto de la alcaldización y lavinización de la política, así como la penetración popular de la UDI. Nuestra hipótesis platea que el impacto del lavinismo a nivel regional fue menor, pues el liderazgo de Van Rysselberghe terminó adaptándose a las particularidades de su territorio. Con una estrategia doble, una confrontacional hacia la oposición regional y otra cercana mediante el trabajo de terreno, la alcaldesa gremialista logró penetrar el mundo popular urbano construyendo arreglos morales con mediadores de derecha. Ello le permitió perfilar un liderazgo más combativo, conservador y menos conciliador que el otrora alcalde santiaguino.

Palabras clave: Derecha, clientelismo, municipios, neopopulismo

Abstract

This article analyzes the political career of Jacqueline Van Rysselberghe in Concepción. Through a case study, ponder on the impact of the "mayoralization" and "lavinization" of politics, as well as the popular penetration of the UDI party. Our hypothesis states that the impact of "Lavinism" at the regional level was minor, since Van Rysselberghe's leadership ended up adapting to the particularities of the territory. With a double strategy, one confrontational towards the regional opposition and another friendly through the work in the field, the "gremialista" mayor managed to penetrate the urban popular world, building moral arrangements with the right-wing mediators. This allowed her to outline a more combative, conservative and less conciliatory leadership than the former mayor of Santiago.

Keywords: Right, clientelism, municipalities, neopopulism

1 Chileno, Doctor en Historia, Universidad de Santiago de Chile. Profesor de la Universidad Diego Portales, correo electrónico: anibal.perez@mail.udp.cl. Agradecemos a la Beca de Incentivo a la Investigación de la Vicerrectoría de Postgrado de la Universidad de Santiago de Chile, primer semestre 2019. Además, al Programa de Investigación Histórica en Estudios Regionales del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción, donde se realizó una estancia de investigación.

INTRODUCCIÓN

Actualmente Jacqueline Van Rysselberghe ocupa un importante rol en la política nacional. Tras aliarse con los históricos dirigentes de la tienda, derrotó a su opositor "liberal" Javier Macaya, obteniendo la presidencia del conservador partido Unión Demócrata Independiente (UDI). Su trayectoria está vinculada a uno de los clanes familiares de la política y elite "penquista". Su abuelo Enrique Van Rysselberghe Martínez, fue regidor y alcalde por el Partido Nacional durante la Unidad Popular, para luego ser designado en el mismo cargo por la dictadura militar. Además, su padre Enrique Van Rysselberghe Varela, ha sido diputado de la UDI por Concepción y empresario local durante la posdictadura chilena, y su hermano Enrique Van Rysselberghe Herrera, es actualmente diputado por la misma localidad (Biblioteca del Congreso Nacional 2019).

Jacqueline, se inició tempranamente como dirigente estudiantil de la carrera de medicina en los ochenta. Luego, ocupó el cargo de concejal desde 1992 hasta el 2000, año en que derrotó al médico socialista Ariel Ulloa permitiéndole tomar el sillón municipal. Tras su ciclo como edil, fue intendenta de la región del Biobío durante el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), para luego de un escándalo, dejar el cargo. A pesar de ese episodio, ganó las elecciones parlamentarias en 2013 obteniendo un escaño como senadora por la misma región. A todas luces una carrera que pasó por el tradicional "cursus honorum" de la política, escalando desde lo local-regional a lo nacional. Más aún, su consolidado liderazgo no tan solo ha significado la construcción de redes en el interior del partido, sino también una potente maquinaria electoral a nivel territorial que se remonta de sus años municipales. Esto resulta relevante, pues representa un caso exitoso de paulatina construcción de lealtades muti-clasistas y escalamientos estatales que no todos los alcaldes han logrado. Desde una mirada de mediano plazo, la senadora es representativa de una nueva derecha propia del ciclo posdictatorial. Militante UDI, mujer, liderazgo regional y con apoyo popular, refleja a todas luces las metamorfosis de la derecha histórica tradicional. ¿Cómo construyó su trayectoria, cuáles fueron sus estrategias para articular lealtades territoriales y cómo dialogó su estilo con los hegemónicos de su propio sector? Son las preguntas que aborda este artículo.

En razón de lo anterior, este trabajo está entrecruzado en dos grandes discusiones. La primera guarda relación con la derecha chilena, en particular la UDI y sus estrategias durante la posdictadura. El segundo, tiene que ver con los mecanismos de construcción de relaciones clientelares articuladas entre ese partido y los sujetos populares urbanos.

En torno a la derecha existen cuatro grandes miradas sobre su desarrollo histórico. Un primer conjunto de investigaciones afirman que dicho actor tuvo un carácter más bien defensivo durante importantes décadas del siglo XX. A partir de la instauración de la estrategia ISI, conservadores y liberales habrían mantenido una estrecha vinculación con sus intereses de clase más inmediatos. Ello habría desembocado en una vinculación instrumental con la democracia política, mostrado una actitud más bien pasiva-defensiva y por tanto carente de un proyecto propio (Moulian y Bravo, 1981; Moulian, 1982; 2009, Moulian y Torres, 2011; Gómez, 2004). Desde una óptica diferente, los trabajos de Sofía Correa (1989; 2004) cuestionaron el supuesto carácter pasivo de la derecha. En ellos se argumenta que dicho actor tuvo una relación estrecha con el sistema democrático, recurriendo a estrategias de negociación con sus adversarios políticos, así como líneas electorales multiclasistas. Ahora, tras perder el control del campo producto de la reforma agraria, la derecha habría perfilado un proyecto propio, el neoliberalismo. Aunque coincide en términos de su carácter elitista, Correa muestra a una derecha activa y con proyecto.

Existe también una tercera visión que retoma elementos de las dos anteriores. En esta óptica se prefiere hablar de las derechas, ampliando la gama de análisis a grupos nacionalistas. De esta forma, se recoge la idea del uso instrumental de la democracia mediante los

troncos históricos de la misma, así como anti-liberal en su facción extrema. Sin embargo y coincidiendo con Correa, se la visualiza con proyecto propio y altamente ofensiva (Corvalán 2019; González 2007; Bustamante 2014; Pérez 2014). En diálogo con estas tesis, desde una cuarta mirada Verónica Valdivia (2008a) ha planteado que durante la década de los sesenta estaríamos en presencia del parto de una nueva derecha que fue dejando atrás su antecesora heredera de los grupos oligárquicos. Para ese momento, las derechas expresadas tanto en nacionales como gremialistas adoptaron una nueva actitud ante la demanda del escenario, dando nacimiento a un estilo militante, de combate y proyectual, que desplegó una serie de estrategias contra el gobierno de la Unidad Popular, así como la propagación de un proyecto propio de desarrollo.

Entrado el ciclo dictatorial encontraríamos a una nueva derecha articulada en el movimiento gremialista de la Universidad Católica liderado por Jaime Guzmán, junto a economistas neoliberales, quienes potenciaron un nuevo grupo con un estilo y mística propia, marcada por la experiencia contra la "Revolución en Libertad" y la "Vía chilena al Socialismo", lo que impulsó una generación de cuadros (Muñoz, 2016). Desde el punto de vista del pensamiento político de su líder, se ha sostenido que este habría transitado desde un tradicionalismo católico anti-liberal hacía una síntesis conservadora que aglutinó el problema de la autoridad con la libertad (Cristi y Ruiz, 1992; Cristi 2000). Así, el gremialismo al contrario de la derecha tradicional, habría apostado a un ejercicio de penetración territorial y social, en abierta disputa del mundo popular -históricamente ligado a la izquierda y centro- mediante el uso de las plataformas municipales y secretarías sociales del régimen (Valdivia, 2006; 2008; 2008b; Rubio, 2013; Muñoz, 2016).

Iniciado el ciclo transicional, diversos especialistas pusieron su atención en el denominado "modelo chileno", es decir, en la vía por la cual se transitó desde una dictadura militar hacia un régimen demo-liberal y civil. Mientras que para algunos se trataría de un caso ejemplar y excepcional, pues demostraría un país signado por un crecimiento económico sostenido, disminución de la pobreza e inflación, así como estabilidad institucional (Alcántara, 2010; Boeninger, 1997; Meller 1999), para otros se trataría de una democracia semi-soberana, bajo un escenario de erosión de los mapas mentales, donde se apostó por la continuidad del modelo económico heredado por la dictadura, que habría potenciado una ciudadanía subsumida en el consumismo y el individualismo generando un fenómeno de alcaldización y despolitización (Moulian, 1997; 1998; Fazzio, 1997; Lechner, 2002; Gómez, 2010; Valdivia 2012; 2013; 2018; Álvarez, 2012; Valdivia, Álvarez y Donoso, 2012; Huneeus, 2014).

Sobre la derecha en este nuevo ciclo posdictatorial existen dos grandes grupos de miradas. En un primer lugar están aquellos que visualizan a la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional como una continuidad histórica de los viejos partidos conservador y liberal, unidos en torno a la continuidad del modelo económico heredado y divididos por cuestiones valóricas (Siavelis, 1999; Correa, 2004; Fermandois, 2000). Para otros en cambio, estos serían expresión de una nueva derecha con estables articulaciones internacionales junto a un rol importante de sus tanques de pensamiento y anclaje territorial (Pollack, 1997; Alenda 2014; 2015; Valdivia, 2008a; 2008b). En particular durante la fase transicional, el gremialismo chileno llamó la atención de diversos especialistas, pues representaba una derecha distinta a su otrora liberal-conservadora, ya que entre otras cosas mostraba organización de cuadros con una misión del trabajo político y vinculación popular, era jerárquicamente ordenada, valóricamente conservadora y defensiva ante el legado de la dictadura. Más aún, a partir de 1997 obtuvo un fuerte avance electoral, lo que le permitió transformarse en el partido que encabezó la derecha, para luego convertirse por momentos en la principal tienda chilena. Ello se explicaría entre otras cosas por la fortaleza de sus procedimientos rutinizados y la capacidad de su reinterpretación mediante liderazgos jóvenes, así como su estrategia dual de financiamiento empresarial y apoyo electoral clientelar-popular (Huneeus, 2001; Joignant y Navia 2003; Luna y Rovira, 2014; Luna, 2011; Valdivia, 2016).

Para gran parte de la bibliografía, un factor clave en la construcción de nuevas lealtades electorales de derecha y en particular en el gremialismo, fue el despliegue del estilo "lavinista" inaugurado por el edil de la comuna de Las Condes primero y Santiago después, Joaquín Lavín. Dicho estilo signado como "cosista", tecnocrático y declaradamente apolítico (Moulian 1999; Joignant 2002; Valdivia 2016; Álvarez 2016), se habría potenciado gracias a las continuidades de la estructura municipal que ofreció el periodo transicional, a partir de la restringida nomenclatura política heredada cuya expresión eran los enclaves autoritarios (Garretón 2012; Álvarez, 2012). Esto habría potenciado el fenómeno de la alcaldización de la política, es decir un alcalde empoderado de vínculos sociales personalizados, distante de los discursos ideológico programáticos, que pensaba la política desde las soluciones concretas para la ciudadanía, aprovechando el municipio como el mecanismo propulsor de la política social focalizada en clave neoliberal (Valdivia, Álvarez y Donoso, 2012; Valdivia 2016). Mientras que para algunos dicho fenómeno sería expresión de un ciclo internacional de neopopulismos (Barozet 2003; Arriagada 2013), o producto de la erosión del sistema de intermediación local-nacional (Luna y Mardones 2017; Pérez 2018), a juicio de Valdivia y Álvarez, el nacimiento de este estilo representaba la consolidación de la reforma municipal de la dictadura militar cuyo objetivo había sido la despolitización del tejido social.

Ahora bien, gran parte de las miradas anteriores concuerdan en que la UDI tendría una estrecha relación con el mundo empresarial, así como también una importante penetración territorial hacia el mundo popular de tipo clientelar (Luna 2011; Arriagada 2013; Pérez 2014; 2016). Sin embargo, no existe consenso en los enfoques para explicar el fenómeno del clientelismo político, lo que desemboca en distintas visiones sobre las lealtades de los sujetos populares con los liderazgos de derecha. Algunas miradas han recurrido a un enfoque más tradicional y verticalista del fenómeno, donde se estructuraría una relación informal de favores por votos, signada por un patrón político que instrumentaliza las relaciones hacia sus clientes para construir sus lealtades políticas de carácter más coyuntural (Reheren 1996; Luna 2011). Para otros en cambio existiría un juego de capitales en disposición, lo que permitiría articular redes de reciprocidad relativamente estables. En ellos, la relación no sería únicamente ni instrumental ni vertical, sino que existiría capacidad de presión tanto de mediadores y clientes, así como factores emocionales y de confianzas construidos a través de las trayectorias de los sujetos (Durston 2012; Barozet 2007; Arriagada 2013; Álvarez 2014; Pérez 2018; Luján y Pérez 2018).

A nuestro juicio, lo anterior es de suma relevancia, pues permite comprender de qué manera se construyen las lealtades políticas en esta nueva derecha y hasta qué punto estamos en presencia de relaciones meramente instrumentales, o más bien una base social popular convencida de derecha. Por lo anterior, este artículo se inscribe en este segundo grupo de enfoques. Recurriendo a una conceptualización thompsoniana de "economía moral" (1989), privilegiamos un enfoque "desde abajo" para poner oído a mediadores políticos sobre las formas de construcción de sus lealtades. Desde nuestro punto de vista, la práctica clientelar sería una costumbre política articulada entre patrones, mediadores y clientes regulada por una economía moral. En este sentido, si bien existe una dimensión racional de la práctica, ella está articulada en lazos de confianza que descansan en una concepción sobre cómo deben circular los fondos públicos y privados, a partir de vínculos morales entre los actores. Mediante dicha forma de regulación es que se despliegan una serie de arreglos morales (Vommaro y Combés 2016), que permiten explicar la movilización de los actores con sus referentes políticos. Este tipo de enfoque, permite distanciarse de las miradas verticalistas, las que tienden a suponer que los sujetos populares serían "comprables" y utilizados "desde arriba" por los actores de derecha, asumiendo una vinculación política débil, así como una práctica arquetípica de un sector sobre otro. Por el contrario, pensamos que la movilización electoral es una de las caras de la construcción de lealtades políticas, las cuales incluyen factores racionales y también trayectorias, emociones y confianzas mutuas. A nuestro juicio, estas ritualidades del campo electoral postransicional, fueron más bien ideológicamente transversales.

Desde este enfoque, nuestra hipótesis sugiere que aunque a nivel partidario nacional existía un estilo lavinista de gestión municipal, fueron las particularidades regionales y locales, las que determinaron la estrategia política de la alcaldesa gremialista en Concepción. De esta forma, su puesta en escena no fue calco ni copia del Santiago de Lavín, más bien se adaptó a las dinámicas propias de su municipio. Lo anterior implicó una estrategia de dos frentes. El primero de ellos, "hacia arriba", tuvo un carácter marcadamente conflictivo con los representantes de las autoridades nacionales de la región designadas por el gobierno de Ricardo Lagos. En este campo de disputa, se explotó un estilo más duro y confrontacional signado en diferentes tensiones con las autoridades, entre otras cosas por el control del territorio político, así como las problemáticas financieras del gobierno local. Ello implicó alejarse del lavinismo clásico de tipo más conciliador. Sin embargo, en el frente relacionado con el trabajo de terreno, es decir "hacia abajo", la alcaldesa mostró un estilo más cercano, eficiente y solucionador de los problemas vecinales. Allí, la apuesta por la construcción de un vínculo cercano con los dirigentes populares fue crucial. En esto, la estrategia fue amplia, pues mientras que dirigentes ligados a la izquierda "penquista" se vieron perjudicados con la nueva gestión, otros de igual forma se articularon con esta para solucionar demandas históricamente postergadas bajo las administraciones concertacionistas. Más aún, en el caso de dirigentes populares articulados con la derecha, estos se vieron favorecidos por el estilo de la alcaldesa, construyendo ejercicios de personificación de la política que permitieron entrar al círculo íntimo de su equipo mediante una vinculación clientelar más densa, lo que impulsó arreglos morales expresados durante la movilización electoral. Este tipo de vínculo, lejos de ser solamente instrumental -y por ello supuestamente débil y momentáneo-, permitió cristalizar una relación que se puso a prueba más allá de la movilización electoral, concitando momentos de apoyo y lealtades consolidadas.

De esta forma, esta estrategia de dos frentes al mismo tiempo que potenció el liderazgo político regional de Jacqueline Van Rysselberghe, permitió avanzar más allá del agotamiento del estilo lavinista de su referente partidario tras la gestión del icónico alcalde en Santiago. El origen de su capital político, por tanto, fue construido durante largos años de trabajo silencioso y permanente, trabajo que ha resultado crucial en la trayectoria de la alcaldesa representante de esta nueva derecha posdictatorial.

En términos metodológicos este trabajo se basó en revisión de prensa local y nacional para el periodo de estudio, así como documentos municipales y regionales que aportaron en la comprensión organizacional y socio-económica de la comuna. A lo anterior, mediante "bola de nieve" se le agregaron entrevistas en profundidad con informantes claves, en particular mediadores políticos de diferentes trayectorias ideológicas pertenecientes al mundo popular. Ello, con el objetivo de comprender como se construyeron las relaciones abiertas con el mundo popular y cuáles fueron las estrategias de trabajo con mediadores articuladas en distintas posiciones de la relación.

1. CONCEPCIÓN: ALGUNOS ANTECENDETES DURANTE EL CICLO TRANSICIONAL

Concepción, capital de la región del Biobío, es una comuna importante para la política nacional. Al igual que en Valparaíso y Santiago, las coyunturas y disputas políticas que se desarrollan, pueden lograr cierto nivel de efectos para la política nacional. En general, la comuna es uno de los trofeos de guerra para los comicios nacionales de los diferentes partidos.

En términos generales lo que la historiografía regional ha llamado "el Gran Concepción" (Monsalvez 2017), vale decir la comuna capital más las diversas localidades que la bordean, se caracterizó en la historia del siglo XX por un importante desarrollo industrial. Desde ya, el carbón de Lota como uno de los tempranos enclaves chilenos con vista al capitalismo, así como la presencia de la industria de la cerámica en Penco, junto a la acerera de Huachipato y el sector portuario de Talcahuano, se convirtieron en un impulso importante

para la economía nacional y regional (Márquez, 2014; Mazzei 2015; Monsálvez 2017). Sin embargo, durante el ciclo dictatorial y posdictatorial, se produjeron relevantes transformaciones económicas, tomando un giro hacia el sector servicio en el ámbito comunal, así como también el impulso de la extracción maderera en alto Biobío. De hecho, para el año 2003 del total de ocupación en Concepción, los tres grandes empleadores de la comuna fueron: el sector "comercio" que lideraba los índices con un 24%, seguido de "administración pública, enseñanza y salud" con el 20,6%, y finalmente a mayor distancia con la industria manufacturera un 12,4% (PLADECO Concepción 2010-2013, p. 35).

A pesar de ello, el impulso de la industria maderera, así como el cierre de la minería del carbón en Lota, trajeron importantes consecuencias políticas y sociales. La región del Biobío durante el ciclo posdictatorial, fue escenario no tan solo de los tradicionales conflictos estudiantiles, sino que también de las problemáticas de los mineros del carbón (Alfaro 2015; Sandoval 2011), así como indígenas con el movimiento mapuche de alto Biobío (Pairicán 2014) y los trabajadores subcontratados de la maderera (Ponce, Santibáñez y Pinto 2017). Todas estas, fueron problemáticas que escalaron de lo local a lo nacional, generando la reacción y consecuencias para los distintos gobiernos. En otras palabras, el territorio del Gran Concepción, estuvo lejos de la supuesta apatía de la paz neoliberal.

En particular la comuna de Concepción según el censo de 2002 poseía una población de 216.061 habitantes con una absoluta hegemonía del sector urbano, representando el 98,12% (PLADECO Concepción 2010-2013, p.10). En términos de la composición social, para el año 2000 la pobreza comunal (pobres indigentes más pobres no indigentes) alcanzaba un 18%, dos puntos más arriba de la pobreza nacional (16,3%) y cuatro puntos más abajo de la pobreza regional, la que para el mismo llegó al 22,1%. Más aún, según el propio Plan de Desarrollo Comunal 2010-2013, la pobreza tendía a concentrarse en los 31 asentamientos precarios que subsistían, agrupando alrededor de 2.537 familias (p. 10). Sin embargo, el documento oficial del municipio, reconocía que: "se puede señalar que del trabajo que realiza el municipio para dar solución a los campamentos o sectores poblacionales que sufren diversos tipos de irregularidad, se catastran un total de 23 sectores que involucran a 3.620 familias" (p.11).

En términos políticos la comuna de Concepción siempre fue un terreno en disputa por parte de los diferentes actores políticos. De hecho, aunque existe cierto imaginario que tiende a asociarlo como una "zona roja", especialistas como Danny Monsálvez y Mario Valdés han demostrado que dicha idea es más bien propia de las zonas en espacio de conurbación con la capital regional con mayor presencia industrial y minera (Monsálvez 2006; Díaz y Valdés 2015). De hecho, Concepción a nivel comunal durante el periodo pre-golpe tuvo administraciones lideradas por el Partido Radical, la Democracia Cristiana y el Partido Nacional. Más aún, Enrique Van Rysselberghe –abuelo de Jacqueline Van Rysselberghe- fue alcalde entre 1971 y 1973 (Partido Nacional) y luego edil designado por la dictadura entre 1975 y 1979 (SERVEL). Aunque para el plebiscito de 1988 la región se inscribió en la tendencia nacional del triunfo del NO (55,29% versus 44,71%), la designación del alcalde de parte del gobierno de presidente Aylwin fue para Eduardo de la Barra, miembro del Partido Radical. En otras palabras, la capital regional se ha mostrado históricamente como un territorio político en disputa, donde cada actor ha logrado ciertos niveles de representatividad. Por ello, las primeras elecciones democráticas de representantes locales tras el retorno democrático en 1992, mostraron una alta competencia no pudiendo acaparar ningún liderazgo la mayoría absoluta para lograr la designación automática, ya fuese mediante el protocolo de la propia Concertación o mediante el acuerdo de la derecha.

Los resultados electorales de 1992 confirmaron esta tendencia. El primer lugar lo obtuvo Guillermo Aste con 23.243 preferencias equivalentes al 13,40% de los votos[2]. Seguido a

2 Guillermo Aste fue alcalde de Concepción en la década de los sesenta.

mayor distancia, resultó el médico socialista Ariel Ulloa con 12.948 votos representando el 7,46%. El tercer puesto fue para Alejando Ortiz (DC y el jefe de la Dirección de Desarrollo Comunitario DIDECO durante el gobierno de De la Barra) con 11.718 sufragios representando el 6,79%. Finalmente, el cuarto lugar fue para Jacqueline Van Rysselberghe con 11.677 preferencias equivalentes al 6,73%. Importante es señalar que entre votos nulos y blancos se alcanzó la suma de 21 mil preferencias, representando un 8,45% los primeros y el 3,72% los segundos (SERVEL).

Al contrario de lo acontecido a nivel nacional, donde la Concertación obtenía un 53% en la tendencia general -lo que le permitía a la Democracia Cristiana asumir directamente los municipios de Valparaíso y Santiago-, Concepción mostraba una tendencia díscola para la hegemonía que asumía la falange en la interna del oficialismo. De hecho, con el porcentaje obtenido por el candidato Aste, no le alcanzaba para ser ratificado automáticamente, pues no había logrado el 35% que exigía la ley. De la misma forma, tampoco tenía el 22,5% que establecía el protocolo interno de la Concertación para ser ratificado por su pacto, ni siquiera había logrado el 15% mínimo para ungirse como alcalde. Todo lo anterior repercutió en una crisis interna del oficialismo a nivel local, pues mientras que Aste apelaba al principio de mayoría simple para ser ratificado de igual forma, el Partido Socialista exigía el apoyo a Ariel Ulloa como segunda mayoría. Esto dado que, bajo el principio del cuoteo, la DC al haber obtenido por designación directa la mayoría de los municipios "grandes", por acuerdo del protocolo oficialista no podría acceder a otra alcaldía sin tener los votos necesarios (El Sur, 4 de julio de 1992, p.3). Finalmente, aunque las autoridades de los partidos de gobierno –incluida la propia DC- llamaron a apoyar a Ulloa, Aste rompió el acuerdo votando por sí mismo en una alianza táctica con la derecha. Lo anterior, repercutió en que durante los juramentos de los cargos ninguno de los conglomerados obtuviera la mayoría absoluta, generando una segunda votación. En esta ocasión nuevamente Aste votó por sí mismo, y sumado a la abstención del concejal del Partido Comunista, el resultado terminó por generar un empate y por tanto la división del periodo de administración municipal en dos sub-ciclos, 1992-1994 para Aste y 1994-1996 para Ulloa (El Sur, 27 de septiembre de 1992, p.3)

A nuestro juicio, esta crisis interna del oficialismo local evidencia una tendencia histórica de la comuna, según la cual, ningún actor por sí mismo había sido capaz de hegemonizar la totalidad de la representación política. Si bien, es viable distinguir una suerte de clanes familiares (el grupo Ortiz en la DC y Van Rysselberghe en la UDI), durante los primeros años de la transición, no existió un liderazgo carismático que lograse copar de manera hegemónica una maquinaria electoral de peso a fin de consolidarse, tal y como estaba ocurriendo en Valparaíso con Hernán Pinto, o en Santiago con Jaime Ravinet, o en Las Condes con Joaquín Lavín. Más bien, lo que demuestran los resultados electorales es que la comuna penquista siguió con una tendencia signada por la disputa política de los diversos actores, repercutiendo en una competencia permanente de los partidos, inhibiendo con ello el control de un solo sector. En este sentido, aunque la Concertación copaba los cargos públicos regionales, esto lo lograba más bien como fruto de los triunfos en las elecciones presidenciales y las designaciones vía ejecutivo, mas no cuando las autoridades eran electas mediante procedimientos vinculantes de los electores locales. En un futuro no muy lejano, Jacqueline Van Rysserlberghe logrará construir esa hegemonía de tipo liderazgo carismático y con ello marcar una diferencia en el plano electoral local de Concepción.

Ahora bien, ¿qué rol cumplió el mundo popular penquista ante esta primera coyuntura electoral y cuál fue su disposición con la oferta electoral? Lejos de ser actores pasivos, se organizaron e intentaron obtener compromisos con los candidatos. Así las cosas, distintas juntas de vecinos de las poblaciones emblemáticas organizaron diversas instancias vecinales donde se reunieron a discutir sus necesidades y prioridades con los candidatos. Estas últimas giraban en torno a recursos para mejorar la infraestructura de policlínicos y hospitales, mejoramiento de liceos técnicos con inversión público-privada, así como pavi-

mentaciones de calles y procesos de urbanización (El Sur, 5 de mayo de 1992, p.12). Exigían entonces un funcionamiento de la distribución de recursos que privilegiara sus territorios en razón de su precaria situación material. En este sentido, los actores populares urbanos desplegaron una serie de demandas a los candidatos como fruto de una economía moral, según la cual -a partir de su condición de pobreza-, solicitaban el compromiso de los candidatos a representantes locales para invertir recursos públicos y privados, privilegiándolos a ellos bajo el principio de la primera necesidad. Al respecto, un dirigente durante estos encuentros argumentó que el deber moral de las futuras autoridades era el de "contribuir a mejorar las condiciones de vida de los sectores de más escasos recursos", para ello sugerían facilitar fondos para la auto-construcción de personas allegadas, así como también participación en la discusión del Plan Regulador de la comuna. Todo lo anterior se cerraba con un enfático llamado a los futuros concejales a: "facilitar la participación de las organizaciones comunitarias, desmotivadas hoy en día a raíz de la insatisfacción de expectativas creadas con anterioridad a la elección parlamentaria y presidencial" (El Sur, 8 de junio de 1992, p.3.)

A nuestro juicio, este ejercicio de posicionamiento de demandas de manera transversal a los candidatos de diferentes ubicaciones políticas, mostraba una activa disposición de los actores populares para lograr la solución de sus problemáticas, de la misma manera que, su apelación a todos los candidatos, evidenciaba un juego político amplio, permitiéndole abrir el marco de su oferta como votantes de manera más pragmática. Además, su declaración final reclamaba de alguna forma una fractura sobre las expectativas de la transición política en los procesos electorales ya acontecidos. Eran pues, los primeros indicios del debilitamiento en los arreglos morales para la movilización electoral.

¿Cómo reaccionaron los candidatos ante la exigencia de estos actores durante la coyuntura? En general fueron más bien distantes al compromiso explícito con la inversión particular de recursos. En otras palabras, resistieron la tentación electoral y con ello se ganaron el distanciamiento de sus electores.

Quizás el mejor ejemplo fue el conflicto acontecido con Guillermo Aste quien en una reunión con pobladores y ante la exigencia de inversión prioritaria de recursos de los vecinos, se negó rotundamente. Esto repercutió en un abucheo generalizado, lo que llevó a la exacerbación del propio candidato contra la asamblea. Polarizados los ánimos, tuvo que ser sacado del brazo por gente de su equipo. A nuestro juicio, este tipo de actitud pudo haber sido relevante para explicar el alto nivel de rechazo representado en el 12% de nulos y blancos, así como en la incapacidad del propio candidato oficialista para ganar la testera municipal de manera directa.

Con todo, esta doble tendencia de alto nivel de competitividad en los diversos actores, además de una expectativa no resuelta desde las organizaciones populares locales se mantuvo durante el periodo en que el municipio estuvo en manos de la Concertación. Para 1994, Ariel Ulloa (PS) lideró el gobierno local por los dos años restantes, ganando posteriormente las elecciones en 1996. Nuevamente en esa coyuntura, los niveles de competencia fueron altos y el candidato de la centro- izquierda logró por apenas 1.904 votos de diferencia derrotar a una emergente Jacqueline Van Rysselberghe (SERVEL). Lo anterior le permitió dirigir el gobierno local hasta el año 2000. Sin embargo, para diversos dirigentes sociales populares de izquierda entrevistados que habían sido leales en el apoyo electoral a la gestión del alcalde Ulloa durante los noventa, su lectura era radicalmente pesimista. Rosa declaró: "acá la alegría no llegó" (Entrevista a Rosa, 28 de enero 2018, p.3) y Juan agregó: "la derecha hizo la pega (sic) que la izquierda dejó de hacer" (Entrevista a Juan, 28 de enero 2018, p.3)[3]. Sus barrios seguían postergados de la urbanización, a pesar de su trabajo permanente. Había ahí una economía moral fracturada.

3 Los actores citados fueron seleccionados vía bola de nieve. Correspondían a dirigentes sociales de barrios populares con trayectoria de izquierdas y en distintos momentos de su historia de vida, había ocupado roles de mediadores políticos ante distintos referentes. Los nombres fueron sustituidos para proteger la identidad de los mismos.

Finalmente, para las elecciones municipales de octubre del año 2000 la candidata UDI Van Rysselberghe marcó el quiebre histórico de la dinámica electoral local de Concepción. Obtenía el sillón municipal con una avalancha de 58.361 votos, versus las 34.510 preferencias de Ulloa y la Concertación (SERVEL). Es decir, duplicó a quien era el propio alcalde en funciones, inaugurando un nuevo ciclo que dejaba atrás la competencia radical junto a la fragmentación electoral. Llegaba el momento de montar maquinaria.

2. DURO CON LA CONCERTACIÓN: EL FRENTE HACIA ARRIBA

La avalancha electoral dirigida por el equipo de "la Coca" (como le llaman su grupo de confianza) se convirtió en un balde de agua fría para el gobierno de Ricardo Lagos. Dicho triunfo no fue un hecho aislado a nivel nacional, pues el gremialismo para las elecciones municipales del año 2000 logró adjudicarse además el importante gobierno local de Santiago, desbancando al edil en ejercicio Jaime Ravinet (PDC), mostrando con esto la aún vigorosa figura política de Joaquín Lavín. Ahora, con el impulso tras la campaña presidencial de 1999, el otrora alcalde de Las Condes tendría en su poder el municipio más importante de Chile, debiendo poner a prueba la capacidad de su estilo político para perfilarse con vistas a la futura elección presidencial de 2005[4].

En el plano regional, se hicieron saber innumerables críticas para los lideres oficialistas, entre ellos el intendente Jaime Tohá (PS). De una u otra forma, los resultados electorales mostraban la dificultad que hubo para traspasar la votación del propio Ricardo Lagos al candidato a alcalde del oficialismo. Por ello, a juicio de este artículo, la política de las diferentes autoridades de gobierno fue bloquear la nueva gestión de derecha en Concepción. Esto repercutió en una actitud confrontacional desde nueva alcaldesa, la que lejos de buscar niveles de conciliación –como propias del estilo lavinista en Santiago- tendió a disputar abiertamente la política local, desplegando una estrategia de control de un espacio fundamental para las particularidades del trabajo político alcaldicio: "el terreno".

En este sentido el escenario era bastante complejo para la recién electa autoridad gremialista, puesto que, salvo algunos parlamentarios de su sector, el grueso de la burocracia estatal estaba en manos del gobierno. Ello resultó altamente complejo para la gestión de Van Rysselberghe, debido a que, en el control del territorio político, tenía una serie de actores que bloqueaban diversas áreas de su quehacer. De la misma manera, dadas las particularidades de la obtención de recursos en el mundo municipal chileno, la nueva alcaldesa requeriría del lobby necesario para obtener financiamiento vía Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) para sus programas bajo un escenario de marcada pobreza. Desde nuestra óptica, dichos elementos particulares del terreno local-regional, empujaron a la puesta en escena de un estilo ofensivo y de combate contra las autoridades "penquistas" de centro-izquierda.

Ejemplo de ello, es que tras pocos meses de haber asumido la alcaldía, el municipio quedó marginado de los recursos para aplicar los programas de absorción de mano de obra cesante (El Sur, 21 de enero de 2001, p.1,5). Además, la edil reclamaba la permanente exclusión de las actividades de terreno del intendente Jaime Tohá, sobre todo en los espacios que consideraba suyos, es decir los municipales. Al respecto agregó: "nosotros tenemos una opinión sobre cómo tienen que focalizarse las inversiones, con lo que cuesta que los ministros vengan para acá, sin embargo, no fuimos tomados en cuenta" (El Sur, 21 de enero de 2001, p.5). Lejos de replegarse, ella y su equipo comenzaron a disputar abiertamente el control del teatro político, por esto durante una actividad en "Los Lirios" donde arribó repentinamente la gobernadora Mónica Ehrenfeld, la autoridad provincial fue encarada abiertamente por la edil y su equipo,

4 Joaquín Lavín fue candidato de la derecha chilena para las elecciones presidenciales chilenas de 2004-2005, siendo derrotado por un estrecho margen por el candidato del oficialismo Ricardo Lagos.

lo que terminó con el retiro de la asustada representante provincial (El Sur, 4 de marzo de 2001, p.5). Tiempo después, las autoridades regionales (gobernación e intendencia) ordenaron la instalación de la productora "Sol Oriental" en un espacio comunal que había de ser ocupado por la alcaldesa para una actividad propia. El evento regional tenía por propósito, una exposición de vida natural, artesanía y esoterismo. Tras la ocupación y la imposibilidad de realizar la actividad programada desde el municipio, el equipo de la edil interpuso una denuncia ante la Contraloría General de la República contra ambas autoridades regionales (El Sur de Concepción, 10 de marzo de 2001, p.1.).

Con todo, hubo dos coyunturas más representativas de esta tensa relación que tuvieron repercusiones nacionales. La primera se produjo luego del nacimiento de la hija menor de la alcaldesa en el marco de su primer año de gestión. La actitud de la edil fue negarse a tomar el postnatal, dado que ello implicaba dejar la alcaldía por los tres primeros meses. Por eso remarcaba por los medios que se llevaría una cuna para trabajar con su hija en la misma municipalidad (Crónica, 30 de noviembre de 2001, pp. 1,6). Tras esto, la reacción de la oposición no se dejó esperar. Abiertamente se le argumentaba la imposibilidad constitucional de su decisión, dado que la lactancia era un derecho que no se podía renunciar. Por tanto, debía dejar la dirección del municipio por el tiempo que indicaba la ley. En respuesta, la edil señaló que no asumiría su fuero y trabajaría con su bebé en el mismo edificio consistorial. Esto generó una ola de reacciones de sus opositores, quienes remarcaban el carácter irrenunciable de dicho derecho, por tanto, se le exigía dar un paso al costado (El Sur, 2 de diciembre de 2001, p.21).

Así las cosas, la dura posición de la alcaldesa se solidificó tras declarar que no tenía empleador y, por tanto, en su caso, eran los electores quienes la habían mandatado a ejercer su liderazgo. Dar un paso al costado significaba –a su juicio- desconocer a sus bases (Revista Actual, 9 de diciembre de 2001, p.2). Finalmente, la coyuntura terminó con la intervención de Servicio Nacional de Menores (SENAME), desde donde sus autoridades cuestionaron públicamente la posición de la edil, pues se estaba pasando a llevar el derecho a lactancia. De esta forma, el conflicto terminó judicializándose, dictaminando la Corte de Apelaciones la derrota para la postura de Van Rysselberghe (El Sur, 11 de diciembre de 2001, ptda. Y p.2). Ante ello, la alcaldesa sacó sus mejores credenciales neo-conservadores y remarcó: "Me embarazaré las veces que quiera. La alcaldía tiene nombre. Yo soy católica y tengo derecho a usar métodos naturales anticonceptivos y no estoy dispuesta a transarlo. Y esa es mi vida y tengo derecho a ejercerla" (Revista Actual, 16 de diciembre de 2001, p.3).

Por otra parte, la segunda coyuntura de confrontación con el gobierno se articuló en base a la denominada "deuda histórica" de los profesores. Dicha problemática se produjo tras el traspaso de los establecimientos educacionales desde el Estado hacia los municipios en el marco de la reforma municipal de la dictadura militar. Tras un largo ciclo de demandas, el Colegio de Profesores logró que la Corte Suprema reconociera la deuda avalada en 1.500 millones de pesos, los que debían ser cancelados por la autoridad municipal de Concepción, incluyendo el posible arresto de la edil en caso que se negase a pagar (El Sur, 5 de diciembre de 2001, p.1). Ante tamaño problema, la estrategia de la alcaldesa fue solicitar recursos vía SUDERE, dado que el origen del conflicto se encontraba precisamente en el propio Estado. Sin embargo, la instancia dirigida por Francisco Vidal (PPD) no estaba en disposición de acceder a la solicitud, toda vez que ello podría generar una reacción en cadena sobre otros municipios en similar situación. Su respuesta fue una posibilidad de endeudamiento en no más de cuatro años (El Sur, 26 de febrero de 2002, p.6). Evidentemente esto significaba el arrinconamiento perfecto para la díscola alcaldesa, pues de tomar la oferta implicaría claudicar presupuesto durante parte importante de su gestión, sobre todo antes del periodo electoral del 2004. En esta ocasión, la reacción de Van Rysselberghe fue en la misma línea de anterior, es decir, el endurecimiento de posturas, generando un rechazo total. Aunque, más tarde vía Ministerio de Hacienda abrían la posibilidad para un posible

endeudamiento municipal en cinco años, la postura de la alcaldesa seguiría inamovible (El Sur, 9 de abril de 2002, p.1).

Paradojalmente, este juego de posiciones irreconciliables terminó beneficiando a la edil, dado que la fecha de encarcelamiento se acercaba y ante los medios de comunicación, era el gobierno quien al negar recursos estaba indirectamente abriendo la puerta de la cárcel especial de la zona: "El Manzano". Con esto, a nivel local se produjo una "espontánea" manifestación de apoyo a Van Rysselberghe en las afueras del municipio. Se trataba de las bases populares de "la señora Jacqueline", quienes en medio de una bullada manifestación en el frontis del edificio, se encargaban de gritar cantos en apoyo a su referente. Una de las mujeres asistentes señaló que estaba ahí protestando para evitar la prisión de su líder. Más tarde, una segunda entrevistada reconocía al periodista que las habían llamado funcionarios municipales para asistir a la concentración, ofreciendo comida y movilización. Se hacía necesario entonces, movilizar la maquinaria (Crónica, 19 de abril, p.5).

Ante tal escenario, la SUBDERE terminó cediendo y planteando una última oferta de endeudamiento de por diez años. Sin embargo, la alcaldesa siguió dura en su posición, pues ello terminaba comprometiendo tanto el término de su gestión, así como el de una futura reelección. Por esto exigiendo 20 años o nada, su declaración fue tajante: "no estoy dispuesta a dar un paso atrás" (El Sur, 10 de mayo de 2002, p.6). Dada la repercusión nacional que estaba tomando el conflicto, el parlamentario Alejandro Navarro (PS) acusó a la alcaldesa de querer convertirse "en la primera presa política de la Concertación" (El Sur, 20 de mayo de 2002, p.6)[5]. En respuesta, los líderes del gremialismo nacional hicieron saber por los medios al gobierno que "de irse presa *la Coca*", Longueira, Lavín y Novoa se irían a la cárcel con ella (El Sur, 30 de mayo de 2002, pp. 1, 5-7).

De esta forma, llegado todo a una situación límite, finalmente el gobierno cedió y luego de una reunión de la plana mayor del gremialismo con el Ministerio del Interior, José Miguel Insulza reconocía el acuerdo sobre el cual la alcaldesa aceptaría la última oferta del endeudamiento, comprometiéndose el gobierno a entregar en promedio $100.000.000 (US$125.000) anuales para políticas sociales del municipio (Crónica, 31 de mayo de 2002, ptda. y p.6.). Con esto, a nivel local la alcaldesa gremialista podría continuar su gestión desarrollando políticas sociales, las que serían cruciales tanto para su proyecto como las elecciones. Pero, además, Jacqueline Van Rysselberghe lograba posicionarse públicamente a nivel nacional como un emergente liderazgo femenino del gremialismo criollo. A nuestro juicio, estos fueron los años de aprendizaje político de la futura dama de hierro del neoconservadurismo chileno.

¿Hasta qué punto este estilo estuvo emparentado con el lavinismo que se estaba desarrollando en Santiago? A nuestro juicio, en poco. Si bien Lavín también tuvo conflictos con la oposición, sobre todo durante la privatización de las aguas de Santiago, su estilo siempre fue más conciliador. De hecho, en vez de llevar dicho conflicto al plano ideológico, más bien argumentaba que los propios gobiernos de la Concertación habían privatizado el agua también, por tanto, su política era más bien de consenso. Más aún, el hecho de que el otrora referente UDI administrara la comuna capital nacional – y sobre todo tras la venta de las aguas- le permitió gozar de un margen de maniobra presupuestaria algo más holgado que el de su homóloga de Concepción. Lavín podía darse el lujo de traer nieve al centro de Santiago o de convertir espacios en una playa para veraneantes populares. Mientras que, en la región del Biobío, las cosas eran distintas. A nuestro juicio, fueron elementos más particulares y regionales -como el caso de la deuda histórica-, los que terminaron empujando y forjando el carácter de un liderazgo más confrontacional de la alcaldesa penquista. Ello generó un

5 A juicio de Navarro, el conflicto podía resolverse fácilmente si la empresa del padre de la alcaldesa (Enrique Van Rysselberghe), Arenas Biobío, pagaba la deuda que tenía con el municipio por extracción de áridos luego de su declaración en quiebra (El Sur, 20 de mayo de 2002, p.5; 21 de mayo de 2002, p.6).

repliegue valóricamente conservador, representado en la coyuntura del nacimiento de su hija, o en su negativa de entregar vía consultorios la "píldora del día después", así como sus cuestionamientos a la existencia de "cafés con piernas" en el centro de Concepción[6]. En este sentido, dialogando con la tesis de Álvarez y Valdivia, según la cual el lavinismo comenzará a sufrir su lento ocaso en Santiago (Álvarez 2016, Valdivia 2016), podríamos señalar que a nivel regional nacía paulatinamente un liderazgo más emparentado con el neoconservadurismo fundante del gremialismo y de la nueva derecha chilena. Ahora, ¿cómo construyó sus lealtades este liderazgo y cómo se articuló con el mundo popular penquista?

3. LA "SEÑORA JACQUELIN" ¡PRESENTE! EL FRENTE HACIA ABAJO

Dado el contexto conflictivo hacia las autoridades oficialistas regionales, la alcaldesa gremialista desarrolló una estrategia de acumulación de capital político basado en su gestión, potenciando el carácter alcaldizado de la política local. Por esto, tempranamente volcó sus energías en el trabajo territorial municipal personificado en su figura, más que en el carácter institucional del gobierno local. De esta forma, ella junto a su equipo "se dejaron caer" en las poblaciones de Concepción. Así, durante una visita en Lorenzo Arenas, escuchó las quejas de los vecinos y supervisó en terreno el programa "Municipio en tu barrio". La recepción del estilo fue contundente, pues algo sorprendida, una de las dirigentes locales del sector remarcó el carácter positivo de la experiencia: "ya que la realización de este tipo de visitas es la única forma de que las autoridades se den cuenta de los problemas existentes en la ciudad" (El Sur, 1 de febrero de 2005, p.1).

Por otra parte, la gestión atacó uno de los problemas más tradicionales de la agenda nacional y local: la delincuencia. Ello se materializó en dos políticas "concretas". La primera fue la creación de un equipo de "asistencia judicial solidaria" para vecinos víctimas de delitos. Este programa, ofrecía prestaciones y asesoramientos jurídicos gratuitos para todos quienes quisieran solicitarlos ante eventos delictivos. Evadiendo las temporalidades de la gestión de recursos intra-estado, este programa funcionaba a través de sus propias redes de amigos y personas independientes pro Van Rysselberghe, quienes dedicaban unas horas a la semana de prestación gratuita bajo una forma de organización propia ad-honorem (El Sur, 22 de marzo de 2001, p.5). Por otra parte, la segunda política implicó una articulación entre el municipio con Carabineros para ingresar en los barrios "marginales" mediante la figura del "Carabinero Comunitario". Dicho programa contemplaba la designación de secciones de policías en los diferentes barrios, asegurando un representante de turno por cada junta de vecinos. Lo anterior permitía tejer una red entre dirigentes territoriales, policías y el municipio, potenciando un claro control del territorio político (Crónica, 9 de julio de 2003, p.8). Más aún, una vez presentado el programa, a través de los medios de comunicación se entregaba públicamente el nombre del carabinero y la junta vecinal de turno para que todos los vecinos pudieran acudir a su persona (Crónica, 14 de julio de 2003 p.8).

De esta forma, tras seis meses de haber iniciado su gestión, Jacqueline Van Rysselberghe declaraba por la prensa: "es muy intenso ser alcaldesa (…) si tú quieres hacerlo bien, yo tengo el convencimiento de que la gente tiene derecho a la cercanía con sus autoridades. Entonces el desgaste que produce atender a mucha gente te agota (…) hemos hecho un trabajo silencioso de terreno, hemos trabajado mucho en los barrios de Concepción (El Sur, 10 de junio de 2001, p.4).

A nuestro juicio, esta declaración mostraba los convencimientos generales del naciente liderazgo. Marcado por un fuerte personalismo, se edificaba a la alcaldesa como la verdadera mediadora entre las problemáticas vecinales y el Estado. Tal y como lo señalaba, el trabajo

6 La "píldora del día después" es un método anticonceptivo femenino, que se ingiere luego de las relaciones sexuales para prevenir embarazos. Dicho método fue considerado abortivo por parte de la Iglesia Católica. En el caso chileno, el término "cafés con piernas" hace referencia a un local diurno que funciona como night club.

político silencioso realizado era fruto de una idea según la cual, el derecho de las personas era tener "cerca" a sus autoridades, configurando una relación cara a cara. No se trataba pues, de lo que supondría un Estado legal-racional, es decir la universalidad de un derecho vía Estado impersonal, sino que, todo lo contrario, su gestión era mediante la personificación de las relaciones políticas a fin de acumular capital social. Aunque la erosión de los mapas proyectuales-ideológicos resultaba evidente en el discurso, no por ello era una relación despolitizada. A nuestro juicio, este estilo fue un buen reflejo de la denominada alcaldización de la política, pero paradojalmente ya no centrada en la figura del lavinismo, sino en un liderazgo más duro y neoconservador[7], siendo por tanto profundamente político. Ahora, ¿cómo se enfrentaron los diversos mediadores políticos populares con este nuevo referente y como operó su economía moral?

La táctica de la alcaldesa se diferenció en distintas formas relacionales. Primeramente, para el caso de mediadores políticos territoriales vinculados a la Concertación, se intentó aplicar un ejercicio de aislamiento. Para ello, se tensionó a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos (UNCO) que tenía claras preferencias con la ex gestión de Ulloa. Por esto, el presidente de dicha entidad Jorge Inostroza, tempranamente acusó por la prensa el hostigamiento de parte de la edil, pues se les exigía desalojar la oficina que ocupaban al interior de la municipalidad. Además, reclamaba la reducción del presupuesto vecinal, el que había pasado de nueve millones de pesos a seis. La respuesta de la alcaldesa fue clara, pues señaló: "¿Qué tanto se van a demorar en sacar unos escritorios y carpetas? (…) deben optimizar los recursos" (El Sur, 4 de marzo de 2001, p.5). Dos días después, el conflicto quedaba zanjado cumpliendo la decisión de la alcaldesa, pues la UNCO se iba del edificio consistorial y el municipio se comprometía a pagarles la cuenta del teléfono (El Sur, 6 de marzo de 2001, p.6). Casi dos años más tarde, las declaraciones de los dirigentes de la entidad vecinal confirmaron el permanente distanciamiento con el municipio. En el marco del aniversario número 452 de la comuna, se entrevistó al presidente de la agrupación, Carlos Arriagada, quien acusó a la gestión de la alcaldesa de "baipasear" a su asociación: "la municipalidad pasa a trabajar directamente con las juntas de vecinos que son afines políticamente, ¿el intermediario no debería ser la DIDECO? No tenemos relaciones en lo absoluto", reflexionaba el dirigente. Luego agregó: "nuestra relación es muy fría y distante. Nuestro trabajo corre por un carril distinto" (Revista Aniversario de Concepción, 2 de octubre de 2002, p.7). El reclamo del dirigente era claro: se encontraban aislados del trabajo político del municipio. Más aún, su propia mirada evidenciaba los efectos y percepciones de lo que debía ser el rol del alcalde, pues su queja no era en tanto al carácter ideológico de la alcaldesa sino más bien a la relación fría y distante con ellos. En otras palabras, el dirigente lo que esperaba era una relación cercana y carismática, tal y como era con los mediadores de confianza de la señora Jacqueline, llamados en el ambiente como "los regalones". Había entonces un aspecto de la economía moral que no funcionaba para su "otro" sector.

Ahora, en el plano de la memoria de dirigentes territoriales populares vinculados a la Concertación, la relación con la alcaldesa había traído nefastas consecuencias para su sector. Rosa, era dirigente vecinal de una población emblemática de Concepción. Proveniente de una familia de izquierda, su padre había sido militante partidista y leal a la Unidad Popular. Lo anterior, le implicó un exilio durante la dictadura, para luego reintegrarse a la lucha contra el régimen. Más tarde, Rosa dejo su partido inicial, pero siempre siguió vinculada a la izquierda y sobre todo al alcalde Ulloa. Para ella, la llegada de la derecha al municipio, representó un periodo oscuro, pues los recursos se le habían "cortado" para "su gente", perdiendo las redes de apoyo que tenía durante la gestión anterior. Su capital social, se había desplomado. De igual forma, recordaba que tras el terremoto de 2010 y luego de la vinculación que se había hecho de parte del municipio hacia sus vecinos durante los saqueos de la ciudad, los recursos habían dismi-

7 Cabe señalar que la tendencia a la alcaldización de la política no fue exclusiva de la derecha, sino más bien un fenómeno transversal desde el punto de vista ideológico. Para ello ver: (Valdivia 2018, Pérez 2019).

nuido. A pesar de eso, había logrado organizar un comedor popular, trabajando directamente con la Junta Nacional de Auxilio y Becas (JUNAEB) para entregar alimentación a "su gente" (Entrevista a Rosa, 28 de enero de 2018, p.3). Aunque reconocía haber sido cercana al alcalde Ulloa, así como parte en la construcción de redes de apoyo mutuo -entre ellas, electorales-, Rosa como mediadora de izquierda consideraba que el clientelismo se había potenciado con la alcaldesa gremialista. Canastas familiares permanentes, apoyos particulares y la aparición de operadores políticos municipales en el barrio, eran algo que la sorprendía en su ejercicio de memoria.

Por otra parte, Juan con una trayectoria de vida similar a la de Rosa, coincidía en la explosión de clientelismo durante el periodo de la alcaldesa. "Planchas de zinc, canastas familiares, becas para los regalones (sic) y trabajo en el municipio" eran parte de la estrategia. De un momento a otro, su barrio de una tradición de izquierda se veía embanderado con el color naranja de Van Rysselberghe durante las elecciones. Sin embargo, su diagnóstico era letal, pues tal y como lo señalamos más arriba, a su juicio esto se explicaba porque la derecha "hacía muy bien la pega (sic), la hacía finita", pues se había abocado a resolver los problemas de la gente. A su juicio, "era trabajo que la izquierda dejó de hacer" (Entrevista a Juan, 28 de enero de 2018, p.3). Había pues indicios de una economía moral fracturada, lo que debilitaba posibles arreglos morales. Para el dirigente los recursos no circulaban como se debía, y a pesar de los años de lealtad política hacia su sector, las problemáticas seguían, tanto así que había sido la propia derecha la que, de una u otra forma, se había "metido" en su barrio.

De manera similar, Javiera, también militante de un partido de izquierda y dirigente de un tercer barrio popular –aunque no durante el periodo de la edil gremialista-, recordaba la puesta en escena clientelar de la alcaldesa. El ejercicio era similar, su otrora barrio de izquierda, embanderado con los colores de la "señora Jacqueline" para las elecciones; canastas familiares y puestos en la feria libre para regalar objetos a la gente (Entrevista a Javiera, 8 de noviembre de 2018, p.5). ¿Cuál era el sentido y como aparecían esas banderas? Patricia, una cuarta dirigente popular que se declaraba autónoma, pero de izquierda, recordaba que el acuerdo era de "canasta por bandera". "Tú aceptabas una canasta familiar y te pasaban una bandera", ello permitía al equipo político, marcar presencia simbólica en los barrios populares y además lograr un estimativo de la cantidad de votos a los que debían aproximarse" (Entrevista a Patricia, 9 de noviembre de 2018, p.4).

De esta forma, para los mediadores entrevistados que relacionalmente estaban marcados por su articulación con partidos y gestiones de izquierda se vieron perjudicados en la asignación de recursos, así como evidenciaron una performance avasalladora de clientelismo. Lo anterior no quiere decir que, antes del ciclo gremialista no hubiese existido esta práctica, de hecho, la había, y los propios mediadores de izquierda lo señalaban tangencialmente, o en su defecto ocupaban ejercicio de inversión para evadir su relación. A pesar de ello, reconocían que habían participado en la movilización de apoyos electorales para esa gestión durante los noventa.

Con todo, una segunda área relacional se marcó con dirigentes que, aunque vinculados a la izquierda, no habían tenido una relación con el alcalde concertacionista. Ello les permitió tomar distancia de los otros líderes territoriales, tomando aire de autonomía que posibilitó una articulación pragmática con la alcaldesa gremialista. Ahora bien, dicha relación no alcanzaba el nivel de la reciprocidad electoral, más bien estaría cerca de lo que Durston denominó broker altruistas (2005). En este sentido, el caso emblemático recogido fue el de Camila. Al igual que los anteriores, era dirigente de un barrio popular emblemático de Concepción, con una trayectoria familiar de izquierda. Su mirada radicalmente crítica del periodo de la Concertación, remarcaba e igualaba las prácticas clientelares que se evidenciaban masivamente con el periodo de Van Rysselberghe. Camila denunciaba, el acarreo, los favores y el "pituto" como algo común en el mundo municipal del periodo de la centro-izquierda. Más aún, su mayor queja era que: "con su soberbia, se olvidaron del pueblo" (Entrevista a Camila, 9 de noviembre de 2018, p.2). Existían pues, una deuda con las expectativas de una transición política imaginaria.

Ahora bien, aunque Camila se consideraba de izquierda, reconocía que con la alcaldesa había logrado trabajar mejor que con la gente de la Concertación, pues había más cercanía y eficiencia en la resolución de problemas. El gran anhelo de su comunidad, era un postergado consultorio, es decir un recinto de atención de problemas primarios de salud. Durante distintos periodos, aunque habían existido los recursos para ello, diferentes trabas burocráticas y otras prioridades, hicieron dejar de lado la inversión en las otras reparticiones del Estado. Sin embargo, bajo el gobierno de la alcaldesa gremialista, coincidió que se habían aprobado los fondos para su construcción desde la Intendencia, a partir de la cual se discutiría su puesta en marcha. En ese escenario, según recuerda Camila, "la señora Jacqueline y su gente me soplaron (sic) que se quería nuevamente postergar el inicio de la obra". Ante esto, el acuerdo fue generar una manifestación con los vecinos para presionar a las autoridades. De esta forma, tal y como lo acordaron, Camila movilizó a "su gente" y se instalaron en las afueras de la oficina de reunión a presionar. Camila recordaba que hizo: "un testamento gigante que envié a todos los consejeros regionales (...) me di el trabajo de hacerlo, de conseguirme los nombres de todos y hacerles llegar el rosario (sic), apelando a todo, a sus funciones, a la cuestión moral, a la cuestión sentimental y a un montón de cuestiones más y al derecho que teníamos los pobladores de tener nuestra salud. De tener un consultorio digno para la atención" (Entrevista a Camila, 9 de noviembre de 2018, pp. 2-3). De esta forma, con la movilización fuera del edificio, desde el consejo dieron la aprobación para que Camila ingresara. Luego, la autoridad subrogante del intendente hizo un llamado a aprobar la propuesta, argumentando que no era posible que los propios pobladores tuvieran que venir a la reunión a pedir dignidad.

Esta articulación pragmática a partir de objetivos comunes, no representaba una reciprocidad proyectable en la movilización electoral, pero si ante la resolución de problemáticas comunes. Tal y como señalaba Camila, su objetivo era la dignidad, que se materializaría a través de la llegada del consultorio a su barrio. Por eso remarcaba que ella no había trabajado con la UDI, sino con la "señora Jacqueline". Su articulación política había sido entonces personificada, diluyendo cualquier intento de abstracción político-programática. Desde su óptica, su motor fueron arreglos morales sobre la dignidad y no políticos.

Finalmente, una tercera área relacional estuvo dada con su equipo de confianza, los denominados "regalones". Estos, signados por sus adversarios territoriales como "operadores políticos", fueron cruciales para la movilización electoral y la penetración en los barrios populares de Concepción. Su relación fue un clientelismo de tipo más clásico, donde la regulación de su economía moral se potenciaba en distintos arreglos morales -incluidos y más allá- de la movilización electoral. Sandra, una dirigente de barrio popular y declarada de derecha, reconocía haber estado en el grupo que fue a manifestar su apoyo en las afueras del municipio cuando estaba la posibilidad de la prisión de su líder. Aunque los medios de comunicación mostraron el aspecto más crudo de la relación -al evidenciar el llamado de integrantes del equipo municipal, así como el acarreo junto al apoyo en comida-, Sandra señalaba que la lealtad con "la señora Jacqueline" se debía demostrar en todas las instancias (Entrevista a Sandra, 25 de julio de 2019, p.3). Afirmaba que había trabajado en cada llamado de su referente, haciendo campaña, en los "puerta a puerta", en los locales de la feria, así como en la movilización para el día de las votaciones. Dado que era dirigente territorial, poseía un capital electoral que ponía a disposición de su líder en cada llamado que se hacía necesario. ¿Cuáles eran los motivos que impulsaban estos arreglos morales? Para Sandra, su barrio durante el ciclo de la Concertación se había estancado, evidenciándose en una serie de carencias materiales. Los recursos no habían circulado como debían repartirse a partir de su situación material. Sin embargo, desde que ella había tomado las riendas de su organización articulándose con la "señora Jacqueline", lograron una serie de beneficios para el mejoramiento urbano. Estos pasaban por el arreglo y pavimentación de calles, títulos de dominio para los terrenos irregulares, así como la instalación de una plaza con juegos infantiles y deportivos. Estos habían sido los "favores fundacionales" (Entrevista a Sandra, 25 de julio de 2019, p.4). Reconocía que su trabajo era agotador, pues los vecinos la llamaban a cualquier hora para solucionar sus problemas. A su vez, gracias

a la construcción de su capital social, sabía perfectamente buscar atajos burocráticos para la resolución de las demandas locales. Todo lo anterior, le permitía evidenciar el compromiso de su referente en su territorio para sus vecinos. Los recursos fluían como "se debía" y las obras estaban a la vista. De hecho, agregaba: "el apoyo de la alcaldesa se veía ante todos, porque siempre estaba en la población cada vez que la necesitábamos, incluso para las fiestas populares que organizábamos" (Entrevista a Sandra, 25 de julio de 2019, p.5).

Con todo, ¿se jugaba en esta relación clientelar clásica un mero intercambio de favores por votos?, ¿era entonces una relación solamente instrumental, momentánea y por tanto débil?, ¿no podrían existir entonces pobres de derecha? Desde el punto de vista de este artículo, los arreglos morales incorporaban una dimensión racional, pero no se agotaban en ella. Es decir, se superaba con creces el mero intercambio momentáneo. De hecho, su construcción no se había dado originalmente desde un punto cero hacia el intercambio, sino que era una relación desarrollada en el tiempo, antes, durante y después de la campaña. Su lealtad no se ponía a prueba tan solo en los momentos de movilización electoral, sino que también cuando su líder lo necesitase en coyunturas de crisis. En otras palabras, cuando Sandra acudió a brindar su apoyo y marchar por "su alcaldesa", no lo hizo solo porque le ofrecieron movilización y una colación, sino más bien porque sentía que su lealtad estaba con su líder, con la persona de la alcaldesa, como parte de una cadena de reciprocidad construida personalmente en el tiempo. Si bien, los artefactos ofrecidos ayudaron a la asistencia, no era la etapa de la movilización electoral. Más bien fue el instante de evidenciar presencialmente la lealtad con una performance de apoyo. En este sentido, si hubiesen sido relaciones meramente instrumentales no hubieran traspasado el momento electoral. Por el contrario, Sandra reconocía haber acompañado a "la señora Jacqueline" en todos los momentos, incluso hasta la actualidad, manifestando su anhelo de que volviera a la alcaldía (Entrevista a Sandra, 25 de julio de 2019, p.6). A nuestro juicio, la relación clientelar –más bien transversal en el sistema político- no hace más o menos dependiente de una adhesión ideológica, al contrario, en la realidad operan ambas cosas simultáneamente. Tal y como lo ha señalado Valenzuela (1977) y Arriagada (2013), la mediación personalizada ha sido un recurso tradicional en el mundo municipal. Sandra era pues una muestra de una base social popular de una nueva derecha.

Finalmente, ¿cuáles fueron los niveles de respaldo electoral que tuvo esta estrategia neo-conservadora?, ¿El triunfo de Van Rysselberghe del año 2000 fue más bien coyuntural o logró cambiar la tendencia histórica de alta competencia en el mundo local de Concepción? Los resultados fueron relevantes para evidenciar la construcción de un nuevo liderazgo de tipo carismático y avasallador. Luego de los 58.361 votos equivalentes al 55,29% del año 2000, para las elecciones de 2004 obtuvo 55.925 representando el 56,45%. Es decir, aunque disminuyó levemente en cantidad de votos, obtuvo un alza en el porcentaje de aprobación, acomodándose bien al nuevo sistema inaugurado ese año que operó mediante votación directa y separada de alcaldes y concejales. Finalmente, en 2008 obtuvo 60.889 votos equivalentes al 63, 46% (SERVEL).

Es decir, todo pareciera indicar que su figura efectivamente marcó un quiebre electoral en la tradición penquista local, evidenciando un alto nivel de eficiencia en su estrategia.

Tras estos avasalladores resultados electorales, la trayectoria de Jacqueline Van Rysselberghe terminó potenciándose como un liderazgo regional para la UDI penquista. Su salto importante se produjo durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, quien la nombró para el cargo de Intendenta Regional. A todas luces era el liderazgo regional de derecha mejor posicionado. Sin embargo, durante la administración de dicho cargo experimentó uno de los momentos más difíciles de su carrera, cuando su tradicional contendor local, el para ese entonces senador Alejandro Navarro (MAS), la denunciara como líder de un fraude, a partir de la adulteración de fichas sociales a fin de obtener viviendas para damnificados del terremoto de 2010. Según los medios de comunicación, muchas de las personas indicadas como afectadas, no habían tenido consecuencias con el terremoto, convirtiéndose

más bien en un intento por asegurar a "su gente", así como de trasladar a pobladores que ocupaban terrenos de alto valor comercial dada su cercanía con el centro urbano (Crónica, 5 de febrero de 2011, pp. 1, 6).

A pesar de que la autoridad regional negó primeramente tal acontecimiento, -además de la protección mediática que le brindó su propio partido-, los hechos se convirtieron en irrefutables y el propio presidente terminó pidiéndole la renuncia al cargo. Tal y como lo señaló en su momento, era la situación más difícil de su carrera política (El Sur, 4 de abril de 2011, pp. 1, 4-5).

Sin embargo, luego este duro acontecimiento, el gremialismo lejos de dejarla morir, levantó su candidatura a senadora por la región del Biobío en 2013. Sus resultados electorales fueron de igual forma aplastantes. Obtuvo la primera mayoría de su lista con 128.451 votos. (SERVEL). Más aún, años después se convertirá en la primera presidenta mujer de la Unión Demócrata Independiente.

CONCLUSIONES

En términos generales, este artículo analizó la historia de Jacqueline Van Rysselberghe en Concepción a fin de reflexionar sobre los impactos del lavinismo y la alcaldización de la política a nivel regional, así como las relaciones clientelares de la UDI como nueva derecha con los sujetos populares.

De esta forma, en relación con el impacto del lavinismo a nivel regional, sugerimos que fue menor. Más bien, el caso de la "señora Jacqueline", evidencia la constitución de un liderazgo diferente al estilo hegemónico capitalino. Mientras que el primero según los especialistas se caracterizaría por un marcado "cosismo" de terreno mediante políticas excéntricas, así como un estilo conciliador y discursivamente apolítico, el caso de Van Rysselberghe evidenció una línea de acción mucho más neo-conservadora en lo valórico, así como conflictiva y de abierta disputa con los referentes regionales. Mientras que Joaquín Lavín evitaba la confrontación pública –cuya máxima expresión fue su auto-declaración posterior como "Bacheletista-Aliancista"-, la alcaldesa de Concepción estudiada nunca renegó de su condición de derecha y UDI. Al contrario, la puso en la palestra para disputar palmo a palmo y en todos los frentes con su estilo duro y directo. Además, en el caso de la comuna "penquista", no se evidenciaron políticas tan "heterodoxas" como las propuestas en el Santiago de Lavín (playas y nieve), ni tampoco ejemplos como el "plan pololo", o el llamado a la recolección de cartones para los vecinos en situación de pobreza. En cambio, la edil gremialista de la VIII región, tuvo que enfrentar situaciones locales referidas al presupuesto que la terminaron fogueando para la disputa con el gobierno de Ricardo Lagos a nivel regional. Su gran diferencia entonces, se marcó en un estilo duro, más parecido al originario gremialista que al conciliador de Lavín. De hecho, es relevante que esta construcción se desarrollase precisamente cuando, según Valdivia (2016) se producía el ocaso de dicho estilo en Santiago.

Ahora, de igual forma la infraestructura municipal y el liderazgo se enmarcó dentro de la denominada alcaldización de la política. El ejercicio de potenciar las capacidades clientelísticas a partir del gobierno local a través de mediaciones personalizadas, repercutieron en la edificación de una gestión alcaldizada, pero no por ello menos política, potenciando lo que Sergio Toro llamó broker burocráticos y autorreferenciales (2017). Su trayectoria hacia el campo regional en la Intendencia, así como en el Parlamento y al interior de su propio partido, evidencia un caso exitoso del fenómeno analizado por Valdivia. Al contrario de otros ediles emblemáticos de la transición, tales como Hernán Pinto en Valparaíso, Jaime Ravinet en Santiago o Jorge Soria en Iquique, Van Rysselbreghe logró avanzar más allá de las redes originarias municipales para dar el salto a la política nacional. A nuestro juicio, la alcaldización a nivel nacional no fue suficiente para trepar en la escala estatal, pues a pesar de la continua debilidad de los partidos, las redes en sus patios internos siguieron siendo necesarias, y en ello, la "señora Jacqueline" fue exitosa.

Por otra parte, ante la relación de una nueva derecha con el mundo popular, podemos afirmar que se evidencia la articulación y penetración del gremialismo en los sectores urbanos populares de Concepción. Esto es entonces un caso de nueva derecha chilena. En este sentido, el carácter clientelar no necesariamente suma o resta densidad relacional a la base social de un actor político. Más bien, el clientelismo es una vieja costumbre política en el sistema de partidos chileno. Su transversalidad ideológica hace que no sea necesariamente propia de un sector en específico. De hecho, desde el punto de vista de las elites políticas, fue un recurso para construir capital social que ayudase para la reproducción en el poder, pues permitía disminuir la incertidumbre electoral. Mientras que, para mediadores y clientes, fue un mecanismo para la solución de problemas. Por ello, en el artículo se analizó las diversas áreas relacionales del fenómeno, donde se identificaron distintas consecuencias. Adversarios, pragmáticos o "regalones" fueron diversas posiciones en que se ubicaron los mediadores políticos.

En razón de todo lo anterior, es que el carácter clientelar de la alcaldización no restó apoyo al proyecto y estilo de Van Rysselberghe. Al contrario, ayudó a su consolidación. De esta forma, no compartimos las visiones que piensan en el clientelismo como el mero intercambio de favores por votos. Pues ello supone relaciones momentáneas, débiles e instrumentales. El debate latinoamericano actual, centrado en los casos emblemáticos de Argentina y México, ha avanzado en complejizar la comprensión de este tipo de relaciones. Además, la evidencia en el caso chileno y en otras latitudes, demuestra que sobre la dimensión del cálculo-racional, opera una economía moral que regula la relación clientelar. Una percepción de cómo debe operar la distribución de recursos y apoyos mutuos. A partir de ella, se estimulan diversos arreglos morales. Por esto, la mediadora "regalona" del caso de estudio, evidenciaba su lealtad en diferentes performances, no tan solo en lo electoral. La asistencia y el apoyo en el tiempo es pues algo que no solo se puede explicar a partir del frío calculo racional. De esta forma, la existencia de clientelismo en la derecha, no implica necesariamente la inexistencia de apoyo popular. Afirmar eso, implicaría desconocer las viejas prácticas de los actores políticos en la historia de los partidos. De hecho, el quiebre histórico de la tendencia a la alta competencia electoral local de Concepción, así como la mantención de su piso de votantes, a nuestro juicio, lo demuestra.

BIBLIOGRAFÍA

- Alcántara, M. (2010). *Calidad de la democracia y retos de la política en América Latina*. En Igor Vivero (coord.), *Democracia y reformas políticas en México y América Latina* (pp. 17-40). México: Porrúa-UAEM-IEEM.
- Alenda, S. (2014). *Cambio e institucionalización de la nueva derecha chilena (1967-2010)*. En Revista de Sociología e Política (Nº52), 159-180.
- Alenda, S. (2015). *Derechas del siglo XXI: marco analítico para comprender su reconfiguración a partir del caso chileno*. En Paraná Eleitoral (nº2), 169-187.
- Alfaro, K. (2015). *El exilio del trabajo minero en Lota*. Concepción: Editorial Espacarate.
- Álvarez, R. (2012). *La reforma municipal en la transición: ¿Un caso de democratización en la medida de lo posible?*. Consulta 10 de septiembre de 2019: http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/chile_alvarezvallejo.pdf
- Álvarez, R. (2014). *La nueva política en el Chile postdictatorial: ¿Pasividad ciudadana o clientelismo desde abajo? (1990-1996)*. En Revista Estudios Ibero-Americanos (nº1), 169-189.
- Álvarez, R. (2016). *Clientelismo y mediación política: los casos de los municipios de Renca y Huechuraba en tiempos de la UDI popular*. En Revista Divergencia (Nº6) 41-53.

- Arriagada, E. (2013). *Clientelismo político y participación local*. En Revista Polis, (Nº 36), 15-38.
- Barozet, E. (2003). *Movilización de recursos y redes sociales en los neopopulismos: hipótesis de trabajo para el caso chileno*. En Revista de Ciencia Política, (Nº 001), 39-54.
- Barozet, E. (2007). *Elementos explicativos de la votación de los sectores populares: lógica y eficiencia de las redes clientelares*. En Revista Política, (Nº 43), 205-251.
- Boeninger, E. (1997). *Democracia en Chile, lecciones para la gobernabilidad*. Santiago: Editorial Andrés Bello.
- Bustamante, F. (2014). *La construcción del enemigo en sus usos lingüísticos del integrismo católico en la justificación del golpe de estado en chile. el caso de las revistas Fiducia y Tizona, 1965-1973*. En Revista Persona y Sociedad (Nº 1), 57-83.
- Correa, S. (1989). *La derecha en el Chile Contemporáneo: la pérdida del control estatal*. En Revista de Ciencia Política (nº11), 5-19.
- Correa, S. (2004). *Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX*. Santiago: Editorial Sudamericana.
- Corvalán, L. (2019). *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*. Valparaíso: Editorial América en Movimiento.
- Cristi, R. (2000). *El pensamiento Político de Jaime Guzmán*. Santiago: LOM Ediciones.
- Cristi, R. y Ruiz, C. (1992). *El pensamiento conservador en Chile*. Santiago: Editorial Universitaria.
- Díaz, J. y Valdés, M. (2015). *Historia electoral de la provincia de Concepción en tiempos de la Unidad Popular*. En Revista Tiempo y Espacio (Nº 35), 121-146.
- Durston, J. (2012). *Clientelismo político y actores populares en tres regiones de Chile*, en: Delamaza, Cunill y Joignant. Nueva agenda de descentralización en Chile. Santiago: Ril Editores.
- Durtson, J. (*et. al.*) (2005) *Comunidades campesinas, agencias públicas y clientelismo político en Chile*. Santiago 2005: LOM Ediciones.
- Fazzio, H. (1997). *El mapa actual de la extrema riqueza en Chile*. Santiago: LOM Ediciones.
- Fermandois, J. (2000). *Las paradojas de la derecha: el testimonio de Allamand*. En Estudios Públicos (nº 78), 333-373.
- Garretón, M. (2012). *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado: los gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010*. Santiago: Editorial Arcis-CLACSO.
- Gómez, J. (2004). *La frontera de la democracia. El derecho de propiedad en Chile 1925-1973*. Santiago: LOM Ediciones.
- Gómez, J. (2010). *Política, democracia y ciudadanía en una sociedad neoliberal (Chile: 1990-2010)*. Santiago: Editorial Arcis/Clacso.
- González, L. (2007). *Las derechas durante el gobierno de Salvador Allende*. Tesis para optar a los grados de Licenciado en Historia y Licenciado en Educación. Valparaíso: Universidad de Valparaíso.
- Huneeus, C. (2001). *La Derecha en el Chile después de Pinochet: el caso de la Unión Demócrata Independiente*. Kellogg Institute: Working Paper (nº 285), 1-51.
- Huneeus, C. (2014). *La democracia semisoberana. Chile después de Pinochet*. Santiago: Editorial Taurus.

Revista Divergencia: N° 13 / Año 8
Julio - Diciembre 2019
ISSN 0719-2398

- Joignant, A. (2002). *Los enigmas de la comunidad perdida*. Santiago: LOM Ediciones.
- Joignant, A. y Navia, P. (2003). *De la política de individuos a los hombres del partido. Socialización, competencia política y penetración electoral de la UDI (1989-2001)*. Estudios Públicos (nº 89), 130-71.
- Lechner, N. (2002). *Las sombras del mañana. La dimensión subjetiva de la política*. Santiago: LOM Ediciones.
- Luján, D. y Pérez, A. (2018). *La Democracia Cristiana en el área chica de la posdictadura. Prácticas políticas y relaciones clientelares en una comuna chilena*. En Revista Íconos (Nº 60), 143-163.
- Luna y Mardones (ed.) (2017). *La columna vertebral fracturada. Revisando los intermediarios políticos en Chile*. Santiago: Rill Editores.
- Luna, J. (2011). *Segmented party-voter linkages in Latin America: the case of the UDI*. En Journal of Latin American Studies (nº42), 325-356.
- Luna, J. y Rovira, C. (ed.). (2014). *The resilience of the Latin American right*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Márquez, B. (2014). *Cerámica en Penco. Industria y Sociedad 1888-1962*. Concepción: Ediciones del Archivo Histórico de Concepción.
- Mazzei, L. (2015). *Historia económica regional de Concepción*. Concepción: Ediciones del Archivo Histórico de Concepción.
- Meller, P. (1999). *Pobreza y distribución del ingreso en Chile (Década de los noventa)*. En Drake y Jaksic (ed.) *El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa*. Santiago: LOM Ediciones, 1999.
- Monsálvez, D. (2006). *La Asamblea del Pueblo en Concepción. La Expresión del poder popular*. En Revista de Historia (Nº 2), 37-58.
- Monsálvez, D. (2017). *Historias recientes del gran Concepción*. Concepción: Editorial Escaparate.
- Moulian, T. (1982). *Desarrollo político y estado de Compromiso: desajuste y crisis estatal en Chile*. En CIEPLAN (Nº 8), 1-33.
- Moulian, T. (1997). *Chile actual: Anatomía de un Mito*. Santiago: LOM Ediciones.
- Moulian, T. (1998). *El consumo me consume*. Santiago: LOM Ediciones.
- Moulian, T. (1999). *De la política letrada a la política analfabeta*. Santiago: LOM Ediciones.
- Moulian, T. (2009). *La forja de las ilusiones: el sistema de partidos, 1932-1973*. Santiago: Ediciones Akhilleus.
- Moulian, T. y Bravo, G. (1981). *La debilidad hegemónica de la derecha en el Estado de Compromiso*. En Documento de Trabajo FLACSO (n°129), 1-26.
- Moulian, T. y Torres, I. (2011). *Discusiones entre honorables: triunfos, fracasos y alianzas electorales de la derecha en Chile 1938-2010*. Santiago: Ediciones Akhilleus.
- Muñoz, V. (2016). *Historia de la UDI. Generaciones y cultura política (1973-2013)*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Pairicán, F. (2014). *Malón. La rebelión del movimiento mapuche 1990-2013*, Santiago: Pehuén Editores.

· Pérez, A. (2014). *¿UDI Popular? Los campamentos y el respaldo electoral popular de derecha. El caso de Virgina Reginato en Viña del Mar (2008-2013).* En Revista Izquierdas (Nº21), pp. 1-30.

· Pérez, A. (2016). *La UDI tras el telón*. Valparaíso: Editorial América en Movimiento.

· Pérez, A. (2018). *¡Esto no será un sindicato de alcaldes, pero…! Repensando la intermediación local-nacional a través de la historia de la Asociación Chilena de Municipalidades 1993-2005*. En Revista Izquierdas (Nº 49), 365-284.

· Pérez, A. (2019). *Clientelismo político en Chile. Historia presente de una costumbre política 1992-2012*. Tesis para optar al grado de Doctor en Historia, Universidad de Santiago de Chile.

· Pollack, M. (1999). *The new Rigth in Chile, 1973-1997*. London: Macmillan Press.

· Ponce, Santibáñez y Pinto (comp.) (2017). *Trabajadores & trabajadoras. Procesos de acción sindical en el neoliberalismo chileno 1979-2017*. Valparaíso: Editorial América en Movimiento.

· Rehren, A. (1996). *Corrupción y política local en Chile*. En Revista Ciencia Política (Nº1 y 2), pp. 141-153.

· Rubio, P. (2013). *Los civiles de Pinochet*. Santiago: Ediciones DIBAM.

· Sandoval, C. (2011). *De subterra a subsole: el fin de un ciclo*. Santiago: Quimantú.

· Siavelis, P. (1999). *Continuidad y transformación del sistema de partidos en una Transición "modelo"*. En: Drake y Jaksic. *El modelo chileno*. Santiago: LOM Ediciones.

· Thompson, E. (1989). *Costumbres en común*. España: Crítica.

· Toro, S. (2017). *El vínculo distrital de los parlamentarios: continuidad y cambio de la estructura de intermediación local en Chile*. En: Luna, J. y Mardones, R., *La columna vertebral fracturada*. Santiago: RIL Editores, pp. 177-200.

· Valdivia, V. (2006). *Crónica de una muerte anunciada: la disolución del Partido Nacional, 1973-1980*. En Valdivia, V., Álvarez, R. y Pinto, J. *Su revolución contra nuestra revolución (tomo I)*. Santiago: LOM Ediciones.

· Valdivia, V. (2008a). *Nacionales y gremialistas. El parto de la nueva derecha política chilena, 1964-1973*. Santiago: LOM Ediciones.

· Valdivia, V. (2008b). *Los guerreros de la política. La Unión Demócrata Independiente, 1983-1988*. En Valdivia *et. al.*, *Su revolución contra nuestra revolución tomo II*, Santiago: LOM Ediciones.

· Valdivia, V. (2012). *La alcaldía de Joaquín Lavín y el lavinismo político en el Chile de los noventa*. Consulta el 10 de septiembre de 2019: http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/chile_ortizdezarate.pdf

· Valdivia, V. (2013). *El Santiago de Ravinet. Despolitización y consolidación del proyecto dictatorial en el Chile de los noventa*. Revista Historia (Nº1), 177-219.

· Valdivia, V. (2016). *La derecha pinochetista en el post-pinochetismo: auge y crisis del "lavinismo", 2000-2004*. En Revista Estudos Ibero-Americanos Porto Alegre (Nº 2), 694-723.

· Valdivia, V. (2018). *La alcaldización de la política en la post dictadura pinochetista. Las comunas de Santiago, Las Condes y Pudahuel*. En Izquierdas (Nº 38), 113-140.

· Valdivia, V., Álvarez, R. y Donoso, K. (2012) *La alcaldización de la política*. Santiago: LOM Ediciones.

Revista Divergencia: Nº 13 / Año 8
Julio - Diciembre 2019
ISSN 0719-2398

· Valenzuela, A. (1977). *Political Brokers in Chile*. Durham NC: Duke U Press. Vommaro, G. y Combés, H. (2016). *El clientelismo político. Desde 1950 hasta nuestros días*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

FUENTES PRIMARIAS

· PLADECO de Concepción 2010-2013

· El Sur, 1992-2013.

· Crónica/Estrella, 1992-2013.

· Revista Actual, 1992-2013.

· Revista Aniversario de Concepción, 2 de octubre de 2002.

· Servicio electoral. SERVEL.

· Biblioteca del Congreso Nacional, consulta 29 de noviembre de 2019, en: https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Enrique_Van_Ryssel-berghe_Herrera

ENTREVISTAS

· Juan. 28 de enero de 2018.

· Rosa. 28 de enero de 2018.

· Camila. 9 de noviembre de 2018.

· Javiera. 8 de noviembre de 2018.

· Patricia. 9 de noviembre de 2018.

· Sandra. 25 de julio de 2019.

Participación obrera, democracia y elecciones. Las luchas por la democratización del Partido Obrero Socialista y del Partido Comunista. Chile, 1912-1925[1]

Workers' participation, democracy and elections. The struggles for the democratization of the Socialist Workers Party and the Communist Party. Chile, 1912-1925

Jorge Navarro López[2]

Recibido: 12 de abril de 2019 - Aceptado: 22 de mayo de 2019
Received: April 12, 2019 - Approved: May 22, 2019

Resumen

Este artículo analiza la actividad política del POS y del PCCh insertándola en las luchas por la democratización. Se enfoca en sus acciones para fomentar la participación política de la clase obrera y para denunciar y contrarrestar las acciones represivas del Régimen Parlamentario, al cual conceptualizaban como antidemocrático. A través de este análisis planteo que los socialistas-comunistas fueron uno de los principales agentes de la expansión del horizonte democrático del régimen político chileno durante el período 1912-1925.

Palabras clave: Partido Obrero Socialista, Partido Comunista de Chile, movimiento obrero, socialismo, democracia, elecciones.

Abstract

This article analyzes the political activity of the Socialist Workers' Party and the Communist Party of Chile, inserting it into the struggles for democratization. It focuses on its actions to promote the political participation of the working class and to denounce and counteract the repressive actions of the Parliamentary Regime, which they conceptualized as undemocratic. Through this analysis I propose that the socialist-communists were one of the main agents of the expansion of the democratic horizon of the Chilean political regime during the period 1912-1925.

Keywords: Socialist Workers' Party, Communist Party of Chile, labor movement, socialism, democracy, elections.

1 Este artículo fue realizado en el marco del proyecto «Historia de la democracia en Chile», del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez, y es resultado de su Programa de Incentivo a la Investigación para Tesistas Doctorales (convocatoria 2018-2019).

2 Chileno. Candidato a Doctor en Historia, Universidad de Santiago de Chile. Becario CONICYT/PFCHA. Investigador Adjunto, Centro de Estudios de Historia Política (CEHIP), Escuela de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez. jorgenavarrolopez@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Este artículo tiene como objetivo analizar el papel que le correspondió al Partido Obrero Socialista (POS)-Partido Comunista de Chile (PCCh) en la ampliación democrática en Chile entre 1912 y 1925. Cuestión social, explotación, matanzas obreras, organizaciones revolucionarias, represión, movilización populista, golpes de Estado, nueva Constitución, son todos fenómenos que subrayan el carácter conflictivo del primer cuarto del siglo XX chileno. Y si bien no son hechos exclusivos de este periodo, lo que sí sucede en aquellos años es que con la aparición de un partido declaradamente obrero, por primera vez en la historia republicana coexistieron organizaciones políticas que representaban a diferentes grupos sociales. El surgimiento del POS en 1912[3] marca el inicio de la lucha institucionalizada de los trabajadores organizados por la democratización de la sociedad chilena, ciclo que se cierra con el golpe de Estado de 1973.

La democratización es un fenómeno que no se circunscribe exclusivamente a las modificaciones legales del régimen político. Tampoco se trata de un proceso que evolucione continuamente hacia la ampliación de los derechos democráticos, como lo demuestra la historia política del siglo XX chileno. Como sostuvo el sociólogo e historiador estadounidense Charles Tilly, la historia de la democracia debe ser entendida como un proceso de lucha por la democratización, donde la característica fundamental es la continuidad de profundos conflictos entre gobernantes y gobernados por la ampliación de la protección estatal, por el incremento de la interlocución organizada y por el aumento de la participación de los ciudadanos en la política nacional. Los desplazamientos en uno u otro sentido marcan el grado de democratización de los regímenes políticos (Tilly, 2005). De acuerdo con esto, para responder a la interrogante sobre cómo se forja históricamente un sistema democrático es necesario poner el foco en las características de la participación política y en la extensión de este fenómeno hacia los distintos grupos sociales, ya que de esa manera es posible apreciar los elementos democratizadores que se expresan en el conflicto político. Esto es aún más relevante cuando se analiza a la izquierda, dado que su historia está estrechamente vinculada a las luchas por alcanzar mayores grados de justicia social mediante la ampliación de los márgenes de la democracia (Eley, 2003).

Durante el ciclo 1912-1925 tanto los elementos «incluyentes» como los «excluyentes» del régimen político chileno expresan la conformación de lo que podría comprenderse como una nueva comunidad política. Ejemplos de lo primero son la eliminación en el último cuarto del siglo XIX de los requisitos patrimoniales para participar en las elecciones[4], la relativamente amplia libertad de prensa que permitía a las organizaciones dar a conocer sus programas y reivindicaciones y la inexistencia de requisitos legales para la formación de sindicatos y partidos políticos que posibilitaban a las diversas orgánicas obreras desenvolverse en el espacio político. Asimismo, tanto la aparición de los obreros en el discurso de los partidos oligárquicos como la institucionalización de la interlocución entre los trabajadores organizados y los organismos del Estado dan cuenta de los elementos «incluyentes».

Por otra parte, y aunque parezca paradójico, los elementos «excluyentes» también reflejan la existencia de una nueva comunidad política. Como ha planteado Verónica Valdivia (2017), durante este periodo la represión en contra de las organizaciones obreras (partidos

3 El Partido Obrero Socialista fue fundado por un grupo de obreros a mediados de 1912 en Iquique, los que se escindieron del Partido Democrático debido a que rechazaban su actuar sistémico. El fundamento del nuevo partido fue la puesta en práctica de una política de orientación clasista y socialista. A comienzos de 1922 este partido modificó su nombre a Partido Comunista de Chile. En este trabajo utilizaré la denominación «socialista» para referirme a los militantes y dirigentes del periodo 1912-1922 y «comunistas» para el periodo siguiente. Se trata solo de una distinción nominal, dado que el cambio de nombre en 1922 no significó una modificación ni de sus prácticas orgánicas ni de su estrategia política.

4 En 1888 se eliminaron completamente en Chile los requisitos patrimoniales del derecho a sufragio, estableciéndose como únicos requisitos ser varón, mayor de 21 años, saber leer y escribir y estar inscrito en los registros electorales del departamento correspondiente al domicilio. En 1935, las mujeres pudieron votar por primera vez en las elecciones municipales. Recién en 1949 se les amplió ese derecho a las elecciones parlamentarias y presidenciales (Nazer y Rosemblit, 2000).

y sindicatos liderados por socialistas y anarquistas) sufrió una modificación –una «modernización» de los métodos coercitivos-, transitando desde las matanzas del ejército hacia la sistematización de las prácticas represivas a través de mecanismos legales y de la persecución selectiva. Estos fenómenos, que expresan el rechazo a la propuesta de los obreros anticapitalistas, también dan cuenta de una confrontación política y social, indicador en este caso de la existencia de una pluralidad de ideas e intereses que operaba en el régimen político del primer cuarto del siglo XX. Se trataría, siguiendo la propuesta de Valdivia, de un periodo marcado por una «reformulación hegemónica» donde se combinan el consenso y la coerción (2017, pp. 24-25).

Teniendo en cuenta ese escenario de reformulación hegemónica, este artículo profundiza en el análisis de las acciones de los obreros socialistas y comunistas por expandir el horizonte democratizador del régimen político chileno, en fenómenos como las propuestas y alcances de un partido obrero, sus definiciones en torno a la democracia y la forma en que el POS-PCCh invocaba a la participación electoral de los trabajadores. El papel que jugaron los trabajadores organizados en la democratización ha sido tradicionalmente desconocido por la historiografía conservadora. Mario Góngora, en su influyente ensayo histórico, menosprecia las acciones de los socialistas-comunistas y su capacidad para influir en la ampliación democrática del Estado, a diferencia de la potencia formativa que otorga a figuras como Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez (1981, p. 88). En sintonía con esta interpretación, Gonzalo Vial señala que la irrupción política de los trabajadores y sus luchas reivindicativas serían una de las causas del quiebre del «consenso social nacional» que puso en jaque al Régimen Parlamentario (1987, p. 850). Así, Vial califica la actividad política socialista-comunista del primer cuarto del siglo XX como errática, oportunista y contradictoria más que democratizadora (1986, pp. 198-203).

Menos focalizados en los «grandes personajes», otros autores han destacado el rol que tuvieron las instituciones en la ampliación de los límites democráticos de la primera mitad del siglo XX, ya sea enfocándose en los organismos estatales y en la legislación laboral (Yáñez, 2008) o en las políticas que integraron a los trabajadores al mercado y al espacio público durante el periodo del Frente Popular (Silva y Henríquez, 2017). Esta última interpretación es posible encontrarla también en el ensayo de Marcelo Casals que revisa los conceptos de democracia y dictadura en el Chile republicano. Para este autor, las nuevas formas de participación democrática tendrían su origen en la Constitución de 1925 y se habrían cristalizado en una «noción democrática-popular» sólo gracias al triunfo electoral del Frente Popular en 1938 (Casals, 2017, pp. 342-343). De esta forma, el autor no se refiere a lo sucedido en la década previa a la crisis terminal del Régimen Parlamentario, ya que el texto no integra al análisis el ciclo de reconstrucción del movimiento obrero que se produjo en la primera mitad de la década de 1910, ni tampoco la actuación de los socialistas-comunistas durante 1912 y 1925 que perseguía el mejoramiento de las condiciones sociales y políticas de la clase obrera.

A diferencia de lo planteado por estos trabajos, en este artículo propongo que los socialistas-comunistas influyeron positivamente en la ampliación democrática que experimentó Chile durante el primer cuarto del siglo XX. El punto inaugural de este fenómeno fue 1912, cuando surge el POS y comienza a desarrollar –entre los trabajadores y en contra de los sectores dominantes- su propuesta de regeneración de la democracia. Con este fin, analizo el proceso de democratización que se experimentó entre 1912 y 1925 concentrándome en los socialistas-comunistas y sus esfuerzos por posicionar en el espacio público lo que comprendían como los intereses sociales, económicos y políticos de la clase obrera. Las acciones del POS no se abocaron exclusivamente al mundo de los trabajadores, sino que buscaron incidir en la democratización del sistema político a través de un partido que representara a los obreros y sus aspiraciones de mejoramiento material y, además, que disputara los cargos de representación exigiendo la eliminación de las prácticas fraudulentas

en las elecciones. Por ello, en este trabajo argumento que la historia de este partido –y de las organizaciones en las cuales influyó- es un factor esencial para entender la ampliación democrática que ocurrió en Chile durante el siglo XX.

El anterior planteamiento discute con la sobrevaloración del Frente Popular como un hito democrático en la historia del PCCh y que tiene como consecuencia la caracterización de lo realizado en las décadas anteriores como una especie de prehistoria de la izquierda, una hipótesis que caracterizó a la historiografía «marxista clásica» y que, con matices, se puede encontrar también en la producción de Tomás Moulian. Este autor señala que hasta 1933, fecha en que los comunistas adoptaron la estrategia de los «frentes populares», su actuación se caracterizó por mantenerse al margen de la escena política, convirtiéndolo de hecho en un «partido aislado» (2018, p. 106). Esta hipótesis, sustentada en la lectura de los lineamientos estratégicos de los partidos políticos y su posición ideológica frente al Estado, no toma en cuenta lo realizado por los socialistas-comunistas desde 1912 en las esferas sindical y política, que como veremos en este trabajo influyeron en la reconfiguración del régimen democrático. En este sentido, me parece necesario recuperar la advertencia que hace décadas realizaron Perry Anderson (1984) y Eric Hobsbawm (2010) de que el estudio de los partidos comunistas debe superar los límites de su «línea política» para advertir así las consecuencias históricas que tienen sus acciones.

Finalmente, respecto a la relación entre socialismo y democracia en el POS, es importante destacar el trabajo de Jaime Massardo sobre el tránsito intelectual y político de Luis Emilio Recabarren. A pesar de centrarse en el análisis de la concepción política del líder socialista-comunista como una versión subalterna del socialismo de la IIª Internacional, el trabajo de Massardo (2008) tiene el valor de posicionar históricamente sus planteamientos sobre la democracia, por ejemplo, al establecer los rasgos que Recabarren heredó a su nueva tienda política tras su militancia en el Partido Democrático (PD). Igualmente interesante es el ensayo de Augusto Varas (1988) que analiza la relación de ambos conceptos en el ideario recabarrenista, señalando la existencia de rasgos utópicos que convivían con un rudimentario marxismo. Para ambos autores, democracia y socialismo se complementan en la propuesta política de Recabarren y se nutren de los mecanismos que existían en la época, especialmente, la utilización del sufragio con perspectiva socialista.

Intentado ampliar lo señalado por Massardo y Varas hacia el conjunto de este partido y de sus acciones políticas durante el período 1912-1925, este artículo busca complementar estas ideas a través del análisis de fuentes documentales del período y de bibliografía especializada sobre el POS-PCCh. Con ese fin, está dividido en tres secciones que estudian el aporte de las acciones de los socialistas-comunistas a la democratización del régimen político chileno del primer cuarto del siglo XX. En la primera parte, defino las características del POS y analizo las implicancias de su inserción en el régimen político como un partido que disputaba la representación y dirección política de la clase obrera. El segundo apartado busca responder la pregunta sobre cómo entendía a la democracia este partido. Si bien los socialistas no dedicaron grandes esfuerzos a la definición de este concepto, su práctica cotidiana entrega luces sobre una comprensión de la democracia estrechamente vinculada a la distribución igualitaria de los recursos materiales, al mejoramiento de las condiciones laborales y a la ampliación de los espacios de participación política. La última sección, analiza las prácticas electorales de socialistas-comunistas con el objetivo de situarlo en el contexto del sistema electoral del primer cuarto del siglo XX. A pesar de su constante crítica al fraude en las elecciones, las comprendieron como momentos de vital importancia para avanzar en mayores grados de democracia, principalmente, respecto al voto de los trabajadores y a la posibilidad de reforzar legalmente los logros conseguidos en materia sindical.

EL PRIMER PARTIDO OBRERO: DEFINICIONES Y PROYECCIONES

Los socialistas no fueron los únicos ni los primeros en invocar la participación política de los trabajadores. A fines del siglo XIX, el balmacedismo tarapaqueño, con el fin de recomponerse políticamente de la derrota en la guerra civil de 1891, levantó un discurso en que apelaba al obrero como sujeto político (Pinto, 2007a). Más conocida aún es la estrategia populista de Arturo Alessandri para movilizar electoralmente a los trabajadores, fenómeno crucial para su elección como presidente de la República en 1920 (Valdivia, 1999; Pinto y Valdivia, 2001, pp. 105-151). A lo anterior hay que agregar la labor realizada desde 1887 por el PD, a través de su propuesta de politización y emancipación popular (Grez, 2016). La diferencia fundamental entre estas acciones de politización y la que proponían los socialistas se encontraba en el origen social excluyente que reclamaban estos últimos para su organización, pues consideraban que sólo de esta manera se podían mejorar las condiciones de vida de los sectores populares. Este planteamiento se relacionaba directamente con la idea de la necesaria vinculación entre las acciones políticas y sindicales, de ahí que el diagnóstico de los socialistas derivara en la imprescindible autonomía política de los obreros. Y si bien cuestionaban las características de la democracia, por entenderla como una institución capitalista, sostenían que era necesario utilizar los medios políticos disponibles. Esta contradicción aparente fue lo que le permitió al POS constituirse como una novedad en el espacio político, dado que entre su fundación y la crisis del sistema oligárquico de 1924 logró combinar de forma exitosa una propuesta «radical» en materia económica (anticapitalista), con una propuesta «reformista» en términos políticos (participación en las elecciones).

Desde su creación en 1912, el POS se planteó como tarea principal la trasformación socialista de la sociedad. Para cumplir dicho objetivo enfocó su acción en la organización sindical de los trabajadores y en la ampliación de la restringida democracia chilena. En estos planos residía la razón de ser del partido: una organización política convocada y formada por obreros con perspectivas socialistas. Para los fundadores del POS no existían contradicciones, ni teóricas ni prácticas, entre socialismo y democracia, debido a que hasta antes de la Gran Guerra de 1914 los partidos socialistas que le servían de ejemplo habían actuado con cierto éxito en las democracias liberales, tanto en Europa como en América Latina. En Alemania, Bélgica y España, por ejemplo, cuando no eran ilegalizados, los partidos socialistas participaban regularmente de las elecciones a la vez que organizaban grandes centrales obreras que se declaraban abiertamente anticapitalistas (Eley, 2003, pp. 64-84). Un ejemplo más cercano, el Partido Socialista de Argentina (PSA), congregó desde 1896 a un importante número de centros políticos obreros, base sobre la cual consiguió elegir en 1904 a Alfredo Palacios como el primer diputado socialista de América. Todos estos partidos integraban la IIª Internacional Socialista (fundada en 1889), organización transnacional que tenía como una de sus principales reivindicaciones la ampliación de los derechos políticos de los trabajadores. Era en este sentido que los socialistas chilenos se sentían también demócratas.

Aunque les incomodara, también podían sentirse demócratas de otra manera: la mayoría de los obreros que fundaron el POS habían militado anteriormente en el PD. Era este un linaje que les incomodaba, porque la fundación del partido supuso un quiebre orgánico e ideológico con su antigua tienda política. El primer indicio de la formación del POS fue una carta enviada a Iquique por un grupo de trabajadores salitreros que justificaba la creación del nuevo partido debido a que «el nombre de la Democracia lo han desmoralizado los dirigentes del Partido verificando actos que no coinciden con nuestras aspiraciones» (*El Despertar de los Trabajadores*, Iquique, 28 de mayo, 1912). Unas semanas después, la declaración definitiva de la separación señalaba que el «PD, en su acción durante toda su existencia, se ha unido a los partidos de la clase capitalista y enemigos del progreso de los trabajadores [...] mediante pactos comerciales», por ello, «en cada campaña electoral, el PD ha contribuido a consolidar el poder de la burguesía capitalista». Además, denunciaban que el PD «jamás se ha preocupado de organizar a los trabajadores para la defensa de sus

intereses económicos» (*El Despertar de los Trabajadores*, Iquique, 6 de junio, 1912). Con estos argumentos, los socialistas dedicaron buena parte de sus primeras acciones a desmarcarse de los demócratas. Como se trataba de trabajadores ilustrados y modernos, utilizaron la prensa y la agitación política para descalificar los fines y las acciones del PD. Ideológicamente, remarcaban la inexistencia en este partido de perspectiva clasista. Moralmente, le recriminaban sus prácticas reñidas con el modelo que los socialistas esperaban de las organizaciones obreras, como el consumo de alcohol, la venalidad y el patriotismo. Y, políticamente, rechazaban las alianzas entre los demócratas y los partidos oligárquicos, así como su participación en el cohecho.

Debido a que sus acciones se dirigían a ganar espacio en el movimiento obrero, los socialistas también rivalizaron con los anarquistas. El punto más controversial entre ambos era, precisamente, la política. Por considerarla una práctica autoritaria los anarquistas chilenos rechazaban la organización obrera en partidos políticos y, por extensión, la participación en las elecciones, por estimar que la acción parlamentaria no era más que una ficción que fortalecía la explotación capitalista (Grez, 2007). Los socialistas rivalizaban con ellos argumentando que el anarquismo no era más que un ideal utópico, debido a que no podían existir sociedades sin organización política. Y si bien compartían su aspiración de destruir el Estado capitalista y reemplazarlo por una organización social sin jerarquías, sostenían que ello se lograría luego de un largo tránsito y que, en consecuencia, debían utilizarse las herramientas de la democracia chilena ya fuera para instalar en el debate político las demandas obreras o para conseguir mejoras inmediatas para los trabajadores.

Al conjunto de estas discordias, que tenían la finalidad de instalar al POS en el espacio político, las he denominado en otro trabajo como «estrategia de diferenciación» (Navarro, 2017). Si bien esta estrategia no surgió desde un congreso programático o desde una discusión de sus principales dirigentes, en la práctica fue desarrollada por la totalidad de las secciones socialistas como una forma de configurar y establecer un espacio político propio.

El primer nivel de esta diferenciación (respecto a los demócratas y a los anarquistas) se produjo en el seno del movimiento obrero. El segundo nivel, tenía el propósito de disputar a los sectores dominantes el contenido y significado de la democracia y de la participación política de los trabajadores. Como es posible anticipar, la concepción de democracia de los socialistas se enfrentaba a la que circulaba en el resto de los partidos del régimen político chileno. Un par de años antes de fundar el POS, Luis Emilio Recabarren pronunció un discurso donde evaluaba negativamente los primeros cien años de Chile como república independiente, definiendo a la democracia chilena como un sistema político excluyente. Según su punto de vista, quienes sufrían mayormente esta exclusión eran las «clases populares», las que vivían «todavía esclavas, encadenadas en el orden económico, con la cadena del salario» y «en el orden político, con la cadena del cohecho, del fraude y la intervención, que anula toda acción, toda expresión popular». Recabarren culpaba de esta situación a la burguesía: «¡Ella es la que ha degradado al pueblo! ¡Ella la que lo ha corrompido políticamente! Ella la que ha destrozado su dignidad ciudadana y ha envilecido la soberanía. Ella ha sido la fundadora del comercio electoral y la que ha inducido al pueblo a este miserable comercio» (Recabarren, 2010, pp. 38-41).

La concepción de que la sociedad capitalista estaba dividida en dos clases antagónicas –burguesía y proletariado- y que su enfrentamiento daba lugar a la lucha de clases fue la que condujo a la formación del POS en 1912, pues a diferencia de las luchas que libraron los artesanos de fines del siglo XIX y que dieron forma al «liberalismo popular» del que los demócratas se sentían herederos (Grez, 1998), los socialistas no fundaban sus objetivos exclusivamente en la ampliación de los derechos políticos. Quienes abandonaron la militancia demócrata en 1912, consideraban que ese partido había adoptado la forma de hacer política del parlamentarismo, desatendiendo con ello la preocupación por las condiciones materiales de los trabajadores: «Nuestro ideal, la completa transformación de la sociedad

capitalista en colectiva o común. [...] [Desde ahora] en adelante no nos arrastrará a la lucha el caudillaje político [...] Y si resolvemos apartarnos de caudillos y capitanes y guiarnos [...] con sincera conciencia, triunfaremos en nuestro ideal cumpliendo las palabras del maestro: *La emancipación de los trabajadores es obra de los trabajadores mismos* (*El Despertar de los Trabajadores*, Iquique, 20 de abril, 1912. Énfasis en el original). Como sucedió en otros lugares, la influencia del marxismo fue fundamental para adoptar esta posición[5]. Así, sobre la base de la lectura clasista de la sociedad, el PD era un partido del siglo XIX y el POS uno del siglo XX. Uno perseguía la emancipación «popular» y el otro la emancipación del «proletariado». En otras palabras, para los socialistas de la segunda década del siglo XX «pueblo» no era sinónimo de «obrero»[6].

Esta distinción es significativa, pues, el diagnóstico de los socialistas sobre la realidad política chilena sostenía que hasta la creación de su partido no existían representantes genuinos de la clase obrera, de ahí su definición del sistema político como oligárquico e ilegítimo. Desde comienzos del siglo XX, la politización de las condiciones materiales de los sectores populares había transformado a la «cuestión social» en un tema de relevancia pública en el que participó el conjunto del horizonte político[7]. Por lo tanto, la irrupción de los obreros no se realizó sólo como un agregado en los discursos de los políticos, sino que se hizo sobre la base del reconocimiento de las deplorables condiciones de los trabajadores urbanos y mineros. Puede entenderse la irrupción del POS en 1912 como un efecto de este proceso, y, posterior a esa fecha, como el factor catalizador de la trascendencia política que alcanzaron los trabajadores durante el siglo XX.

Como señalé, el POS era un partido predominantemente obrero. En este punto se diferenciaba de otros partidos socialistas que integraban la IIª Internacional, como el Partido Social Demócrata alemán y el PSA. Este último había sido organizado a fines del siglo XIX por el médico Juan B. Justo como un partido de ideas avanzadas que perseguía el mejoramiento de las condiciones de los obreros mediante modificaciones legales, pero que no promovía la organización sindical. Consecuente con esta orientación, Justo enfocó la acción de los socialistas en la lucha electoral y, por ello, privilegió la organización de los obreros en barrios y no en gremios. Se trataba de un partido que invocaba a los obreros, pero que no promovía la lucha en los lugares de trabajo. Esta posición hizo crisis en 1918, cuando el ala izquierdista y obrerista abandonó el PSA fundando el Partido Socialista Internacional, que dos años más tarde cambió su nombre a Partido Comunista[8].

Al contrario de sus pares argentinos, la militancia socialista estaba compuesta casi exclusivamente por obreros. En Tarapacá y Antofagasta, a una mayoría de obreros salitreros se sumaban pescadores, ferroviarios, portuarios, carreteros, panaderos y tipógrafos, oficio este último de su principal dirigente, Luis E. Recabarren (Pinto y Valdivia, 2001; Pinto, 2013). En Valparaíso y Santiago militaban ferroviarios, tranviarios, pintores, carpinteros, cigarreras/os, zapateras/os, fosforeras/os, obreras textiles, azucareros, cementeros y, luego de 1920, campesinos[9]. El carácter obrero de los militantes socialistas-comunistas fue

5 Sobre el papel del marxismo en el pensamiento de Recabarren, véase Massardo, 2008, pp. 211-245. Para este fenómeno en el socialismo inglés y argentino, véase Bevir, 2000 y Tarcus, 2013, respectivamente.

6 Polemizando con la datación del «origen» de la clase obrera británica de E. P. Thompson, Eric Hobsbawm plantea esta distinción en su artículo «La formación de la clase obrera, 1870-1914» (1987, pp. 238-263).

7 Sobre la politización de la «cuestión social», véase Pinto, 1998, pp. 251-312. Sobre las visiones críticas de los intelectuales de la época del centenario, véase Gazmuri, 2001. Para una visión con mayor amplitud histórica sobre el fenómeno de la «cuestión social», véase Grez, 1995.

8 Las controversias entre los socialistas argentinos proclives a la orientación «política» y quienes defendían la preeminencia de la organización sindical llegaron a su punto límite cuando los parlamentarios socialistas votaron a favor de la declaración de guerra a Alemania. Es por esto que el ala izquierda utilizó el adjetivo «internacional» para nombrar a su nuevo partido (Camarero, 2015). Para más antecedentes del PSA, véanse Camarero y Herrera, 2005 y Tarcus, 2013. Sobre los comunistas argentinos, véase Camarero, 2007.

9 Estos son los gremios donde los socialistas lograron una sostenida influencia, formando sindicatos y dirigiendo huelgas. Esta información fue obtenida de la revisión de los siguientes periódicos: *La Razón*, Santiago, 1912-1914; *La Voz Socialista*, Santiago,

comúnmente resaltado por sus medios de prensa, enfatizando también en la formación autodidacta de sus dirigentes. Luego del triunfo comunista en la elección de 1925, una nota titulada «Los hijos del esfuerzo» se enorgullecía de que todos sus parlamentarios electos fueran de extracción obrera: «Todos sin excepción se deben lo que son a sí mismos y de ello están orgullosos porque tendrán ocasión de demostrar a la burguesía que, a pesar de haber carecido de los medios necesarios para instruirse, su capacidad es sin lugar a duda buena y correcta» (*El Comunista*, Antofagasta, 19 de diciembre, 1925).

Esta característica permitió que la participación política y sindical no entrara en contradicción con los fines y acciones del partido, como sucedía en el PSA. Los obreros socialistas chilenos se organizaban a nivel gremial y barrial, para cubrir los objetivos sindicales y políticos al mismo tiempo. Esta forma de militancia se expresa en el llamado a la acción de un socialista antofagastino ante la inminente apertura de los registros para las elecciones parlamentarias de 1921: «Los socialistas, especialmente, deben ser incansables en conversarles a sus compañeros de trabajo de la necesidad de prepararse para hacer del derecho de voto el arma más formidable utilizada en nuestro provecho» (*El Socialista*, Antofagasta, 8 de octubre, 1920). Consecuentemente a sus pretensiones, cada sección contaba con un Comité Electoral que se encargaba exclusivamente de la inscripción y del control del cohecho en los días de elecciones. Esta disposición orgánica les permitía ganar espacios en los gremios ya organizados, lo que a su vez producía conflictos con obreros de otras orientaciones ideológicas, especialmente con los anarquistas (Navarro, 2017, pp. 76-89). Los mutualistas también criticaron ampliamente a los socialistas por llevar la política a las organizaciones obreras. Aunque desde posturas ideológicas diferentes, anarquistas y mutualistas coincidían con la opinión del conjunto de los «partidos históricos» (conservadores, liberales, balmacedistas, radicales y demócratas) que resaltaban lo pernicioso de la politización obrera que lideraba el POS.

La preocupación sobre el despliegue de los socialistas entre los trabajadores se extendió a todo el arco ideológico del régimen político. En 1921, buena parte de la Convención del Partido Conservador trató sobre el problema obrero y lo perjudicial de las acciones del POS. Uno de los conferencistas señalaba que en Santiago se hacía «propaganda socialista casi sin contrapeso», debido a lo cual el «pueblo lee poco los grandes diarios y los lee con prevención suspicaz, porque los considera portavoces de la burguesía y de lo que llama el capitalismo» (Partido Conservador, 1921, p. 99). Este pesimista diagnóstico hacía referencia a la circulación de periódicos como *La Federación Obrera* (1921-1924), que desde agosto de aquel año el POS publicaba en la capital convirtiéndose en el principal órgano de propaganda del partido y de la Federación Obrera de Chile (FOCh). Este periódico fue el primero que el partido pudo mantener con regularidad en Santiago[10], permitiéndole posicionarse en el centro del debate político del país y aumentar la resonancia pública de sus propuestas y acciones. *La Federación Obrera* se vio beneficiada por casi una década de experiencia del POS en el campo de la prensa obrera[11] y también por una densa red asociativa al alero del partido y la FOCh.

La inquietud de la Convención del Partido Conservador sobre la penetración del socialismo entre los trabajadores no se reducía a la circulación de sus periódicos, los que desde

1913; *Acción Obrera*, Santiago, 1916; *La Bandera Roja*, Santiago, 1919; *La Federación Obrera*, Santiago, 1921-1922; *La Defensa Obrera*, Valparaíso, 1913-1915; *El Socialista*, Valparaíso, 1915-1918; *La Comuna*, Viña del Mar, 1919-1921. Sobre el desarrollo del socialismo en el movimiento obrero de Valparaíso y Santiago, véase Navarro, 2017, pp. 61-96 y 117-162, respectivamente. Para un estudio de las acciones socialistas respecto a la sindicalización campesina en la década del veinte, véase Navarro, 2019.

10 Desde su fundación en 1913, la sección socialista de Santiago enfrentó grandes dificultades para funcionar, debido a los constantes conflictos entre sus militantes. Es por ello que no pudo sostener en el tiempo la publicación de un periódico. Previo a La Federación Obrera publicaron por breves períodos *La Voz Socialista* (1913), *Acción Obrera* (1916) y *La Bandera Roja* (1919). Sobre el POS en la capital entre 1912 y 1916, véase Navarro, 2017, pp. 117-162.

11 Los periódicos socialistas más relevantes son El Despertar de los Trabajadores (Iquique, 1912-1926), El Socialista (Antofagasta, 1916-1922), El Comunista (Antofagasta, 1922-1926, ex El Socialista), Justicia (Santiago, 1924-1927, ex La Federación Obrera), La Defensa Obrera (Valparaíso, 1913-1915), El Socialista (Valparaíso, 1915-1918), La Vanguardia (Valparaíso, 1919-1920), La Comuna (Viña del Mar, 1919-1921), La Jornada Comunista (Valdivia, 1922-1926) y El Socialista (Punta Arenas, 1913-1918). Para más información de la prensa obrera del periodo, véase Arias, 2009.

1919 ya venían siendo sistemáticamente objeto de represión y censura (Donoso, 2016). El último tercio de la década de 1910 estuvo marcado por una serie de hechos que pusieron en el centro del debate público las reivindicaciones obreras. En 1918 comenzó un ciclo de crisis económicas que derivó en un explosivo aumento de la cesantía y de los precios de los productos básicos y de los arriendos. Para enfrentar este contexto, los socialistas ayudaron a organizar la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional (AOAN) que reunió a cientos de miles de obreros a lo largo del país (DeShazo, 2007, pp. 231-238; Salazar, 2009, pp. 40-51; Grez, 2011, pp. 91-101) y tuvo como contraparte una fuerte represión hacia el movimiento obrero (Pinto, 2007; Álvarez, 2016; Valdivia, 2016; Craib, 2017). Sumado a todo lo anterior, en 1917 el POS había conseguido modificar los estatutos de la organización de los ferroviarios (Gran Federación Obrera de Chile) para permitir el ingreso de trabajadores de distintos gremios, transformando con ello su carácter sectorial y mutualista. La influencia que los socialistas alcanzaron en la FOCh se hizo más clara hacia 1919, cuando se convirtió en una central sindical de alcance nacional con perspectiva anticapitalista (Grez, 2011, pp. 81-88; Pinto, 2013, pp. 171-187).

Este movimiento de masas «por abajo» tuvo su correlato de politización «por arriba». Arturo Alessandri fue quien con mayor convicción intentó conectar la política oligárquica con las aspiraciones populares. En 1915 Alessandri invocó la participación electoral de los trabajadores a través de un discurso en clave populista, sin dejar de lado las prácticas que caracterizaban al régimen político como el cohecho y la violencia. Gracias a esto, venció al balmacedismo tarapaqueño y logró un cupo en el Senado. Su vinculación con las masas fue mucho más clara en la campaña presidencial de 1920, cuando consiguió un estrecho triunfo sobre el candidato conservador Luis Barros Borgoño (Valdivia, 1999). A la espera de la ratificación de su victoria en las elecciones presidenciales, Alessandri se volcó a una intensa gira de agitación política para demostrar al conjunto de los actores políticos su capacidad de movilización. Para ello, su equipo organizó banquetes privados con los representantes locales del poder económico y político. Además, sumó grandes manifestaciones populares dirigiéndose a los concurrentes con un discurso que realzaba el papel que debían jugar las organizaciones obreras y las virtudes de la democratización. En Copiapó, Alessandri desplegó su discurso de conciliación social señalando que «su ideal era que el más modesto representante de la democracia pudiera elevarse sin hacer descender al de arriba» (*El Mercurio*, Santiago, 9 de noviembre de 1920). Unas semanas después asistió en Antofagasta a un mitin al que concurrieron más de diez mil personas y escuchó desde los balcones de la Intendencia los discursos de los oradores principales, que fueron militantes del POS y la FOCh (*El Mercurio*, Santiago, 19 de noviembre de 1920). Con acciones de este tipo, Alessandri vinculaba la legitimidad del régimen político (y de su elección) al apoyo de los trabajadores.

En este contexto, el POS mantuvo una posición ambivalente: planteó su rechazo al candidato liberal por considerarlo un miembro de la oligarquía gobernante, pero reconoció el valor político que podía significar la concreción de su programa de reformas. Rápidamente el gobierno de Alessandri demostró los límites de su propuesta y los socialistas comenzaron una férrea campaña en su contra. Luego de la agitación campesina de 1920 propiciada por los socialistas, Alessandri dirigió una carta a los terratenientes agrupados en la Sociedad Nacional de Agricultura donde condenaba la acción de estos, a los que consideraba «elementos indeseables» y «sembradores de odio que entorpecen la campaña de concordia, de armonía y de amor que vengo predicando» (*El Agricultor*, Santiago, mayo de 1921). El POS respondió con una declaración pública en la que se leía: «nada ni nadie nos detendrá en nuestra obra de redención nacional. Llevaremos luz donde haya ignorancia. Nuestra propaganda será de amor, pero será de crítica mortal para los que, ciegos ante la realidad del presente, aún no quieren ver que el hombre ha nacido para una misión más elevada que la de ser esclavo de otros hombres». Y finalizaban con una abierta declaración de su posición política: «En todo lo que signifique restablecer la prosperidad de la nación estaremos a vuestro lado, pero siempre nos encontraréis a vuestra izquierda» (*La Comuna*, Viña del Mar, 21 de mayo, 1921).

Para el POS, la actitud del presidente demostraba tanto el peso político que habían adquirido los trabajadores como la imposibilidad de que los sectores dominantes produjeran un cambio positivo en sus condiciones. Además, su rechazo a Alessandri tenía como fundamento una concepción de democracia estrechamente vinculada al socialismo, posición que venía divulgando entre los trabajadores desde su fundación en 1912 y que a comienzos de la década de 1920 se expresaba en los logros que había cpmseguido en materia sindical y política, como la dirección y radicalización de la FOCh y la elección de sus primeros diputados en 1921: Luis Emilio Recabarren y Luis V. Cruz.

«LA DEMOCRACIA: ¿QUÉ ES Y CÓMO SE REALIZARÁ?»

El título de este apartado es una paráfrasis del conocido folleto *El Socialismo ¿Qué es y cómo se realizará?* escrito por Recabarren en 1912 e intenta expresar dos asuntos: el tipo de reflexión que era común entre los militantes del POS y la escasa atención prestada a una definición clara de democracia. Este texto ha sido considerado como uno de los primeros intentos por sistematizar la propuesta socialista, proyectándola políticamente y conectándola con la realidad internacional. Tal fue su importancia entre los socialistas, que en 1915 constituyó la base de la declaración de principios que emanó del primer congreso del partido (Pinto, 2013, pp. 150-151). A pesar de sus fortalezas, se trata de un escrito en que las definiciones teóricas son más bien limitadas y, como un producto de la IIª Internacional, los análisis históricos son mecanicistas. A lo largo del texto, el «socialismo» es tanto un principio ideológico, una teoría sociológica, un conjunto de medios políticos y una forma de vida. A pesar de estas indefiniciones, hay que ponderarlo de acuerdo con su contexto y a sus propósitos, pues fue pensado como un insumo ideológico de divulgación y de fácil acceso para los trabajadores.

Lo que sucede con este folleto es aplicable a la definición de democracia que manejaban los socialistas y, también, a la que circulaba en la opinión pública de la época. Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX no existía una definición clara de este concepto que fuera compartida por el conjunto de los actores políticos chilenos. A grandes rasgos se la identificaba con el régimen republicano y como el opuesto de la autocracia presidencial, lo que tampoco significaba horizontalidad de derechos sociales y políticos (Casals, 2017). Esta indefinición se aprecia igualmente entre los socialistas. Volviendo al texto de Recabarren, la «democracia» aparece allí tanto como adjetivo del Estado republicano, como lo contrario a despotismo y como un régimen político moderno. Lo que sí se puede extraer de la lectura de este escrito y de reflexiones similares en su prensa, es que los socialistas comprendían a la democracia como el régimen político de su época, es decir, como la manifestación histórica y política del capitalismo. Esto queda más claro aún con las reiteradas referencias al feudalismo como una etapa previa y con características todavía más restringidas de participación política que la democracia capitalista (por ejemplo, aludiendo al régimen al que se enfrentaron las revoluciones rusas de 1905 y 1917). En determinadas coyunturas, los socialistas utilizaban también la imagen del feudalismo para caracterizar al caciquismo balmacedista en Tarapacá, a la restricción de las libertades públicas y al poder de los terratenientes en el área rural. Este último tema tiene mayor presencia entre 1919-1924, periodo en que los socialistas de la zona central llevaron a cabo un activo proceso de movilización mediante la organización sindical y política de los trabajadores rurales (Navarro, 2019).

A las dificultades para encontrar una definición precisa de este término entre los socialistas hay que sumar una razón práctica: desde fines del siglo XIX «democracia» era también el término para referirse al PD. En el marco de la estrategia de diferenciación de los socialistas respecto de los demócratas, la evocación de dicha palabra estaba cargada de todos los aspectos que constantemente rechazaban en su prensa. Así, en el ámbito de los obreros organizados, «democracia» podía no ser más que una manera para referirse a los demócratas y, por lo tanto, su utilización no hacía alusión ni a la democratización ni a las

acciones políticas a favor de los sectores populares. En este sentido, la democracia podía ser considerada también por los socialistas como una de las manifestaciones de la forma de hacer política de los «partidos históricos».

La definición de democracia que manejaba el POS estaba en sintonía con el ambiente ideológico del cual se nutría este partido y gran parte del movimiento socialista internacional: el marxismo. Al interior de este campo intelectual la democracia no fue uno de los tópicos preferentes de análisis, a diferencia de lo realizado tanto por Marx y Engels como por sus seguidores respecto a las bases materiales del capitalismo. Coherente con esta forma de pensar el desarrollo histórico de las sociedades, la democracia (comprendida a grandes rasgos como administración burocrática del Estado y sufragio universal) era considerada por los marxistas de fines del siglo XIX y de las primeras décadas del XX como la forma política óptima para el desenvolvimiento de las relaciones de producción capitalista y, en consecuencia, como la expresión política de los intereses burgueses (Moore, 1997, pp. 69-93). Esta caracterización negativa, sin embargo, no condujo a una propuesta alternativa. Es más, cuando el marxismo se convirtió en la base teórica de los partidos socialistas europeos, la democracia burguesa fue aceptada como el escenario donde debía desarrollarse la política del movimiento obrero. El Partido Social Demócrata alemán fue la expresión más acabada de esta concepción que, siguiendo los lineamientos de Karl Kautsky sobre la «espera revolucionaria», afirmaba que los marxistas debían participar de las democracias parlamentarias presionando por reformas que favorecieran a los trabajadores, mientras aguardaban que se cumplieran determinadas condiciones económicas que permitirían la caída del capitalismo (Priestland, 2010, p. 71). Este tipo de comprensión fue dominante hasta el inicio de la Gran Guerra y comenzó a modificarse con el triunfo bolchevique de 1917, cuando la acción revolucionaria demostró empíricamente que la transición entre capitalismo y socialismo podía ser más breve de lo que se pensaba hasta ese momento.

Los socialistas chilenos no escaparon a esta forma de entender la política y la democracia. Una de sus consecuencias fue la valoración positiva de los cargos de representación (municipales o legislativos). Por ejemplo, los candidatos socialistas de Valparaíso y Viña del Mar sostenían en 1918 que era necesario reafirmar legislativamente las conquistas obtenidas en materia laboral, es decir, reforzar legalmente los logros sindicales (*El Socialista*, Valparaíso, 23 de febrero, 1918). Por su parte, los socialistas de Antofagasta explicitaban que su propuesta era aplicar «GRADUALMENTE, a medida del desarrollo general de la civilización, los puntos de su programa», manifestando que la realidad del país le exigía al POS «ser al mismo tiempo reformista y revolucionario» (*El Socialista*, Antofagasta, 2 de febrero, 1918. Énfasis en el original).

En esta forma de comprender la acción política no había contradicciones entre socialismo y democracia, es más, ambas se complementaban en la idea de que el primero era una profundización de la segunda. Esta fue la noción más extendida entre los socialistas. Una síntesis representativa de ella, son las palabras del obrero, dirigente cigarrero, poeta y autor del «Canto a la pampa» Francisco Pezoa, que en 1918 -cuando se desempeñaba como redactor de *El Socialista* de Antofagasta- señalaba: «Democracia y socialismo no son cosas enteramente distintas. Son diferentes, pero no opuestos. Y son susceptibles de combinarse en un régimen político-económico perfeccionado». Para ello, consideraba imprescindible el socialismo, puesto que la «democracia, régimen político de gobierno, no resuelve el problema social, ni siquiera lo plantea». Por lo tanto, declaraba que la aspiración del POS era la abolición del capitalismo y la instauración de un «régimen de cooperación en beneficio de todos, lo que significa la extirpación de la miseria, de la ignorancia y de la desigualdad social». De lo anterior se derivaba la «conjunción lógica» entre democracia y socialismo: «Y como este régimen de igualdad social práctica [y] económica no puede existir sino dentro de una forma política igualitaria, tendremos que concluir que el régimen político «democrático» es el único compatible con un régimen económico «colectivista» [socialista]» (*El Socialista*, Antofagasta, 7 de

febrero, 1918). Un concepto similar expresaba un artículo del periódico socialista porteño La Vanguardia de 1919: «La única verdadera democracia es la que puede surgir de una organización que no registre diferencias económicas; sólo puede existir en pueblos que por sus fundamentos materiales haga a los hombres solidarios» (Valparaíso, 8 de noviembre, 1919). Como veremos en el siguiente apartado, esta noción de democracia como la «forma política igualitaria» era la que movilizaba a los socialistas en cada elección y, paradójicamente, la misma que anatemizaban tras cada derrota.

La Revolución Rusa de 1917 remeció el ambiente político chileno y amplió el horizonte revolucionario de los socialistas locales, quienes leyeron estos acontecimientos como la prueba empírica de la derrota del capitalismo y de la ampliación democrática. Sin embargo, la revolución bolchevique no modificó las bases de la acción política del POS. Lo que sí hizo fue ampliar el sentido de la democracia, pues los socialistas chilenos interpretaron las acciones de los bolcheviques como la realización de sus aspiraciones de igualdad social y política. Desde ese momento, el régimen que se construía en Rusia fue considerado como la «verdadera democracia» y un ejemplo de que la organización política y económica podía transitar hacia el igualitarismo (Lillo, 2008). Asimismo, el POS se arrogó el título del único partido democrático en el régimen político, en una reafirmación de la postura que sostenía desde su fundación.

Desde 1918 el partido comenzó a conmemorar cada 7 de noviembre el triunfo bolchevique, celebración que año tras año fue reuniendo a más obreros en las principales ciudades del país. En paralelo, el miedo a la «amenaza roja» fue creciendo entre los sectores dominantes y la democracia comenzó a ganar terreno en la discusión política contingente (Casals, 2016, pp. 79-92). El lenguaje de los socialistas se modificó y en su prensa la democracia chilena pasó a ser calificada como «burguesa», en contraposición a la democracia «comunista» que forjaban los bolcheviques. Como una manifestación de que este discurso ganaba terreno entre los obreros organizados, el diario conservador penquista *La Unión Católica* dedicó buena parte de sus números (1920-1925) a rebatir el carácter democrático que divulgaban los socialistas. En ellos se los calificaba, entre otros epítetos, como «demagogos» que propagaban «falsas doctrinas sobre la democracia», apoyados en una idea de igualdad que situaba «al pobre contra el rico, despertando en el corazón de las multitudes odios profundos que amenazan constantemente a la sociedad» (*La Unión Católica*, Concepción, 15 de noviembre, 1920). En cada número, los redactores de este periódico explicaban a los obreros católicos cuál era el «verdadero sentido» de la democracia, llamando a su movilización política y descalificando a los socialistas. Este órgano de prensa apoyaba sus comentarios en la línea de la democracia cristiana, una ideología con tintes corporativistas que defendía el rol social de la autoridad, la convivencia armónica de las clases sociales y el mejoramiento de la condición de los trabajadores bajo la máxima de «hacer propietario al proletario»[12]. Los conservadores intentaron llevar estos debates al terreno organizacional y para disputar el apoyo hacia los comunistas crearon a fines de 1922 un efímero Partido Popular, que fue calificado por el PCCh como expresión de una «Democracia *ad-hoc*» que miraba «más al cielo que a la tierra y que en materia de progresos sociales no divisa más allá que cualquiera de las sociedades de socorros mutuos que aún vegetan escondidas bajo el látigo del mayoral» (*La Federación Obrera*, Santiago, 28 de diciembre, 1922).

Como he señalado, para los socialistas la democracia no se restringía a la arena política. En sus diversas iniciativas intentaban llevar a la práctica su ideal de igualdad y justicia social. Un ejemplo de aquello es la organización interna del partido, basada en asambleas de militantes donde se elegían tanto los cargos directivos como los candidatos para cada elección. En estas instancias las mujeres socialistas tenían derecho a voz y voto como cual-

12 Para un ejemplo de esta definición, véase Partido Conservador, 1921, pp. 97-103.

quier militante y muchas veces fueron elegidas en importantes puestos, como sucedió con la elección de Teresa Flores para conformar la Junta Provincial de Santiago de la FOCh en 1922 con la primera mayoría (*La Federación Obrera*, Santiago, 10 de octubre, 1922). El partido no adoptó la estructura celular sino hasta el proceso de bolchevización de fines de la década de 1920 (Ulianova, 2005; Urtubia, 2016; Álvarez, 2017), por lo que la mayoría de las materias importantes se discutían en convenciones programáticas, como el ingreso a la IIIª Internacional y el cambio de nombre a PCCh aprobados en los congresos de 1920 y 1921, respectivamente.

Otro ámbito donde el POS puso en práctica su concepción de democracia fue en el espacio laboral. Las cooperativas fueron la forma privilegiada por los socialistas para organizar sus iniciativas empresariales, debido al carácter autónomo e igualitario que buscaban imprimirle. A lo largo del país crearon cooperativas de consumo, de elaboración de pan, de fabricación de cigarrillos, teatrales, agrícolas, de choferes, de construcción, entre otras. Las más duraderas y con mejores resultados fueron las cooperativas tipográficas dedicadas a la impresión de folletos y libros y encargadas de la publicación de la prensa partidista. Por funcionar con trabajadores remunerados, estas cooperativas se enfrentaban también con los conflictos propios del lugar de trabajo, como sucedió en 1925 cuando los obreros de la cooperativa a cargo de la publicación de *El Despertar de los Trabajadores* de Iquique demandaron mejoras salariales. Para demostrar coherencia con su discurso, la administración de la cooperativa comunista accedió inmediatamente a la demanda salarial, señalando que lo limitado de la solicitud de los trabajadores era también una demostración de su «conciencia adquirida en la organización y el cariño a esta y a su diario» (*El Despertar de los Trabajadores*, Iquique, 7 de mayo, 1925).

Por último, un medio donde también es posible apreciar la impronta democrática de los socialistas-comunistas lo constituye la narrativa militante. Estas historias de vida, publicadas por el PCCh en la segunda mitad del siglo XX, fueron pensadas como un artefacto literario y político. En estos libros, la sucesión de hechos funciona como articuladora de un discurso que realza el papel de la politización y el cambio de vida que significa para sus protagonistas la militancia en el partido. La lucha por la democratización (es decir, la lucha por la distribución igualitaria de los recursos materiales, el mejoramiento de las condiciones laborales y la ampliación de los espacios de participación política) es la característica que vincula estas historias y en todas ellas los dirigentes socialistas-comunistas son presentados como los verdaderos demócratas del siglo XX[13]. El ejemplo más característico es la autobiografía de Elías Lafertte (1971), cuya historia como militante comienza en 1912 y está plagada de persecuciones, extrañamientos y encarcelamientos motivadas por su actuación en las luchas sindicales y políticas. La lucha por la democratización de los socialistas-comunistas del primer cuarto del siglo XX fue también empleada en el sentido de la tradición en distintas ocasiones como, por ejemplo, a fines de la década de 1980 cuando el PCCh utilizó la historia del POS y la imagen de Recabarren en particular para reafirmar su compromiso con la democracia en los comienzos de la postdictadura y en un contexto de un anticomunismo transversal al sistema político (Navarro, 2017a).

EL POS Y LAS ELECCIONES

Las prácticas fraudulentas fueron una característica que distinguió a las elecciones chilenas del periodo, fenómeno que ha sido interpretado por una parte de la historiografía como una forma más de competencia por los votos[14]. A pesar del dinamismo que el fraude imprimía a las elecciones, fue común que los actores políticos de la época reaccionaran

13 Me refiero aquí a los siguientes libros: Varas, 1998 y 2010; Lafertte, 1971; Corvalán, 1971; y Contreras, s/f.

14 Sobre las prácticas fraudulentas como elemento central del sistema político chileno de fines del siglo XIX y de la primera mitad del XX, véase Ponce de León, 2017. La idea de que el cohecho fue un elemento dinamizador del ambiente político de principios del siglo XX, en Valenzuela, 1995 y Stabili, 1991.

negativamente a este tipo de prácticas. En 1912, el foco crítico estuvo puesto en las elecciones municipales de Santiago y su posterior anulación por irregularidades en la inscripción electoral, hecho que motivó una movilización ciudadana que incluyó desde la creación de una Junta de Reforma Municipal hasta la protesta callejera de los sectores populares. Atenta a la contingencia política, la revista *Zig-Zag* señalaba que lo sucedido en esas elecciones era «el resultado de una larga era de abusos que colmó la medida de la paciencia pública» (Santiago, 18 de mayo, 1912). Este escenario fue favorable para que las críticas de los socialistas a la corrupción electoral tuvieran buena acogida entre los electores santiaguinos. Apoyado en este diagnóstico, el POS levantó la candidatura del obrero pintor Manuel Hidalgo, electo como regidor en marzo de 1913 con casi cinco mil votos. Este triunfo fue recibido por una parte de los sectores dominantes como una demostración de civismo y de amplitud democrática, como lo demuestra la nota que publicó la revista *Sucesos* con motivo de la elección de Hidalgo: «¡Y bien: si el Partido Socialista nos trajera la savia renovadora [...] de nuevos hombres sin las claudicaciones ni los apetitos de los demás hombres; que fuera bienvenido [...]! ¡Si viniera a dar lecciones de civismo, de pureza, de fe en un ideal, frente a frente de los llamados «Partidos Históricos», deberíamos abrirle paso, si no triunfal, simpáticamente!» (Valparaíso, 10 de abril, 1913).

A pesar de este logro señero, las elecciones fueron contextos adversos para los socialistas, ya que sólo en contadas ocasiones consiguieron elegir a sus candidatos. En las elecciones parlamentarias de 1915 –las primeras que afrontó el partido- no triunfó ninguno de sus candidatos. En las municipales de ese año obtuvieron mejores resultados al elegir a ocho de sus candidatos a regidores, todos en la zona salitrera. El triunfo más significativo fue el de Pedro J. Sandoval como regidor de Iquique, cargo que un mes después le fue arrebatado producto de las maniobras de los balmacedistas (*El Despertar de los Trabajadores*, Iquique, 13 de abril y 4 de mayo, 1915). Tres años después se repitió una situación similar, perjudicando al tipógrafo e histórico dirigente comunista Elías Lafertte que sufrió el robo de votos en varias mesas (*El Despertar de los Trabajadores*, Iquique, 16 de abril, 1918). En Antofagasta, ese mismo año el afectado fue el obrero salitrero Silvestre Segovia, quien tras obtener el octavo lugar de nueve puestos elegibles perdió la elección debido a la intervención de los radicales locales que lo desplazaron hasta la décima posición (*El Socialista*, Antofagasta, 2 y 18 de abril, 1918). Los poderes locales utilizaban diversas artimañas para entorpecer el despliegue electoral de los candidatos socialistas, como las trabas para la inscripción de los obreros en los registros electorales, la instalación de las mesas en locales cerrados, el desalojo de los apoderados por parte del ejército y la policía o la suspensión de los medios de transportes, que en zonas aisladas como la pampa salitrera impedía el acceso de los trabajadores a los puertos donde se encontraban las mesas de votación (Lafertte, 1971, pp. 110-112).

Otro mecanismo ampliamente utilizado para ganar elecciones fue el dinero. El testimonio de Elías Lafertte, apoderado del POS para las elecciones senatoriales por Tarapacá de 1915, da cuenta de su uso político: «Por la mañana, las secretarías de Arturo del Río ofrecían cínicamente diez pesos por el voto. El comando alessandrista [...] ofreció veinte pesos. Del Río, alarmado cuando vio que muchos votos le iban a engrosar el efectivo electoral de su gran enemigo, subió a treinta pesos sus ofertas y, en un asqueroso remate en que lo subastado era la dignidad del hombre, los alessandristas ofrecieron cuarenta y cincuenta pesos. Del Río no pudo seguirlos en esta competencia» (1971, p. 111). Ni siquiera las intensas campañas de los socialistas abogando por elecciones limpias lograban disminuir su influencia entre la clase obrera. Por ello, en cada elección apelaban a la fortaleza moral de su causa: «No es el dinero el que necesitamos los socialistas para triunfar, sólo necesitamos la conciencia de los productores, eso vale más que todo el oro del mundo y en eso confiamos» (*La Chispa*, Talcahuano, 27 de marzo, 1921).

Otra de las fórmulas que utilizaron para contrarrestar el fraude electoral fue la publicación de artículos en su extensa red de prensa que denunciaban las prácticas en que in-

currían los demás partidos[15]. Una editorial de *El Despertar de los Trabajadores* luego de las elecciones de 1924 señalaba: «La ley electoral, entregada en manos de hombres corrompidos, [...] ha sido abandonada en absoluto, reemplazándosela por las formas arbitrarias que mejor gustan [...] a los partidos burgueses de gobierno» (Iquique, 14 de abril, 1924). Similar apreciación exponía el órgano oficial del PCCh, *Justicia*, al evaluar el efecto de este tipo de prácticas: «La consigna de autoridades y partidos era la de hacer el vacío a los elementos comunistas, de cerrarles el paso, de exterminarlos, aunque para conseguir tales resultados fuese necesario apelar a los más infames procedimientos, a la más vergonzosa violación de las leyes morales y escritas. El resultado de estos abusos vergonzosos lo conocen todos los obreros. Ninguno de los candidatos comunistas resultó elegido, porque así lo dispusieron el Gobierno y los capitalistas» (Santiago, 23 de diciembre, 1925).

Para contrarrestar el efecto del cohecho, el POS también formó parte de instancias que iban más allá del mundo obrero, como los comités multipartidistas en contra del fraude electoral. En las elecciones municipales de 1913 en Santiago, uno de estos comités fue presidido por el reconocido marino Arturo Fernández Vial (*El Mercurio*, Santiago, 27 de marzo, 1913) y su labor contribuyó significativamente al éxito de la candidatura de Manuel Hidalgo. Además, en el contexto eleccionario fue común la participación de las «Guardias Rojas», nombre con el que fueron conocidos los grupos anti-cohecho compuestos en su mayoría por obreras que custodiaban los locales de votación persiguiendo e insultando a quienes sorprendían vendiendo su voto. En 1915, decenas de mujeres socialistas recorrieron las calles de Iquique llamando a votar por los candidatos obreros mientras soportaban los insultos de los votantes de otros partidos (*El Despertar de los Trabajadores*, Iquique, 9 de marzo, 1915). Era común que las «Guardias Rojas» enfrentaran acciones violentas, como sucedió en 1921 en la elección municipal de Viña del Mar, cuando un conocido acarreador de votos amenazó con un revólver a las obreras que lo perseguían. En esa ocasión, las socialistas defendían las papeletas del zapatero Ramón Sepúlveda Leal, finalmente elegido regidor con más de mil quinientos votos (*La Comuna*, Viña del Mar, 16 de abril, 1921)[16].

No sólo represión «activa» hubo en las elecciones, también se aplicaron tanto en el espacio urbano como rural otro tipo de medidas que restringían el carácter teóricamente libre del voto. Por ejemplo, los socialistas denunciaron en 1920 que una de las cláusulas de la venta de la Hacienda «Panquehue» (Llay-Llay) establecía como condición para consumar el negocio que los trabajadores votaran por el candidato conservador (*La Comuna*, Viña del Mar, 29 de mayo, 1920). Aún más representativo de la influencia socialista, y también de las acciones de los terratenientes que coartaban la libertad política, fue la huelga de los trabajadores del Fundo «Concón Bajo» en agosto de 1921, que tenía como una de sus reivindicaciones el reconocimiento del «derecho a asociarse como ciudadanos de una República libre y democrática», en otras palabras, el derecho a votar sin la coacción patronal (*La Federación Obrera*, Santiago, 27 de agosto, 1921). Asimismo, en las elecciones de abril de aquel año, la FOCh denunció que el administrador de un fundo en La Calera había despedido a los trabajadores que no votaron por su candidato (*La Nación*, Santiago, 14 de abril, 1921). Desde 1919, el POS impulsó la politización campesina en esta zona, articulando con éxito las reivindicaciones económicas y políticas de los trabajadores rurales. Los socialistas desarrollaron múltiples acciones con la finalidad de instruir política y electoralmente a los campesinos, como conferencias públicas sobre la relación entre democracia y socialismo, jornadas de alfabetización, veladas artísticas, distribución de folletos y la construcción de

15 En periodos de elecciones los socialistas dedicaron un importante espacio de su prensa a la crítica del cohecho, que además de artículos periodísticos incluía canciones, cuentos y poesías. Sería imposible dar cuenta en este trabajo de todo este material. Para un análisis de las características y las representaciones sobre el cohecho y los cohechados en las elecciones de 1915, véase Navarro, 2017, pp. 104-115.

16 Sobre las características de la politización femenina impulsada por el POS en este periodo, véase Navarro, 2016. Para un estudio de la labor política de Ramón Sepúlveda Leal como regidor de Viña del Mar, véase Riffo, 2018.

locales del partido. La evidencia de que a través de este formato era posible conseguir la politización de los campesinos, fueron los resultados de las elecciones de 1921 en El Melón: la victoria de sus tres candidatos a regidores y la derrota de importantes terratenientes locales (Navarro, 2019, pp. 25-26).

Las elecciones de 1921 fueron particularmente violentas y fraudulentas, debido a la manipulación de los registros y de los votos que realizó la Alianza Liberal apoyada en la plataforma que le proporcionaba el aparato gubernamental. En Curanilahue, tras los reclamos de los trabajadores por la compra de votos, los empresarios carboníferos respondieron denunciando la supuesta creación de un «soviet», por lo cual solicitaron el encarcelamiento de los cuatro candidatos de la FOCh que habían resultado ganadores. En el momento en que se producía uno de estos arrestos y luego de que los trabajadores intentaran liberar al dirigente fochista, las tropas del ejército abrieron fuego asesinando a cuatro obreros (*La Nación*, Santiago, 15 y 16 de abril, 1921). Este tipo de incidentes se repitió en 1924, cuando el gasfíter Carlos Flores –candidato comunista a diputado por Quillota- defendió con revolver en mano las arremetidas de quienes intentaban destruir los votos de su mesa y agredían a las mujeres de las «Guardias Rojas». A pesar de esta reacción, los comunistas perdieron esa elección (*La Federación Obrera*, Santiago, 7 de abril, 1924).

Hacia 1924, la represión institucionalizada desde 1918 en contra del movimiento obrero, el aumento de la violencia en época de elecciones y el giro conservador de Alessandri, llevaron a los comunistas a reaccionar ante las agresiones y a cuestionar la factibilidad de la participación electoral. Más de una década participando en elecciones que se caracterizaban por el fraude y la represión comenzó a desgastar su férrea postura contraria a la violencia. Sumado a lo anterior, la Revolución Rusa abrió una nueva dimensión en su imaginario político, que a mediados de la década se plasmaba en su prensa en una recepción cada vez más clara de los conceptos y planteamientos bolcheviques. A pesar de que hasta 1927 el partido mantuvo su fisonomía orgánica y su estrategia política, la confianza en la participación electoral comenzó a ser objeto de críticas tras las elecciones de 1924, especialmente entre algunos dirigentes y militantes del norte salitrero. Ejemplo de aquello son las palabras de un dirigente iquiqueño que al evaluar las consecuencias del fraude en las elecciones señalaba: «los ciudadanos, desengañados de la eficacia de la ley electoral burguesa, la abandonan convencidos de que no es el medio legal el que puede procurarles el bienestar social y económico a que aspiran por medio de las actividades cívicas». Según el mismo artículo, la forma en que los sectores dominantes procedían en las votaciones deslegitimaba al sistema electoral, y por estas acciones, los ciudadanos eran «empujados a procurar el advenimiento de la revolución social como única manera de destruir el imperio de la corrupción burguesa» (*El Despertar de los Trabajadores*, Iquique, 14 de abril, 1924). Estas declaraciones expresan el impacto que tuvo entre los obreros organizados la represión estatal, el fraude electoral y el carácter violento de las elecciones en la década de 1920.

No obstante lo anterior, el rechazo de la violencia política y la participación en los canales institucionales siguió siendo el camino promovido por el PCCh. Los golpes militares de 1924 y 1925 fueron enfrentados por los comunistas de forma confusa. Amén a su antimilitarismo, criticaron la injerencia de las Fuerzas Armadas en política y, por otro lado, reconocieron la actuación de los militares al destrabar el conflicto al que había conducido el gobierno de Alessandri. De igual forma, mostraron cierta esperanza en el reformismo de la oficialidad golpista de enero de 1925. A pesar de esto, su estrategia no se modificó y no enunciaron ni promovieron acciones que viabilizaran la revolución social que insinuaban los testimonios recientemente citados. Por el contrario, cuando el régimen político volvió a la normalidad y se produjo el llamado a las elecciones, el PCCh se movilizó nuevamente calculando que el conflicto entre los partidos y el fortalecimiento de la FOCh jugarían a su favor. Sus estimaciones no fueron erradas: en 1925 eligieron a un senador y a seis diputados, mientras que en las elecciones parciales del año siguiente obtuvieron un senador y un

diputado más (Barnard, 2017, p. 66). En aquella ocasión, el regocijo por los resultados obtenidos dejó en segundo plano la recurrente crítica al fraude y al cohecho. Este éxito, además, fue leído como un apoyo a su postura sostenida desde 1912 y comprendido como una salida prometedora para la crisis política de 1924-1925.

Sin embargo, las esperanzas de afianzar al partido a través de la actuación de una importante bancada parlamentaria tropezaron al poco tiempo con la dictadura del coronel Carlos Ibáñez del Campo. A fines de 1926 el senador comunista Manuel Hidalgo, polemizando con Ibáñez -todavía ministro de Guerra- y su postura que censuraba abiertamente a los partidos políticos, declaraba tajante en el parlamento: «la política es la única ciencia para gobernar los pueblos y esta no puede ser reemplazada por la ciencia militar» (*Justicia*, Santiago, 19 de noviembre, 1926). A pesar de las esperanzas de Hidalgo, finalmente la «ciencia» que se impuso en 1927 fue la represión y la proscripción, acabando así con una etapa de quince años en que la lucha por la democratización fue la base de las acciones de los socialistas-comunistas.

CONCLUSIONES

Comprender la historia de la democracia como una historia de la lucha por la democratización permite ampliar el rango de análisis hacia fenómenos que, aunque en un comienzo parezcan marginales, terminan por afectar al régimen político. En este caso, la formación de un partido político por un pequeño grupo de obreros salitreros en 1912 permitió, al cabo de una década, posicionar las reivindicaciones de los trabajadores en la institucionalidad política. Así también, partidos refractarios a incorporar a los obreros como sujetos de su acción política modificaron su lenguaje y desarrollaron iniciativas para aminorar la influencia de los socialistas-comunistas entre los sectores populares. Durante todo el periodo analizado, estas acciones se movieron entre la represión y la incorporación de ciertas demandas. La postura de Ibáñez entre 1925-1931 grafica lo anterior: fue abiertamente crítico a la influencia de los socialistas-comunistas en el movimiento obrero hasta llegar a su proscripción y represión, al mismo tiempo que promovió el sindicalismo legal y apoyó a las organizaciones obreras que se declararon contrarias a la influencia de los partidos.

Con palpables diferencias en los métodos y en los fines, hacia 1925 la mayoría de los actores políticos reconocía la necesidad de atender las reivindicaciones obreras. La clave de este fenómeno se encuentra en la capacidad del POS-PCCh para organizar y movilizar a los trabajadores a través de una combinación entre las luchas sindicales y las políticas. Como a los socialistas-comunistas les interesaba tanto el mejoramiento de las condiciones laborales como la ampliación de los derechos democráticos, su lucha no se limitó al mundo obrero. Su importancia histórica radica precisamente en la voluntad de disputar el poder de los sectores dominantes, mediante la politización de los trabajadores y enfatizando en la incompatibilidad de los intereses de clase de cada grupo social. En el mundo obrero esta característica no se encontraba ni en los anarquistas, ni en los mutualistas, ni en los demócratas.

Por otra parte, la poca reflexión en torno a la democracia los condujo a una definición amplia y que se amoldaba a sus actuaciones y a las circunstancias de la política nacional e internacional. La interpretación dominante entre los socialistas establecía que la democracia era la manifestación política del capitalismo. La consecuencia directa de esta apreciación era, por lo tanto, que se esperaba su superación por el socialismo. Y para lograrlo había que desarrollar acciones de organización y de propaganda en el mundo obrero, a las que se sumaba la competencia electoral. La Revolución Rusa generó tensiones internas sobre las formas y los tiempos de la lucha democrática que realizaba el POS, expresión de esto fue el alejamiento del partido de importantes dirigentes tras su conversión en PCCh. Sin embargo, su actuación en los años posteriores indica que la idea de la democratización a través de la participación en las elecciones no se modificó. Los triunfos obtenidos en las

elecciones parlamentarias de 1921 (dos diputados) y 1925-1926 (dos senadores y siete diputados) fueron comprendidos por los socialistas-comunistas como un reconocimiento por parte de los trabajadores a su labor política y sindical.

Los esfuerzos que dedicaban a cada elección contrastan con sus críticas al fraude electoral. Esto se explica porque el fraude y la violencia fueron una constante en la vida de los trabajadores del periodo 1912-1925. Por ejemplo, la inexistencia de contratos laborales y de derecho a huelga permitía que los empresarios incumplieran de forma regular sus acuerdos con los trabajadores. Además, las manifestaciones obreras eran recurrentemente reprimidas y las organizaciones de los trabajadores objeto de persecución y espionaje cotidiano. En este contexto de explotación y represión deben insertarse las críticas que los socialistas dirigían al régimen político y a sus prácticas fraudulentas. Porque, aunque el fraude haya sido interpretado por una parte de la historiografía como una forma de competencia y el cohecho como una expresión de aquello, lo que interesaba en este trabajo era analizar la manera en que fue experimentado por los trabajadores organizados, y en específico, por los socialistas-comunistas. En este sentido, su postura en extremo crítica a estas prácticas no fue producto de una estrechez doctrinaria e ideológica, sino el resultado de la experiencia recogida luego de cada elección. Si en múltiples ocasiones la acción del dinero fue objeto de sus denuncias, se debía a que efectivamente la compra-venta de votos podía cambiar –siempre en favor de los candidatos de la oligarquía- el curso de las elecciones.

Por otro lado, el cohecho contravenía el espíritu de las reformas electorales de fines del siglo XIX, que habían eliminado los requisitos patrimoniales ampliando el rango social de la ciudadanía. En esta línea, la exigencia de elecciones limpias por parte de los socialistas constituye una apropiación de los parámetros de la modernización política a la vez que la demostración empírica de sus límites prácticos. Aunque escépticos de las posibilidades que entregaba la democracia chilena para cambiar la realidad de los trabajadores, los socialistas-comunistas fueron un agente fundamental tanto para legitimar las prácticas electorales entre la clase trabajadora como para ampliar los límites democráticos del régimen político durante el primer cuarto del siglo XX.

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez, Rolando (2016). ¿Represión o democratización?: la clase dominante chilena ante la crisis de la dominación oligárquica (1918-1927). *Outros Tempos* (vol. 13, 21), 148-171.
- Álvarez, Rolando (2017). La bolchevización del Partido Comunista de Chile. Antecedentes (1920-1927). En Patricio Herrera (coord.). *El Comunismo en América Latina Experiencias militantes, intelectuales y transnacionales (1917-1955)* (79-100). Valparaíso: Universidad de Valparaíso.
- Anderson, Perry (1984). La historia de los partidos comunistas. En Raphael Samuel, *Historia popular y teoría socialista* (150-168). Barcelona: Crítica.
- Arias, Osvaldo (2009). *La prensa obrera en Chile, 1900-1930* [1970]. Santiago: Ariadna Ediciones.
- Barnard, Andrew (2017). *El Partido Comunista de Chile, 1922-1927* [1977]. Santiago: Ariadna Ediciones.
- Bevir, Mark (2000). Republicanism, Socialism, and Democracy in Britain: The Origins of the Radical Left. *Journal of Social History* (vol. 34, 2), 351-368.
- Camarero, Hernán (2007). *A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo en la Argentina, 1920-1935*. Buenos Aires: Siglo XXI Editora Iberoamericana.

· _____ (2015). El Partido Socialista de la Argentina y sus espinosas relaciones con el movimiento obrero: un análisis del surgimiento y disolución del Comité de Propaganda Gremial, 1914-1917. *Izquierdas* (22), 158-179.

· Camarero, Hernán y Carlos M. Herrera (ed.) (2005). *El Partido Socialista en Argentina. Sociedad, política e ideas a través de un siglo*. Buenos Aires: Prometeo Libros.

· Casals, Marcelo (2016). *La creación de la amenaza roja. Del surgimiento del anticomunismo en Chile a la «campaña del terror»*. Santiago: Lom Ediciones.

· _____ (2017). Democracia y dictadura en el Chile republicano. Prácticas, debates y conflicto político. En Iván Jaksic y Juan Luis Ossa (eds.), *Historia política de Chile, 1810-2010. Tomo I: Prácticas políticas* (331-360). Santiago: Fondo de Cultura Económica-Universidad Adolfo Ibáñez.

· Contreras T., Víctor (s/f). *Campesino y proletario*. s/l: Ediciones Estudio.

· Corvalán, Luis (1971). *Ricardo Fonseca. Combatiente ejemplar*. Santiago: Empresa Editora Austral.

· Craib, Raymond (2017). *Santiago subversivo, 1920. Anarquistas, universitarios y la muerte de José Domingo Gómez Rojas*. Santiago: Lom Ediciones.

· DeShazo, Peter (2017). *Trabajadores urbanos y sindicatos en Chile. 1902-1927*. Santiago: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana.

· Donoso, Karen (2016). Las mordazas a la prensa obrera. Los mecanismos de la censura política en Chile, 1919-1925. *Izquierdas* (28), 191- 225.

· Eley, Geoff (2003). *Un mundo que ganar. Historia de la Izquierda en Europa, 1850-2000*. Barcelona: Crítica.

· Gazmuri, Cristián (ed.) (2001). *El Chile del Centenario, los ensayistas de la crisis*. Santiago: Instituto de Historia Universidad Católica de Chile.

· Góngora, Mario (1981). *Ensayo sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX*. Santiago: Ediciones La Ciudad.

· Grez, Sergio (ed.) (1995). *La «cuestión social» en Chile. Ideas y debates precursores (1804-1902)*. Santiago: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana.

· _____ (1998). *De la «regeneración del pueblo» a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890)*. Santiago: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana.

· _____ (2016). *El Partido Democrático de Chile. Auge y ocaso de una organización política popular (1887-1927)*. Santiago: Lom Ediciones.

· _____ (2017). *Los anarquistas y el movimiento obrero. La alborada de "la Idea" en Chile, 1893-1915*. Santiago: Lom Ediciones.

· Hobsbawm, Eric (1987). *El mundo del trabajo. Estudios históricos sobre la formación y evolución de la clase obrera*. Barcelona: Crítica.

· _____ (2010). Problemas de la historia comunista. En Eric Hobsbawm. *Revolucionarios* (18-23). Barcelona: Crítica.

· Lafertte, Elías (1971). *Vida de un comunista (Páginas autobiográficas)*. Santiago: Empresa Editora Austral.

Revista Divergencia: N° 13 / Año 8
Julio - Diciembre 2019
ISSN 0719-2398

- Lillo, Leandro (2008). Los lejanos ecos de una gran revolución. La Rusia sovietista en el discurso del Anarquismo y socialismo-comunismo chilenos (1917-1927). Informe de Seminario para optar al grado de Licenciado en Historia. Santiago: Universidad de Chile.
- Massardo, Jaime (2008). *La formación del imaginario político de Luis Emilio Recabarren*. Santiago: Lom Ediciones.
- Moore, Stanley (1997). *Crítica de la democracia burguesa. Una introducción a la teoría del Estado de Marx, Engels y Lenin*. México DF: Siglo XXI Editores.
- Moulian, Tomás (2018). *Democracia y socialismo en Chile*. Santiago: Lom Ediciones, 2018.
- Navarro, Jorge (2016). El lugar de la mujer en el Partido Obrero Socialista. Chile, 1912-1922. *Izquierdas* (28), 162-190.
- _____ (2017). *Revolucionarios y parlamentarios. La cultura política del Partido Obrero Socialista, 1912-1922*. Santiago: Lom Ediciones.
- _____ (2017a). Volviendo a los orígenes. La reconfiguración política-cultural del Partido Comunista de Chile y el rescate de los fundadores (1988-1990), *Páginas*, (vol. 9, 20), 53-79.
- _____ (2019). El despertar de los campesinos. El Partido Obrero Socialista-Partido Comunista de Chile y la sindicalización rural, 1912-1925, *Notas Históricas y Geográficas* (23), 14-58.
- Nazer, Ricardo y Jaime Rosemblit (2000). Electores, sufragio y democracia en Chile: una mirada histórica. *Mapocho* (48), 215-228.
- Partido Conservador (1921). *Convención del Partido Conservador. Año 1921. Celebrada en Santiago de Chile los días 19,20 y 21 de Noviembre*. Santiago: Imprenta «El Chileno».
- Pinto, Julio (1998). ¿Cuestión social o cuestión política? La lenta proletarización de la sociedad popular tarapaqueña hacia el fin de siglo (1889-1900) (251-312). En *Trabajos y rebeldías en la pampa salitrera*. Santiago: Editorial USACH.
- _____ (2007). Discursos de clase en el ciclo salitrero: la construcción ideológica del sujeto obrero en Chile, 1890-1912. En *Desgarros y utopías en la pampa salitrera. La consolidación de la identidad obrera en tiempos de la cuestión social (1890-1923)* (13-73). Santiago: Lom Ediciones.
- _____ (2013). Luis Emilio Recabarren. *Una biografía histórica*. Santiago: Lom Ediciones.
- Pinto, Julio y Verónica Valdivia. 2001. *¿Revolución proletaria o querida chusma? Socialismo y Alessandrismo en la pugna por la politización pampina (1911-1932)*. Santiago: Lom Ediciones.
- Ponce de León, Macarena (2017). Estado y elecciones. La construcción electoral del poder en Chile, siglo XIX y XX. En Iván Jaksic y Francisca Rengifo (eds.), *Historia política de Chile, 1810-2010. Tomo II Estado y sociedad* (243-270). Santiago: Fondo de Cultura Económica-Universidad Adolfo Ibáñez.
- Priestland, David (2010). *Bandera Roja. Historia política y cultural del comunismo*. Barcelona: Crítica.
- Recabarren, Luis Emilio (2010). *Ricos y pobres [1910]*. Santiago: Lom Ediciones.
- Riffo, Diego (2018). Sindicalismo, propaganda y participación electoral: el Partido Obrero Socialista en Viña del Mar. 1913-1922. *Izquierdas* (42), 30-62.
- Salazar, Gabriel (2009). Construcción de Estado en Chile. En *Del poder constituyente de asalariados e intelectuales (Chile, siglos XX y XXI)* (40-51). Santiago: Lom Ediciones.

- Silva, Bárbara y Rodrigo Henríquez (2017). El Frente Popular: Representaciones sobre la ciudadanía en Chile, 1930-1950. *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe* (103), 91-108.
- Stabili, María Rosario (1991). Mirando las cosas al revés: Algunas reflexiones a propósito del período parlamentario. En Luis Ortega (ed.), *La Guerra Civil de 1891. Cien años hoy* (157-169). Santiago: USACH.
- Tarcus, Horacio (2013). *Marx en la Argentina. Sus primeros lectores obreros, intelectuales y científicos*. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
- Tilly, Charles (2005). La democratización mediante la lucha. *Sociológica* (57), 35-59.
- Ulianova, Olga (2005). El PC chileno durante la dictadura de Ibáñez, 1927-1931: primera clandestinidad y 'bolchevización' estaliniana. En Olga Ulianova y Alfredo Riquelme. *Chile en los archivos soviéticos, 1922-1991. Tomo 1: Komintern y Chile, 1922-1931* (215-248). Santiago: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana.
- Urtubia, Ximena (2016). *Hegemonía y cultura política en el Partido Comunista de Chile: la transformación del militante tradicional, 1924-1933*. Santiago: Ariadna Universitaria.
- Valdivia, Verónica (1999). *Yo, el León de Tarapacá. Arturo Alessandri Palma, 1915-1932*. Historia (32), 485-551.
- _____ (2016). Subversión y coerción. Izquierdas y derechas en los inicios de la democracia chilena del siglo XX. *Outros Tempos* (vol. 13, 21), 172-194.
- _____ (2017). *Subversión, coerción y consenso. Creando el Chile del siglo XX (1918-1938)*. Santiago: Lom Ediciones.
- Valenzuela, J. Samuel (1995). Orígenes y transformaciones del sistema político en Chile. *Estudios Públicos* (58), 5-80.
- Varas, Augusto (1988). Ideal socialista y teoría marxista en Chile: Recabarren y el Komintern. En Augusto Varas (coomp.). *El Partido Comunista de Chile. Estudio multidisciplinario* (17-63). Santiago: CESOC-FLACSO.
- Varas, José Miguel (1998). *Chacón [1968]*. Santiago: Lom Ediciones.
- _____ (2010). *Los tenaces*. Santiago: Lom Ediciones.
- Vial, Gonzalo (1987). *Historia de Chile (1891-1973). Vol. I, Tomo II. La sociedad chilena en el cambio de siglo (1891-1920)*. Santiago: Zig-Zag.
- _____ (1986). *Historia de Chile (1891-1973). Vol. III. Arturo Alessandri y los golpes militares (1920-1925)*. Santiago: Santillana.
- Yáñez, Juan Carlos (2008). *La intervención social en Chile. 1907-1932*. Santiago: RIL editores.

Revista Divergencia: N° 13 / Año 8
Julio - Diciembre 2019
ISSN 0719-2398

Revista Divergencia: N° 13 / Año 8
Julio - Diciembre 2019
ISSN 0719-2398

¿Un racismo en la izquierda? El Partido Socialista, las organizaciones *Mapuche* y la colonización agrícola (1932-1941)

A racism on the left? The Socialist Party, Mapuche organizations and agricultural colonization (1932-1941)

Nicolás Acevedo Arriaza[1]

Recibido: 3 de abril de 2019 - Aceptado: 6 de junio de 2019
Received: April 3, 2019 - Approved: June 6, 2019

Resumen

El siguiente artículo busca analizar la relación entre los partidos políticos de izquierda, en este caso el Partido Socialista, con las organizaciones *mapuche* a comienzos del siglo XX, enfocándonos en la política de propiedad y distribución de tierras, pero utilizando también categorías como "raza" y "clase". Nuestra hipótesis plantea que el Partido Socialista (PS), mediante su política agraria, evitaría discriminar a los pueblos indígenas, a través de la "integración" a la sociedad nacional, pero con ello continuaría con una lógica de "invisibilización" de las costumbres y reivindicaciones propias de las organizaciones *mapuche*, lo que llamaríamos "un racismo inconsciente".

Palabras clave: Partido Socialista, Organizaciones *mapuche*, Colonización Agrícola, Racismo, Reforma Agraria.

Abstract

The following article seeks to analyze the relationship between the political parties of the left, in this case the Socialist Party of Chile, with the *Mapuche* organizations at the beginning of the 20th century, focusing on land ownership and distribution policy, but also using categories as "race" and "class". Our hypothesis is that the Socialist Party of Chile (PS), through its agrarian policy, would avoid discriminating against indigenous peoples, through "integration" into the national society, but with that it would continue with a logic of "invisibility" of the customs and demands of the *Mapuche* organizations, what we would call "a unconscious racism".

Keywords: Socialist Party, *Mapuche* Organizations, Agricultural Colonization, Racism, Agrarian Reform.

1 Doctor (c) en Historia, Universidad de Santiago de Chile. Correo electrónico: nicoacevedo@gmail.com. Este artículo forma parte de mi tesis en Doctorado en Historia en Universidad de Santiago. Agradezco los comentarios y sugerencias de Jesús Cosamalón, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Diana Henao y Arauco Chihuailaf.

INTRODUCCIÓN

En el 2008, Reynaldo Mariqueo recordó que cuando era militante del Partido Socialista, a los veinte años, participó en el asentamiento "Roble Huacho" en la comuna de Padre de las Casas. Apoyados por la Corporación de Reforma Agraria (CORA), intentaron recuperar el fundo "La Selva" de Germán Becker: agricultor, empresario y político radical. Mariqueo reconoce que el gobierno de Allende hizo más que otras administraciones por el pueblo *mapuche*, pero considera que "los problemas que afectan a toda la 'sociedad chilena' estaban por sobre los problemas e intereses del pueblo *Mapuche*" (Cayuqueo, 2008). De esta manera, algunas organizaciones *mapuche* realizaron un Congreso en Ercilla en 1969, y más tarde otro encuentro en Temuco, en diciembre de 1970. Hasta allí llegó Allende como presidente, entregándole las demandas históricas *mapuche* que estaban excluidas de la Reforma Agraria. El ex ministro de Agricultura, Jacques Chonchol, recuerda aquella jornada en el Estadio de Temuco, donde se comprometieron a crear una Ley Indígena que restituyera los territorios usurpados y reconociera a los pueblos indígenas como sujetos de derechos (Chonchol, 2016, p. 242). Esto se expresó en la Ley 17.729 y el Instituto de Desarrollo Indígena en septiembre de 1972 (Albizú, 2014). Según el historiador Arauco Chihuailaf, la idea "de integración persistía, pero se asumía reconociendo y potenciado la identidad *mapuche*. Era un hecho nuevo en materia legislativa… un avance significativo" (Chihuailaf, 2013, p. 3).

Reconociendo este avance histórico frente a las demandas del movimiento *mapuche*, es importante hacerse la siguiente pregunta: ¿Cómo se explica que los partidos políticos de la Unidad Popular no hayan incorporado las reivindicaciones *mapuche* a su programa de gobierno en 1969? ¿Existía un menosprecio o racismo en dichas agrupaciones políticas que invisibilizaba las reivindicaciones *mapuche*? ¿Cómo percibieron y se relacionaron los partidos de izquierda con las organizaciones *mapuche* en el siglo XX?

Según Reynaldo Mariqueo existieron, sin mala intención, pretensiones de "asimilación" de los partidos de izquierda hacia las comunidades *mapuche*:

> "… no era una política oficial o una política planificada del Gobierno de Allende, sino más bien era el proceso histórico que correspondía a la realidad de entonces. La lucha por la recuperación de tierras era considerada un asunto prioritario, mientras la preservación de nuestros valores culturales e identidad nacional *mapuche* no era valorada en su real dimensión" (Cayuqueo, 2008).

La experiencia de Mariqueo se refiere a una de las contradicciones más significativas en la "izquierda chilena" del siglo XX: ¿cómo entender la lucha y reivindicaciones del pueblo *mapuche* en el marco de su proyecto nacional? ¿Homologarlas a la lucha de los inquilinos y campesinos pobres o diferenciarlos como un pueblo con costumbres y una cultura diferente? El siguiente artículo busca analizar la relación entre dichos partidos, en este caso el Partido Socialista (PS), con las organizaciones *mapuche*, enfocándonos en las nociones de política agraria, pero además utilizando categorías como "raza" y "clase". Nuestra hipótesis plantea que el PS, mediante su política agraria, evitaría discriminar a los pueblos indígenas, a través de la "integración" a la sociedad nacional, pero con ello continuaría con una lógica de "invisibilización" de las costumbres y reivindicaciones propias de las organizaciones *mapuche*, lo que entenderemos como la noción de un "racismo inconsciente".

Por "racismo" entenderemos como la diferenciación social, bajo categorías naturalizadas, que un sujeto o colectivo tiene frente a un "otro", justificando así la desigualdad entre clases sociales, degradando así la cultura, lengua y costumbres de las comunidades explotadas (Portocarrero, 2007, pp. 13-14). Pero, ¿existe una sola forma de ejercer el racismo? Para la antropóloga Marisol de la Cadena, al estudiar a los intelectuales indigenistas en el Perú, planteó que ellos desarrollaron un "racismo silencioso", como "la práctica de las exclusiones 'legítimas' basadas en la educación y la inteligencia, no obstante que, al mismo tiempo, se condenaba abiertamente cualquier determinismo biológico" (De la Cadena, 2014, p. 58). A

partir de esto, más que "silencioso", optaremos por plantear que el PSCh, mediante su política agraria, evitó discriminar a los pueblos indígenas, planteando la "integración" a la sociedad nacional, pero con ello continuó con una lógica de "invisibilización" de las costumbres y reivindicaciones propias de las organizaciones *mapuche*. A esto he preferido llamarlo un "racismo inconsciente", porque no existía una intención explicita de discriminación, sino más bien una lógica de "asimilación" de las comunidades *mapuche* hacia la sociedad "chilena".

Para este objetivo revisamos los periódicos socialistas *Consigna*, *Claridad* y *La Crítica*, como también prensa de organizaciones *mapuche* como: *Frente Araucano* y el *Heraldo Araucano*. Además, utilizamos las sesiones de la Cámara de Diputados entre 1933-1941, sobre todo en torno a los proyectos de Colonización Agrícola y División de Comunidades Indígenas. De gran utilidad fue revisar la literatura de la época, alojada en la Biblioteca Nacional de Chile, como también en la Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Instituto de Estudios Peruanos en la ciudad de Lima.

1. DESPOJO TERRITORIAL Y CULTURAL: EL RACISMO EN EL SUR DE CHILE

Aunque últimamente han proliferado los estudios en torno al racismo, más que una novedad, estamos frente a una práctica común que el Estado chileno ha promovido desde el siglo XIX. Así lo planteó la socióloga María Emilia Tijoux, constatando que en realidad el racismo es una categoría que "carece de status científico y que brota como idea sin sustento sostenida en un 'orden biológico'". Así, remitiría a un supuesto rasgo "de 'pureza' y de 'superioridad blanca' que implican jerarquías culturales y raciales incorporadas al sentido común" (Le monde Diplomatique, 1 de agosto de 2017, p. 13). Esta deshumanización permite percibir al "otro" como un ser inferior y justifica la desigualdad social: bajos sueldos, hacinamiento, malos tratos, etc. Y el caso actual, según Josefina Correa, los apelativos hacia los afrodescendientes reproducirían un discurso racista colonial que, anteriormente, se dirigía hacia el pueblo *Mapuche* (Tijoux, 2016, p. 40).

Según Aníbal Quijano, el racismo en América Latina fue impuesto desde la conquista y el período colonial, producto que como continente no se conocía una jerarquización del ser humano respecto a su condición física o de raza (Lander, 2000, p. 203). Así mismo, la antropóloga Verena Stolcke (2000), propuso que este racismo justificó las desigualdades sociales basado en la naturalización del trinomio clase, género y raza. En el caso chileno, si tomáramos como referencia lo planteado por Quijano y Stolcke, podríamos pensar que una de las colectividades que han sido víctimas de la discriminación y de racismo en torno a concepciones de raza, clase y género han sido los pueblos indígenas, entre ellos las comunidades *mapuche*.

Una de estas prácticas de discriminación fue la ocupación de comunidades *mapuche* en la Araucanía, permitiendo la expansión comercial y hacendal, a costa del relegamiento de los campesinos chilenos y *mapuche*. Según diversas investigaciones, las campañas militares del ejército chileno, desde 1862 a 1883, lograron ocupar un 87% de las tierras *mapuche*, entre el río Bío Bío y río Toltén (Correa, Molina y Yáñez, 2005, pp. 44-52). Unas tres mil comunidades fueron relegadas a reducciones, y aunque sólo algunas obtuvieron títulos de tierra, con el tiempo fueron presionadas y obligadas a migrar hacia las ciudades (Almonacid, 2008, pp. 115-116). Así lo expuso la Sociedad Caupolicán en 1933, cuando desalojaron a las comunidades de una reducción en Loncoche. La acción fue ejecutada por "un teniente acompañado por 4 carabineros y siete individuos por orden del juez del distrito de La Paz a petición de Anacleto Barrera" (La Opinión, 2 de febrero de 1993, p. 1). Según José Bengoa, entre 1929-1973 desaparecieron 168 comunidades, perdiendo unas 131 mil hectáreas (2018, p. 82). Así, producto de este violento proceso de colonización, las comunidades *mapuche* se defendieron, siendo el levantamiento de Ranquil una de las experiencias más extremas (Klubock, 2010, pp. 122-159).

Una segunda práctica de discriminación fue a partir de la propuesta de integrar a las comunidades *mapuche* a la "nación chilena", lo cual conllevó a un proceso de *desmapuchización*, no reconociendo la existencia de su cultura, ni la permanencia de su idioma. En ese sentido, el despojo de tierras fue acompañado de un despojo cultural, que experimentaron sobre todo quienes migraron hacia la urbe a mediados del siglo XX. Así lo recuerda Carmen Maripán Catricura, quien trabajó desde los once años cuidando enfermos y luego como niñera en Santiago:

> "Yo entré como compañera de una hija de los ricos de la misma edad de la mía, entonces con esa niñita yo jugaba y la entretenía. Ese era mi trabajo. Pero a mí me daba vergüenza hablar, porque yo no sabía hablar muy bien el castellano, porque uno se cría hablando mapudungun allá en el campo con mi mamá y mi papá" (Antileo y Alvarado, 2017, p. 113).

El testimonio de Carmen Maripán, quien en la actualidad continúa hablando su idioma, nos expone un proceso de cultural que no ocurrió por casualidad, es decir, a ella no le dio "vergüenza hablar" por naturaleza, sino porque se enfrentó a grupos sociales y un Estado que menospreció su cultura y la negó a través de la "integración" a la cultura "chilena". Esto se puede ejemplificar mediante distintos soportes culturales, como son los textos escolares de historia, promovidos por el mismo Estado. Allí, los pueblos indígenas aparecieron como sujetos del pasado, qué, con la llegada de los españoles y el nacimiento de la república, se fueron transformando en "chilenos". Uno de ellos es el texto de lectura elaborado por César Bunster, profesor y abogado, quién colocó un relato sobre los "araucanos", de Luis Enrique Délano. La comunidades *mapuche* aparecieron como una cultura "escasa [...] eran supersticiosos, hablaban de animales y elementos naturales" (Bunster, 1945, p. 84). Esto también se reflejó en la historiografía conservadora, ejercida por Sergio Villalobos, Gonzalo Vial o Francisco Frías Valenzuela. Este último escribió que en el gobierno de Santa María se sometió "definitivamente a los araucanos, cuyos malones sembraban el terror en los pueblos del Bío Bío. Un ejército al mando del coronel Gregorio Urrutia, continuador de Cornelio Saavedra, pacificó la Araucanía, que no tardó en cubrirse de ciudades" (Frías Valenzuela, 1943, p. 422).

Paralelamente, a comienzos del siglo XX, surgieron los principales partidos políticos de la izquierda: el Partido Obrero Socialista (POS), el Partido Comunista de Chile y finalmente, el Partido Socialista. Estos se constituyeron principalmente desde espacios urbanos o mineros, sin una conexión inmediata con las comunidades *mapuche*. Desde allí promovieron la politización campesina, teniendo la facilidad que muchos obreros salitreros o urbanos provenían de espacios rurales (Acevedo, 2017). Según Elisabet Prudant, esta izquierda, al no reconocer su relación indígena, no elaboró una identidad propiamente "mestiza", negando lo *mapuche* y subordinándolo a la cultura "occidental" (2005, pp. 87-88). Por tanto, su percepción hacia lo campesino o *mapuche* estuvo tensionada entre la experiencia militante urbana-rural y la noción marxista que proponía a la clase obrera como la vanguardia de la revolución social. Así entendieron y difundieron los comunistas y socialistas en diversos folletos políticos de la época. Uno de ellos se tituló *Lenin* y el problema agrario, cuyo prólogo expuso que "el campesinado, como clase, no puede jugar un papel político 'independiente'. Es el proletariado de las ciudades, que se apoya en los campesinos, el llamado a dirigir la lucha de las masas explotadas" (Lenin, 1934, p. II). Este discurso se mantuvo en las décadas siguientes, considerando a la clase urbana-obrera como la llamada a liderar las transformaciones sociales (Jobet, 1964). Si el campesinado estaba a la ciega de este movimiento, los *mapuche* fueron llamados a incorporarse, abandonando su identidad. Así lo planteó el antropólogo Alejandro Saavedra, negando que existiera una identidad *mapuche*, sino "múltiples comunidades *mapuche*s integradas en una subcultura común", con idioma y una organización política en las reducciones, pero sólo relevante en su relación externa (1971, p. 35). Otra publicación, editada en 1972, reiteró que la cultura *mapuche* era una

"subcultura", en el sentido que no era independiente a la cultura occidental, de manera que el gobierno "popular", debía integrarlos a la sociedad chilena a través de la Reforma Agraria. "Todos somos chilenos [...] La población araucana no es una población extranjera ni tampoco marginal ni menos inferior" (San Martín, 1972, pp. 85-86). Si bien el objetivo de estas publicaciones no era aumentar la discriminación y la desigualdad social de las comunidades *mapuche*, finalmente invisibilizaron su cultura, creencias e ideología.

De esta manera, ¿cómo se relacionaron los partidos políticos de izquierda con las organizaciones *mapuche*? ¿En qué sentido pudo existir un *racismo inconsciente* hacia la cultura *mapuche*? A continuación, abordaré dichas interrogantes, describiendo primero el accionar de algunas organizaciones *mapuche*, principalmente la Federación Araucana, la Sociedad Caupolicán y el Frente Único Araucano; para posteriormente analizar la política agraria del Partido Socialista y su relación con las organizaciones antes mencionadas.

2. LA COLONIZACIÓN AGRÍCOLA Y LA EMERGENCIA DE LAS ORGANIZACIONES *MAPUCHE*

A comienzos de los años treinta, a través de diversas publicaciones, la prensa de izquierda fue informando de los desalojos sufridos por comunidades *mapuche* de Cuntulmo, Osorno y Villarrica, entre otras; y como estas pidieron su restitución o los títulos de dominio al Estado (Crónica, 9 de diciembre de 1931, p. 2; 14 de junio de 1932, p. 5). Fue el caso de una delegación *mapuche* del distrito de Pucón, que se reunió con el ministro de Tierras y Colonización en octubre de 1932, denunciando el despojo de unas 220 familias de terrenos fiscales por parte de un terrateniente de apellido Quezada. "No estamos conformes con que todavía no se cumpla la orden del señor ministro para que se nos devuelva nuestras tierras", plantearon (La Opinión, 1 de octubre de 1932, p. 1). Por otro lado, la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía denunció el desalojo de indígenas en Loncoche (La Opinión, 2 de febrero de 1933, p. 1). Dicha agrupación, liderada por Venancio Coñuepán, fue fundada en 1910 y, aunque tenía un marcado respeto a la institucionalidad del Estado de Chile, mantuvo una importante autonomía al momento de vincularse con algún partido político. Le siguieron la Federación Araucana (FA), creada en 1922, con el liderazgo de Manuel Aburto Panguileff; y la Sociedad Galvarino, fundada en 1932, liderada por Nolberto Pichilaf. Todas estas tenían dentro de sus petitorios la restitución de sus tierras usurpadas (Foerster y Montecinos, 1988).

A pesar de las denuncias realizadas, la respuesta del Estado no fue la esperada, sobre todo a partir de la crisis de los años treinta. Así ocurrió con el presidente de la República, Juan E. Montero (1931-1932), que en sus seis meses de gobierno no pudo reformular la ley de colonización agrícola antes de ser derrocado en junio de 1932. Este proceso ocurrió en plena crisis económica, que como se ha planteado reiteradamente, Chile fue uno de los más afectados. La cesantía subió a niveles inéditos, siendo, según cifras de Angela Vergara, más de 50.000 obreros desempleados a fines de 1932 (Drinot y Knigth, 2015, p. 92). La producción salitrera, que venía disminuyendo desde 1919, generó que cientos de mineros emigraran o se devolvieran a tierras sureñas, surgiendo la colonización agrícola como una solución efectiva a los problemas de alimentación cesantía (Crónica, 30 de noviembre de 1931, p. 4). Este llamado de colonización provocó una explosiva organización de decenas de aspirantes, como fue la Junta pro- Colonización Nacional (liderada por Abraham Marchant); y la Central General de Colonias Agrícolas. Esta última, a pesar de la irrupción de la República Socialista, organizó la Convención Nacional de Aspirantes el 11 junio de 1932, a la que concurrieron delegación de todo el país, incluido Aburto Panguilef. Sus conclusiones promovieron "pedir para los indígenas las mismas condiciones de derechos generales que se colicuan para los colonos de cooperativas agrícolas (...) Solicitar la dictación de un decreto-ley sobre expropiación de las tierras necesarias para la colonización inmediata" (El Ilustrado, 16 de junio de 1932, p. 14). La propuesta, aunque dentro del camino institucional, iba a lo

profundo del problema: el carácter social de la tierra por encima de la propiedad privada. Para esto, la coyuntura "socialista" pareció ayudar y el evento finalizó con la fusión de diversas colonias agrícolas en la Central Socialista de Colonización (CSC), con Alberto Carrillo Mendoza como su presidente y Aburto Panguileff en el directorio.

Debemos recordar que la República Socialista, que contó con el liderazgo de ibañistas, alessandristas y socialistas, fue resultado de un proceso de trasformaciones políticas y sociales desde los años veinte y que iban consolidando el "estatismo social y del intervencionismo económico, asegurando y profundizando el papel definido en la Constitución de 1925 al Estado" (Valdivia, 2017, p. 232). En materia agraria, en palabras de Marmaduke Grove, significaba un cambio de "la estructura de la nación", como la reforma agraria, es decir: "colonización con cesantes, bajo la dirección técnica del Estado" (El País, 12 de junio de 1932, p. 1). El Ministerio de Tierras y Colonización quedó en manos de Carlos Alberto Martínez, mientras que Claudio Artiaga fue el director de la Caja de Colonización Agrícola (CCA). Ambos ocuparon anteriormente dichos puestos, pero Martínez se destacaba por su valiosa experiencia militante en el POS. Así, envió una circular a todos los Intendentes y Gobernadores, suspendiendo toda orden de desalojos de colonos y Artiaga solicitó tres millones para formar un plan de "Colonización Popular Socialista", comenzando con la entrega de fundos fiscales como "El Sauce" y "La Marinana" en la provincia de Aconcagua (El País, 8 de junio de 1932, p.1; El Ilustrado, 12 de junio de 1932, p. 2). Según imágenes de la revista El Nuevo Sucesos, fueron unas treinta familias que partieron en grandes carretas: "Este era el sueño de toda mi vida", le diría un colono a Artiaga (El Nuevo Sucesos, 17 de junio de 1932). Pero, con la detención de Grove y los miembros del NAP, el proceso se paralizó porque, según Verónica Valdivia, "se trataba de un suelo dentro de una de las áreas más fértiles del territorio" (2017, p. 285). Los líderes de la Orden Socialista y la NAP (Grove y Eugenio Matte), fueron relegados a Isla de Pascua donde permanecieron por varios meses (Grove, 1933).

Con la detención de Grove, se instaló la Ley Marcial y varios dirigentes sociales fueron relegados. Teodoro Álvarez reemplazó a Carlos A. Martínez en la cartera de Tierras, presentando un proyecto de Colonización, que fue debatido durante 1933 y 1935, bajo la segunda presidencia de Arturo Alessandri Palma (La Opinión, 23 de agosto de 1932, p. 1). Finalmente, la Ley fue promulgada en 1935, pero sus resultados no fueron auspiciadores. A un año de su publicación, sólo 932 colonos fueron radicados, de los 16.041 aspirantes que se inscribieron (Boletín de Sesiones de Cámara de Diputados (BSCD), 44° sesión extraordinaria, Santiago, 27 de enero de 1936, p. 2557)[2]. Una cifra bajísima, la cual, entre 1929-1962 benefició a 5.845 familias, sólo un 2% de lo proyectado (Huerta, 1989, pp. 45-46). Por otro lado, los requisitos hacia los aspirantes a colonos fueron sumamente restrictivos. Según la ley estos debían cancelar entre el 5 al 20% del valor de cada predio, no beneficiando precisamente a los campesinos pobres, sino a los grupos medios (Almonacid, 2008, p. 195). En ese sentido, ¿estaban consideradas las comunidades *mapuche* en la política de colonización agrícola?

El caso de la localidad de Los Sauces (Angol), grafica el conflicto que generó la colonización y la discriminación que sufrieron las comunidades *mapuche*. En agosto de 1932, se denunció que unos ochocientos *mapuche* estaban abandonados alrededor de la comuna de Los Sauces, en un estado de "miseria e ignorancia [...] muertos de hambre, con terreno que nada les sirve" (La Opinión, 23 de agosto de 1932, p. 2). No fue todo. Según el diputado Arturo Huenchullán, desconocidos atacaron al ingeniero Daniel Guerra, mientras confeccionaba los mapas para la parcelación de un fundo, quitándole sus carpetas e intimidando a los indígenas que los acompañaban. "Estos individuos les manifestaron a los indígenas, que habían sido llamados por el fundo para este' asalto el día anterior" (BSCD, 17° sesión

2 Boletín de Sesiones de Cámara de Diputados, en adelante (BSCD).

extraordinaria, Santiago, 21 de febrero de 1933, p. 925-926). ¿Era una reacción patronal en contra de la colonización agrícola o de la presencia de comunidades *mapuche*? No lo sabemos, pero esta confrontación obligó a las organizaciones *mapuche* a generar alianzas con agrupaciones de colonos chilenos.

Fue el caso de la participación de la FA y la CSC. Aburto Panguileff, quien coordinó por treinta años el Congreso Araucano, formó parte del directorio de la CSC, pero mantuvo una cautelosa autonomía, ya que el proyecto de la FA fue la creación de la República Indígena (Menard y Pávez, 2005). Según Menard, esta idea no provino de una imposición externa, de partidos de izquierda como el Comunista, sino de una decisión independiente (Aburto, 2013, p. LV). La confusión pudo crearse porque al 11° Congreso Araucano, realizado en Boroa, asistieron representantes de la FOCH, que pudieron tener militancia en el PCCh. En dicho evento se propuso derogar la ley de Comunidades Indígenas de 1927 y devolver "los terrenos usurpados por los particulares". Así, la República Indígena significaba que:

> "la raza Araucana pueda desenvolver su vida de acuerdo a su psicología, costumbres y rituales; ser la dueña de la su tierra, ocupando las provincias en las cuales puedan vivir sus ciento cincuenta mil indígenas [...] en que el pueblo Araucano se gobierno a sí mismo y en que su progreso y cultura sean creados por ellos mismos. Esta aspiración será posible sólo con la alianza efectiva de los indígenas, campesinos y obreros, el día en que el proletariado unido fraternalmente conquiste el poder". (Crónica, 3 de enero de 1932, p. 6).

Con esto se dio una supuesta supremacía al proletariado, en clave marxista, pero Aburto Panguileff, en su proyecto a largo plazo, abogó a una independencia de los partidos políticos de izquierda. En 1932 aceptaron participar en la CSC, con la condición de "defender las tierras del Estado", para distribuirlas entre indígenas y chilenos (La Opinión, 15 de diciembre de 1932, p. 2). De esta manera, la CSC integró los derechos *mapuche* a las reivindicaciones de las 55 agrupaciones de aspirantes a colonos, e incluso Pablo Huechulaf y Arturo Huenchullán formaron parte de su directiva (La Opinión, de 23 de septiembre de 1932, p. 6). En términos formales, la CSC fue invitada a los eventos *mapuche*, como el Congreso Araucano de diciembre de 1932, en Chonchol (La Opinión, 24 de diciembre de 1932, p. 6). Sus resoluciones fueron:

- Integración "representantes de la raza araucana" en el parlamento chileno.
- Supresión de los Juzgados de Indios.
- Restitución de las tierras usurpadas.
- Subvención de profesores *mapuche* en escuelas indígenas.
- Retiro de misiones capuchinas, porque "a estos hijos se les inculcan ideas extrañas a las propias de la Araucanía" (La Opinión, 8 de mayo de 1933, p. 2).

Bajo el gobierno de Arturo Alessandri, las organizaciones *mapuche* continuaron en su lucha dentro de la legalidad, incluso presentaron candidatos a las elecciones parlamentarias de fines de 1932. De estos, sólo saldría Arturo Huenchullán, cupo otorgado por el Partido Demócrata. En los primeros meses de 1933, tanto la Sociedad Caupolicán como la FA apoyaron a Alessandri, pidiéndole el cese de los desalojos y el no pago de contribuciones (Foerster y Montecinos, 1988, pp. 137-142). Pero, mientras el Ministro de Tierras se comprometió a suspender los lanzamientos, estos continuaron ocurriendo por iniciativa de los grandes agricultores. Así lo denunció el diputado Huenchullán, quien dio algunos casos ocurridos en Imperial y Cañete. "Yo que he nacido de esta tierra como un hijo de un cacique, he sentido en carne propia el desprecio con que mis conciudadanos me han tratado; y es por esto que conozco muy a fondo las necesidades de todos los araucanos". Su discurso, mezclaba una suerte de integracionismo, pero a la vez reivindicaba a la raza arauca-

na como “dueña y soberana de este bello país”. Por lo demás defendía aspectos culturales como la poligamia, comparando que “el chileno, señor Presidente, tiene una mujer oficial y afuera de la puerta tiene otra de la cual tiene hijos que no alimenta ni viste ni educada. ¿Dónde hay más inmoralidad, señor Presidente?”(BSCD, 42° sesión ordinaria, Santiago, 18 de abril de 1933, p. 2171).

El gobierno de Alessandri terminó presentando el proyecto Colonización en mayo de 1933, insistiendo que fuese la Caja de Colonización el único encargado de colonizar y parcelar las tierras compradas por el Estado. El presupuesto fue de cien millones de pesos, especialmente para terrenos al sur del Bío Bío. Cada parcela sería vendida a los colonos, sólo si eran casados, mayores de veinte años, “salud compatible con el trabajo agrícola y buena conducta” (BSCD, 28° sesión ordinaria, Santiago, 17 de julio de 1933, pp. 1417-1429). En el debate Huenchullán pidió remensurar las concesiones hechas con anterioridad para recuperar miles de hectáreas improductivas, sobre todo de latifundistas, que son “un robo para el Estado, y el Estado necesita tierras para colonizar” (BSCD, 42 sesión ordinaria, Santiago, 9 de agosto de 1933, p. 2091). La propuesta fue rechazada, argumentando que se necesitaría un “ejército de agrimensores” para recabar todas las tierras mal entregadas.

IMÁGEN 1

Fuente: Museo de Loncoche. Gentileza de Víctor Muñoz Cortés.

La propia CSC pidió modificaciones a la ley como que los colonos debían vivir en las parcelas recibidas, pero trabajarlas con libertad, ya sea en huertos familiares u otra modalidad (La Opinión, 27 de julio de 1933, p. 2). El 5 noviembre de 1933 realizaron la Segunda Convención de la CSC, con una asistencia de unas 350 personas. Tal como lo denunció el Intendente de Cautín, un número de militantes comunistas, como Juan Leiva Tapia, criticaron la vía institucional para conseguir la adquisición de tierras, pronunciando “expresiones injuriosas para S. E. el presidente de la República” (Archivo Nacional de la Administración, Fondo de Ministerio de Interior, vol. 8675, Oficio de Intendente de Cautín a Ministerio de Interior, Temuco, 14 de noviembre de 1933)[3]. Fue el propio Aburto Panguileff, como representante de la FA, que desautorizó las declaraciones de Leiva Tapia, argumentando que “los indígenas

3 Archivo Nacional de la Administración en adelante (ARNAD).

somos respetuosos de las leyes y que esperaban ser oídos por S. E. el Presidente de la República" (El Diario Austral, Temuco, 6 de noviembre de 1933, p. 6). La discrepancia terminó en conato, siendo interrumpido por carabineros. Un informante de la CSC aclaró que en el evento sólo se habló de propuestas de colonización y no de política en general (ARNAD, Fondo Ministerio de Interior, vol. 8373, oficio reservado N° 429, Santiago, 9 de noviembre de 1933)[4]. Una fotografía del evento muestra a los participantes de la Convención: en general delegadas y delegados *mapuche* y campesinos pobres, además de niños y algunos citadinos (Imagen 1). Aparentemente Leiva Tapia no se quedó para la reproducción; y a los meses más tarde muere en enfrentamientos con Carabineros en el levantamiento en Ranquil, junto a colonos y *mapuche* que fueron desalojados de varios fundos en Lonquimay (Flores Chávez, 1993; Ulianova y Riquelme, 2009, pp. 413-453; Loveman y Lira, 2014, pp. 209-217).

A fines de 1933, se realizó el 13°Congreso Araucano de Collico, donde se discutieron las reformas al proyecto de Colonización Agrícola propuesto por la CSC (El Diario Austral, 20 de diciembre de 1933, p. 1). Allí se le pidió a Alessandri que postergara la discusión del proyecto de colonización para entregar modificaciones (El Diario Austral, 30 de diciembre de 1933, p. 7). Este le respondió a Aburto Panguilef: "Perdóneme que no tome en cuenta ninguna petición de ustedes mientras los representantes de ustedes, en el Congreso, ataquen al Gobierno con la injusticia y deslealtad que hoy lo hacen" (BSCD, 17° sesión extraordinaria, Santiago, 17 de noviembre de 1933, p. 716). La alusión iba hacia Huenchullán, que pertenecía a la Sociedad Galvarino y negociaba con la FA la unidad de la "raza araucana". Huenchullán, había planteado en el Congreso, que el proyecto no contemplaba la repartición de tierras fiscales, ni menos la expropiación de grandes extensiones de tierras no producidas (BSCD, 31° sesión ordinaria, Santiago, 19 de julio de 1933, p. 1529). "Los indígenas están llamados a ser buenos colonos y están en número suficiente para hacer una gran obra en el sur". Por esto, el Consejo de la Caja de Colonización debía tener un representante indígena, lo que no estaba considerado porque para el Estado lo importante era invisibilizar lo étnico, planteando que "todos eran chilenos"(BSCD, 31° sesión ordinaria, Santiago, 19 de julio de 1933,pp. 1534-1535). La carta de Alessandri fue considerada como un acto de deslealtad, ya que según Huenchullán la FA apoyó la candidatura de Arturo Alessandri en 1931 frente a Juan E. Montero.

> "Cuando S. E. [Alessandri] era impedido en Temuco para usar la palabra, por los señores monteristas, Manuel Aburto Panguileff ordenó desde la tribuna a sus mocetones que lo disolviera, más de cien indios montados procedieron en el acto, y S. E. admiraba entonces a la raza. En los comicios cívicos de octubre antepasado [1932] toda la raza araucana contribuyó al éxito de la candidatura de Alessandri" (BSCD, 17° sesión extraordinaria, Santiago, 17 de noviembre de 1933, p. 718).

Presionado por las agrupaciones patronales, como la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), el gobierno de Alessandri obvió los reclamos de las organizaciones *mapuche* y apoyó los desalojos enviando la fuerza policial. Si bien el caso más emblemático fue la matanza en Ranquil, también se puede mencionar los casos de "El Lingue", la "Compañía Ganadería y Agrícola Toltén", el fundo "Pellahuén" y el fundo "Mantilhue" (La Opinión, 25 de febrero de 1934, p. 1). Incluso, en el marco de las movilizaciones de los obreros ferroviarios de 1936, Aburto Panguileff fue relegado en la Isla Queyún, siendo acusado de "un gran propagandista del comunismo" (La Hora, 27 de febrero de 1936, p. 11). Quizás por estas razones y las expectativas creadas por la coalición Frente Popular (FP), las organizaciones *mapuche* modificaron su política de alianza, moviéndose desde el gobierno de Alessandri hacia la centro-izquierda. Si bien siguieron siendo agradecidos de Alessandri, quien derogó el pago de contribuciones, la FA se reunió con la Central de Trabajadores de Chile en abril de 1938,

4 ARNAD, Fondo Ministerio de Interior, en adelante (FMI).

retomando los contactos con comunistas y socialistas en Santiago (Claridad, 22 de abril de 1938, p. 6). Allí plantearon la defensa de sus tierras, la implementación de escuelas educacionales y pretendieron organizar un solo "bloque" *mapuche*, pidiéndole al presidente Alessandri que siguiera siendo "el hombre del año veinte" (Claridad, 12 de febrero de 1938, p. 6).

A pesar de esto, la alianza entre Aburto Panguilef y los partidos de izquierda no se concretó. Si bien, algunas comunidades apoyaron la campaña presidencial del FP, la Federación Araucana y la Sociedad Caupolicán formaron la Corporación Araucana y respaldaron la candidatura de Carlos Ibáñez del Campo (Pinto Rodríguez, 2012, p. 185). ¿Cómo reaccionaron los partidos políticos de izquierda ante las demandas *mapuche*? ¿Pretendieron incorporar sus reivindicaciones? A continuación, la última parte de este artículo analizará la política agraria del PS y su relación con las demandas *mapuche*.

3. LA POLÍTICA AGRARIA DEL PARTIDO SOCIALISTA: ¿UN RACISMO INCONSCIENTE?

El 19 de abril de 1933 se constituyó el Partido Socialista producto de la fusión de la NAP, el PS Unificado, la Acción Revolucionaria Socialista, la Orden Socialista y el PS Marxista. Semanas antes, la policía allanó sus sedes, probablemente porque conocían de dicha reunión (BSCD, 28° sesión extraordinaria, Santiago, 13 de marzo de 1933, p. 1420; ARNAD, F.M.I., vol. 8375, oficio confidencial N° 123, Santiago, 3 de abril de 1933). Cuatro días después de su fundación se realizaron dos charlas magistrales: una en la sede de Serrano 150, donde expuso Gregorio Guerra sobre "Régimen legal, régimen dictatorial"; mientras que, en la comuna de Conchalí, se dictó la conferencia "Sobre el problema de la tierra", a cargo del zapatero y ex NAP, Augusto Pinto (La Opinión, 21 de abril de 1933, p. 1).

La constitución del PS más que un hecho apresurado, fue resultado de un amplio movimiento de organizaciones inspiradas en el socialismo, el nacionalismo y el anarquismo; militantes con una amplia experiencia en el movimiento obrero y profesionales provenientes de los incipientes sectores medios. El contexto de crisis política y económica, además de la participación de muchos de sus fundadores en la República Socialista de 1932, permitió avanzar rápidamente en una organización unificada y consensuar en un programa político entre revolucionario y reformista (Drake, 1992).

Una de estas fuerzas era la NAP, formada en agosto de 1931 e inserta en ciudades como Santiago, Rancagua, Talca, Los Ángeles y Concepción. Liderada por Eugenio Matte, esta propuso la "redistribución de las tierras y sociabilización de los medios productivos" (Crónica, 20 de marzo de 1932, p. 3). Con una militancia mayoritariamente de profesionales y empleados, tuvo influencia del aprismo peruano, sobre todo mediante los conceptos de antiimperialismo y el indoamericanismo (Moraga Valle, 2009). Algunos de sus dirigentes participaron en la República Socialista y más adelante en instituciones ligadas a la Caja de Colonización Agrícola o al Ministerio de Tierras y Colonización. Así fue el caso de Leoncio Chaparro, agrónomo y futuro militante socialista. Este escribió precisamente un estudio titulado *Colonización y Reforma Agraria*, donde expuso que la justa distribución de la tierra ayudaría a mejorar "los defectos raciales, tales como la pereza", producto de acaparamiento desproporcionado del 89% de las tierras, por parte de 599 propietarios (Chaparro, 1932). Chaparro no consideró a las comunidades *mapuche*, lo más probable porque las entendía como parte del campesinado, describiendo a estos últimos con el defecto de la "flojera, el desorden, la simulación de trabajo", teniendo que ser "arrancados de raíz", porque no habría patrones explotadores, sino directores y guías" (Chaparro, p. 23).

En los meses siguientes a la República Socialista, las diferentes organizaciones socialistas se reagruparon en torno a la candidatura presidencial de Grove, el cual, desde la Isla de Pascua, obtuvo un importante 18%. El triunfo de Alessandri, con un 54%, hizo que éste se sintiera más cómodo y se apoyara en políticas más conservadoras. Dicho gobierno, como comentamos más arriba, si bien propuso un proyecto de colonización agrícola entre 1933-

1935, continuó respaldando, mediante la fuerza policial, los desalojos de colonos y *mapuche* en el sur del país. Por otro lado, frente a la sindicalización campesina, Alessandri acogió el llamado de la SNA y prohibió a los inspectores del Trabajo constituir organizaciones sindicales en los espacios rurales (Loveman, 1976, pp. 113-118). Esto fue denunciado por el diputado de la NAP, Carlos A. Martínez, quien describió a los campesinos como:

> "Esa clase especial de hombres rudos y generosos, con almas de niños y corazones grandes, como grandes son sus esfuerzos en arrancarle a la tierra generosa sus tesoros naturales; toda esa clase social de compatriotas nuestros, hermanos nuestros, permanece hasta hoy abandonada a su propia suerte". (BSCD, 11° sesión ordinaria, Santiago, 13 de marzo de 1933, p. 516)

Esta mirada, de cierta manera paternalista, colocaba a los campesinos como víctimas a los cuales había que auxiliar desde la urbe. Martínez además criticó la política de colonización, manifestando los retrasos en la entrega de fundos por parte de la CCA, como fue el fundo "Lo Arrayán" en Catemu y "San Isidro" en Quillota (BSCD, 32° sesión extraordinaria, Santiago, 29 de noviembre de 1933, pp. 1485-1486). Dichos sucesos, más otros, demostraron que el PS estaba interesado desde un comienzo por el problema de la distribución de la tierra, proponiendo la expropiación de los grandes latifundios y la protección a los pequeños propietarios (Consigna, N° 2, 26 de mayo de 1934, p. 1; N°7, 30 de junio de 1934, p. 3). Sin embargo, los discursos pronunciados en el Congreso Nacional no visualizaron las reivindicaciones de las organizaciones *mapuche*, ni un vínculo directo con ellas. Una excepción pudo ser la defensa de algunos detenidos en el caso de Ranquil, a cargo de los socialistas Juan Picasso y Federico Klein (Consigna, N° 18, 6 de abril de 1935, p. 2). Según Augusto Samaniego y Carlos Ruiz, esto se debió porque los socialistas tuvieron una visión "integracionista" hacia los pueblos indígenas, considerando que debían "chilenizarse" para ser tratados con igualdad (2007, p. 223).

De esta manera, sólo a partir de 1935 el PS informó en sus periódicos sobre algunos eventos, tales como el Congreso Araucano en Valdivia, organizado por FA, donde asistieron diputados liberales y comunistas, pero no socialistas (Consigna, N° 48, 16 de noviembre de 1935, p. 4). Al año siguiente, el semanario Consigna denunció los desalojos a las comunidades *mapuche* a partir de la visita de una delegación desde la Araucanía. "Es inútil que recurran pidiendo amparo a nuestros tribunales. La justicia chilena, es la justicia burguesa de todos los países, y los indios *mapuche*s constituyen los parias de nuestra población del sur" (Consigna, N° 88, 5 de septiembre de 1936, p. 4). Con esto, los socialistas reconocían que los *mapuche*s poseían otra identidad, pero que la solución pasaba por su integración cultural. Quizás por esto y la misma composición social de su militancia, provenientes de las ciudades, el acercamiento de los socialistas comenzó con los pequeños agricultores, más que con organizaciones *mapuche*. Un caso ejemplificador fue el apoyo del PS a la Liga de Nacional de Defensa de Campesinos Pobres (Acevedo, 2015). Fundada en 1935 por militantes de la Izquierda Comunista, la Liga organizó un Congreso Campesino en mayo de 1936, asistiendo más de veinte delegados de diversas provincias. Las resoluciones fueron respeto a diversas materias, pero ninguna relativas a la reivindicación *mapuche* (Consigna, N° 73, 23 de mayo de 1936, p. 2; Consigna, N° 74, 30 de mayo de 1936, p. 1).

En marzo de 1936, el PS participó en la formación del FP junto a los partidos Radical, Comunista, Democrático y la Izquierda Comunista. El proceso derivó en la candidatura de Pedro Aguirre Cerda y la planificación de un programa de gobierno, donde en materia agraria se propuso la libre sindicalización campesina y el reparto de tierras arables con indemnización a sus propietarios. Esto último continuaría siendo a través de la colonización agrícola, es decir, mediante la compra de tierras, pero no necesariamente la devolución de tierras *mapuche* (El Mercurio, Santiago, 30 de julio de 1938, p. 13). A diferencia de los años anteriores, a partir de este período se evidencia la presencia militante de *mapuche*s en el PS. Uno de ellos fue Lorenzo Coñamán, socialista y miembro de la Sociedad Galvari-

IMAGEN 2

Carlos y Andrés Chihuailaf, fundadores de Frente Único Araucano.
Gentileza de Arauco Chihuailaf.

no, quién en el quinto aniversario de esta última organización planteó que: "únicamente luchando codo a codo con la masa trabajadora que compone el PS podrían obtener sus reivindicaciones, pues el indio, como el campesino y el obrero en general son explotados por el capitalismo" (Consigna, N° 131, 17 de julio de 1937, p. 2).

Con este proceso de una supuesta "integración", la Sociedad Galvarino participó activamente en la campaña por el triunfo de Pedro Aguirre Cerda y convocó a un Congreso *Mapuche* en abril de 1939 en Temuco. Según el reportaje de Ercilla, decenas de mujeres, hombres y niños llegaron de a pie y caballos al evento, vigilados por carabineros. Sus resoluciones, entre otras, radicación a reservas forestales de Malleco, Cautín y Valdivia; créditos agrícolas y restitución de sus tierras usurpadas, además de tener un representante en la CCA (Ercilla, 28 de abril de 1939, p. 14). Como resultado del evento fundaron el Frente Único Araucano (FUA), liderado por Andrés Chihuailaf Wenulef y el socialista Gregorio Seguel (Frente Popular, 15 de abril de 1939, p. 5). La FAU tuvo serias diferencias con las antiguas FA y la Sociedad Caupolicán. De hecho, Aburto Panguilef y Venancio Coñuepán se negaron a participar en dicho Congreso, formando la Corporación Araucana, organismo que criticó que la FUA tuviera una lógica de asimilación a la sociedad chilena y que pidiera reformar la ley de división de comunidades indígenas (El Frente Araucano, N° 1, julio de 1939, p. 2). Esto de alguna manera es efectivo, porque en el evento de constitución de la FUA fue invitado el ministro Carlos A. Martínez, quien reconoció que la colonización pasaba por la asimilación del *mapuche* como chileno:

> "Yo he venido aquí obedeciendo a vuestra gentil invitación y con un mandato expreso de don Pedro [Aguirre Cerda]: iniciar la obra y decir a los indios que la

> justicia en Chile se hará efectiva a los hijos de la noble raza araucana y que por lo tanto vuestro problema fundamental, el de las tierras, y vuestra incorporación a la cultura nacional, serán resuelto íntegramente" (Martínez, 1939, p. 32).

Los compromisos de tierras a las comunidades indígenas fueron en otros sectores y la incorporación a las escuelas públicas y técnicas no incorporó la cultura *mapuche*. "El problema indígena no sólo es problema de tierra, sino que es también, principalmente, un problema de cultura y de civilización", dijo Carlos A. Martínez en aquel Congreso (Ibid., p. 50). Al mes siguiente los compromisos se ratificaron en La Moneda con la directiva del FUA (Carlos y Andrés Chihuailaf y Luis Marrián), continuando con actividades todo ese año (*Imagen 2*). En octubre, una nueva delegación viajó a Santiago pidiendo "la creación de escuelas en los campos, para terminar con la ignorancia y el analfabetismo de la raza (…) piden incorporarse a la vida ciudadana" (Frente Popular, 31 de octubre de 1939, p. 4).

Con el correr de los meses, se presentaron las principales diferencias entre el FP y las organizaciones *mapuche*, sobre todo con respecto al proyecto de División de Comunidades Indígenas. Sus orígenes se remontaban a 1927, cuando la dictadura de Ibáñez intentó la venta individual de los territorios *mapuche*. En 1940, la FA insistió que la "principal solución del problema indígena no consiste en dividir las comunidades, sino que en radicarlas nuevamente y el Estado está obligado a ello" (La Crítica, 18 de enero de 1940, p. 5). Por su parte la Sociedad Galvarino rechazó el proyecto de ley porque la "solución del problema indígena no consiste en dejarlos en el mismo terreno estrecho sino darles amplias cabidas en los terrenos fiscales para que puedan desarrollar sus adelantos" (La Crítica, 22 de enero de 1940, p. 10). ¿Qué estaba de fondo en este debate y cuál fue la actitud de los socialistas?

* * *

El triunfo del Frente Popular en 1938, marcó una nueva etapa en la historia política del país, pero no así en la historia *mapuche* contemporánea. Con la llegada de Aguirre Cerda no existió una devolución de tierras mediante el respeto de los Títulos de Merced, ni menos un reconocimiento de sus diferencias culturales. Al contrario, dicho gobierno intentó reforzar un imaginario en torno a la identidad nacional, que llamó la "raza chilena", mejorándola mediante programas de higiene, deporte y cultura. Así lo planteó Aguirre Cerda en 1939:

> "El amor a la raza, a la raza chilena, a ese conjunto social que para nosotros es todo nuestro orgullo, que lo admiramos y queremos a pesar de los defectos que pudiera tener, como se quiere a la madre y a la bandera (…) Fortificar, pues, la raza, formarla sana y pujante, proporcionarle la alegría de vivir, el orgullo de sentirse chileno, es un sentimiento que nadie debe negar a nadie, cualquiera que sea el medio que unos u otros conceptúen como el más apropiado" (Presidencia de la República, 1939, pp. 12-13).

Según la historiadora Karin Rosemblant, el FP [y la izquierda chilena], se basó en un modelo racista de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos chilenos, a partir de la idea de "modernización", integrando a los pueblos indígenas al carro del progreso. "La fe en el progreso era una cosmovisión profundamente racista. Los europeos blancos, se pensaba comúnmente, eran los portadores de una cultura superior que debería suplantar a otras formas de vida" (Rosemblant, 2000)[5].

En el caso de los socialistas, con una composición social principalmente de sectores profesionales y obreros, no ingresaron militantes *mapuche*, al menos hasta 1937. Al hacerlo no establecieron necesariamente relaciones horizontes con sus dirigentes urbanos. Al llegar al gobierno, los ministros de Tierra y Colonización fueron precisamente los socialistas

5 Agradezco a Rolando Álvarez la facilitación de dicho texto.

Carlos Alberto Martínez y Rolando Merino, quienes tuvieron la disposición de dialogar con dirigentes *mapuche*, pero mediante la práctica de la "integración". Un caso ocurrió en 1940, cuando el semanario socialista, *Consigna*, informó que Juan Fermín Lemuy y José Ángel Antillanca visitaron al ministro Merino, denunciando los atropellos de Augusto Grob, dueño del fundo "El Arrayán", en La Unión (Consigna, N° 67, 20 de julio de 1940, p. 4). Los conflictos con Grob, hijo del colono alemán Teofilo Grob, provenían de muchos antes, sobre todo por el fundo fiscal llamado "Mantilhue". Allí vivían, hace 35 años, Antillanca y más de 300 personas en su mayoría *mapuche*, a los cuales Grob intentó desalojar con ayuda de la policía en enero de 1936. Al resistir el despojo, parlamentarios comunistas y socialistas denunciaron el hecho y ofrecieron su ayuda hasta lograr su aplazamiento (Illanes, 2019, pp. 108-119). Según *Consigna*, la visita al Ministro Merino, de parte de José Ángel Antillanca en 1940, la hizo con Lemuy como "delegados *mapuche* y "abnegados luchadores socialistas". ¿Cuándo y cómo habrá sido el ingreso de ellos al PS? Lamentablemente no contamos con dicha información.

Más allá de esto, el debate en torno a la División de Comunidades Indígenas dejó entrever la visión "civilizadora" de la izquierda en torno a los *mapuche*. Elaborado por Carlos A. Martínez, esta propuesta tuvo como objetivo reformular el proyecto de Ibáñez del Campo, teniendo la asesoría del FUA y la Corporación Araucana. Inesperadamente, esto fue rechazado por diputados *frentista* como el diputado Benjamín Claro (Acción Republicana), porque no cuadraba "con la mentalidad del indígena ni con las modalidades de vida de éste". De esta forma la solución, más que la división de las comunidades era la educación. "No se han creado escuelas que estén a tono con la mentalidad y la capacidad del indio, ni tampoco se ha velado por la existencia de profesores que entiendan al indígena que poseen el idioma *mapuche*, y que se puedan comunicar fácilmente con ellos" (BSCD, 36° sesión extraordinaria, Santiago, 10 de enero de 1940, pp. 2085-2086). A la vez, el diputado por Temuco, Armando Holzapfel (Radical), pidió en enero de 1940, prorrogar la votación, al menos por unos seis meses, para estudiarla mejor. La respuesta del ministro Rolando Merino graficó el pensamiento de asimilación del gobierno del FP, que buscaba:

> "...la integración de la raza araucana en el núcleo nacional; su incorporación definitiva a la cultura del resto del país, en forma y términos tales que en un porvenir próximo podamos solamente hablar de problemas nacionales o chilenos y no de problemas chilenos y araucanos" (BSCD, 36° sesión extraordinaria, Santiago, 10 de enero de 1940, p. 2091).

El ministro socialista aclaró que su afán no era "destruir" la raza araucana, sino de protegerla, porque reconocía que existía una grave usurpación de tierras mediante la "violencia y el engaño". Pero aclaró que los *mapuche* no eran los únicos afectados por los despojos, sino que miles de "chilenos" en el sur Chile. Por lo tanto, sus problemas de tierras y créditos debían contemplarse en la Caja de Crédito Agrario y la Caja de Colonización, debiendo los *mapuche* constituirse como en "Cooperativa Agrícola", es decir, bajo las formas estatales chilenas de organización (BSCD, 36° sesión extraordinaria, Santiago, 10 de enero de 1940, pp. 2092-2095) Según la Sociedad Galvarino, no se llegó a acuerdo con el gobierno porque el Ministerio de Tierras y Colonización no quiso crear una Sección Indígena (Heraldo Araucano, septiembre de 1941, p. 1). Por otro lado, las organizaciones lideradas por Aburto Panguilef y Venancio Coñuepán no volvieron a desarrollar una alianza con la izquierda, continuando apoyando a Ibáñez y más adelante a partidos de derecha. En el caso de Coñuepán, este fue diputado por el Partido Conservador (1945-1953) y ministro de Tierras y Colonización en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1953). ¿Cómo se explica este viraje? Un cercano a Coñuepán comentó que:

> "El Partido Conservador era el más poderoso de nuestro país... entonces si nosotros queríamos pactar con alguien. ¿Cómo vamos a ir al Partido Socialista en ese tiempo, o al Partido Comunista? Qué no tenían ningún poder aquí... entonces nosotros

> llegamos a pactar con los que tenían más poder, para lograr alcanzar algo de ese poder… y eso es lo que nunca entendieron nuestra gente" (Ancán Jara, 2010, p. 51).

El anterior testimonio nos habla de una estrategia con suficiente autonomía, más de que de una "asimilación forzada" hacia las organizaciones *mapuche*. ¿Tuvo que ver este viraje también por la percepción de un racismo inconsciente de parte de la izquierda? Actualmente se ha podido determinar que el racismo se basa precisamente en la convicción que existen razas humanas, algunas superiores a otras inferiores, pero la explicación sería de su diferencia biológica. Así lo definió el historiador Nelson Manrique, al decir que la desigualdad social se sustentaba en una visión distorsionada de la realidad, obligando a las etnias o pueblos explotados a negar su propio "yo" (Manrique, 1997, pp. 321-348). En el caso de las comunidades o individuos *mapuche*, muchos decidieron negar su identidad y cultura para así "incorporarse" a una sociedad que legitimaba sólo el castellano como lengua y la supuesta "raza chilena", que no es más que una construcción social. "Es el racismo el que crea las razas", escribió Manrique (1997, p. 336). Fue la experiencia de miles de *mapuche* que migraron a Santiago entre 1940-1960. Según Felipe Curivil, mientras algunos silenciaron su cultura, con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida, otros continuaron la asociatividad *mapuche* en sindicatos y organizaciones de vivienda (Curivil, 2013).

En el caso del PS, si bien sus intenciones pudieron ser de protección y solidaridad con las comunidades *mapuche*, la actitud paternalista lo transformó en un "racismo inconsciente", pero igualmente discriminatorio. Quizás las palabras del diputado y escritor socialista Manuel Eduardo Hubner, puede ser más ilustradora:

> "La existencia de una raza indígena enquistada, usando una expresión médica, en el organismo vivo que es la colectividad chilena (…) recordemos, que hoy los araucanos son sólo unos cien mil, los cuales ocupan unas 400 mil hectáreas de terreno propio y poseen suelo suficiente para poder desarrollarse (…) es necesario que nos inspiremos en un sentimiento profundamente chileno, a fin de que consigamos que esta raza siga su destino definitivo. Su inevitable y digno destino de llegar a algún día a ser chileno del todo" (La Crítica,12 de enero de 1940, p. 2).

Hubner reconoció a los *mapuche*s como un grupo étnico distinto a lo "chileno", pero que debía "transitar" al digno destino de la nacionalidad chilena (¿existir como pueblo o anular su cultura?). Lo chileno, concepción ambigua de la realidad, fue percibido como lo "moderno" y lo posible para el desafío de conducir al país hacia el desarrollo. ¿En qué se influenciaron para estos postulados?

Creemos que una vertiente pudo provenir de la influencia del APRA, organización del Perú, que tanto Hubner como otros dirigentes socialistas se relacionaron en la década de los años veinte (Sánchez, 1975). El aprismo postuló la integración de los indígenas a la sociedad peruana, pero sin reconocerle legitimidad a su cultura, ni tampoco restitución de sus antiguas tierras usurpadas (Klaren, 1976; Davies, 1971). Así lo planteó Luis Alberto Sánchez, dirigente aprista, exiliado en Chile en la década de los años treinta y cuarenta:

> "Si el indio se hizo aprista fue porque el aprismo encarna la reivindicación del agro, y respeta o restaura tanto la forma de propiedad y laboreo del ayllu, como el minifundio, según los hábitos y mentalidad de los campesinos de cada comarca. […] Lo que moviliza al indio no es, en el fondo, odio al blanco o al español, sino positivo amor a la tierra y, de rechazo, oposición a quien la detente" (Sánchez, 1973, p. 52).

Por otro lado, tanto el Aprismo como los socialistas resaltaron la revolución mexicana, pero sobre todo destacando la nacionalización del petróleo y la entrega de tierras por parte de Lázaro Cárdenas (Consigna, N° 98, 21 de noviembre de 1938, p. 3). De hecho, Hubner viajó a México en 1937, reuniéndose con Cárdenas y valorando el proceso revolucionario, desde la institucionalidad y el liderazgo militar (Consigna, N° 3, segunda época, noviembre

de 1938, p. 6). Figuras como Emiliano Zapata o Francisco Villa fueron destacadas, pero pasaban a un segundo plano al compararse a figuras como Cárdenas, a quien los socialistas pretendieron igualar a Marmaduke Grove. Eran años de campaña presidencial y el PS lo quería que este fuera el candidato del FP.

> "Cárdenas, el constructor del México moderno, el guía, el realizador; y Marmaduke Grove, nuestro líder, el aglutinador de las inquietudes populares de Chile, la bandera de la redención de nuestro pueblo [...] dos símbolos de la grande, libre y justa América del porvenir" (Consigna, N° 140, 18 de septiembre de 1937, p. 1)

Finalmente, la principal influencia de los socialistas fue el propio liberalismo de la época, que reconoció la resistencia *Mapuche* ante conquista española, pero que al incluirlo en la formación del Estado-Nación, lo excluyeron de su identidad. Así se evidencia en escritos de Francisco Bilbao, a quién los socialistas reconocieron como inspirador del pensamiento socialista. En un texto titulado "Los Araucanos", Bilbao expresó sobre los *Mapuche*: "[En ellos] No domina en él la inteligencia, todo en él es un combate. Sus genios combaten, sus mujeres en el cielo son virginales; en la tierra combate contra la naturaleza y elementos y el suicidio es muy común" (Bilbao, 2010). Otros pensadores liberales como Andrés Bello o José Victorino Lastarria expusieron que las tradiciones del naciente Estado chileno provenía de España, desconociendo los aportes culturales de los pueblos indígenas, e invisibilizando a estos mismos. En palabras de Ximena Troncoso: "Bello construye una imagen de América apoyada en la diferencia indígena para posteriormente expulsarla del y por el proyecto nacionalista americano" (Troncoso, 2003. p. 159).

Pero habría que preguntarse que tan exitoso fue este pensamiento liberal o cuál fue la actitud de las comunidades y organizaciones *Mapuche* frente a la propuesta de integración. Al asumir que los *Mapuche* fueron presionados a migrar a las grandes ciudades y ocultar su identidad, abandonamos la posibilidad de que algunos líderes y organizaciones hayan utilizado la "integración" como una estrategia para cumplir con sus propósitos políticos. El análisis de las organizaciones *mapuche*, como la Federación Araucana o incluso el Frente Único Araucano, ponen en entredicho dicho prejuicios, sobre todo por su posición variante dependiendo del escenario político y su autonomía relativa que les permitió desarrollar un conjunto de alianzas en el transcurso del siglo XX (Chihuailaf, 2005, 158). A la vez, la izquierda pudo estar atrapada en un "racismo inconsciente", pero terminó siendo el aliado con quien mejor avanzó el movimiento *mapuche* en torno a sus reivindicaciones históricas en el siglo XX. Según la historiadora María Angélica Illanes, fue en este período, a comienzos del siglo XX, cuando se constituyeron como "sujeto-mapuche" en el proceso de "liberación política *desconquistadora*/*descolonizadora* por el lado de *afuera* de los latifundios" (Illanes, 2019, p. 35). Los partidos de izquierda le dieron un sustento y un apoyo a ese proceso. Sería el golpe militar de 1973 y la posterior dictadura, la que hizo retroceder dichos logros, sobre todo con la promulgación de la división de tierras en 1979, la cual provocó una masiva migración de *mapuche* hacia las ciudades (Curivil, 2013, p. 160). En la actualidad, diversos estudios, van demostrando que el proceso de "desmapuchización" ha retrocedido y cuenta con un importante respaldo de la izquierda, lo cual no asegura que haya disminuido el racismo inconsciente en ella, pero sí que se ha reforzado la autonomía y el sentido de autodeterminación de las organizaciones *Mapuche*. (Pairicán, 2014; pp. 67-29; 2015, pp. 301-323).

La Florida, julio de 2019.

BIBLIOGRAFÍA

FUENTES PRIMARIAS Y PRENSA

- *Claridad*, Santiago (1937-1938).
- *Consigna*, Santiago (1934-1941)
- *Crítica*, Santiago (1939-1941)
- *Crónica*, Santiago (1931-1932).
- *El País*, Santiago, (1931-1932).
- *Ercilla*, Santiago, (1935-1940)
- *Frente Araucano*, Temuco (1939)
- *La Opinión*, Santiago (1932-1941)
- Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados (1933-1941)

FUENTES SECUNDARIAS

- Aburto Panguilef, M (2013). *Libro diario del Presidente de la Federación Araucana, 1940, 1942, 1948-1951*. Santiago: CoLibris.
- Acevedo Arriaza, N. (2015). *"Autonomía y movimientos sociales: la Liga de Campesinos Pobres y la Izquierda chilena (1935-1942)"*. En Izquierdas (N°23), 44-65.
- _____ (2017). *Un fantasma recorre el campo. Comunismo y politización campesina. Chile (1935-1948)*. Valparaíso: Editorial América en Movimiento.
- Albizú Labbé, F. (2014). *"El indigenismo de la Unidad Popular (Chile 1970-1973). Estado y Nación entre reformismo y realidad"*, Amerique Latine. Histoire & Memorie. Les Cahiers ALHIM [En línea], N° 28, 2014, publicado el 5 de diciembre de 2014.
- Almonacid, F. (2008). *La agricultura chilena discriminada (1910-1960). Una mirada de las políticas estatales y el desarrollo sectorial desde el sur*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- _____ (2008). *"La división de las comunidades indígenas del sur de Chile, 1925-1958: un proyecto inconcluso"*. En Revista de las Indias (Vol. LXVIII, N° 243), 115-150.
- _____ (2009). *"El problema de la tierra en el sur de Chile (1850-1939)"*, en: Historia, N° 42, vol. 1, Pontificia Universidad Católica, enero-junio de 2009, Santiago, pp. 5-56.
- Ancán Jara, J. (2010). *Venancio Coñuepán*. Santiago: Editorial USACH.
- Antileo Baeza, E. y Alvarado Lincopi, C. (2017). *Santiago Waria Mew. Memoria y fotografía en la migración mapuche*. Santiago: Ediciones Comunidad de Historia Mapuche.
- Bilbao, F. (2010). *"Los Araucanos"*. Revista La Cañada, N° 1. pp. 157-198.
- Bunster, B (1945). *El niño chileno. Libro para la lectura para el 1° año humanidades*. Santiago: Universo.
- Cayuqueo, P. (2008). "La Ley indígena de Allende era vista como una de las más avanzadas", *Enlace Mapuche Internacional*, 29 de junio de 2008, sitio: www.mapuche-nacion.org
- Chaparro, L. (1932). *Colonización y reforma agraria. Hacia una distribución más justa de la tierra en Chile*. Santiago: Nascimento.

Revista Divergencia: N° 13 / Año 8
Julio - Diciembre 2019
ISSN 0719-2398

- Chihuailaf, A. (2013). "Los mapuches y el gobierno de Salvador Allende (1970-1973)". Manuscrito.
- _____ (2005). "Mapuche: gente de la tierra. Más allá del Nuke Mapu (Madre Tierra). El exilio. En Contribuciones desde Coatepec (N° 8), 157-171.
- Chonchol, J. (2016), Jacques Chonchol, un cristiano en la política chilena del siglo XX. Conversaciones con Claudio Robles Ortíz. Santiago: Ediciones Universidad Finis Terrae.
- Curivil Bravo, Felipe (2013). "Asociatividad Mapuche en el espacio urbano. Santiago, 1940-1970". En: V.V.A.A. Ta Iñ Fijke Xipa Rakizuameluwun. Historia, colonialismo y resistencia desde el país Mapuche. Temuco: Ediciones Comunidad de Historia Mapuche, 155-185.
- Davies, T. M. (1971). "The indigenismo of the Peruvian Aprista Party: A reinterpretation", *The Hispanic American Historical Review*, Vol. 51, N° 4. London: Duke University Press, Nov. 1971, 631-632.
- De la Cadena, M. (2014). "El racismo silencioso y la superioridad de los intelectuales en el Perú". En Christine Hunefeldt, Cecilia Méndez y Marisol de la Cadena. Racismo y etnicidad. Lima: Ministerio de la Cultura, 54-97.
- Drake, P. (1992). *Socialismo y populismo Chile 1936- 1973*. Valparaíso: Universidad de Valparaíso.
- Drinot, P. y Knigth, A. (2015). *La Gran Depresión en América Latina*. México: Fondo de Cultura Económica, 73-108.
- Foerster, R. y Montecinos, S. (1988). *Organizaciones, líderes y contiendas mapuches (1900-1970)*. Santiago: Ediciones CEM.
- Frías Valenzuela, F. (1943). *Historia General. Tomo III*. Santiago: Nascimento.
- Grove, H. (1933). *Descorriendo el velo. Episodio de los doce días de la República Socialista*. Valparaíso: Librerías Cultura.
- Grove, M. (1939). *Reforma agraria: la tierra para el que la trabaja*. Santiago: Secretaría Nacional de Cultura.
- Huerta, M. A. (1989). *Otro agro para Chile. La historia de la Reforma Agraria en el proceso social y político*. Santiago: CESOC.
- Illanes, M. A. (2019). *Movimiento en la tierra. Luchas campesinas, resistencia patronal y política social agraria. Chile, 1927-1947*. Santiago: LOM Ediciones.
- Klubock, T. M. (2010). "Ránquil, violence and peasant politics on Chile's Southern frontier". En Grandin, G. & Joseph, G. M. A Century of Revolution. Insurgent and counterinsurgent violence during Latin America's Long Clod War. London: Duke University Press, 122-159.
- Jobet, J. C. (1964). *Los fundamentos del marxismo*. Santiago: Editorial Prensa Latinoamericana.
- Klaren, P. (1976). *Formación de las haciendas azucareras y orígenes el APRA*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Lenin, N. (1936). *Lenin y el problema agrario*. Santiago: Ediciones Lucha de Clases.
- Loveman, B. (1969). *Struggle in the Countryside: Politics and Rural Labor in Chile, 1919-1973*, Bloomington: University of Indiana Press.
- Manrique, N. (1997). *El tiempo del miedo. Violencia política en el Perú*. Lima: Editorial del Congreso del Perú.

- Mariátegui, J. C. (1979). *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*. Lima: Editora Amauta.
- Martínez, C. A. (1939). *Hacia la Reforma Agraria*. Santiago: Caja de Colonización Agraria.
- Menard, A. y Pávez, J. (2005). "El Congreso Araucano. Ley, raza y escritura en la política mapuche". En Política. Revista de Ciencia Política (V. 44), 211-232.
- Moraga Valle, F., (2009). "¿Un partido indoamericanista en Chile? La Nueva Acción Pública y el Partido Aprista Peruano (1931-1933)". En Histórica (N° 2), 109-156.
- Paillalef, J. (2018). Los mapuches y el proceso que los convirtió en indios. Psicología de la discriminación. Santiago: Catalonia.
- Paricán Padilla, F. (2014). Malón. La rebelión del Movimiento Mapuche. 1990-2013. Santiago: Pehuén Editores.
- _____. (2015), "El retorno de un viejo actor político: el guerrero. Perspectivas para comprender la violencia política en el movimiento mapuche (1990-2010). En: Antileo Baeza, E. et. all. Awukan ka kuxankan zugu majmapu mew. Violencias coloniales en Wajmapu. Temuco: Ediciones Comunidad de Historia Mapuche, 301-323.
- Pinto Rodríguez, J. (2012). "El conflicto Estado-Pueblo Mapuche, 1900-1960". En UNIVERSUM (N°27, Vol. 1), 169-189.
- Portocarrero, G. (2007). Racismo y mestizaje y otros ensayos. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- Presidencia de la República (1940). Defensa de la raza y aprovechamiento del tiempo libre. Santiago: Zig- Zag.
- Prudant, E. (2015). "¿Una izquierda mestiza? La difícil relación de la izquierda chilena con el indígena, 1933-1947". En Revista de Historia Social y de las Mentalidades (Vol. 1-2), 85-106.
- Lander, E. (2000). La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO.
- Rosemblant, K. A. (2000). Gendered Compromises. Political Cultures and the State in Chile, 1920-1950. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Saavedra, A. (1971). La cuestión mapuche. Santiago: ICIRA.
- Samaniego, A. y Ruiz, C. (2007). Mentalidades y políticas wingka. Pueblo Mapuche entre golpe y golpe (De Ibáñez a Pinochet). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Sánchez, L. A. (1975). Visto y vivido en Chile. Bitácora chilena: 1930-1970. Lima: Editoriales Unidas.
- _____ (1973). El Perú: Retrato de un país adolescente. Lima: Peisa.
- San Martín, H. (1972). "Los Araucanos", Colección Nosotros los Chilenos, N° 8. Santiago: Quimantú.
- Stolcke, V. (2000). "¿Es el sexo para el género lo que la raza para la etnicidad... y la naturaleza para la sociedad?". En Política y Cultura (N°14), 25-60.
- Tijoux, M. E. (2016). Racismo en Chile. La piel como marca de la inmigración. Santiago: Editorial Universitaria.
- Troncoso Araos, X. (2003). En: "El retrato sospechoso. Bello, Lastarria y nuestra ambigua relación con los Mapuche", Revista Atenea, N° 488, Universidad de Concepción, Concepción, II Semestre, 2003, 153-176.

Revista Divergencia: N° 13 / Año 8
Julio - Diciembre 2019
ISSN 0719-2398

- Ulianova, O. y Riquelme Segovia, A (2009). Chile en los Archivos Soviéticos 1922-1991. Tomo 2: komintern y Chile 1931-1935. Santiago: Lom Ediciones- Centro de Investigaciones Diego Barros Arana.
- Valdivia Ortiz de Zárate, V. (2017). Subversión, coerción y consenso. Creando el Chile del siglo XX (1918-1938), Santiago: LOM Ediciones.

Revista Divergencia: N° 13 / Año 8
Julio - Diciembre 2019
ISSN 0719-2398

Los usos del discurso anticomunista del peronismo durante el periodo 1951-1955: La infiltración gremial, la cuestión internacional y el conflicto con la Iglesia

The uses of the anti-communist discourse of Peronism during the period 1951-1955: Guild infiltration, the international issue and the conflict with the Church

Pedro Simunovic Gamboa[1]

Recibido: 14 de abril de 2019 - Aceptado: 27 de mayo de 2019
Received: April 14, 2019 - Approved: May 27, 2019

Resumen

Los usos del discurso anticomunista durante el segundo gobierno presidencial de Juan Domingo Perón operaron en tres formas: para desacreditar las protestas en el ámbito gremial, para tomar posición en la situación internacional durante la naciente Guerra Fría y como elemento descalificador para caracterizar a sus enemigos políticos internos, entre ellos, la Iglesia. La siguiente propuesta tiene como objetivo matizar los usos del discurso anticomunista peronista tomando en consideración que en este período (1951-1955) el discurso anticomunista se presentó como epíteto descalificador entre anticomunistas para evitar admitir que existían tensiones del plano local.

Palabras clave: Anticomunismo, peronismo, macartismo, Iglesia Católica..

Abstract

The uses of anti-communis discourse during the second presidential government of Juan Domingo Perón operated in three ways: to discredit the protests in the guild, to take a position in the international situation during the rising Cold War and as a disqualifying element to characterize its internal political enemies, among them, the Church. The following proposal aims to clarify the uses of Peronist anticommunist discourse taking into account that in this period (1951-1955) the anti-communist discourse was presented as a disqualifying epithet among anti-communists to avoid admitting the existence of tensions at the local level.

Keywords: Anticommunism, Peronism, McCarthyism, Catholic Church.

1 Chileno, Magíster en Ciencias Sociales con mención en Historia Social, Universidad Nacional de Luján, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires. Correo electrónico: psimunovicgamboa@gmail.com.

INTRODUCCIÓN

Los recientes estudios que han analizado el fenómeno del anticomunismo argentino se han centrado entre las décadas de 1920 y 1940. En los años 20' el anticomunismo puede entenderse como un período formativo en tanto operaba desde una vertiente ideológica, es decir, exclusivamente como discurso contrarrevolucionario; en el que los nacionalistas, conservadores y la Iglesia señalaron al elemento comunista como un enemigo a nivel nacional e internacional (López, 2013, p.101). En la década de 1930 el anticomunismo adquiere otra materialidad, no sólo se manifestó en su dimensión ideológica, sino en un nivel más terrenal y directo, en tanto iba acompañado con diversas prácticas de disciplinamiento social (López, 2016, p.134). El anticomunismo tuvo una expresión concreta en la medida que adquirió el estatus de virtual ideología estatal[2] durante las presidencias de Agustín P. Justo (1932-1938) y Roberto Ortiz-Ramón Castillo (1938-1943).

Esta senda anticomunista iniciada con la dictadura de José Felix Uriburu (1930-1932) y la Sección Especial de Lucha contra el Comunismo de la Policía Federal fue continuada. Perón a lo largo de su régimen (1946-1955) nunca dejó de presentarse como un anticomunista, los militantes comunistas continuaban siendo encarcelados, algunas de sus publicaciones cerradas (Jáuregui, 2012, p. 30) y los comunistas siguieron siendo expulsados mediante la aplicación de la Ley de Residencia (Marengo, 2015, p. 63).

En el terreno exterior y en el marco de la Guerra Fría, Perón pretendió superar las divisiones y oposiciones por medio de la Tercera Posición[3]. No trataba de una actitud diplomática, sino ideológica y como tal, se proyectaba hacia lo interno de la nación tanto como en el plano de las relaciones exteriores (Cisneros, 2002, p. 264). No fue neutral o abstencionista, sino que adoptó actitudes definidas y propias. Perón nunca dejó de tener en cuenta que los intereses espirituales y materiales de la Argentina se hallaban junto a Occidente. Puso énfasis a la unidad política y económica de América Latina, pese a que formulara duras críticas al comunismo como doctrina política; tuvo una posición equilibrada con la Unión Soviética, y siempre evitó las actitudes frontales contra los Estados Unidos y las demás superpotencias de Occidente en el plano estratégico (Lanús, 1986, p. 75).

Perón tenía claro que el comunismo local no representaba una amenaza para su régimen[4]. En las elecciones del 24 de febrero de 1946, las listas comunistas a legisladores alcanzaron el 1,47% de los votos y para las elecciones de renovación de su mandato presidencial de noviembre de 1952, las listas comunistas encabezadas por la fórmula R. Ghioldi-Alcira de la Peña obtuvieron menos del 1% de un padrón duplicado por el voto femenino (Jáuregui, pp. 6, 31). Pese a esto, percibía al comunismo internacional como una amenaza, al caracterizarla como "doctrina" cuyo potencial radicaba en que tenía un proyecto político, económico y social concreto. Para Perón el capitalismo si bien representaba una amenaza, carecía de un proyecto político en tanto "no tenía una orientación ni un ideal", por tanto, si "tuviesen a la humanidad en sus manos no sabría qué hacer con él":

2 Con dicha expresión nos referimos a la puesta en marcha de mecanismos estatales que promovían la lucha contra el comunismo. Entre ellos podemos señalar la acción de la Sección Especial de Represión al Comunismo (SERCC), la fundación en julio de 1932 de la Comisión Popular Argentina contra el Comunismo (CPACC), presidida por Carlos Sylveira y la promoción de la ley de represión al comunismo presentada por el senador conservador Matías Sánchez Sorrondo en dos ocasiones: 1932 y 1936 (López, 2015).

3 Esta postura no se concibió como algo estático, sino dinámico y superador. El propio Juan Domingo Perón la caracterizó como una posición aritmética y no geométrica. Es decir, resultaba "tercera" por hallarse después de la primera (capitalista) y la segunda (comunista) y no entre ambas (Lanús, 1986, p. 75).

4 Sí Perón no tenía miedo del comunismo, aún menos lo tuvieron los actores empresariales ni la derecha. Como señala Bohoslavsky (2011, pp. 127-128), el desinterés de Perón ante la propuesta de alianza de clases durante su discurso en la Bolsa de Comercio en 1944, provocó que el empresariado viera con mayor aprehensión al peronismo y a su decisión de intervenir en la economía, reorientando beneficios hacia los trabajadores urbanos organizados. De ahí que el peronismo consumiera el grueso de las preocupaciones e intereses de los derechistas, que consideraron al PC como un aliado táctico y un partido democrático más, antes que como parte del enemigo.

> "De ahí que los capitalistas hayan dicho a menudo que el Justicialismo es más peligroso que el comunismo; para ellos sí, porque no saben lo que quieren. Nosotros, en cambio, si tuviéramos el mundo en nuestras manos lo haríamos justicialista". (Perón, 1952, pp. 188-189)

El propósito de este estudio es abordar los usos del discurso anticomunista peronista durante su segunda presidencia (1951-1955). Entendiéndolo en términos de una *lógica ideológica de exclusión*[5], en tanto permitía una separación selectiva de elementos del cuerpo social acorde a las convicciones ideológicas e instrumentalizaciones políticas del régimen, que descansaba en un proyecto nacionalista, antiliberal y anticomunista. El anticomunismo durante el peronismo, aunque no se conjugó con una exclusión institucional como en la década de 1930, operó a nivel de prácticas e imaginarios que apelaban más que al debate político frente a la resolución de los conflictos locales, a la hipótesis conspiracionista del anticomunismo de los reaccionarios. En ese sentido se acercó a la matriz nacionalista de este fenómeno[6], pues era inaceptable que una doctrina transmitiera el principio del internacionalismo obrero y la solidaridad con los regímenes socialistas por sobre las necesidades y objetivos de la nación (Casals, inédito, p. 15).

A modo de hipótesis general sugerimos que el discurso anticomunista del peronismo promovió la discusión entre los actores anticomunistas por posicionarse como el actor más efectivo en la lucha contra el comunismo, con motivo de evitar el debate en torno a la resolución de los problemas nacionales. Durante el período 1951-1955, reconocemos una reacción en espejo de las denuncias de los actores anticomunistas. La dirigencia peronista[7] denunció tanto a los partidos políticos tradicionales como a la Iglesia, por ser cómplices del comunismo. Al mismo tiempo, la oposición al peronismo –exceptuando el caso de la Iglesia, que comparó al peronismo con el fascismo[8]–, criticó al oficialismo tras suponer vínculos con el comunismo internacional[9].

El discurso anticomunista del peronismo operó en tres sentidos: el conflicto obrero, la cuestión internacional y las tensiones entre la Iglesia y el régimen. En lo que concierne al primer punto, Perón tenía la necesidad de evitar admitir, sobre todas las cosas, que pudiese haber un conflicto entre los requerimientos de una política económica nacional y las necesidades sentidas por ciertos sectores de la clase obrera organizada (Little, 1971, p. 302). El uso del epíteto comunista le permitía al régimen delegar cualquier tipo de responsabilidad en los conflictos gremiales en tanto tenía un referente impreciso y dúctil. Podía referir a los activistas del Partido Comunista Argentino o al movimiento internacional cuya primera referencia era la Unión Soviética. (Acha, 2014, p. 11).

5 La idea de *lógica ideológica de exclusión* fue analizada en la reciente tesis de Magíster en Historia de Marcelo Casals Araya para analizar el fenómeno del anticomunismo en el caso chileno. (Casals, 2016)

6 Cuando hablamos de matrices del anticomunismo nos referimos a las tres grandes familias distinguidas por Rodrigo Patto Sá Motta: El nacionalismo, el liberalismo y el catolicismo. Esto no implica que toda expresión anticomunista encaje en estas tres matrices. Por el contrario, priman las mezclas y las referencias aisladas o reiterativas a más de uno de estos grandes sistemas de creencias. El concepto de "matrices de anticomunismo" más que etiquetar a cada uno de estos fenómenos, nos obliga a sopesar los diferentes elementos presentes en ellas, permitiendo diferenciar y analizar cada formulación anticomunista en su especificidad. (Patto, 2000, p. 35)

7 Nos referimos únicamente al sector dirigente del peronismo ya que los trabajadores, particularmente los miembros de la CGT, utilizaron el anticomunismo para denunciar planes de infiltración que tenían que ver con la acción del Movimiento Pro Democratización e Independencia de los Sindicatos, en ese sentido podemos decir que los trabajadores peronistas se preocuparon más de los asuntos locales antes que internacionales.

8 Con esto no queremos decir que la Iglesia adoptó una postura antifascista tradicional de izquierda (Groppo, 2004, p. 28) frente a la irrupción del peronismo. La postura de la Iglesia frente a este proceso tiene que ver con que abandona su posición inicial favorable al peronismo. Durante el período 1951-1955 la Iglesia adopta una postura más liberal en la medida que denuncia a partir del antifascismo a Perón. Esta asimilación tiene que ver con el proceso de expropiación de las grandes empresas en las experiencias nacistas y fascistas de Europa occidental.

9 Ejemplo de esto es la reacción en espejo del socialismo. Carlos Herrera (2016, p. 133) sostiene que la retórica anticomunista del discurso socialista puede ser entendida por dos factores: Por la lógica antitotalitaria que había terminado por imponerse a la dirección del Partido como estrategia de oposición al peronismo, y de algún modo también a la mayoría de los militantes socialistas y por la dedicación de los periódicos en el exilio como el *Periódico del Comité Obrero de Acción Sindical Independiente (COASI)* y *La Vanguardia en el exilio* por delatar, en un plano internacional, la infiltración del "imperialismo peronista" en diferentes países latinoamericanos (Herrera, p. 120).

El anticomunismo funcionó para culpabilizar a los militantes comunistas tras la puesta en marcha de la huelga ferroviaria (1951) y la huelga metalúrgica (1954), destacando el carácter infiltrante del comunismo. La primera se extendió a lo largo de tres meses entre noviembre de 1950 y fines de enero de 1951 (Little, 1971, p.301); y la huelga metalúrgica, en el que entran en tensión los diversos grupos que componen la dirección de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), transcurrió durante los meses de abril a junio de 1954. Una característica común de ambas huelgas, es que ninguno de estos conflictos tuvo un grado significativo de "antiperonismo", pues como señala Little (p. 302), los gremios que participaron en ellos no compartían ninguna característica común muy definida como para atribuirle a ésta la razón de los paros. Abarcaban a gremios antiguos y nuevos, peronistas y antiperonistas, tanto en el sector público como en el privado. La oposición de los trabajadores durante el período 1951-1955 no se dirige contra Perón mismo, cuyo liderazgo no es discutido, pero sí contra la dirigencia sindical "sometida" a aquél (Baily,1967, p. 94).

Luego de la resolución del conflicto ferroviario, Perón declaró que "todo era parte de una conspiración comunista internacional para desorganizar los sistemas de transporte de todo el mundo"[10] (Little, p. 302). El discurso anticomunista de los gremialistas peronistas no se distanció de la matriz nacionalista, su postura tuvo como particularidad que apeló al carácter obrerista y partidista del PC local. Esto porque denunciaron al comunismo a partir de fenómenos históricos concretos, en la medida que se refirió directamente a la acción "infiltrante" de los sindicatos comunistas, entre ellos, el caso del Movimiento Pro Independencia y Democratización de los Sindicatos (MPIDS). El discurso anticomunista de la CGT, a diferencia de la dirigencia peronista, invocó algunos tópicos anticomunistas del primer período presidencial de Perón (1946-1949), entre ellos, el vínculo de los partidos políticos tradicionales con el PCA a través de la experiencia de la Unión Democrática[11].

En cuanto a la cuestión internacional, los usos del anticomunismo durante el segundo gobierno de Perón ya no tenían que ver con la derrota electoral del 24 de febrero de 1946 ni con la decidida política antinorteamericana de la época de "Braden o Perón"[12]. En junio de 1946 Perón quiso restablecer relaciones comerciales con la URSS y manifestó un posicionamiento de prescindencia política frente al escenario externo, pese a ello, nunca dejó de mostrarse como un anticomunista y no dejó de denunciar a la militancia comunista por infiltrarse en los gremios. Luego de 1951, el anticomunismo peronista estuvo en directa consonancia con una propuesta ideológica propia del clima de polarización de la Guerra Fría, es decir, las denuncias al comunismo dejaron de tener un sustento empírico. Su postura frente a Estados Unidos manifestó signos de ambivalencia frente a la sensibilidad anticomunista provocada por el macartismo. Si bien el peronismo percibió a Norteamérica como un agente imperialista para sostener su Tercera Posición, veía con buenos ojos la represión a los movimientos huelguísticos que tuviesen algún tipo de influencia comunista. Sin embargo, esta postura cambia en agosto de 1953. El gobierno argentino, con motivo de hacer una campaña de seducción de inversiones extranjeras, dictó una ley sobre radicación de capitales extranjeros que aseguraba un tratamiento benévolo en materia de repatriación de utilidades. La actitud respecto de los Estados Unidos, revisada al estallar la guerra de Corea, fue modificada con la llegada al poder de Eisenhower, y reafirmada con la visita de su hermano Milton a la Argentina (Rouquié, 1982, p. 103).

10 La presente declaración es citada por Little (p. 302) en El Obrero Ferroviario, enero-febrero de 1951.

11 Recordemos que la decisión del PCA de incorporarse a la alianza electoral antiperonista, constituida por los partidos tradicionales de la Argentina, implicó que este se vinculara con partidos abiertamente "patronales" como el conservador bonaerense o el Demócrata Progresista, partidos igual o más anticomunistas que el propio peronismo (Bohoslavosky, 2016, p. 42).

12 Sobre el uso de la dicotomía "Braden o Perón", Alicia Poderti (2010, pp. 106-111) da cuenta que este recurso retórico fue utilizado a lo largo del primer peronismo desde los comicios del 24 de febrero de 1946 hasta la alocución del 1 de mayo de 1951. Este eje discursivo si bien se mantuvo constante a lo largo del peronismo, cuando nos referimos a su tratamiento en términos del discurso anticomunista. Cumplía con la funcionalidad de oponer "la patria con la antipatria", haciendo eje a la confrontación de clases y partidos tradicionales; más que pretender asociar al comunismo con la figura del embajador norteamericano Spruille Braden.

Sobre el problema Iglesia-Perón, las relaciones entre la Iglesia y el gobierno justicialista fueron cordiales desde 1943 hasta cerca del final de la primera presidencia de Perón. La actividad oficial en el campo de la previsión social y la pretensión gubernamental por reemplazar la enseñanza religiosa por la del peronismo, llevaron a una relación menos cordial con la Iglesia[13]. En 1951 el desencanto de la Iglesia frente a Perón había evolucionado hasta el punto que no apoyó su reelección como lo había hecho directamente en 1946. Las relaciones se deterioraron aún con mayor rapidez luego que Perón en 1954 lanzara una ofensiva contra la Iglesia pronunciando discursos frente a los gobernadores provinciales y la CGT. En ellos acusó a la iglesia de infiltrarse en los movimientos populares, con la intención de que los trabajadores se volvieran contra el gobierno.

La Iglesia durante el período de conflictividad con Perón, evitó referirse a la situación nacional, por ende, su discurso anticomunista apeló al carácter ideológico, haciendo hincapié al internacionalismo antes que los rasgos partidista/obrerista del PCA. Las referencias de *Criterio* y *El Pueblo* se limitaron a exponer sobre la coartación de libertades públicas de los países europeos poniendo énfasis en la predica del anticomunismo liberal. La Iglesia no se refirió al peronismo en términos comparativos con el régimen soviético, sino que la retórica antitotalitaria de la Iglesia adquirió una funcionalidad distinta respecto a los periodos anteriores: comparar al peronismo con el nazismo y el fascismo[14]. Esta comparación, fue frecuente en la medida que durante las movilizaciones católicas aparecían carteles de "Cristo Rey" y panfletos, impresos por miembros de Acción Católica, que acusaban a Perón de "fascista" y "totalitario". La ofensiva pastoral denunciaba no solo a las torturas del peronismo, sino también más de cuatro mil casos de desapariciones. Los panfletos presentaban casos improbables de esqueletos que habían ido descubiertos. También se referían a quemas clandestinas de opositores a Perón en la Chacarita organizadas por la Policía Federal (Larraquy, 2010, pp. 84-85)[15].

Nuestras preguntas de investigación apuntan a resolver ¿Cómo operaba el discurso anticomunista considerando este escenario de quiebre con la posición peronista inicial? Y ¿Qué matices adquiere el discurso anticomunista de la dirigencia peronista tomando en cuenta el escenario internacional tensionado por el hecho que el anticomunismo fuese la ideología dominante en Estados Unidos?

2. EL ANTICOMUNISMO PERONISTA FRENTE AL CONFLICTO OBRERO: ¿DENUNCIAR LOS PLANES DE INFILTRACIÓN COMUNISTA O EVITAR EL ENFRENTAMIENTO ENTRE ANTICOMUNISTAS?

Sobre las posturas anticomunistas que hicieron referencia al conflicto ferroviario, podemos sostener que fue más frecuente la apelación al comunismo desde un ámbito ideológico antes que práctico, vale decir, las denuncias no apuntaron a fenómenos históricos

13 Sobre la puesta en tensión de la relación entre la Iglesia Católica y Perón, Lila Caimari (2002, pp. 461-464) deja en evidencia el fenómeno del "cristianismo peronista". Definido como una religión popular, desinteresada en las formas, pero fiel a la esencia social del mensaje cristiano. En él la legitimidad cristiana había sido desplazada a la esfera política en la medida que la nueva versión peronista de la religión era promovida desde el Estado. Las tensiones tuvieron su punto culmine en el Congreso Eucarístico de 1950. En un mensaje emitido en el Congreso, Perón se refirió a la religiosidad católica en términos peyorativos. En él incluía como parte esencial un diagnostico negativo con respecto al clero y a los católicos. Frente a esto, el cristianismo peronista proclamaba constituir el remedio a los males causados por esta tradición llena de vicios, mediante el redescubrimiento del esencial mensaje cristiano.
Este cambio no era fruto de los vaivenes espirituales del Presidente, sino más bien una muestra de su irritación al ver que el mundo católico daba cada vez más espacio y visibilidad a los adversarios del peronismo, y que el Episcopado había hecho poco y nada para revertir la situación.

14 Sobre esta idea véase Criterio, ¡Libertad!, 13 de octubre de 1955, Año XXVIII, Nº1245, p. 724

15 Sobre este punto Marcelo Larraquy (2000, p. 84) da cuenta que la Iglesia realizó una contraofensiva luego que el peronismo vetara las manifestaciones de la Iglesia mediante la "ley de reuniones públicas" y que en 1954, era habitual que los diarios oficialistas demonizaran a los curas y los acusaran de "infiltrarse en las organizaciones del pueblo", Acción Católica imprimió panfletos presentando casos improbables de descubrimientos de esqueletos que habían sido sepultados bajo tierra en basurales de la ciudad, en el actual empalme de la avenida General Paz con la Ruta Panamericana, y también mencionaban cadáveres transportados por aviones y arrojados al Río de la Plata.

concretos en que los militantes del PCA se vieron involucrados, por esto, el grueso de las preocupaciones del peronismo se enfocó en los aspectos internacionales del comunismo. En lo referente al carácter político de las huelgas peronistas, los trabajadores no dirigieron sus protestas contra Perón sino contra los funcionarios del gobierno y contra la patronal (Doyon, p.438). Las causas tanto de la huelga ferroviaria como de la huelga metalúrgica coincidieron en dos puntos del conflicto. El económico, producto de la demanda de mejoras salariales, y el político-gremial como consecuencia de las diferencias entre las bases y sus representados; que se tradujo en el desconocimiento de las autoridades de sus sindicatos.

El peronismo sostuvo que los conflictos gremiales, luego de 1951 no fueron promovidos por los obreros, a quienes se desligó de toda responsabilidad, sino por la acción dirigencial. Para el régimen, las causas de los movimientos huelguísticos tenían que ver más con la dirección de los "malos dirigentes", entre ellos "los viejos dirigentes del anarco sindicalismo y del socialismo y los infiltrados comunistas", los cuales eran "indignos de vivir en la Nueva Argentina de Perón", a diferencia de los obreros, quienes "no sabían cuáles eran las razones del paro" (Perón, 1951, p. 172). Perón, junto con hacer uso del anticomunismo desde sus vertientes tradicionales como el nacionalismo, apelaba, por una parte, a la irrelevancia del comunismo –o cualquier otra ideología extraña al gobierno de Perón– como poco representativo de la identidad obrera una vez afirmada la justicialista, y por otra, a la legitimación de un capitalismo "bueno" para el justicialismo (Acha, p. 12).

Durante la huelga ferroviaria, el periódico dirigido por el radical Eduardo Colom[16], *La Época*, sostuvo que el propósito de esta huelga "no tenía ninguna reivindicación concreta referida a las condiciones de trabajo". Para el peronismo, tanto el comunismo soviético como el capitalismo norteamericano formaban parte de un complot imperialista que buscaba desorganizar la economía de la Argentina y que tanto el Kremlin como los agentes del capitalismo eran conscientes de ello al saber que "sólo el desorden, la subversión y el hambre permiten el triunfo del imperialismo –de izquierda o de derecha– sobre la libertad de los pueblos." (La Época, miércoles 24 de enero de 1951, pp. 5-6). Esta postura de equiparación del régimen soviético con el capitalismo estadounidense más allá de manifestar la Tercera Posición del peronismo, nos permite inferir que el anticomunismo peronista operó para decir que el enemigo político era un agente externo a la patria, por ende, las causas de la huelga no tenían un origen local.

El uso del epíteto comunista en términos comparativos, no se limitó al ámbito ideológico, también sirvió para negar la identidad obrera de los militantes de otros sectores políticos movilizados durante las huelgas, entre ellos: los socialistas y los radicales. Para el periódico La Época, que respaldaba al oficialismo, también fueron parte de un "complot internacionalista" que atentaba contra el gobierno de Perón, cuyos planes habrían sido descubiertos por los propios peronistas[17] (La Época, martes 23 de enero de 1951, P.1), quienes los acusaron de ser los responsables:

> "El comunismo ha querido dar una batalla al gobierno y al pueblo argentino; y pueblo y gobierno están resueltos a aceptarla procediendo en la energía y deci-

16 Si bien Eduardo Colom era caracterizado como un radical yrigoyenista. En la década del 30' compró la marca del diario a José Luis Cantilo, aunque sólo pudo sacarlo como semanario. Con el ascenso de Perón al poder de la Revolución del 43, se acercó a ofrecerle respaldo a cambio de créditos blandos para transformarlo en diario, algo que obtuvo, en contante y sonante, después de innumerables trámites, gracias a la gestión del que sería el Subsecretario de Prensa y Difusión durante la presidencia de Perón, Raúl Apold. (Mercado, 2013, p. 148)

17 La Época sostiene que se había llevado a cabo una reunión de la sección ferroviaria el viernes 19 de enero de 1951, en el local del comité del Partido Comunista. En él dejan de manifiesto que los comunistas discutieron la ventaja de hacer una huelga general de gremios en todo el país y que por un asunto "práctico" era de convenir empezar por los ferroviarios. En él las tareas tanto de los radicales como socialistas parecen secundarias, pues estos sólo recibirían instrucciones de la Comisión Consultiva de Emergencia. *Democracia*, "Comunistas y políticos desplazados son los ejes del paro ferroviario", miércoles 24 de enero de 1951, Año IV, Nº1779, pp. 1 y 5. También hace alusión a la puesta en marcha del "plan comunista" en el conflicto de la huelga ferroviaria, con la diferencia que no se adjudican "descubrir" el plan de infiltración.

> sión que las circunstancias exijan en defensa del orden de la tranquilidad, de la población y del bienestar de los argentinos" (La Época, miércoles 24 de enero de 1951, p. 1).

Si analizamos la huelga ferroviaria de 1951 desde la óptica del anticomunismo, afirmamos que el peronismo al interpretar las demandas salariales como un ataque al Estado, utilizó este discurso como una forma de desacreditar la protesta[18] y así evitar admitir que existieran tensiones entre la política económica nacional y las necesidades de la clase obrera. Esta idea de "complot" anulaba el carácter espontáneo de la movilización y consolidaba la hipótesis conspiracionista del anticomunismo de los reaccionarios (López, 2018, p. 141). Un ejemplo de esta intencionalidad es la publicación titulada "Unánime repulso de los gremios. El pueblo también condena el siniestro plan foráneo" (La Época, 24 de enero de 1951, pp. 5-6), en ella *La Época* expone las posturas de algunos sindicatos y asociaciones gremiales "independientes"[19] que repudiaban los acontecimientos de la huelga ferroviaria. Las declaraciones del periódico dan cuenta que el conflicto es "artificial" en la medida que no corresponde a un problema de origen nacional, sino que fue "dirigida por títeres de una bien conocida fuerza internacional"[20].

La postura anticomunista de la Confederación General del Trabajo no se distanció del oficialismo, en ambos casos el recrudecimiento de su discurso se tornaba más evidente y agresivo en las coyunturas críticas de la conflictividad sindical (Acha, p. 11). El periódico La Prensa muestra algunas claves de esto, luego que este tradicional periódico conservador fuera sancionado, el 12 de abril de 1951, por la ley 14.021 que dispuso su expropiación y al poco tiempo, el gobierno entregó el periódico a la Confederación General del Trabajo (CGT), convirtiéndose en el vocero de la central obrera (Panella, 2012). En noviembre de 1952, bajo la lógica de la Guerra Fría[21], los trabajadores peronistas se vieron en la necesidad de impulsar una central regional latinoamericana para unir a la clase obrera en torno a los ideales de justicia social y tercera posición. Esto se tradujo en la fundación de la Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas (ATLAS)[22]. Su fin era combatir al imperialismo estadounidense y superar, gracias a la justicia social peronista, tanto al capitalismo como al comunismo (Zanatta, 2013, p. 323).

Para la CGT, tanto la Federación Sindical Mundial (F.S.M) de carácter comunista y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (C.I.O.S.L) de índole anticomunista operaban en función de los imperialismos, respectivamente del soviético y del norteamericano. En La Prensa estos son caracterizados como tendencias que "*conducen a un mismo fin: la esclavitud del hombre. Unos lo esclavizan al Estado y los otros al capital*"[23]. Las declaraciones de *La Prensa* sobre el panorama sindical daban cuenta de la necesidad de fundar una central regional con los principios de la doctrina peronista: la Tercera Posición y el justicialismo. Para Zanatta (2013, p. 324) la fundación de ATLAS puede entenderse como el

18 Ibíd. Little (p. 302) sostiene que dado a que la esencia del conflicto ferroviario radicaba en un choque entre los requerimientos de una política económica nacional y las necesidades sentidas por ciertos sectores de la clase obrera organizada. El gobierno peronista tenía la necesidad, sobre todas las cosas, de evitar el tener que admitir que pudiese haber algún conflicto entre estos dos intereses.

19 Entre ellos el Sindicato de la Alimentación, La Asociación Obrera Textil, la F.O.N.I.V.A (Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines), la Unión Obrera de la Construcción y la Asociación Marítima Argentina, Ibíd.

20 Ibíd.

21 Cuando nos referimos a la lógica de la Guerra Fría queremos decir, de acuerdo a Claudio Panella (2012, p. 9) que los trabajadores peronistas buscaron mantenerse equidistantes de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), que representaba a las organizaciones gremiales comunistas del continente, y de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), que estaba integrada por centrales de orientación pronorteamericana.

22 Según Claudio Panella (1996, p. 41) el sustento ideológico de ATLAS recaía en la CGT de la Argentina, única central obrera del país y sin duda la más poderosa del continente. Homogéneamente peronista y por lo tanto estrechamente ligada a los ideales de justicia social encarnados por el gobierno justicialista.

23 La Prensa, "Gremiales: Las tendencias del movimiento obrero", Domingo 9 de diciembre de 1951, Año I –en la era justicialista–, Nº 21, p. 3

proyecto internacional sindical peronista que representó la ambición de la CGT por ejercer su influencia en todo el hemisferio americano.

A pesar que el sustento ideológico de ATLAS recaía tanto en la CGT como en la dirigencia justicialista[24], podemos identificar algunos puntos de distinción entre el posicionamiento anticomunista de la dirigencia peronista y el de la CGT. Luego de la huelga ferroviaria, uno de los momentos en que proliferaron las posturas anticomunistas fue durante la huelga metalúrgica de 1954. Como señala Fernández (p. 11) las movilizaciones de los obreros metalúrgicos (sobre todo, la asamblea de la plaza Martín Fierro) y los choques frente a la planta de La Cantábrica (Morón), dieron pie al gobierno para lanzar una campaña de detenciones de militantes del gremio metalúrgico, con el pretexto de poner fin a la "infiltración" comunista en la UOM. La postura de la CGT si bien manifiesta su preocupación por combatir a los dos imperialismos en función de "la Tercera Posición", durante el contexto de plena coyuntura sindical, muestra expresamente la necesidad de denunciar el imperialismo soviético por sobre el norteamericano:

> "el imperio de la justicia social es el muro inconmovible contra el que se estrellará eternamente cualquier extremismo, sobre todo si es de izquierda [...] No debe extrañar que su método no haya sido el del ataque directo al gobierno justicialista de Perón sino una maniobra para apoderarse de la conducción." (La Prensa, miércoles 9 de junio de 1954, p. 4)

La CGT no tuvo una actitud prescindente frente a este contexto, dentro del debate sobre los peligros de la conducción de los sindicatos, el comunismo era caracterizado como una amenaza mayor frente al imperialismo norteamericano. *La Prensa*, a diferencia de la dirigencia peronista[25], no interpretaba las demandas salariales como lo hacía el discurso justicialista, "como un ataque al gobierno y a todo el Estado peronista", sino como un plan de infiltración de carácter local antes que internacionalista. A diferencia de los demás actores anticomunistas, la CGT reconoció los antecedentes de la huelga metalúrgica en el plano nacional responsabilizando a los militantes del PCA. En este sentido, fue el único actor anticomunista que denunció la "maniobra de infiltración comunista" al señalar la experiencia de la Unión Democrática como antecedente del conflicto; sosteniendo que fue "el plan trazado por el comunismo en contacto directo con los políticos desplazados y vendepatrias, concordado entre los agitadores internacionales y los integrantes de la fallida Unión Democrática de 1946".

La postura de ATLAS no distaba de la CGT. La central sindical regional reconocía que las causas de la huelga metalúrgica tenían su origen en el plano local y que tenían relación con la acción de la militancia comunista en el ámbito gremial. Sobre este último punto es preciso señalar que, a diferencia del discurso oficialista, las causas de las huelgas apuntaban a fenómenos históricos concretos. ATLAS identificaba, entre las causas de la huelga metalúrgica, la disolución de los sindicatos comunistas como producto de la estrategia partidaria del PCA. Posición adoptada luego de la derrota electoral de la Unión Democrática en febrero de 1946. Este proceso se concretizó dos años después de las disposiciones resueltas luego del XI Congreso del PCA celebrado en agosto de 1946 (Gurbanov y Rodríguez, 2008, p. 6). Los gremialistas comunistas renunciaron a la dirección de los sindicatos que todavía conducían y optaron por "acompañar" a las masas peronistas, decisión sustentada en la necesidad de afianzar las mejoras obtenidas por los trabajadores y profundizar progresivamente las contradicciones sociales y políticas del proceso para desarrollar su propio programa. Esto se materializó con la creación

24 Zanatta (2013, p. 359) Al hablar sobre la postura estadounidense frente al peronismo y la influencia del comunismo en el terreno sindical argentino. Deja de manifiesto que el ministro de Relaciones Exteriores nombrado por Perón en 1951 y que ocupó el cargo hasta 1955, Jerónimo Remorino desacreditó a Perón al momento en que reafirmaba su postura anticomunista frente a Dwight Eisenhower. Remorino acusó que los agregados obreros respondieron más a la CGT que al gobierno porque su forma de hacer política "le estaba haciendo el juego a los comunistas".

25 Nos referimos a La Época, El Laborista y Democracia.

del Movimiento Pro Independencia y Democratización de los Sindicatos (MPIDS)[26] cuya figura principal fue el dirigente comunista de la construcción Rubens Íscaro (Contreras, 2017, p. 56).

Las denuncias de ATLAS sobre la acción comunista en los gremios por parte del MPIDS dan cuenta, ante todo, de su adhesión a la Federación Sindical Mundial y el nexo entre este sindicato con el comunismo. Por un lado, las declaraciones de ATLAS, dentro del periódico *La Prensa*, apuntaron a la acción de la F.S.M., caracterizándola como *"disolvente y corrosiva en la medida que atentaba contra la unidad y el vigor de la labor gremial de los trabajadores"* (La Prensa, viernes 11 de junio de 1954, p. 3). Por otra parte, en lo que concierne al vínculo entre la dirigencia del MPIDS con el comunismo soviético, sostuvo que los dirigentes pertenecientes al Movimiento Pro Independencia y Democratización de los Sindicatos *"se reunieron en mayo [de 1954] con el objetivo de transmitir las directivas del partido para la acción a desarrollar entre la clase trabajadora"*[27]. Sobre esta reunión, ATLAS cuestionó el título de "independencia sindical" que se adjudicó el MPIDS, luego que un vocero de esa organización analizara el panorama del mundo actual definiéndolo como *"consecuencia de la transformación del socialismo al comunismo originada en el paso del socialismo al comunismo en la Unión Soviética"*, discurso que estaba en directa consonancia con las conclusiones del 19º Congreso del Partido Comunista Ruso.

La principal diferencia entre la predica anticomunista de los gremios peronistas (ATLAS-CGT) y la posición de la dirigencia peronista, radicó en que para los primeros, el uso del discurso anticomunista no se excede del terreno gremial. Tanto la CGT como ATLAS denunciaron a los comunistas por la acción del MPIDS en los gremios y la relación que esta organización tenía –tanto en el ámbito local como internacional– con el comunismo. Aunque las denuncias de ATLAS apelaron tanto a los vínculos con los comunistas argentinos como con la directiva de Moscú, es preciso señalar que aludían a fenómenos históricos concretos.

3. LA CUESTIÓN INTERNACIONAL DEL PERÍODO 1951-1955: EL IMPACTO DEL MACARTISMO Y LA VISITA DE MILTON EISENHOWER EN EL POSICIONAMIENTO ANTICOMUNISTA DEL PERONISMO

Cuando nos referimos al panorama internacional del período 1951-1955 debemos recordar ante todo la puesta en marcha de las relaciones comerciales con la Unión Soviética durante 1946. En dicho escenario, Perón optó por mantener un posicionamiento ambivalente durante la naciente Guerra Fría, sin tener que arriesgar sus pretensiones de promover una futura alianza de cooperación económica con Estados Unidos, por ende, las relaciones comerciales con la URSS respondieron a intereses periódicos y puntuales antes que el establecimiento de propuestas económicas de largo alcance. Si bien, en 1946 existió un interés concreto por parte del peronismo por asignar al Estado como agente planificador de la economía, durante el período 1951-1955, promovió la afluencia de capitales norteamericanos para invertir en la economía de Argentina. Para dicho anhelo, no resulta casual que el discurso anticomunista le sirvió al peronismo para aquellos fines, si tomamos en cuenta que el macartismo se posicionó como la ideología dominante en Estados Unidos.

La llegada del republicano y pragmático Eisenhower a la Casa Blanca y, con él, del secretario de Estado John Foster Dulles a mediados de 1953, había cambiado las prioridades

26 Para el dirigente comunista Rubens Iscaro, el Movimiento Pro Independencia y Democratización de los Sindicatos, nucleado en torno al PC, tenía como objetivo impulsar la formación de una "dirección alternativa" a la de los sindicatos nacionales y la CGT, que agrupase a diversas formaciones político-ideológicas presentes en el movimiento obrero, inclusive sectores del peronismo, tras la consigna de la "democracia sindical". (Fernández, 2005, p. 13).
Dicho de otro modo, desde una perspectiva analítica por Gustavo Contreras (2017, pp. 56-57), "el programa del MPIDS remitía, en lo económico, a pelear contra la carestía de la vida y, en lo político-sindical, a coincidir en las luchas con los sectores más combativos del peronismo para avanzar a una actuación conjunta anclada en las perspectivas más obreristas del programa reformista del gobierno, tanto para tensionar sus contradicciones como para avanzar la concreción de reivindicaciones sentidas por los trabajadores".

27 Ibíd.

de los Estados Unidos con la región. No se trataba de fomentar la democracia, criticando la falta de libertad de prensa o los ataques a la oposición, sino de oponerse fanáticamente a la influencia soviética en América Latina y respaldar cualquier tipo de gobierno que le fuera funcional a esos objetivos (Mercado, 2013, pp. 238-239). El primer acercamiento entre el flamante gobierno norteamericano con el peronismo se dio por medio de un comunicado enviado a Perón por parte de Foster Dulles. En él comparaba la imagen de Perón con Eisenhower en la medida que ambos eran caracterizados como "líderes reconocidos de la comunidad americana". Perón, agobiado por la falta de divisas y la ausencia de inversión no tardó en responderle, explicando que la responsabilidad del distanciamiento entre ambos gobiernos recaía en la actitud del ex presidente Truman. Sin embargo, se encontraba dispuesto a colaborar con las órdenes de Dwight Eisenhower (Cisneros y Escudé, 2003).

El discurso anticomunista del peronismo si bien funcionó para estrechar lazos comerciales con Estados Unidos a través de la visita de Milton Eisenhower a mediados de 1953, no condicionó su postura confrontacional contra el comunismo internacional. En 1951, *La Época*, denunció las pretensiones de los comunistas por hacer una reunión pública a raíz del Movimiento por la Paz[28], la cual tuvo lugar en Tandil el día 28 de enero. Para *La Época* esta reunión tenía el propósito de "reorganizar los cuadros dirigentes de los comunistas argentinos" los cuales "se encontraban raleados por la política justicialista del general Perón", caracterizando esta situación como la "concentración de un grupo de traidores que unificarán ideas y proyectos para luchar desde la sombra contra el bienestar del pueblo argentino" (La Época, viernes 19 de enero de 1951, p. 3).

Según la prensa oficialista, los comunistas disimularon "una aparente voluntad pacifista" con el fin de escuchar el informe del ese entonces, presidente del Comité Argentino Partidario de la Paz[29], Emilio García Iturraspe, quien participó en las deliberaciones del Segundo Congreso Mundial de la Paz[30] (Petra, 2013, p. 119). Esta línea editorial no estaba equivocada al momento de acusar a esta reunión como parte de un congreso que estaría conformado por comunistas, sin embargo, daba cuenta de un plan de infiltración que "encierra una preparación para la guerra y un balance de las fuerzas comunistas existentes en las diferentes regiones", sosteniendo que:

> "lo que se anuncia en Tandil con una profusa propaganda tiene por objeto transmitir esas instrucciones a los representantes de cada uno de los gremios para que a su vez, las pongan en conocimiento de las diferentes células. La gravedad que ha llegado a asumir en todas las naciones esta labor silenciosa y permanente de las células comunistas, en su incesante obra de sabotaje y destrucción." (La Época, viernes 19 de enero de 1951, p. 3)

El anticomunismo peronista si bien se manifestó como un instrumento discursivo que se potenció con motivo de estrechar lazos económicos entre Perón y el bloque occidental, ya compartía algunas características con el anticomunismo nacionalista de Estados Unidos, incluso cuando Harry Truman estaba en el poder y cuyas relaciones bilaterales fueron

28 El Movimiento por la Paz fue la iniciativa frentista más importante que Moscú promovió una vez desatada la Guerra Fría. En ella los intelectuales jugaron un rol crucial. (Petra, p. 101). Esta organización respondía a la estrategia política dominante del Kominform oficializada en 1947, denominada "Lucha por la paz", inspirada en el informe Zdhánov –documento fundamental de la ideología comunista para la Guerra Fría– En él Andréi Zdhánov sostuvo que el mundo estaría dividido en dos bloques: de un lado, el campo imperialista y antidemocrático dominado por Estados Unidos; del otro, el campo antiimperialista, democrático y defensor de la paz, hegemonizado por la URSS. (Petra, pp. 102-103)

29 El Comité Argentino por la Paz comenzó sus tareas en marzo de 1949 mediante un manifiesto en apoyo a la convocatoria del Congreso Mundial de Partidarios de la Paz. El Congreso mundial de la Paz fue la iniciativa frentista más importante que promovió Moscú y la única estructura internacionalista, luego que la Kominform declarase en 1949, la "lucha por la paz" como estrategia política dominante del movimiento comunista internacional. (Petra, p. 104)

30 El segundo congreso de los partidarios de la paz fue celebrado en Praga y París en abril de 1949. En aquella oportunidad la delegación argentina fue representada, como señala Petra (p.120) con un evidente peso de las profesiones intelectuales por sobre las delegaciones obreras y campesinas.

menos cordiales que con Dwight Eisenhower. El peronismo, con motivo de promover la prohibición de la propaganda comunista en la Argentina, veía con buenos ojos las actividades de censura contra los periódicos comunistas estadounidenses en 1951, La Época miraba como ejemplo el hecho que los vendedores de periódicos norteamericanos "se negaran a seguir vendiendo el diario comunista "Daily Worker" por considerar que al hacerlo contribuían a difundir una propaganda que favorecía a los que aspiran a esclavizar al pueblo norteamericano" (La Época, viernes 19 de enero de 1951, p. 3).

Para nosotros no es casual que el discurso anticomunista del período 1951-1955 estuviese marcado por invocaciones nacionalistas tradicionales, en el que prima el carácter infiltrante del comunismo internacional bajo la lógica de un complot. Perón no se encontraba cómodo luego de haber pasado por la peor parte de la crisis económica. En julio de 1953, por un lado, los objetivos del Segundo Plan Quinquenal parecían no tener asidero en la realidad y no se presentaban inversores (Zanatta, p. 361) y, por otra parte, Perón vio la oportunidad de mejorar sus relaciones con Estados Unidos tras la visita de Milton Eisenhower a algunos países de América Latina, no obstante, una posible visita a la Argentina no se encontraba en la agenda del hermano del presidente estadounidense. Perón, en la medida que tuvo la presión de negociar con Estados Unidos, quien era el único país que podía proveerlo de tecnología, capitales y bienes industriales, optó por persuadir a los hermanos Eisenhower. Zanatta (p. 362) señala que con el fin de convencerlos envió amables señales conciliatorias a Iglesia y oposición y, sin miedo a exagerar, declaró a la prensa estadounidense que no existían problemas con Estados Unidos.

Perón comprendía que un país que apenas podía producir menos de la mitad de sus requerimientos energéticos no estaba en condiciones de apoyar a la industria, reivindicar soberanía y predicar la unidad latina, todo a la vez. El fin que perseguía Perón era la autosuficiencia energética y sólo podría alcanzarlo abriéndose a las compañías petrolíferas, contra las que su régimen solía lanzar invectivas. Según Zanatta (p. 363) el discurso de Perón sobre la defensa hemisférica contra el comunismo operó como un taparrabos que le sirvió para cubrir sus pedidos a Estados Unidos; pero la visita de Milton Eisenhower no significó otra cosa que una retirada táctica con la intención de volver a la Tercera Posición en cuanto sea posible (Zanatta, p. 365).

La funcionalidad del discurso anticomunista durante la visita de Milton Eisenhower, pese a que se trató de una estrategia política, le sirvió a Perón para mostrarse como defensor del bloque occidental. Como bien sugiere Zanatta, en la medida que Perón necesitaba estrechar lazos económicos de manera urgente con Estados Unidos, puso en marcha una retirada táctica de su Tercera Posición. Perón consciente de ello, no quiso abandonar por completo estos lineamientos. La prensa justificó que las razones de la visita de Milton Eisenhower tenían una finalidad inversora antes que de ayuda financiera:

> "se niega en Washington que el éxito de la visita de Milton Eisenhower haya visto facilitada por consideraciones de orden financiero [...] La misión no se hallaba autorizada para iniciar ninguna tratativa ni dar ninguna promesa de ayuda financiera. Las autoridades argentinas se encontraban dispuestas [sic] a favorecer la afluencia de inversiones de capitales norteamericanos" (El Laborista, martes 21 de julio de 1953, p. 1).

La línea editorial de *Democracia*, manifestó que la visita de Milton Eisenhower no impactaría en la postura de la Tercera Posición de Perón al señalar que "*Perón y el señor Eisenhower se habrían mostrado concordes en que las diferencias ideológicas no deben perjudicar la armonía de las relaciones de los distintos países*", mostrando un criterio de prescindencia política frente a la puesta en marcha de las relaciones comerciales con Estados Unidos. No obstante, en la misma columna sostiene que tanto "*Estados Unidos como Argentina poseen*

sólidos intereses comunes en la defensa de la civilización occidental"[31]. Esta postura nos permite demostrar que la funcionalidad del discurso anticomunista le sirvió a Perón para matizar, momentáneamente, su Tercera Posición para negociar con Estados Unidos[32] (La Época, lunes 20 de julio de 1953, p. 3).

Durante el período 1951-1955 el anticomunismo nos permite visualizar una posición clara respecto al peronismo: estaba del lado de occidente y el discurso anticomunista fue, una de las aristas que permitió persuadir a Milton Eisenhower para realizar la visita a la Argentina. El discurso anticomunista en su línea nacionalista y tradicional ya existente, sumado a las pretensiones de Dwight Eisenhower por promover una alianza hemisférica contra el comunismo, provocaron que el anticomunismo en su vertiente ideológica se potenciara. Esto le permitió al peronismo tener una victoria virtual y la prueba de ello fue que Washington cedía terreno en la larga pulseada con Perón (Zanatta, p. 363). Sin embargo, parte de la legitimidad del sistema peronista se esfumó, en efecto, con la nueva política exterior. Decepcionaba a los delegados sindicales de las grandes empresas y a los oficiales nacionalistas. Los primeros no tenían motivos para estar satisfechos, no podían prevalerse de ningún éxito notable, ya sea en el campo de las conquistas sociales ni en el de las reivindicaciones salariales; su papel se redujo a evitar las huelgas y las movilizaciones en pos de los objetivos económicos (Rouquié, p. 103).

4. EL VÍNCULO IGLESIA CATÓLICA-COMUNISMO

A pesar que el resultado de las elecciones presidenciales de 1951 y las legislativas de 1954 expresaban cuantitativamente un apoyo masivo a las políticas llevadas adelante por Juan Perón con más del 62% en ambos casos (Mason, 2012, p. 91), el clima político posterior a 1950 puede entenderse, en palabras de Robert Potash (1981, pp. 173-174), como parte de un proceso de polarización que obligaba a los argentinos hasta entonces no comprometidos a asumir posiciones; un proceso que los propios peronistas promovían activamente apoyándose en su convicción de que "para nosotros solamente hay peronistas y antiperonistas". En otras palabras, Alfredo Mason (2012, pp. 89-90) señala que el clima político de polarización[33] no es unidireccional, sino que las fuerzas políticas que se enfrentaron fueron creando una situación "amigo-enemigo". Sobre la postura del sector opositor frente a la victoria de Perón en las elecciones presidenciales de 1951, Robert Potash (pp.197-199) da cuenta que para ellos el resultado electoral no significó en modo alguno la legitimidad del ejercicio del poder, por el contrario, estos sectores descartaron la lucha electoral como medio para destituir a Perón y se reorganizaron, no en función de la(s) identidad(es) de sus participantes, sino en función del acto temerario que se proponían: el asesinato del presidente y de Eva Perón.

Respecto al escenario posterior a 1950, Bianchi (1994, p. 31) señala dos puntos en relación al conflicto entre la Iglesia y el gobierno peronista. El primero hace alusión a que esta confrontación se instaló en el campo de la religión[34]. En segundo lugar –y que nos es útil

31 Ibíd.

32 Sobre esta posición ambivalente de Perón es preciso señalar que Milton Eisenhower reafirmaba la posición de Perón de pertenecer al bloque occidental a través de un discurso por Radio del Estado, anunciando que "En todas partes que me he hecho presente cuánto tenemos que agradecer los que vivimos en este espléndido y generoso mundo Occidental, es espíritu de fraternidad que es el más noble de los deberes sociales".

33 Mason (p.91) señala que el clima político de polarización llevó a que el enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas adquiriera un sentido cada vez más irreversible. Ejemplifica esta idea refiriéndose ante todo a la situación del golpe de Estado de Menéndez de 1951, el estallido de dos bombas en plaza de mayo durante una concentración en Plaza de Mayo el 15 de abril de 1953 cuyos responsables estaban ligados a sectores católicos como Mario Amadeo y radicales como Emilio Carranza; y el endurecimiento de las relaciones entre el gobierno con los sectores medios de la población a fines de 1954; tras una serie de hechos en la Universidad de Buenos Aires que culminaron con la detención de 250 estudiantes.

34 Sobre este punto Bianchi (p. 31) sostiene que los conflictos entre el Estado y la Iglesia localizados en el campo de la religión, tuvieron un primer punto de disputa a partir de los avances de ciertas formas de religiosidad popular que competían exitosamente con el catolicismo. Desde la perspectiva eclesiástica, estos avances coincidían con lo que se consideraba un nivel muy bajo de práctica religiosa institucionalizada, sobre todo, en la ciudad de Buenos Aires.

para el desarrollo de esta investigación– reconoce que la Iglesia Católica comienza a dibujarse como el espacio posible –y tal vez el único– de la oposición al peronismo tomando en cuenta una pluralidad de factores. Para comprender este punto la autora señala que en el año 1950 los campos de la oposición política se habían estrechado de manera considerable. La reforma constitucional de 1949 permitía la reelección de Perón, instancia que fue interpretada tanto por el oficialismo como por la oposición que el peronismo había llegado para quedarse. La subordinación de las estructuras de la Confederación General del Trabajo (CGT); los partidos políticos estaban rigurosamente controlados y el principal dirigente de la Unión Cívica Radical, Ricardo Balbín, había sido apresado. Asimismo, se reforzó notablemente el control estatal sobre los medios de comunicación.

Con este cambio de escenario, el discurso anticomunista fue de utilidad para el peronismo en la medida que le permitió agregar una nueva identidad a la Iglesia Católica: la de un agente extranjerizante. El peronismo no tuvo dificultades en identificar a la Iglesia Católica como un organismo internacionalista. El discurso anticomunista le permitió a Perón, apelar a la Ciudad del Vaticano como un símil de Moscú, en tanto la religión católica emanaba desde un Estado independiente y adquirió un carácter "infiltrante" al asumir posiciones en la política nacional.

Por medio del titular "el pueblo condena el complot de la reacción y sirvientes de la oligarquía" (La Época, martes 10 de mayo de 1955, p. 3) señalamos que la intencionalidad por parte del peronismo es distinguir, por un lado, al pueblo como un agente monolítico que defiende los intereses justicialistas, en contraposición de la Iglesia, que se manifiesta como un organismo reaccionario en tanto le sirve como aliado a la oligarquía. La particularidad de esta publicación es que *La Época* señala al enemigo político a partir de la denuncia de un complot "Clerical-Radical-Comunardo", cuya "acción perturbadora, dirigida por clérigos y frailones, motivaron recientes incidencias callejeras y cometieron atentados criminales". Si bien durante el primer peronismo, el tópico de la conspiración estaba condicionado por la participación política de elementos de izquierda como el radicalismo intransigente, socialismo y comunismo; durante el período de mayor conflictividad entre Perón y la Iglesia, fue frecuente esta caracterización en tanto la prensa peronista buscaba negar la identidad nacional tanto de la Iglesia como de sus instituciones y adherentes durante los períodos de movilizaciones. Este tipo de acusaciones tenían como propósito vincular a la Iglesia Católica con el comunismo[35] para asignar a la Iglesia algunas características del discurso anticomunista clásico. Ejemplo de esto es la negación de la identidad clerical de los manifestantes de las movilizaciones eclesiásticas, quienes estaban "*disfrazados de católicos y eran contrarios a la doctrina de Jesús*" (La Época, martes 10 de mayo de 1955, p. 1)

Estas denuncias, en tanto se refieren a la Iglesia como un agente disruptivo de la unidad nacional, provenían específicamente de la matriz nacionalista del anticomunismo. Para el oficialismo, la Iglesia no sólo luchaba contra el peronismo, sino que pone en marcha un complot con el elemento más extranjerizante dentro de la izquierda: el comunismo. Según la prensa peronista, la Iglesia Católica abandonó su postura de conciliación de clases; y es durante el período de mayor conflictividad con el régimen justicialista cuando empieza a promover la lucha de clases desde una vertiente internacionalista al señalar que: "cada Estado que cobijó a la Iglesia debió defenderse dramáticamente de sus avasallamientos [...] y esta al considerarse a sí misma como Estado, peleará con uñas y dientes para no ceder terreno" (Democracia, 1 de mayo de 1955, p. 7) siendo una lucha que, según *Democracia*, la Iglesia lo interpretó bajo la consigna "*El Estado o nosotros*".

35 Democracia, "todo el país condena la acción terrorista clerical", Año XXXIX, Nº 3363, P.2. En ella señala que "los clericales y sus socios de hoy los radicales comunizados; los socialistas traga obispos de ayer y los comunistas prontos al aprovechamiento de todas las circunstancias, que nada de lo que tramen contra el orden y el peronismo ha de quedar impune y que les conviene no enardecer al pueblo".

La presente publicación señala, que el agente infiltrante dentro de la Argentina es la agrupación Acción Católica Argentina[36] quienes "En las reuniones, en nombre de la religión, despotricarán contra la Argentina, contra el gobierno y contra Perón ¡y piensan hacerlo en toda América!". Esta acción, según el periódico *Democracia* también fue denunciada por el tradicional periódico conservador *El Mercurio* de Santiago de Chile[37], quienes dejaron al descubierto un supuesto "plan de infiltración" con ayuda de los comunistas:

> "La red internacional de la Iglesia se agita en estos momentos contra la Nueva Argentina mientras aquí conspira, agravia al gobierno, coloca bombas y mata, y hasta busca alianza en los comunistas con tal de alimentar la esperanza de derrotar al Estado."

Con todo lo anterior, señalamos que durante el conflicto Iglesia Católica-Perón de 1955, el discurso anticomunista de matriz nacionalista logró tener una nueva funcionalidad. El problema del internacionalismo puede ser entendido al caracterizar a la Iglesia Católica bajo premisas del anticomunismo tradicional, es decir, como la negación de la identidad clerical o la caracterización de esta como un agente extranjerizante en la medida que promovía las ordenes de la Ciudad del Vaticano. Si bien el discurso anticomunista peronista reconocía a la militancia comunista como el enemigo interno, que promovía la infiltración dentro de los conflictos gremiales. Acción Católica Argentina se posicionó en el lugar que ocupaba la militancia comunista. Fueron caracterizados como agentes internacionalistas que promovían la lucha de clases dentro y fuera de la Argentina.

CONSIDERACIONES FINALES

El anticomunismo operó en el discurso fundacional del peronismo para consolidar el frente entre las fuerzas principales que lo apoyaban: la Iglesia, los militares, las oligarquías provinciales y los trabajadores. La funcionalidad del discurso anticomunista inicial se manifestó en términos de autoritarismo-verticalismo. Durante los años 40' el discurso anticomunista fue un argumento favorable a la unión nacional y a la eliminación de la lucha de clases como instrumento de la acción estatal, en los años 50' adquirió una nueva funcionalidad en la medida que fue utilizado como epíteto descalificador entre los actores anticomunistas.

A lo largo período 1951-1955 reconocemos la presencia de una nueva funcionalidad del anticomunismo, distinta de la reconocida a partir de los comicios del 24 de febrero de 1946. Sobre la manera en que opera, hemos sugerido que sirvió para evitar asumir que existían tensiones en tres arenas de conflicto: los asuntos gremiales, la política exterior y el problema Iglesia-Perón. En el primer momento dimos cuenta que durante los ciclos de huelgas encontramos algunos elementos de continuidad entre el anticomunismo de 1951 y el que proviene de las elecciones presidenciales de 1946, de esto señalamos la presencia de posturas anticomunistas clásicas de carácter nacionalista, como el problema del internacionalismo y el de la infiltración. Lo interesante de este punto es que durante los períodos de mayor conflictividad en el ámbito gremial, el anticomunismo peronista operó bajo la lógica de evitar asumir que existían tensiones entre capital y trabajo. Sin embargo, las posturas tanto de la CGT como de ATLAS hicieron referencias al problema de la infiltración en términos prácticos, puesto que percibían la infiltración comunista como un problema de origen local.

En el plano de la política exterior, el discurso anticomunista si bien fue constante durante el peronismo en la medida que denunció en el plano local la puesta en marcha de

36 Sobre la postura de Democracia frente a Acción Católica como el enemigo político dentro del ámbito local, la línea editorial de Democracia, deja en evidencia algunos aspectos de su plan de infiltración: "que extiende la conspiración a todas las naciones y como desde hace siglos vienen haciendo los clericales, escudándose en el nombre de Dios, Rezaban una plegaria por la Iglesia Crucificada en la Argentina"

37 Según Democracia, en aquella instancia Acción Católica hizo un llamado a todos sus seguidos de América, "pidiéndoles que el 25 de mayo, Festival (?) nacional de Argentina, se realice en toda América el día de plegarias por la Iglesia crucificada de Argentina", Ibíd.

iniciativas frentistas como los Congresos por la paz, puede entenderse a través las pretensiones de Perón por acercarse al bloque occidental, por dos factores: por un lado, para poner en marcha un plan de modernización económica en que Estados Unidos parecía ser el único país capaz de ayudarlo, y por otra parte, para que Perón se mostrara triunfal frente a la lucha que tuvo a lo largo de su gobierno con Norteamérica.

Por último, en lo que concierne al conflicto Iglesia-Perón[38] podemos decir que la funcionalidad del anticomunismo se resume en dos aspectos. Por un lado en el hecho de que el peronismo denunció a la Iglesia Católica por poner en marcha planes de infiltración dentro de América Latina, y junto a ella el comunismo parecía ser su aliado. Esta asimilación nos permite inferir que la intencionalidad del justicialismo fue ante todo denunciar a la Iglesia bajo los códigos del anticomunismo nacionalista-clásico: el problema de la infiltración y el carácter internacionalista. Con esto queremos decir que la pugna entre la Iglesia y Perón se resume en la lucha por quién es mejor anticomunista en la medida que ninguno de los dos hacían referencias a fenómenos históricos concretos.

BIBLIOGRAFÍA

- Acha, O. (2014). "El peronismo y la forja del anticomunismo obrero", *Cuarto congreso de Estudios sobre el peronismo (1943-2014)*, Universidad Nacional de Tucumán, 18, 19 y 20 de septiembre.
- Baily, S. (1967). *Movimiento obrero, nacionalismo y política en la Argentina*, Traducción de Alberto Siria, Buenos Aires: Biblioteca Argentina de Historia y Política.
- Bianchi, S. (1994). "Catolicismo y peronismo: la religión como campo de conflicto (Argentina, 1945-1955)", *Boletín Americanista*, Nº44, 1994, 25-37.
- Bohoslavsky, E. (2016). "Organizaciones y prácticas anticomunistas en Argentina y Brasil (1945-1966)", *Estudios Ibero-Americanos*, Porto Alegre, v.42, Nº1, 34-52.
- Bohoslavsky, E. (2011). "Entre el antipopulismo y el anticomunismo. Las derechas en Argentina, Brasil y Chile (1945-1959)" en *Mallimaci, Fortunato, Nacionalistas y nacionalismos: Debates y escenarios en América Latina y Europa*, Buenos Aires: Editorial Gorla.
- Caimari, L. (2002). "El peronismo y la Iglesia Católica", en *Nueva Historia Argentina*. Los años peronistas, Tomo VIII, 441-479, dirección de tomo: Juan Carlos Torre, Buenos Aires: Sudamericana.
- Casals, M. (2015). *La creación de la amenaza roja. Del surgimiento del anticomunismo en Chile a la "campaña del terror" de 1964*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Casals, M. (2009), "Lógicas ideológicas de exclusión, fragmentos para la historia del anticomunismo en Chile", en Rafael Gaune y Martín Lara; *Historia del racismo y discriminación en Chile*, Santiago de Chile: Uqbar Ediciones.
- Casals, M. (inédito) *Política, cultura e imaginario anticomunista en el Chile de los sesenta*, Apuntes de investigación.
- Cisneros, A. (2002). *Del ABC al Mercosur. La integración latinoamericana en la doctrina y praxis del peronismo*, Buenos Aires: Grupo editor latinoamericano.

38 El conflicto Iglesia-Perón, como ya habíamos señalado, se caracterizó por la redefinición del enemigo político a partir de la creación de alianzas –ficticias o no con el comunismo–. Para el caso de la postura de la Iglesia frente al peronismo, cabe destacar el posicionamiento de Gustavo Franceschi, quien en su retórica no hacía alusión a una supuesta alianza entre Perón y los comunistas. Si bien asimilaba al peronismo como una dictadura, no la comparaba con el régimen soviético; sino que acudía a la relación peronismo-totalitarismo haciendo énfasis a las dictaduras fascistas europeas. Ejemplo de esto es su postura frente al discurso de Perón al señalar que "la oratoria de Perón se parecía mucho más a la de Hitler que la de Mussolini" en Criterio, "¡Libertad!", 13 de octubre de 1955, Nº1245, Año XXVIII, pp. 723-725.

Revista Divergencia: Nº 13 / Año 8
Julio - Diciembre 2019
ISSN 0719-2398

- Cisneros, A; Escudé, C. (2003). *Historia general de las relaciones exteriores de la República Argentina, Tomo XIII*, Buenos Aires: Centro de Estudios de Política Exterior Consejo Argentino para las relaciones internacionales (CARI). Consulta 9 de agosto de 2019: http://www.argentina-rree.com/13/13-011.htm
- Contreras, G. (2017). "La organización del movimiento obrero durante el primer peronismo (1946-1955): nucleamientos sindicales y centrales obreras, *Avances del Cesor*, V. XIV, Nº 16, Primer semestre, 45-68.
- Fernández, F. (2005). *La huelga metalúrgica de 1954*, Ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación, Cuaderno de Trabajo Nº 51.
- Gurbanov, A y Rodríguez, S. (2009) "Los comunistas argentinos frente a la crisis del peronismo en 1955", *XII Jornadas Interescuelas/Departamento de Historia*, Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional de Comahue.
- Groppo, B. (2004). "El antifascismo en la cultura política comunista", en *Anuario IEHS*, Nº 19, Tandil.
- Herrera, C. (2016). *¿Adiós al proletariado? El Partido Socialista bajo el peronismo (1945-1955)*, 1ª ed, Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi.
- Jáuregui, A. (2012). "El peronismo en los debates del Partido Comunista Argentino: 1945-1953" en *A contracorriente*, Vol. 9, Nº3, 22-40.
- Larraquy, M. (2010). *De Perón a Montoneros. Historia de la violencia política en la Argentina. Marcados a Fuego II (1945-1973)*, Buenos Aires: Taurus.
- Lanús, J. (1986) *De Chapultepec al Beagle: política exterior argentina*, Buenos Aires: Hyspamérica.
- Little, W. (1979). "La organización obrera y el Estado peronista", 1943-1955, en Juan Carlos Torre, *La formación del sindicalismo peronista*, Buenos Aires: Editorial Legasa.
- López, M. (2013). "Criminalizar al rojo. La represión al movimiento obrero en los informes de 1934 sobre la Sección Especial", en *Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda*, Nº4, 101-122
- López, M. (2015). "Las estrategias del comunismo argentino en la mirada del nacionalismo reaccionario durante la década de 1930", en *Páginas*, Vol. 7, Nº 15.
- López, M. (2018). "La representación obrera en disputa. El anticomunismo argentino en los conflictos de 1936 y 1937", *Revista conflicto social*, Año 11, Nº19, 133-159.
- Marengo, M. (2015). *Lo aparente como real: un análisis del sujeto comunista en la creación y consolidación del servicio de inteligencia de la policía de la Provincia de Buenos Aires 1930-1962*, La Plata: Universidad Nacional de La Plata; Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento; Posadas: Universidad Nacional de Misiones.
- Mason, A. (2012). "El conflicto de la jerarquía de la Iglesia con el Peronismo", *Diversidad*, Año 2, Nº 4, 82-114.
- Mercado, S. (2013). *El inventor del peronismo. Raúl Apold, el cerebro oculto que cambió la política argentina*, Buenos Aires: Editorial Planeta.
- Patto Sá, R. (2000). *Em guarda contra o perigo vermelho: o anticomunismo no Brasil (1917-1964)*, Tese apresentada à Facultade de Filosofía, Letras e Ciências Humanas da USP para obtenção do título de Doutor em História Econômica, Orientadora: Suely Robles Reis de Queiroz, São Paulo

· Panella, C. (2012). "La CGT tiene su periódico: la experiencia del diario la prensa (1951-1955)", *Congreso de periodismo y medios de comunicación*, Facultad de periodismo y comunicación social, Universidad Nacional de La Plata, La Plata.

· Perón, E. (1951). *La razón de mi vida*, Buenos Aires: Ediciones Peuser.

· Perón, J. (1952). *Manual de conducción política*, Buenos Aires: Ediciones Mundo Peronista.

· Petra, A. (2013). "Cultura comunista y Guerra Fría: los intelectuales y el Movimiento por la Paz en la Argentina", en *Cuadernos de Historia*, Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 99-130.

· Poderti, A. (2011). *Perón. La construcción del mito político. 1943-1955*, Tesis para la obtención del grado de Doctora en Historia, Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.442/te.442.pdf

· Potash, R. (1981). *El Ejército y la política en la Argentina (1945-1962). De Perón a Frondizi*, Traducción de Enrique Tejedor, Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

· Rouquié, A. (1982). *Poder militar y sociedad política en la Argentina, Tomo II: 1943-1973*, Buenos Aires: Emecé

· Zanatta, L. (2013). *La internacional justicialista. Auge y ocaso de los sueños imperiales de Perón*, Traducido por: Carlos Catroppi, Buenos Aires: Sudamericana.

PERIÓDICOS Y REVISTAS CONSULTADAS

· La Prensa (1951-1955).

· La Época (1950-1955).

· El Laborista (1950-1955).

· Democracia (1950-1955).

· El Pueblo (1950-1955).

· Criterio (1950-1955).

Revista Divergencia: N° 13 / Año 8
Julio - Diciembre 2019
ISSN 0719-2398

Revista Divergencia: N° 13 / Año 8
Julio - Diciembre 2019
ISSN 0719-2398

¿Violencia política o política violenta? Un debate acerca del uso de los conceptos, a partir del análisis del "Trelewazo" - Trelew, Chubut, Patagonia Argentina, 1972 -

Political violence or violent politics? A debate about the use of concepts, based on the analysis of "Trelewazo" – Trelew, Chubut, Argentine Patagonia, 1972 -

Axel Binder[1]
Gonzalo Pérez Álvarez[2]

Recibido: 12 de mayo de 2019 - Aceptado: 18 de junio de 2019
Received: May 12, 2019 - Approved: June 18, 2019

Resumen

Debatimos las implicancias políticas y metodológicas en torno a los usos de las nociones de "violencia" y/o de "violencia política" para conceptualizar las protestas populares desarrolladas en Argentina durante fines de los años '60 e inicios de los '70. Para ello analizamos diversas lecturas e interpretaciones sobre el Trelewazo (levantamiento popular ocurrido en octubre de 1972 en Trelew, Chubut), buscando desmontar las lecturas que contribuyeron a invisibilizar su carga disruptiva.

Trabajamos con fuentes primarias y secundarias, analizando prensa regional, testimonios de participantes y una amplia bibliografía sobre la temática específica y general. Así pretendemos contribuir al análisis de la violencia política, especialmente la proveniente de grupos que se proponen enfrentar el orden social vigente. En tiempos donde se vuelven a instrumentar sistemáticos mecanismos de política violenta sobre los pueblos, buscamos construir conocimiento histórico acerca de cuáles fueron los caminos que hicieron posible derrotar la violencia del poder.

Palabras clave: Protesta – Violencia – Violencia Política – Política Violenta – Argentina

Abstract

We discuss the political and methodological implications about the uses of the notions of "violence" and / or "political violence" to conceptualize the social conflicts developed in Argentina during the late '60s and early '70s. For this, we analyze the academics interpretations about the "Trelewazo" (popular rebellion developed during October 1972 in Trelew, Chubut), seeking to deconstruct the investigations that aimed to hide the insurrectional potential of the fact.

We work with primary and secondary sources, analyzing regional press, testimonies of participants and a wide bibliography on the specific and general theme. So we aim to contribute to the analysis of political violence, especially from groups that propose to face the current social order. In times where systematic mechanisms of violent politics against the people are re-implemented, we seek to build historical knowledge about the paths that made it possible to defeat the violence of power.

Keywords: Protest - Violence - Political Violence - Violent Politics - Argentina

1 Chileno, Magíster en Ciencias Sociales con mención en Historia Social, Universidad Nacional de Luján, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires. Correo electrónico: psimunovicgamboa@gmail.com

2 Director del INSHIS-UNP, e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Mail: gperezalvarez@gmail.com

> "...donde existe la violencia institucionalizada de quienes ostentan el título de gobernantes, existe también la violencia de los que valientemente levantan la bandera de la lucha por los derechos de la persona humana".
>
> Manifiesto de la Asamblea del Pueblo
> (El Chubut, 13/10/72:9)

INTRODUCCIÓN

La "paz de los cementerios" que heredó el naciente régimen constitucional de 1983 en Argentina, cambió las reglas de la disputa política, deificando la democracia liberal y condenando todo tipo de violencia que no fuese la estatalmente legitimada. Al respecto Omar Acha sostiene que "Luego del retorno a la democracia liberal-capitalista en diciembre de 1983, la situación es bastante diferente para el discurso y la práctica de la violencia: no existe ningún espacio para la legitimidad del uso de la fuerza desde abajo" (2009, p. 350).

Una mirada similar proponen Pittaluga (2007) y Seminara (2018), destacando que en los años de la "transición a la democracia" se instaló un discurso que situaba a la violencia como la negación de los fundamentos democráticos. La violencia, y especialmente aquella que enfrentaba el orden social vigente, fue considerada un aspecto del pasado de nuestras sociedades, que debía ser eliminado: la violencia popular era el obstáculo clave para la construcción del nuevo orden democrático.

Seminara (2018, pp. 8-12) analiza las producciones de la década del '80 y '90 en torno a este concepto, destacando que las mismas se centraron en la "condena moral" y en la supuesta separación tajante entre violencia y política. Sostiene la autora que "La utilización de la noción de "violencia política" como categoría analítica trae como corolario dos cuestiones que merecen ser señaladas. Por una parte supone la aceptación tácita de que política y violencia son términos claramente diferenciables y-en cierto punto- excluyentes (...) Por otra parte, prefigura ciertas perspectivas que tendencialmente afirman que la intensificación de una iría forzosamente en detrimento de la otra" (Seminara, 2018, p. 10). Sólo existiría política donde no habría violencia: si existe la violencia popular, eso se inscribe como negación de la política.

Esta perspectiva, cuestionable cuando se aplica a los años signados por el régimen constitucional como forma de gobierno, resulta aún más problemática cuando se la utiliza para explicar las dinámicas sociales de los años '60 y '70, dado que obtura pensar aristas claves de los fenómenos sociales históricamente situados. Como bien dice Julio Aróstegui al debatir los usos del concepto de violencia y/o de violencia política, "...este análisis se ve siempre amenazado por la espada de Damocles que pende sobre los intentos explicativos de toda historia de conceptualización difícil: la del anacronismo" (1996, p. 11).

Ansaldi y Alberto (2014), destacan la necesidad de pensar la violencia, ya que "Muchos hablan de la violencia, mas nadie (o muy poca gente, en el mejor de los casos) piensa en ella" (p. 28), centrando su análisis en el principio de que "La violencia es un componente inseparable de la política" (p. 45). Discutiendo con los enfoques que analizan la violencia desde una valoración moral o ética de la acción, lo clave para nosotros (siguiendo a Ansaldi y Giordano, 2014), es realizar hincapié en la historicidad y politicidad de las acciones humanas. Para ello es central diferenciar política de moral e identificar política con violencia, como caminos ineludibles para hacer comprensible el proceso histórico.

Para ello debatimos críticamente las implicancias metodológicas en torno a algunos usos de la noción de "violencia" y/o de "violencia política", centrando nuestro análisis en los levantamientos populares de la década del '70 en Argentina. Partiendo de las diversas

interpretaciones sobre el Trelewazo, buscamos desmontar las lecturas clásicas sobre este acontecimiento que contribuyeron a invisibilizar su carga disruptiva, impidiendo conocer cómo esos procesos fueron capaces de afectar al régimen dictatorial que imponía la violencia desde arriba.

En tiempos donde los gobiernos vuelven a instrumentar sistemáticos mecanismos de violencia política (o, más concretamente, de política violenta) sobre los pueblos, debe ser nuestra tarea dar las herramientas de conocimiento histórico acerca de cuáles fueron las maneras que hicieron posible, en algunos casos, derrotar a los poderosos de turno o, al menos, ponerles límites.

Aunque varios estudios destaquen al Trelewazo por su falta de acciones violentas, o de choque físico directo entre fuerzas (diferenciándose por eso de Córdoba, Rosario, Tucumán, Gral. Roca), ello no significa que "la violencia" (en tanto posibilidad concreta), no haya estado "sobrevolando" toda su dinámica. Se formularon diversas nociones de violencia, condicionando las relaciones sociales y prácticas políticas, así como enarbolando discursos en torno a ella, sea legitimándola o condenándola.

Que no se hayan materializado actos físicos de violencia directa, no significa que la política violenta no haya jugado un papel clave en la dinámica social vivida durante esos días de irrupción popular: eso es lo que aquí intentamos hacer observable, tanto en los estudios sobre la pueblada como en las fuentes históricas.

BREVE HISTORIA DEL TRELEWAZO:

La provincia del Chubut abarca la parte central de la Patagonia Sur en Argentina. Linda con la provincia de Río Negro al norte, la de Santa Cruz al sur, el océano Atlántico al este y Chile al oeste (sur de región de Los Lagos y norte de región de Aysén).

La región donde sucedieron los hechos que aquí trabajamos (el noreste de la provincia) se compone de dos departamentos (división administrativa provincial): Rawson y Biedma. En el departamento Rawson se encuentran las ciudades de Rawson y Trelew, y en Biedma la ciudad de Puerto Madryn. Este espacio geográfico fue receptor de uno de los "polos de desarrollo"[3] en el marco del proyecto que el estado nacional impulsó entre los años '60 y '80 para la Patagonia. En los años investigados la región se encontraba en pleno crecimiento, vía instalación de nuevas industrias y arribo de diversos contingentes de migrantes (Gatica, 2013; Pérez Álvarez, 2015).

Un elemento importante para comprender los fundamentos de la idea de generar polos industriales por fuera de las ciudades tradicionales, tiene relación con la intención del gobierno nacional (durante la mayoría de esos años dictaduras en manos de las Fuerzas Armadas) de dividir al movimiento obrero para debilitar sus organizaciones. En esta línea se conformó una dirigencia sindical local cercana a los sectores dominantes, que sostuvo una práctica colaboracionista con el gobierno y las patronales (Gatica, 2007; Pérez Álvarez, 2013).

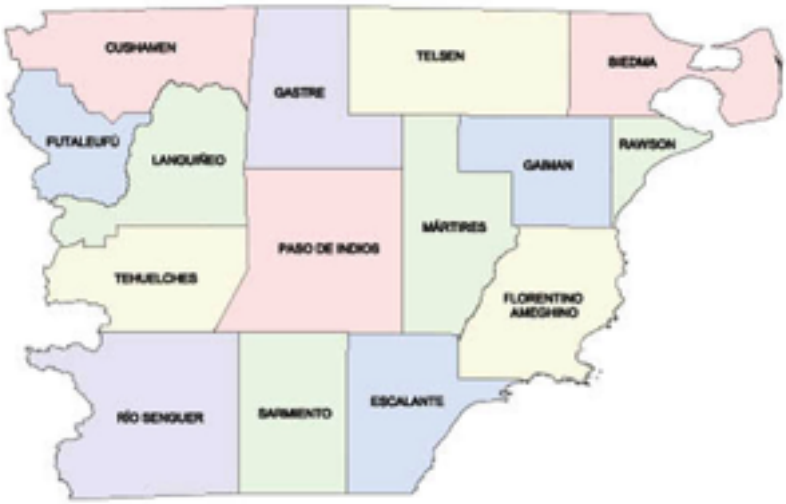
El 22 de agosto de 1972, en Trelew, se producía la histórica masacre, que desde allí lleva el nombre de la ciudad. La "masacre de Trelew" fue el fusilamiento de 19 militantes populares, que estaban desarmados y presos, perpetrado en la Base Aeronaval Almirante Zar, por parte de un grupo de oficiales y suboficiales de la Armada Argentina. Los cuadros políticos fusilados pertenecían a las organizaciones político-militares PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo), FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) y Montoneros.

3 Ante la supuesta imposibilidad de un desarrollo homogéneo de las regiones atrasadas, estos proyectos proponían generar "polos industriales" a través de subsidios estatales, los cuáles irradiarían el crecimiento a través del encadenamiento de actividades económicas (Perroux, 1955).

MAPA 1: Patagonia Sur de Argentina, con referencias de las principales ciudades.

Fuente: Instituto Geográfico Nacional

MAPA 2. División en departamentos de la provincia del Chubut.



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos - Chubut

Revista Divergencia: N° 13 / Año 8
Julio - Diciembre 2019
ISSN 0719-2398

Eran parte de un numeroso grupo de presos políticos que había intentado fugarse del penal de Rawson, ubicado a unos 20 kilómetros de Trelew, el día 15 de Agosto, una semana antes de la masacre. La fuga fue parcialmente exitosa, al conseguir tomar la cárcel desde adentro, pero no pudo completarse debido a errores del grupo de apoyo que debía transportarlos desde la cárcel hasta el aeropuerto de Trelew. Allí los militantes iban a ocupar un avión, que había sido previamente secuestrado por otros integrantes de esos grupos político-militares, desviando el vuelo hacia Chile; al arribar en forma tardía al aeropuerto (el avión ya había partido) decidieron entregarse a las autoridades. Las fuerzas represivas, incumpliendo los acuerdos con los militantes para garantizar su rendición, los trasladaron a la Base Aeronaval, donde fueron fusilados[4].

Desde el 15 de agosto la región estuvo completamente militarizada. A casi dos meses de estos hechos, el 11 de octubre de 1972, se produjo el "Operativo Vigilante": un contingente de diversas fuerzas represivas llegaron por sorpresa a la región, secuestrando a un numeroso grupo de militantes que habían formado parte de las Comisiones de Solidaridad con los Presos Políticos[5]. Ante ello, en la ciudad de Trelew, epicentro del polo de desarrollo del noreste de Chubut (Ibarra y Hernández, 2017), se produjeron una sucesión de asambleas, marchas y huelgas, que provocaron una enorme conmoción a nivel local y nacional.

El "operativo vigilante" se inició en la madrugada del 11 de octubre, cuando llegó al aeropuerto civil de Trelew un avión Hércules C-130, con oficiales y suboficiales del quinto cuerpo del ejército argentino e integrantes de otras fuerzas represivas. Se allanaron más de cien domicilios y secuestraron a dieciséis personas[6]; habían sido detenidas más de veinte, pero algunas resultaron rápidamente liberadas.

Durante la mañana la emisora local difundió el "comunicado Nº 1" del comando del quinto cuerpo, en el que se informaba que: "*Esta actividad ha sido desarrollada para garantizar el orden y la tranquilidad pública de la comunidad de Trelew, que ha sido perturbada por la acción de elementos vinculados a actividades subversivas*" (Jornada[7], 12 de Octubre de 1972, p. 2).

El "comunicado" confirmaba las noticias que ya circulaban. Grupos del pueblo se empezaron a juntar en las calles: "En la esquina de San Martín y Pellegrini, a veinte pasos del Distrito Militar, una aglomeración de quince personas quiso marchar hacia el aeropuerto para forzar la liberación de los rehenes" (Martínez, 2009, p. 143). Una hora más tarde los partidos políticos convocaron a las "fuerzas vivas" a una reunión. Al mismo tiempo se inició una asamblea popular en el principal teatro de la ciudad, que sesionó todo el día y noche y convocó a una huelga general regional para el viernes 13 de octubre.

Los diarios publicaron un comunicado de la Confederación General del Trabajo (CGT) local, rechazando la medida de fuerza[8]. Alineada con la dictadura militar[9] y la CGT que a

4 Para una descripción en profundidad de la fuga y la masacre, analizando sus implicancias políticas y sociales, ver Pérez Álvarez y Fernández Picolo, 2016 y Fernández Picolo et.al., 2015.

5 Estaba conformada por habitantes de la región, con distintos grados de involucramiento político y social, que se organizaron para solidarizarse con los presos traídos a la cárcel de Rawson. Asistían a los presos y sus familias, a quienes daban alojamiento, comida y recursos cuando viajaban para visitarlos. Ver Pérez Álvarez y Fernández Picolo, 2016 y Fernández Picolo et.al., 2015.

6 El número de secuestrados no parece casual, azaroso o arbitrario: se trata de la misma cifra de quienes habían sido asesinados el 22 de agosto de 1972, en la Base Almirante Zar de Trelew.

7 Utilizamos, como una de nuestras fuentes, a los diarios Jornada y El Chubut, ambos editados en la ciudad de Trelew. Se tratan de publicaciones periodísticas de carácter regional. Jornada se publicaba desde el año 1954 y El Chubut desde febrero de 1971. No hemos incorporado publicaciones periodísticas de cobertura nacional, excepto la crónica de Tomás Eloy Martínez, quien había viajado desde Buenos Aires para cubrir este acontecimiento.

8 Firmaron esa solicitada los dirigentes Cesar Ubaldo Ayala (secretario general de la Asociación Obrera Textil –AOT- y subdelegado regional de la CGT), y Gilberto Hughes (secretario general de Luz y Fuerza –LyF- y delegado regional de la CGT); en Jornada, 13 de octubre de 1972, p. 9.

9 Seguimos, en esta conceptualización, a Ansaldi: "*Llamarlas "dictaduras cívico-militares" es un eufemismo y, sobre todo, un error conceptual monumental que soslaya, oculta el carácter de dictadura de la clase descarnada, en nuestros casos: dictadura de las burguesías*" (2014, p. 63).

nivel nacional dirigía José Ignacio Rucci, la central sindical tampoco adhirió a las huelgas generales realizadas durante los días 16, 20 y 27 de octubre. En el seno de la Asamblea, los dirigentes regionales de la CGT fueron acusados de haber indicado qué personas debían ser detenidas; algunos secuestrados compartieron esa opinión.

Se vivió un hervidero de conflictos, movilizaciones y huelgas. La Asamblea popular fue el polo organizador de la lucha: ella convocó la huelga general del 13 de octubre, que fue prácticamente total en la región. La medida de fuerza impactó en el sistema de salud, los comercios, bancos, administración pública, estaciones de servicio, transporte público, educación primaria, secundaria y superior.

Las obras de construcción y las fábricas textiles cerraron sus puertas desde la mañana. Los obreros que construían la planta productora de aluminio primario[10] en Puerto Madryn se declararon en huelga desde el mediodía. Los estudiantes llevaron a cabo un piquete en las escalinatas de entrada al Colegio Nacional, evitando que algunos profesores intentasen entrar a trabajar.

También se realizó una "Marcha del Silencio", en homenaje a las madres de presos políticos y caídos en las luchas populares. El interventor militar designado como gobernador de facto en Chubut, inició gestiones el lunes 16 para reclamar la libertad de los detenidos, ante el nivel de rebelión popular en la región. Ese mismo día, el ejército anunció la libertad de diez detenidos. Durante la noche se reunió nuevamente la asamblea, debiendo sesionar al aire libre por superar los tres mil asistentes: se aprobó la propuesta de continuar la lucha por la liberación de los restantes. La manifestación "congregó a más de 4.000 personas que tomadas de la mano y en apretada caravana coreaban estribillos alusivos por la libertad de los detenidos" (El Chubut, 17 de octubre de 1972, p. 9).

La Asamblea convocó una nueva huelga general para el día 20. Se realizaron piquetes en algunas fábricas y hemos registrado diversos enfrentamientos con la policía provincial. Durante ese día liberaron a otros cuatro detenidos. La huelga nuevamente fue contundente, pese a la constante oposición de la CGT. La asamblea continúo funcionando, aunque ya sin tanto dinamismo, hasta conquistar la libertad de todos: el último, Mario Abel Amaya, regresó a Trelew el 13 de noviembre.

Amaya había sido detenido el 18 de agosto, pocos días después de la fuga, por tratarse de un abogado defensor de los presos políticos; el reclamo de su liberación se había integrado con el de los secuestrados el 11 de octubre. Fue recibido en el aeropuerto y trasladado en una caravana de automóviles hasta el Teatro Español: allí tachó su propio nombre de la lista de 17 detenidos; era el último que faltaba.

Fue quizás el único caso en Argentina de una región que se rebeló contra la dictadura, arrancándole la libertad de diecisiete secuestrados.

PROBLEMATIZANDO DESDE LA BIBLIOGRAFÍA

Nos interesa reflexionar sobre lo que consideramos un uso "acrítico" de la noción de "violencia política" y su no intencionada deriva hacia la lógica interpretativa del proceso histórico que fue constitutiva de la teoría de "los dos demonios". Seminara describe esa perspectiva, sosteniendo que "la versión más lograda de esos relatos se organizó en torno a la "teoría de los dos demonios", que en su manifestación ideológica (por lo tanto menos visible) asume el discurso militar y justifica su accionar en tanto respuesta "excesiva" al "terrorismo de extrema izquierda" (2018, p. 3). Según esa interpretación, quienes desencadenaron la "espiral de violencia" fueron los cuestionadores del orden social vigente;

10 Única en el país y de relevancia estratégica para las Fuerzas Armadas. Ver Pérez Álvarez, 2011.

las fuerzas armadas tan sólo "respondieron", aunque haya sido de manera "excesiva", a esos "delitos"[11].

Creemos, siguiendo a Águila (2013) que en ocasiones no se advierten las implicancias políticas e historiográficas de la utilización de ciertas epistemologías y conceptos: "En palabras de Eduardo González Calleja, el concepto de violencia política es genérico y, en sus acepciones más comunes, aparece igualado o como muy cercano al de represión. Asimismo, tanto violencia como represión son conceptos valorativos, sometidos a los vaivenes del debate sobre su licitud o legitimidad" (Águila 2013, p. 2).

Ansaldi retoma ese señalamiento, avanzando en una conceptualización más estricta de las diversas formas de violencia, enfatizando que "No hay violencia, sino violencias, y cada una de ellas muestra rasgos distintivos (2014, p. 49). Considera necesario diferenciar la violencia del oprimido de la que ejerce el opresor, y distingue tres formas básicas de violencia política: la revolucionaria (busca transformar la sociedad), la contrarrevolucionaria (grupos desplazados que pretenden recuperar el poder) y la antirrevolucionaria (grupos en el poder que intentan evitar la revolución) (2014, p. 49-50). Ansaldi denuncia que "Quienes dominan y defienden el orden establecido, estigmatizan la violencia de los dominados y explotados, especialmente si se expresa como lucha de clases" (2014, p. 59).

También Alonso profundiza el análisis, definiendo "La noción de represión", que "aparece también como un concepto insoslayable, que dota de sentido la violencia política "desde arriba" y la inscribe en las estrategias de reproducción o refundación de la dominación social al contener, denegar o castigar las resistencias" (2014, p. 209). Águila recupera esa propuesta, al investigar los fondos documentales de los organismos represivos en Argentina, los cuáles "dan cuenta no solo de la represión física sino de estrategias de disciplinamiento y control implementadas por el Estado hacia individuos, sectores y organizaciones, tanto como el registro de actitudes sociales, contribuyendo a la indagación sobre los comportamientos sociales en contextos represivos" (Águila, 2018, p. 68). O sea, hacia formas de violencia que van más allá de las directamente físicas.

Observando el tratamiento que un referente de la extrema derecha argentina, Vicente Massot, le da a la cuestión de la violencia política (esto es, "extremando" el argumento para apreciarlo en su esencia) pueden advertirse algunas posibles implicancias: "La metodología escogida fue, pues, descargar sobre los subversivos el terror que ellos habían usado y del que habían abusado. ¿De qué manera? Haciéndolos desaparecer (...) Carl Schmit, en su notable teoría del partisano, lo describe: 'En el círculo infernal del terror y contraterror, la lucha contra los partisanos suele ser muchas veces, el fiel reflejo de los métodos de los partisanos mismos' (...) Al tener que pelear contra grupos armados clandestinos, de carácter prioritariamente urbanos, cuya estrategia no se compadece con ningún código ético, de ordinario Las Fuerzas Armadas regulares han optado por sacrificar las leyes en aras del resultado, o sea, de la victoria" (Massot, 2003, p. 237).

Resumiendo esa macabra perspectiva, Fantino y Marinaro (2015) explican: "Massot entendía la extrema violencia del pasado reciente como el choque de dos cosmovisiones: la izquierda radicalizada buscó establecer un sistema socialista a través del uso de la fuerza y el Estado sólo respondió a esta agresión peligrosa". Por ello a Massot le es operativo, para sus fines de legitimación del terrorismo de estado, referirse ahistóricamente a la noción de "violencia política" y proponer la perspectiva de los dos demonios.

11 El emblema de esa justificación fue el prólogo al informe "Nunca Más", redactado por el escritor Ernesto Sábato en 1984: "Durante la década del 70 (...) a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos" (Sábato, 1984).

El uso deshistorizado de la noción de violencia política licúa la especificidad del momento histórico que se pretende explicar. Esto es algo especialmente complejo cuando trabajamos temáticas vinculadas a etapas de dictadura, de estados autoritarios o de la formación del terrorismo de estado, entendidas como medidas del capital contra la clase obrera.

Como bien lo indican Oberti y Pittaluga (2016), algunos malos usos de la noción de "violencia política" han alimentado un discurso sobre la historia reciente argentina que reflota la teoría de los "dos demonios", responsabilizando a los sectores de izquierda en rebeldía. Esa teoría descansa en una explicación monocausal, depositando la culpa del terrorismo estatal en aquel que cuestiona el orden social vigente, quebrando el "equilibrio", alterando la "paz": el culpable es quién se rebela contra la injusticia estructural, quién desafía la "paz de los cementerios", desatando la reacción del demonio estatal-patronal.

En la versión oficial del nuevo "intento de fuga", inventado por la Armada argentina para justificar la masacre del 22 de agosto de 1972 en Trelew, ya se encontraba esa lógica: según su relato la confrontación la comenzaron los "subversivos" atacando a la guardia, intentando Mariano Pujadas, con una toma de karate, arrebatarle el arma al Capitán Sosa. Ese "ataque" es el que desata (y justifica) la masacre. Las aparentes víctimas son, en verdad, los culpables; esa matriz de versión oficial siempre carga la responsabilidad sobre las víctimas.

La perspectiva que deshistoriza la violencia política legítima las tesis oficiales sobre los díscolos grupos de izquierda y derecha, que serían quienes participaron en ese "juego", quedando en el "medio", la "gente común"[12]. Esa es la mirada que nutre la formulación del exitoso libro de Sebastián Carassai (2013), que desde su título ("Los años setenta de la gente común...") postula esa interpretación, formando parte de la colección de Siglo XXI dirigida por Luis Alberto Romero. Otras investigaciones realmente críticas, como la de Belén Zapata, que busca "analizar las representaciones de la violencia política que la Nueva Provincia impuso en la sociedad bahiense" (2014, p. 150), evidencia la construcción intencionada de una perspectiva sobre la violencia política que acusa únicamente a quienes osaron rebelarse contra el orden social establecido.

No decimos que algunos investigadores compartan las funestas ideas de Massot: lo que buscamos es reflexionar sobre ciertos usos de la noción de "violencia política", que no cuestionan la matriz culpabilizante de la rebelión popular contra la injusticia estructural del orden social capitalista.

Pensamos a la violencia como un elemento sistémico e inherente a las relaciones sociales capitalistas, y no como una expresión contingente y anómica. Dicen Ansaldi y Alberto: "Como bien enseñaron los primeros anarquistas, la violencia inicial es la diferencia, la desigualdad entre las clases" (2014, p. 37). No obstante, consideramos que lo estructural es el conflicto (que se desprende de la expropiación, competencia y acumulación), y no la violencia en sí misma; esta es la manifestación histórica (cuyas formas pueden ser variables, acorde a la coyuntura socio-política) de una situación de conflicto precedente, que da cuenta del grado de tensión y desarrollo de la lucha de clases[13]. Como señala Aróstegui, la aproximación histórica tiene que tener en cuenta la "complejidad de lo violento y tiene que atender a establecer las formas de violencia y las formas en que la violencia ha estado presente, con connotaciones negativas o positivas en los sistemas sociales históricos" (1994, pp. 19-20).

12 "*Oficialmente las autoridades han tratado de dar otra explicación, más ajustada a sus posiciones y conveniencias. En tanto el país mayoritario lo muestra la presencia de 12 millones de hombres y mujeres en las urnas en procura de una salida pacífica, díscolos grupos de la derecha reaccionaria y de la izquierda intemperante libran una batalla de fuegos cruzados que tiene paralizada a la Argentina.*" (Escobar y Velázquez, 1975, p.15).

13 "*La violencia es siempre una consecuencia del conflicto; pero una relación de causa a efecto violencia-conflicto carece de sentido porque pueden existir conflictos en los que no hacen aparición manifestaciones de la violencia. En efecto, la violencia no es la consecuencia necesaria del conflicto*" (Aróstegui, 1994: 30). En otras palabras, existen los conflictos y contradicciones (de clase, de género, étnicas, ideológicas, religiosas, medioambientales, etc.) sin que necesariamente se regostre un encuentro o confrontación de fuerzas.

Para ello es necesario formular un criterio amplio de "violencia", de modo tal que nos permita consignarla más allá de la manifestación de fuerza física, e incluir otras expresiones como el temor, la pobreza, la represión, la alienación, etc. (Aróstegui, 1994, p. 26). El riesgo de ceñirse a una definición restrictiva, es dejar fuera los tipos de violencia que van más allá del daño físico, como la amenaza (Aróstegui, Calleja y Souto, 2000, p. 58) o la delación (Lvovich, 2018, pp. 77-79).

Una definición amplia de la violencia debiera permitirnos consignar la gama de medidas represivas de la década del '70 en Argentina, incluyendo las diversas normas punitivas contra la actividad política y sindical[14]. Por ello en ese "criterio amplio" que señala Aróstegui (1994), incluimos los actos psicológicos (propaganda, manipulación, temor) y las medidas políticas y jurídicas lesivas que se aplican desde el poder contra los grupos sociales subalternos. Así también lo define Águila, cuando sostiene su necesidad de referirse a "Un conjunto de dinámicas políticas y sociales, que involucran el ejercicio de la violencia física pero que también lo desbordan" (Águila, 2018, p. 70)

En suma, compartimos la definición de Aróstegui en la que entiende por violencia: "... toda resolución, o intento de resolución, por medios no consensuados de una situación de conflicto entre partes enfrentadas, lo que comporta esencialmente una acción de imposición, que puede efectuarse, o no, con presencia manifiesta de fuerza física. De esta forma, la violencia es entendida como una situación social, que tiene como mínimo un par de actores, y se descarta la connotación instrumental que confunde violencia con uso de la fuerza" (Aróstegui, 1994, p. 30).

El otro debate clave, ya lo destacamos, es enfrentar la visión moralizante de la violencia, que oculta la praxis política de los sujetos que realizan acciones sindicadas como "violentas", especialmente cuando estas son ejecutadas en clave antisistémica: "Cuando hombres y mujeres deciden hacer política tomando las armas, la suya es una decisión política, no moral" (Ansaldi y Alberto, 2014, p. 28). En contra de toda "moralización" de los hechos, lo central para nosotros es demostrar que "La violencia ha estado y está presente en todos los procesos de transformación social y/o política. La cuestión, entonces, no es aplaudir o repudiar su empleo. La cuestión es explicar por qué ha sido y es así" (Ansaldi y Alberto, 2014, p. 45). Desde esta perspectiva alternativa, Ansaldi considera que para las clases populares "La violencia deviene una estrategia de interpelar al poder (...) Analizarla y explicarla desde esa perspectiva requiere, para decirlo una vez más, situarse en el campo de la política, no de la moral" (Ansaldi, 2014, p. 76).

La mirada que "moraliza" la instrumentación del ejercicio de la violencia en las acciones desarrolladas por parte del pueblo, es parte de un proyecto político anclado en las claves de la socialdemocracia. El mismo se afincó en la "transición democrática", entendida como supuesta fase donde las prácticas disruptivas contra el orden social legado por las dictaduras debían ser reemplazadas por la búsqueda de ciertos márgenes de "justicia transicional", que no subvirtieran las estructuras construidas por el terrorismo de estado. Este es el debate general al que buscamos contribuir desde el análisis de la actividad disruptiva de las masas populares en Trelew, durante octubre de 1972.

14 Entre la legislación represiva dictada por la "Revolución Argentina" se cuentan los decretos-ley: 16.984 de 1966 (prohibía la distribución por correo de propaganda "comunista"); 17.401 de 1967 (de represión al "comunismo" y la "subversión"); 18.234 de 1969 (modificación a la 17.401 que sanciona la "actividad ideológica"); 18.799 de 1970 (reducción de habeas corpus) y la modificación de junio del mismo año al Código Penal, incluyendo la pena de muerte tras el secuestro de Aramburu; 19.081, de 1971, que autorizaba la participación de las FF.AA. en operaciones de seguridad interior, entre otras. Es importante además, de cara a nuestro estudio, el decreto 19.797 sancionado el 22 de agosto de 1972, que penaba a quien difundiera cuestiones relacionadas a la Masacre de Trelew y a los militantes asesinados.

UN ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS SOBRE EL TRELEWAZO

La praxis de participación y democracia directa, característica del Trelewazo, es, según cada investigación, presentada en un gradiente que va desde quienes enfatizan (y valoran) su parcial canalización institucional gracias a la labor de los partidos políticos tradicionales (Canosa, 2005[15]), hasta quienes postulan que la capacidad creadora de la "insurrección" generaba nuevas relaciones de fuerza, que ponían en cuestión el propio orden social burgués (Grenat, 2009[16]).

Canosa focaliza su mirada en la capacidad de institucionalización de la protesta, con una mirada "negativa" de la posibilidad, siempre latente, de la irrupción de la violencia física directa: el "éxito" del Trelewazo" se habría basado en la victoria de las fuerzas que impidieron esos "desbordes". En cambio, en Ramírez (2003) podemos identificar un tratamiento más "optimista" (emancipatorio) sobre las posibilidades de la acción directa y la "radicalización política" para poner en jaque al poder dictatorial[17].

Canosa enfatiza el rol de los partidos políticos conteniendo la protesta: "...en relación con otros episodios del estilo, no se produjeron allí hechos de violencia (...) la capacidad que los partidos políticos tuvieron, si bien no de controlar totalmente, al menos de contener y encauzar la movilización, procurando marcar los límites de la radicalización de sus prácticas y métodos de confrontación. En un contexto como el de octubre de 1972, estos tenían además gran interés en que no se produjeran hechos de violencia que, como repetidamente advirtieron, temían podrían contribuir a frustrar la apertura electoral prometida desde el lanzamiento del GAN" (Canosa, 2005, p. 116).

En cambio, Ramírez no escapa a pensar la relación entre violencia y pueblo, habilitando la experiencia popular desde la clave de "radicalización política", permitiéndole problematizar los usos y posibilidades de la acción directa: "pensar la radicalización política como un problema no solo ni fundamentalmente vinculado a procesos ideológicos, sino más bien como un proceso más amplio y complejo también relacionado con la oclusión de los canales formales e informales de comunicación entre la sociedad civil y el estado (...) parecen haber hecho de la acción directa una herramienta muy efectiva, a veces la única disponible, para abrir la negociación entre los sectores perjudicados y el estado" (Ramírez, 2003, p. 24-25).

Advierte así que en un pueblo oprimido podía anidar legítimamente la reivindicación de la violencia popular desde abajo, destacando en sus proclamas un "*tono radicalizado y desafiante que sin embargo también está parcialmente articulado por el lenguaje de los derechos ciudadanos*" (Ramírez, 2003, p. 18). La mirada de Canosa no visibiliza algunos aspectos de la experiencia popular de la asamblea, porque el papel de los partidos políticos "evitando un mal mayor", la eclipsa. Se enfatiza el rol de la Comisión Interpartidaria (en especial el testimonio del dirigente radical Santiago "Chiche" López[18]) en detrimento de la

15 "*De acuerdo al testimonio de varios de ellos (partidos políticos), era necesario contener las medidas que podían producir que la movilización desbordara su conducción orgánica favoreciendo hechos de violencia que brindarían a la dictadura argumentos para la represión y para frustrar la apertura electoral*" (Canosa, 2005, p. 104)

16 "*La acción directa de los protagonistas del Trelewazo, inserta en esta tendencia insurreccional general, constituida por fuera de los canales políticos e institucionales, corroía los cimientos de la dominación burguesa del Estado" (Grenat, 2009, p. 25).*

17 Reconociendo en el ejercicio de la violencia popular una potencial clave emancipatoria. Como lo hace Fanon, se considera a la violencia "haciendo referencia, no a su carga valorativa sino, más bien, a su condición de ejercicio creador: la violencia entendida como mecanismo reorganizador de la realidad a través de la cual se configuran identidades, instituciones, jerarquías" (Martín, 2015, p. 26).

18 "*Entre estos dirigentes 'más confiables' se encontraba Santiago López, quien refiriéndose a su capacidad para desactivar las propuestas de diversos 'provocadores profesionales' recuerda: '(...) gente llegada de afuera que tenían otra forma de acción política, pero generalmente eran provocadores que trataban de exaltar a la gente con propuestas como tomar la radio, ir a tomar el penal. Con lo cual se hubiera justificado una represión. Hubiera sido un desastre y hubieran roto con la propuesta. Eso se controló muy bien, hay que señalar, la gente confió mucho en la conducción, esta es una de las satisfacciones más grandes que tengo*". (Canosa, 2005, p. 106)

Comisión de Asamblea[19]. Estos últimos, desde su origen representantes de ese pueblo rebelado y "en insurrección", fueron quienes tensaron las relaciones políticas para conseguir la liberación de los detenidos: de ese sector salió la propuesta de exigir la renuncia de Costa[20] y las convocatorias a huelgas generales, propuestas criticadas por los grupos más conservadores (partidos políticos, sindicatos participacionistas, gobierno, y prensa).

El enfoque de Ramírez permite incorporar "la legitimación y expansión de los discursos que hacían de la acción directa, y por ende de cierta dosis de violencia, una herramienta central de la lucha política" (Ramírez, 2003, p. 25). Atender a esa "radicalización política" desde una matriz que observe el proceso histórico del que emerge, y que no "moralice" o "culpabilice" las acciones, permite:

1) desagregar mejor las diferentes expresiones y niveles de lucha, distinguiendo sus orígenes sin licuarlas en una noción abstracta de "violencia política";

2) poner la mirada especialmente en las formas insurreccionales, desobedientes, y extra-parlamentarias, que se desarrollan por fuera de la órbita de la institucionalidad burguesa y republicana.

En suma buscamos desechar "cualquier identificación simplista de las violencias de diversos tipos y signos que se verificaron en la historia reciente argentina tanto como una explicación omnicomprensiva anclada únicamente en "la Violencia" y su incremento (que incluyen desde la teoría de los dos demonios o sus versiones remozadas, hasta perspectivas democratistas que han colocado a la violencia como antagónica de la política, condenando en bloque a "la violencia" de los años 70 y renunciando en gran parte a explicarla)" (Águila, 2013, p. 2).

LA DINÁMICA DEL TRELEWAZO

Si bien durante los días del Trelewazo casi no se registraron hechos de violencia física directa[21], la violencia del régimen estuvo siempre latente, condicionando el proceso político, buscando frenar su radicalización e intentando impedir la participación popular. En verdad decir que no hubo violencia física encubre el hecho que se inscribe como origen de este proceso: el secuestro de un conjunto de militantes políticos de la región, por parte de las fuerzas represivas.

Repasando los comunicados y declaraciones de los distintos actores sociales buscamos deslindar los posicionamientos y usos políticos del "fantasma" de la violencia, que recorrió las movilizaciones populares del periodo. La amenaza siempre estuvo implícita en los pronunciamientos del lado del régimen, en clave del llamado a "evitar los desbordes", por las consecuencias que ello podría acarrear: "...tanto la autoridad del Estado como la capacidad reivindicativa de las diversas organizaciones políticas y sociales se mantienen por la amenaza constante del uso de la violencia física como ultima ratio del juego político. De la advertencia al ataque directo, todas estas acciones se refuerzan y se hacen creíbles las unas a las otras" (Aróstegui, Calleja y Souto, 2000, p. 58)

19 Existían 3 comisiones dentro de la Asamblea del Pueblo: "a) Comisión Interpartidaria constituida por los partidos políticos que en el mediodía del miércoles 11 convocaron a una asamblea popular; b) Comisión de la Organización, formada del seno de la Asamblea y c) Comisión Coordinadora, integrada por las dos mencionadas, como una forma de darle representación a organizaciones no partidarias en las decisiones que tomen los partidos políticos" (Jornada, 21 de octubre de 1972, p. 4). Explica Fernández Picolo: "Si bien los partidos políticos continúan encabezando la protesta, se distinguen dos grupos: Uno corresponde a los políticos tradicionales que formalmente parece que están al frente de la protesta, y el otro son los asambleístas, integrantes de líneas internas combativas y con una importante militancia que supera los ámbitos partidarios –sea el Encuentro Nacional de los Argentinos, los gremios y la lucha por los presos políticos- y que constituye una práctica política distinta" (2015, p. 196).

20 Jorge Costa, militar nombrado interventor federal de Chubut por la dictadura que encabezaba Onganía. Ejerció el gobierno de la provincia desde agosto de 1970 hasta el retorno del régimen constitucional, en mayo de 1973.

21 Sólo se registraron algunos enfrentamientos en los piquetes de huelga.

Ello se observa en los posicionamientos editoriales del diario *Jornada*, el más tradicional de Trelew[22]. La violencia discursiva se usa para "desactivar" o invalidar propuestas "radicalizadas" o que podrían atentar contra la gobernabilidad y la "paz social". Se cierne una amenaza de violencia que busca desmovilizar: "…debe primar la inteligencia, para que la voz no se interne tan profundo que llegue a desbordar en lo imprevisible. Y entonces será tarde para arrepentirse" (Jornada, 15 de octubre de 1972, p. 4); o, casi igual en el duro tono de la "advertencia": "No demos lugar a otra cosa, que mañana podamos lamentar" (Jornada, 15 de octubre de 1972, p. 3).

También estaba presente el clásico llamado contra los "agitadores" o aquellos "ajenos" a la región: "*…hubo entendimiento para efectuar un sólido control del desenvolvimiento de la asamblea, en la cual puede ser admisible ciertos desbordes entusiastas de los más jovencitos pero impropios de personas maduras, no muy identificadas con el medio social local y hasta quizás, ajenos al mismo*" (Jornada, 16 de octubre de 1972, p. 9).

El gobierno de facto de Chubut se pronunciaba en una línea similar, en una solicitada a página completa en el mencionado medio de prensa: "El gobierno provincial confía que la violencia sobre los hombres y bienes no será utilizada como medio de acción (…) respete a las fuerzas del orden, ellas son pueblo y tratan de cuidar la vida y bienes de la población. Trate de que no ejerza violencia alguna sobre los hombres ni las cosas" (Jornada, 20 de octubre de 1972, p. 5).

También una línea interna del peronismo, el *Movimiento Bases Peronistas*, destacaba la necesidad de: "no hacer el juego a 'quienes quieren crear un clima anárquico' y se muestra contrario al anunciado paro general de mañana", preguntándose si lo que buscan "es un interventor militar mano dura que nos muela a palos a todos o bien se está obrando para que Trelew se convierta en merienda de gatos de lo que la línea antinacional saque tajada" (Jornada, 19 de octubre de 1972, p. 8).

Esas recurrentes recomendaciones de prudencia, iban de la mano con la tendencia a resaltar la capacidad de mediación institucional de los actores políticos tradicionales: "el pueblo ha encontrado en el cauce que le ofrecieron sus dirigentes políticos la forma de exteriorizar su indignación con una altura cívica elogiable (…) sin desmanes, con dignidad" (Jornada, 15 de octubre de 1972, p. 4).

En el mismo sentido se expresaba el sindicato regional de Luz y Fuerza, alineado con la CGT regional, sectores de la patronal (Cámara de Industria y Comercio) y el gobierno provincial, reclamando: "mesura y prudencia en los procedimientos destinados a asegurar la salida electoral que la mayoría del pueblo reclama" (Jornada, 16 de octubre de 1972, p. 8).

Es bien diferente la postura que tiene el Partido Socialista Popular, que en sus pronunciamientos se aparta de la actitud especuladora ante la salida electoral que sostenían otros espacios políticos: "Hacer saber que entiende que dada la situación creada, el clima de inseguridad y la existencia de presos políticos chubutenses, todo proceso electoral queda invalidado y en tal sentido insiste en que antes de la hora de las candidaturas, es la hora de la resistencia a los desmanes de la dictadura militar" (Jornada, 16 de octubre de 1972, p. 8).

El PSP denuncia el allanamiento que había sufrido su local partidario, secuestrándoles documentación interna, en un procedimiento que también sufrió la sede regional del MID (Movimiento de Integración y Desarrollo) y el estudio jurídico que compartían los dirigentes políticos Mario Abel Amaya (radical, ligado a la línea más progresista de la UCR) y David Patricio Romero (referente de la tendencia peronista en la región; ambos eran abogados

22 Que enfatiza y reproduce un discurso cívico que enarbolan también los sectores liberales y conservadores: "Lo ha hecho [la asamblea] dentro de un marco de mesura y responsabilidad, que en vano pretendieron alterar algunos elementos agitadores de profesión para incitar a la realización de actos subversivos" (Jornada, 15 de octubre de 1972, p. 4).

defensores de presos políticos). Como vemos la violencia política (o la política violenta) del régimen no dejaba de operar, sea discursiva o físicamente, como amenaza o acción directa.

Por el lado del campo del pueblo, la discusión en torno a "la violencia" se utilizaba para construir legitimidad en torno a las medidas de acción directa. Esas acciones "radicalizadas" (esto es, que tensaban las relaciones políticas tradicionales y suscitaban disputas al interior de la Asamblea) se expresaron en las huelgas[23], las movilizaciones por las calles céntricas y las barriadas de la ciudad[24], y fundamentalmente, en el reclamo de la renuncia del interventor Costa.

Así, el "Manifiesto de la Asamblea del Pueblo", sostenía: "No negamos que existe la subversión, porque donde existe la violencia institucionalizada de quienes ostentan el título de gobernantes, existe también la violencia de los que valientemente levantan la bandera de la lucha por los derechos de la persona humana. Los primeros están 'amparados por las leyes', tienen la fuerza y son los servidores del imperialismo, y están viendo zozobrar sus privilegios" (El Chubut, 13 de octubre de 1972, p. 9).

Entre los partícipes más activos de la Asamblea se destacaron algunas oradoras, como Teresa Belfiore de Carmona, docente universitaria: "¡Pueblo de Trelew! El pueblo es el dueño de los sagrados principios de la libertad. Sólo en libertad el pueblo puede tener la paz (…) los que condenan los actos de violencia no se dan cuenta o no quieren pensar que hay causas violentas que impone la revolución (…) Las gestas de nuestra emancipación fueron violentas. La lucha por nuestra organización nacional también fue violenta. La hora presente es una hora de cambios. Los pueblos del mundo viven. No estamos solos pueblo de Trelew" (El Chubut, 14 de octubre de 1972, p. 6)

La misma horizontalidad de la asamblea, que presionaba hacia posiciones más radicalizadas y objetaba las propuestas moderadas, era señalada por los grupos tradicionales como una forma de "violencia" contra los dirigentes y oradores que planteaban la necesidad de la negociación con el gobierno dictatorial.

Durante la Asamblea celebrada la noche de las primeras liberaciones, habló el dirigente Jorge López informando que "Los partidos políticos han resuelto decretar un paro para el día viernes", ante lo cual "*un pequeño grupo parado al frente del palco prorrumpió en gritos: 'el miércoles*" (Jornada, 17 de octubre de 1972, p. 9).

En suma, mientras los sectores moderados y conservadores[25] usaban la "amenaza" de violencia para atemperar la disputa y/o desmovilizar, enalteciendo la función de los partidos políticos y órganos de gobierno; los sectores más "radicalizados"[26] de la Asamblea buscaban llevar el proceso más allá de los límites impuestos por la institucionalidad burguesa: por ejemplo exigiendo la renuncia a Costa o reclamando adelantar y sostener la convocatoria a huelgas generales.

Esa experiencia de autonomía y horizontalidad, esa forma de hacer política (asambleaaria, cara a cara, sin mediaciones) es lo que se pretende condenar al olvido desde las memo-

23 El poder de la asamblea se expresa, por ejemplo, en un comunicado de la Unión Obrera de la Construcción, convocando a sus afiliados para resolver la "actitud a tomar ante el paro de actividades decretado por la Asamblea Popular" (Jornada, 19 de octubre de 1972, p. 8).

24 "*Desde las 18 horas una manifestación parte del teatro y recorre los barrios Norte, La Laguna y Don Bosco seguida por una caravana de autos. Muchos jóvenes, hombres, mujeres y niños se movilizan (…) Una vez cumplido el itinerario por los barrios, los manifestantes regresan al lugar de la asamblea*" (Fernández Picolo, 2015, p. 186)

25 Al interior de la asamblea, encarna esta postura la Comisión Interpartidaria. Hacia afuera, el diario Jornada, el gobierno provincial, los sindicatos participacionistas (CGT regional, UPCN –Unión del Personal Civil de la Nación-, Luz y Fuerza, Centro de Empleados de Comercio) y la Cámara de Industria y Comercio del Este de Chubut.

26 Al interior de la Asamblea, la Comisión de la Organización (también conocida como Comisión de la Asamblea). Hacia afuera: estudiantes, sindicatos opositores (SOYEAP -Sindicato de Obreros y empleados de la Administración Pública-, UOCRA –Uniòn Obrera de la Construcción-, SOEM –Sindicato de Obreros y Empleados Municipales-, SITRAVICH –Sindicato de Trabajadores Viales del Chubut) militantes populares y organizaciones barriales de Rawson y Trelew.

rias del poder[27]. La praxis contra institucional es lo que se invisibiliza tras la "acusación" unificadora y simplista de "violencia", solamente porque eran iniciativas que desbordaban la institucionalidad burguesa.

El ataque de la dictadura, vía el secuestro de 16 militantes populares, pretendió funcionar como una medida de acción psicológica contra una sociedad conmocionada desde los sucesos de Agosto. Se trató de un error de cálculo, producto de no reconocer las redes de sociabilidad y militancia construidas en la región, tejidas con hilos invisibles a los ojos del poder (Scott, 2000). La acción dictatorial, dirigida a desmovilizar y aterrorizar, singularmente transfirió fuerza moral a las clases populares de la región, generando: "*La lógica reacción de todo un pueblo (...) en repudio por los procedimientos utilizados en una inútil demostración que, si pretendía intimidar a una comunidad de suyo tranquila, ha logrado precisamente lo contrario. (...) Las fuerzas armadas y de seguridad han venido al valle, han ocupado las ciudades, han detenido a los ciudadanos sin dar a conocer los motivos y han ejecutado en definitiva, una de las formas de violencia*" (Jornada, 15 de octubre de 1972, p. 3).

La "amenaza" de una escalada de violencia estructura la disputa política, y todos los sectores se expresan en relación a ella. De esto da cuenta Ramírez, analizando los posicionamientos políticos, y observando que "mientras que para algunos el pueblo en estas protestas reactualizaba las nociones decimonónicas de virtud burguesa y republicana o el sentido de los pactos preexistentes, para otros significaba la continuación de diecisiete años de lucha y proscripción[28], un escalón en el proceso revolucionario, la vuelta a la institucionalidad democrática, o todos estos sentidos a la vez" (Ramírez, 2003, p. 23).

La "delación" también operó como otra forma de "violencia política", en tanto que anónimamente se denunciaba a un adversario acusándolo de "subversivo". Esta temática es trabajada por Daniel Lvovich (2018), quién sostiene que "El control dictatorial sobre la población solo se pudo desarrollar por la existencia de una sociedad que se patrulló a sí misma" (2018, p. 77), sosteniendo que la praxis del terrorismo de estado operó como "productor de subjetividades obedientes y potencialmente punitivas" (2018, p. 79).

La situación fue reclamada al gobierno provincial por la Asamblea del Pueblo, exigiendo que se informasen los nombres de los delatores[29]; indirectamente la acusación recayó sobre la CGT regional, y esto motivó que sus principales dirigentes publicasen un descargo[30]. Gilberto Hughes (dirigente de la CGT y de Luz y Fuerza), el principal sospechado de haber hecho las denuncias, en 1969 ya había tenido una actitud desleal hacia Agustín Tosco[31], cuando este último se encontraba detenido en la cárcel de Rawson, tras haber sido el principal referente del "Cordobazo"[32].

27 La lucha por la construcción de la memoria (ver Portelli, 2016, Binder, 2018; Flier, 2018) en torno a estos hechos es permanente en la región. Para la conmemoración de los 41 años del Trelewazo, el intendente de Trelew realizó un acto cerrado en la municipalidad con invitaciones exclusivas y sin participación popular. No es inocente que esa sea la forma de "recordar" la experiencia de inclusión y participación popular que significó la Asamblea del Pueblo.

28 Recordemos que desde el golpe de estado de 1955, que había derrocado el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, el peronismo se encontraba proscripto e imposibilitado de participar en las contiendas electorales que se realizaban. Estas eran desarrolladas bajo el estricto control de las Fuerzas Armadas (Schneider 2005; James, 2006).

29 Reunidos los partidos políticos con el ministro de economía de Chubut, "Santiago López (UCR) enfatizó en la necesidad de que los casos de delaciones, causantes según la comunicación oficial, de las detenciones y por tal motivo de la tranquilidad pública no debía repetirse (...) En el mismo sentido el Ing. Silvio Grattoni (Justicialismo) señaló que era necesario proveer la información pertinente en cuanto a la identidad de los delatores" (Jornada, 17 de octubre de 1972, p. 4).

30 "*Los hechos recientes de Trelew deben merecer un sereno y meduloso análisis de parte de toda la ciudadanía sin exclusiones, pero con mayor responsabilidad de los dirigentes políticos, porque se ha llegado a un extremo de sofisticación tal que aquellos mismos hombres y mujeres que tuvieron la desgracia de su detención en Villa Devoto han coincidido, salvo excepciones, en señalar que los miembros de la CGT regional, en forma muy particular quien suscribe, han sido los delatores que solicitaron su prisión*" (Jornada, 19 de octubre de 1972, p. 4; firmado por G. Hughes).

31 Dirigente del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, principal referente nacional del sindicalismo de liberación y una de las figuras emblemáticas del "Cordobazo" (Iñigo Carrera, Grau, Marti, 2014).

32 La sucesión de protestas populares que surcaron el territorio de Argentina durante los años que van de 1969 a 1972 son

En aquella ocasión Hughes acercó su "solidaridad" gremial a Tosco, ya que ambos integraban la misma federación sindical a nivel nacional. Tosco le entregó un petitorio para llevar a la prensa, donde denunciaba las condiciones del penal: "... a Gilberto Hughes le interesaba más consolidarse como 'colaborador' directo de la dictadura y mantener la fluidez de sus relaciones con las fuerzas policiales que solidarizarse con un sindicalista como Tosco, según lo revelan sus propias declaraciones: 'De la publicación tomó conocimiento el entonces Jefe de Policía, señor Himschoot, quién se ofreció a mediar ante las autoridades del penal para evitar que la publicación pueda perjudicar la situación' (Jornada, 26 de septiembre de 1972, p. 4)" (Fernández Picolo, 2015, p. 111, citando declaraciones de Hughes).

REFLEXIONES PARA SEGUIR AVANZANDO

Observamos cómo durante el Trelewazo fue permanente la presencia, sea tácita o explícita, de diversas formas de violencia, con distintos grados, sentidos, usos y orígenes. Supongamos (se trata de una abstracción en definitiva) que los hechos en Trelew hubiesen desbordado aún más el "encauzamiento" institucional, escalando el conflicto, profundizando la crisis y registrando enfrentamientos callejeros. Así sucedió en el "Rocazo", sólo tres meses antes en la provincia de Río Negro, donde "una porción más que importante de los habitantes de esta ciudad tomó las calles y se enfrentó con piedras y barricadas a la policía y a los efectivos del ejército enviados a resguardar el orden" (Ramírez, 2003, p. 7).

De haber sucedido esto mismo podría caerse en la tentación de catalogar al Trelewazo como un episodio más de la "violencia política" de los '70; es decir como un tópico en el que se incluyen, indiferenciadamente, las diversas políticas de acción directa del campo del pueblo, junto a las ejercidas desde el campo del régimen, articuladas estas últimas por el estado terrorista-represivo.

Aparecen, y son nominadas, diversas fuentes o raíces de la violencia. La primera, y realmente originaria, es la estatal-militar (denunciada, generalmente, como "atropello"); luego es sindicada aquella que se nomina como "izquierdista" (agitadores, jóvenes impulsivos y revoltosos); también operan las delaciones y las múltiples denuncias sobre la supuesta presencia de "infiltrados".

Esto se presenta sin análisis del gradiente; es decir la violencia que ejerce el estado terrorista, junto con los cuestionamientos de las bases contra las dirigencias tradicionales, o el accionar de los piquetes de huelga, parecieran mostrarse como si fuesen fuerzas simétricas, iguales... Así se desdibuja el origen estatal-patronal de la supuesta "espiral de violencia", ocultando la indiscutible asimetría de poder.

Esa asimetría sí se evidencia, de manera palmaria, aquí: "En nombre de la Juventud Peronista de Rawson habló el señor García, quien expresó que traía desde Rawson 'la solidaridad de las barriadas y su fe inquebrantable en la lucha popular'. Concluyó diciendo que 'el despliegue de tanques ametralladoras y uniformes que observa en Rawson, no condice con la miseria de las barriadas ribereñas'." (Jornada, 20 de octubre de 1972, p. 1).

más que conocidas en la historiografía regional. El emblema de ese movimiento fue el "Cordobazo", una insurrección obrera y popular que debilitó a la dictadura de Onganía y abrió una nueva etapa en la correlación de fuerzas sociales en el país. La bibliografía sobre el tema es amplia y en constante elaboración. Dos investigaciones fundamentales son Balvé y Balvé (2005) y Balvé y otros (2005). Debido a que durante el año 2019 se conmemoraron los 50 años de estos hechos, se han publicado varios dossiers: optamos por destacar esos nuevos aportes. Entre otras recopilaciones, citamos la publicada durante el año 2014 en la revista Archivos (con artículos de M. Mestman, M. Mangiantini, A. Celentano y C. Mignon), en 2019 en la revista Aletheia (con artículos de M. C. Tortti, M. González Canosa, A. J. Ramírez, H. Camarero, M. Mangiantini, N. Pis Diez, L. Rubinich, L. Verzero, J. Sahade, V. Sampietro, I. Jaschek, M. Lanteri, E. Soler, S. Basterra, L. Albañir) y también en 2019 en la revista Hic Rhodus (con reflexiones y documentos de Rubinich, E. Grünner, J. Altamira, S. Paris y N. Flexer). Existen convocatorias vigentes en la revista Conflicto Social (dossier coordinado por G. Seia y R. Laufer) y en Cuadernos de Historia, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. También dicha Universidad editó, recientemente, el relevante libro de M. L. Ortiz (2019).

La noción de violencia política, entonces, cuando no se historiza o cuando reúne de modo indistinto a las acciones de los poderosos y los resistentes, oculta que la política violenta, estructuralmente, se práctica siempre en principio desde arriba. En Trelew se produjeron dos casos de "política violenta" en apenas cincuenta días, en una ciudad militarizada desde la incorporación del dispositivo carcelario de la Unidad 6 (cárcel de Rawson) al sistema represivo nacional: esos dos ataques fueron la Masacre de Trelew y el Operativo Vigilante.

La política violenta del estado terrorista continúa entre ambos hechos. En el campo del pueblo se fue acumulando fuerza moral, suscitando una respuesta masiva en octubre, cuyo origen no puede comprenderse si se fragmenta ese proceso de lo ocurrido en Agosto: no sólo porque los castigados en Octubre fueron los miembros de las Comisiones de Solidaridad, sospechados de colaborar con la fuga, sino porque el régimen represivo mantuvo la declaración de zona de emergencia y la militarización de la cotidianeidad, combinando un clima de terror y vigilancia que fue lacerando el conjunto de las relaciones sociales.

Esta perspectiva no debe llevarnos a suponer que existe una explicación monocausal de acción/reacción ante lo que pueda vivenciarse como un problema de "abuso de autoridad". Estos sucesos expresaron el enfrentamiento entre fuerzas sociales, que con el Trelewazo terminó desbordando lo institucional.

"Un operativo militar ha provocado la reacción de un pueblo", titulaba su nota de análisis el diario *El Chubut*, ya para el 25 de octubre. Ahora bien: ¿Qué circunstancias rodearon al hecho para que eso sucediese? Sostener que fue una reacción contra el autoritarismo parece no bastar para explicar la insubordinación popular. De ello da cuenta Ramírez, que busca las "mediaciones locales", las redes militantes y/o personales, como claves explicativas de semejante proceso.

Nosotros, sin rechazar esa explicación, creemos que el detonante decisivo fue la masiva afluencia del pueblo desde las barriadas. Esos nuevos obreros migrantes, llegados recientemente al polo desarrollista en crecimiento, pusieron en las calles sus cuerpos insurrectos. Esa presencia transformó la correlación de fuerzas; sin ellos no hubiese habido insurrección popular.

O, mejor dicho: ellos son la insurrección.

Pero entonces, ¿qué produjo que esos sujetos populares se "activen"? La clave fue la sincronización en torno a una demanda general que articuló a los sectores sociales y fuerzas políticas en lucha contra el gobierno provincial y nacional. A partir de allí se motorizó la insubordinación popular, que para el campo del régimen es, de por sí, siempre violenta.

Para nosotros, como investigadores y sujetos políticos, lo importante es poder discernir "*entre la violencia que coopera con las estructuras de poder de un país, de aquella que actúa en contra de las estructuras dominantes*" (Escobar y Velázquez, 1975, p. 16). Distinguir esto conceptualmente es prioritario para el estudio de los años '70, pero también para los difíciles tiempos que nos tocan vivir en nuestra Latinoamérica. Y es lo que un uso descontextualizado de la noción de "violencia política" puede ocultar.

La Comisión de la Asamblea fue el corazón de las medidas disruptivas, que por ello eran resistidas por los sectores conservadores. Esa comisión, originada desde y en la asamblea, en la democracia directa, sólo se pronuncia en relación a la violencia para denunciar la praxis del estado represivo; nunca se refieren a la "violencia" en términos abstractos, sin explicar su origen o sus objetivos.

Es la Comisión Interpartidaria, en cambio, la que sí condenaba a la "violencia", así, sin adjetivos ni sustantivos, sin historizarla, sin analizar su contexto de producción o su origen. Ellos destacaban la necesidad de encauzar la protesta, para "evitar la violencia". En esa enunciación se evidencia el contenido semejante a la formulación de la teoría de los dos

demonios: si la clave es "evitar" que se desate la violencia, se entiende que quién la desataría sería el pueblo insurrecto.

Para esa perspectiva, el régimen no sería estrictamente "violento": se habría "extralimitado" o cometido "excesos". Lo "violento" sería la potencial ruptura del "orden", de lo "institucional", que podía ser generado por el pueblo fuera de cauce. Lo paradójico es que lo específico del Trelewazo fue justamente aquello que buscaron impedir: una organización asamblearia, horizontal y popular, que enfrentó la dictadura rompiendo los límites de su ilegal institucionalidad.

Esa perspectiva, propia de los sectores más cercanos al poder durante el Trelewazo, es la que también se evidencia en las miradas historiográficas que abordan el concepto de "violencia política" sin historizarlo, sin definir causas y objetivos. No hay violencia en abstracto. Por ello postulamos la necesidad de pensar la "política violenta", analizando sus condiciones de producción, origen e intenciones. En una sociedad dividida en clases la política (entendida como la praxis que intenta modificar o sostener la relación de fuerzas existente), es, siempre inevitablemente violenta, ya que implica la necesidad, presente o futura, de ejercer el poder sobre un otro que pretende impedir nuestro proyecto.

Esa política violenta siempre latente es la que se observa, a cada paso, en el caminar del Trelewazo. Desde esa matriz sí puede analizarse la violencia, como praxis, sin pretensión de culpabilización moral o ética, sino como una dimensión inescindible del específico devenir histórico-político a ser estudiado.

BIBLIOGRAFÍA

- Acha, O. (2009). *Historia crítica de la historiografía: las izquierdas en el siglo XX*. Buenos Aires: Prometeo.
- Acha, O. (2010). *Dilemas de una violentología argentina: tiempos generacionales e ideologías en el debate sobre la historia reciente*. En Actas V Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente. Buenos Aires.
- Águila, G. (2013). *La represión en la historia reciente argentina: perspectivas de abordaje, conceptualizaciones y matrices explicativas*. En Contenciosa, Año I, nº 1, segundo semestre. Santa Fe: UNL, 1-13.
- Águila, G. (2018). *La represión en la historia reciente como objeto de estudio: problemas, novedades y derivas historiográficas*. En Águila; Luciani, L.; Seminara, L. y Viano, C. (comps.). *La historia reciente en Argentina. Balances de una historiografía pionera en América Latina*. Buenos Aires: Imago Mundi, 55-72.
- Águila, G.; Luciani, L.; Seminara, L. y Viano, C. (comps. 2018). *La historia reciente en Argentina. Balances de una historiografía pionera en América Latina*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Alonso, L. (2014). *Las violencias de Estado durante la última dictadura argentina: problemas de definición y análisis socio-histórico*. En Ansaldi, W. y Giordano, V. (coords.). *América Latina. Tiempos de violencias*. Buenos Aires: Ariel, 191-213.
- Ansaldi, W. (2014). *¡A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar! Introducción teórico-conceptual a la cuestión de la violencia en América Latina*. En Ansaldi, W. y Giordano, V. (coords.). *América Latina. Tiempos de violencias*. Buenos Aires: Ariel, 47 a 76.
- Ansaldi, W. y Alberto, M. (2014). *Muchos hablan de ella, pocos piensan en ella. Una agenda posible para explicar la apelación a la violencia política en América Latina*. En Ansaldi, W. y Giordano, V. (coords.). *América Latina. Tiempos de violencias*. Buenos Aires: Ariel, 27-45.

Revista Divergencia: N° 13 / Año 8
Julio - Diciembre 2019
ISSN 0719-2398

- Ansaldi, W. y Giordano, V. (coords. 2014). *América Latina, Tiempos de violencias*. Buenos Aires: Ariel.
- Aróstegui, J. (1994). *Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia*. En revista Ayer nº13. Madrid: AHC y Marcial Pons Ediciones,17-55.
- Aróstegui, J. (1996). *La especificación de lo genérico. La violencia política en la perspectiva histórica*. En Sistema. Revista de Ciencias Sociales. nº 132-133. Madrid, 9-39.
- Aróstegui, J.; Calleja, E. y Souto, S. (2000). *La violencia política en la España del siglo XX*. En Cuadernos de Historia Contemporánea nº 22. Madrid: UCM, 53-94
- Balvé, B. et.al. (2005). *Lucha de calles, lucha de clases (Córdoba 1971 – 1969)*. Buenos Aires: RyR-CICSO.
- Balvé, B. y Balvé, B. (2005). *El 69 Huelga política de masas*. Buenos Aires: RyR-CICSO.
- Binder, A. *Cuatro miradas sobre el "Trelewazo". Memorias en torno a una experiencia de lucha popular*. En Flier, P. (Coord.) y Portelli, A. (Pról.). (2018). *Historias detrás de las memorias: Un ejercicio colectivo de historia oral*. La Plata: FaHCE-UNLP, 101-133.
- Binder, A. et.al. (2015). *Diario del Juicio: la masacre de Trelew, 40 años después*. Rawson: Secretaría de Cultura de la Provincia del Chubut,
- Binder, A. y Fernández Picolo, M. (2015). *Estructura, dispositivos y dinámica represiva en el Noreste de Chubut durante la Revolución Argentina. Aproximaciones a la problemática regional*. En Actas XV Jornadas Interescuelas- Departamentos de Historia. Comodoro Rivadavia: UNP-FHyCS.
- Carassai, S. (2013). *Los años setenta de la gente común: la naturalización de la violencia*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
- Diario Jornada (1971-1972) *Diversas ediciones de 1971 y 1972*. Trelew: Chubut.
- Dussel, E. (1999). *Sobre el sujeto y la intersubjetividad: el agente histórico como actor en los movimientos sociales*. En Revista Pasos nº84. Consulta el 10 de marzo de 2019: http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libreria/104.pdf.
- Escobar, J. y Velázquez, S. (1975). *Examen a la violencia argentina*. México: FCE.
- Fantino, J. y Marinaro, G. (2015). *El enemigo se transforma en criminal. Violencia política argentina durante la década de los setenta en los libros de Vicente Massot*. En Polhis Año 8, nº.16. Consulta el 8 de marzo de 2019: http://polhis.com.ar/index.php/PolHis/article/view/65/125.
- Fernández Picolo, M. et.al. (2015). *Trelew, esa masacre que aún es fuego*. Rawson: Secretaría de Cultura de la Provincia del Chubut.
- Flier, P. (coord.) y Portelli, A. (pról.). (2018). *Historias detrás de las memorias: Un ejercicio colectivo de historia oral*. La Plata: FaHCE-UNLP.
- Gatica, M. (2007). *Los hacedores de caminos*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Gatica, M. (2013). *¿Exilio, migración, destierro? Trabajadores chilenos en el noreste de Chubut (1973-2010)*. Buenos Aires: Prometeo.
- González Canosa, M. (2005). *Las puebladas del principio de los '70, un estudio de caso: Movilización y protesta social en Trelew: La 'Asamblea del Pueblo'*. La Plata: FaHCE-UNLP. Consulta el 13 de marzo de 2019: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.538/te.538.pdf.

- Grenat, S. (2009). *La tarea pendiente. La fuga y la insurrección popular: Trelew, agosto-octubre de 1972*. En Sartelli, E.; Grenat, S. y López Rodríguez, R. *Trelew el informe.* Buenos Aires: Razón y Revolución.
- Ibarra, H. y Hernández, C. (2017). *Estado, Economía y Sociedad. Trelew y su hinterland: 1989-1999*. Trelew: INSHIS-UNP.
- Iñigo Carrera, N.; Grau, M.; Marti, A. (2014). *Agustín Tosco. La clase revolucionaria*. Buenos Aires: La Llamarada ediciones.
- James, D. (2006). *Resistencia e integración. La clase trabajadora y el peronismo, 1955-1976.* Buenos Aires: Siglo XXI.
- Lvovich, D. (2018). *Actitudes sociales bajo la última dictadura militar: un análisis crítico de la producción historiográfica*. En Águila, G.; Luciani, L.; Seminara, L. y Viano, C. (comps.). *La historia reciente en Argentina. Balances de una historiografía pionera en América Latina*. Buenos Aires: Imago Mundi, 73-92.
- Martín, L. (2015). *La gran noche en que estuvimos sumergidos. Aproximaciones al concepto de violencia en 'Los condenados de la tierra'*. En Ardanaz, E.; Jiménez, J. y Alioto, S. (eds.) *Las huellas de la violencia: registros y análisis de las prácticas violentas en perspectiva interdisciplinar.* Bahía Blanca: Hemisferio Derecho.
- Martínez, T. (2009). *La pasión según Trelew*. Buenos Aires: Alfaguara.
- Massot, V. (2003). *Matar y Morir. La violencia política en la Argentina (1806–1980)*. Buenos Aires: Emecé.
- Oberti, A. y Pittaluga, R. (2016). *Apuntes para una discusión sobre la memoria y la política de los años 60/70 a partir de algunas intervenciones recientes*. En Sociohistorica n°38. Consulta 10 de marzo de 2019: https://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/article/view/SHe015/7914.
- Ortíz, M. L. (2019). *Con los vientos del Cordobazo. Los trabajadores clasistas en tiempos de violencia y represión*. Córdoba: Edit. UNC.
- Pérez Álvarez, G. (2011). *Paternalismo, experiencia obrera y desarrollo del régimen de gran industria: la historia de ALUAR.* En Mundos do Trabalho, vol. 3, n. 6. Brasil: Universidade Federal de Santa Catarina, 130-150.
- Pérez Álvarez, G. (2013). *Patagonia, conflictividad social y neoliberalismo 1990-2005*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Pérez Álvarez G. (2015). *El aporte de la migración chilena a la formación de una nueva clase obrera en el noreste de Chubut: 1956-1989*. En Cuadernos de Historia, n° 43. Santiago de Chile: Universidad de Chile, 59-81.
- Pérez Álvarez, G. y Fernández Picolo, M. (2016). *La Masacre de Trelew*. Concepción: Edic. Escaparate.
- Perroux, F. (1955). *Notes sur la notion de pole de croissance*. En Economie Appliquée, Nº8, janvier-juin, Francia.
- Pittaluga, R. (2007). *Miradas sobre el pasado reciente argentino. Las escrituras en torno a la militancia setentista*. En Franco, M. y Levín, F. (comps.) *Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción*. Buenos Aires: Paidós.
- Portelli, A. (2016). *Historias orales: Narración, imaginación y diálogo*. La Plata: FaHCE-UNLP. Rosario: Prohistoria.

- Ramírez, A. (2003). *Las puebladas en la Argentina de los '70: El caso de General Roca (julio 1972)*. En Actas III Jornadas de Sociología de la UNLP. La Plata: UNLP. Consulta 11 de marzo de 2019: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.6978/ev.6978.pdf.
- Revista Aletheia (2019). *Dossier temático: "A 50 años del Cordobazo: historias, experiencias y sentidos"*. Coord. M. C. Tortti y M. González Canosa. En *Aletheia* vol. 9 nº18. La Plata: FaHCE-UNLP. https://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/.
- Revista Archivos (2014). *Dossier: "Del Cordobazo al clasismo: protesta obrera y alternativas culturales"*. En *Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda nº4*. Buenos Aires: CEHTI.
- Revista Hic Rhodus (2019). *Dossier: "50° Aniversario del Cordobazo"*. En *Hic Rhodus* nº 16 (8). Buenos Aires: FCSo-UBA. https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/hicrhodus/issue/view/453/showToc.
- Sábato, E. (1984). *Prólogo al Nunca Más, informe de la CONADEP*. Consulta 3 de agosto de 2019: http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/articulo/nuncamas/nmas0002.htm.
- Schneider, A. (2005). *Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo (1955-1973)*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Scott, J. (2000). *Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos*. México D.F.: ERA.
- Seminara, L. (2018). *Las organizaciones armadas en la historia reciente argentina. Alcances y proyecciones de un recorrido historiográfico*. En Águila; Luciani; Seminara y Viano (comps.). *La historia reciente en Argentina. Balances de una historiografía pionera en América Latina*. Buenos Aires: Imago Mundi, 1-18.
- Zapata, B. (2014). *Como el herrero que machaca sobre el yunque hasta moldear la forma ideal. La Nueva Provincia y su construcción del llamado "delincuente subversivo" (1975-1977)*. En *v*, Dossier 07. Televisión, Dictadura y Transición en Argentina, 144-169.

COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS

BOOK REVIEW

Revista Divergencia: N° 13 / Año 8
Julio - Diciembre 2019
ISSN 0719-2398

Mario Andrés González, Gonzalo Vial Correa, Las sinuosidades de una trayectoria intelectual, 1969-1991. Valparaíso: RIL Editores, Octubre de 2017. 193 páginas

Gorka Sebastián Villar Vásquez[1]

Hacía falta una investigación de este tipo en Chile. Por lo general, el área de la historiografía nacional ha suscitado poco interés entre los historiadores y, salvo excepciones, se le ha reducido a inventarios, catálogos y homenajes póstumos. Sin embargo, en los últimos años se observa un relativo incremento de las investigaciones de este tipo (Villalobos, 2007; Aravena, 2009; Gazmuri, 2009; Góngora, 2015; Pinto, 2016; Grez, 2019), pero aún es escaso. Por esta razón, agradecemos la publicación de estudios que visibilizan la relación entre las tendencias historiográficas del siglo XX chileno y los regímenes de historicidad a través de diversos procesos de carácter ideológico, científico, intelectual y, ¿por qué no decirlo?, políticos.

Desde sus orígenes, los historiadores chilenos tuvieron una profunda vinculación con sus respectivos compromisos políticos, tal como se evidencia en la historiografía liberal del siglo XIX y, en el siglo XX, en las diversas corrientes de la historiografía chilena: la conservadora, marxista, de los *Annales*, la nueva historia social y la nueva corriente conservadora, entre otras. Dicho lo anterior, la elección de Gonzalo Vial como sujeto histórico no solo es relevante por la ausencia de estudios sobre este tema, sino también por el rol importante que desempeñó dicho historiador en la legitimación de las ideas conservadoras en el país durante los últimos 50 años. Vial fue uno de los intelectuales más influyentes en el terreno público de la historia, la educación y la política del país. Un intelectual extremadamente complejo, al que no se le puede atribuir un pensamiento "monolítico". En efecto, Vial fue un importante historiador de la vertiente conservadora, fundador de dos revistas radicalmente opositoras al gobierno del presidente Salvador Allende, uno de los redactores del *Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile*, y, a partir de la crisis económica de 1982-83 - y no antes -, crítico de las violaciones de Derechos Humanos perpetradas por los aparatos represivos del Estado tras ser nominado Ministro de Educación por la dictadura militar, lo que llevaría al presidente del primer gobierno de la transición, Patricio Aylwin Azócar, a invitarlo a participar en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

El libro de González se estructura en cinco capítulos. En el primer capítulo, se examina el proyecto político de Vial a través de la fundación de las revistas *Portada* y *Qué Pasa*, entre 1969 y 1973. González sostiene que la estrategia política de los intelectuales de *Portada* y *Qué Pasa* se fijó dos objetivos: el derrocamiento del presidente Salvador Allende y la deslegitimación del régimen demoliberal, por un lado, y la elaboración de un proyecto económico que desterrara las políticas de corte socialista, por otro (p, 51). Es un capítulo excelente, aunque a veces es difícil distinguir lo que diferencia a Vial de los demás intelectuales de las revistas *Qué Pasa* y *Portada*. Como antecedente, creemos que este análisis se habría complementado de buena forma con la reciente investigación del mismo González sobre los estudios historiográficos en la Universidad Católica entre 1954 y 1970 (González, 2019). De la revisión de la sección reseñas de la revista *Historia*, se desprende que ya en dicho periodo Vial evidenciaba un profundo desprecio por las obras de aquellos autores que adscribían a partidos políticos de izquierda o que utilizaban las herramientas teóricas del marxismo como método de análisis de la realidad (Vial, 1961:337; Vial, 1964: 425).

1 Chileno. Programa de Magíster en Historia Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor de Historia y Geografía Universidad de Chile. Mail: gsvillar@uc.cl

En el segundo capítulo González describe el destacado rol que desempeñó Gonzalo Vial durante los primeros años de la dictadura militar. Vial fue el legitimador intelectual del modelo dictatorial que se impuso en Chile tras el golpe de Estado de septiembre de 1973. González afirma que Vial, miembro del equipo editorial del semanario *Qué Pasa*, persuadió a la Junta Militar para refutar las denuncias que formulaban los organismos internacionales respecto de la violencia estatal, con la creación de un discurso que justificara el golpe de Estado (p, 60). Anónimamente, entonces, elaboró, una argumentación falaz, que fue difundida con el nombre de *Libro Blanco*. Su objetivo era impactar a la "opinión universal" haciendo pública y conocida que la acción de las fuerzas armadas "desmontó un autogolpe planeado por la izquierda, cuyo objetivo era establecer una dictadura totalitaria, después de eliminar a una serie de civiles y militares de la oposición al gobierno" (p, 60).

González plantea, además, una hipótesis interesante que habría que verificar y que podría transformarse por sí misma en objeto de investigaciones: que el proceso de radicalización de la violencia de los aparatos represivos de la dictadura militar en Chile fue influenciado por "la revolución de los claveles" en Portugal, de abril de 1974. Este proceso habría sido, según el autor, "el ejemplo oportuno para que Pinochet tomara medidas al respecto" (p, 100). Volviendo al tema central del libro, González explica que, en los años inmediatamente posteriores al golpe de Estado, Vial rechazó y ocultó constantemente las graves denuncias de violaciones de los Derechos Humanos que diversos organismos nacionales e internacionales formulaban en contra de la dictadura y los organismos represivos del Estado. Sin embargo, a partir de 1977, Vial dio un vuelco político, involucrándose directamente desde su nombramiento como Ministro de Educación, en una campaña en contra de Manuel Contreras, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia – DINA – y de denuncia de las violaciones de los Derechos Humanos en Chile (p, 59).

En el capítulo III, González explica los esfuerzos que desplegó Vial para intentar dar vida a un proyecto cultural de corte nacionalista en educación, replicando el proyecto neoliberal que se imponía en el plano económico. El nacionalismo de Vial no se opuso a la imposición de la ortodoxia económica neoliberal ni a sus consecuencias económico-sociales. Por el contrario, reclamó unidad frente al largo camino que se habría de recorrer, bajo el liderazgo de las Fuerzas Armadas y de Pinochet, jefe de Estado y autoproclamado "presidente de la república"(p, 92). De hecho, como explica González, para Vial la ruptura con el ordenamiento anterior debía ser tan profunda que la reglamentación de la "nueva institucionalidad" debía encarnarse en un nuevo cuerpo legal que fuera capaz de amoldarse a una realidad particular (p, 94).

Sin duda, el IV es el capítulo más interesante del libro, titulado *El primer volumen de Historia de Chile: la legitimación histórica del nuevo proyecto social (1981)*. A pesar de que González advierte en la introducción que su obra no se enfoca en lo historiográfico, resulta llamativo que lo mejor logrado de su trabajo sea precisamente la exposición de los argumentos históricos de Vial para legitimar la dictadura. El autor plantea de forma lúcida que la *Historia de Chile* de Vial fue una construcción histórica que intentó armonizar los elementos ideológicos que caracterizaban a los sectores neoliberales y gremialistas y, también, un mensaje indirecto a las clases dominantes sobre la necesidad de consolidar en el largo plazo los logros alcanzados en dictadura. Según González, Vial se propuso que los políticos se aproximaran a las causas que habrían producido el resquebrajamiento de la "unidad nacional" y comprendieran, que los objetivos que se planteaba la dictadura eran "patrióticos" y no "facciosos"; por lo tanto, su misión, legitimada por un discurso claramente refundacional, era recomponer los consensos rotos (p, 120). Cabe mencionar que el texto de González se hubiese enriquecido con la interesante interpretación que hiciera Felipe López Pérez de la estructura narrativa de Gonzalo Vial (López, 2013).

En el capítulo V titulado *La crisis de la dictadura y el repliegue de Gonzalo Vial (1982-1991)*, el autor explica las sinuosidades de la trayectoria intelectual de Gonzalo Vial frente a la crisis de la dictadura y su desenlace posterior. En efecto, a mediados de la década de los 80 la trama tejida por la

dictadura y sus colaboradores estaba en franca descomposición. En este contexto, en ninguno de los artículos que escribió Vial entre 1983 y 1990 se ensalza la "obra" de la dictadura, sino que expresan más bien un amplio repliegue crítico (p, 158). El futuro político de la nación, según Vial, no podía ser otro que un régimen democrático liberal. Este distanciamiento de la dictadura lo llevó a postular el tipo de democracia que debía caracterizar a la nueva sociedad de la post dictadura y planteó abiertamente que se debía excluir de la vida política a los partidos "marxista-leninistas", sugiriendo de modo indirecto que eliminarlos debía ser una acción bien pensada (p, 161).

Asimismo, Mario González se refiere al rol de Vial frente a las violaciones de los Derechos Humanos en dictadura. Según el autor, el problema para Vial no era tanto si se reprimía o no, sino que después de 12 años la política de exterminio del "adversario" seguía siendo tan brutal y sistemática como en 1973 (p, 171). En este sentido, el autor plantea que, para Vial, identificar a los responsables particulares e individuales de las violaciones de Derechos Humanos, significaba que se eximía de alguna manera de responsabilidades a quienes no estuvieron relacionados materialmente con este tipo de crímenes (p, 176). Fue así como a partir de estos planteamientos, Vial pasó a integrar una Comisión que reconoció las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura (p, 178).

Consideramos que, en el marco de la Historia del Tiempo Presente en Chile, la investigación de González que hemos reseñado es una valiosa contribución al estudio del papel que le incumbe a los intelectuales en la historia de la historiografía y la política. A su vez, abre un amplio abanico de posibilidades para realizar futuras investigaciones: la intervención de Vial en la estructuración de la educación superior privada, su papel durante la detención de Pinochet en Londres, el cuestionamiento de su discurso historiográfico tras la irrupción de nuevos estudiosos de la historiografía chilena en el siglo XXI. Cabe esperar que trabajos de esta envergadura alienten a los investigadores y estudiantes a romper con los paradigmas de la historiografía, muchas veces reducida a un estéril repertorio de "errores" pretéritos y, por lo tanto, ajena al análisis del peso ideológico que conlleva la producción intelectual e historiográfica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aravena, P. (2009). *Memorialismo, historiografía y política. El consumo del pasado en una época sin historia*, Concepción: Editorial Escaparate.
- Gazmuri, C. (2009). *La historiografía chilena (1842-1970), Tomo II*, Santiago: Editorial Taurus.
- Góngora, Á. (Coord.) (2015). *Anatomía de una disciplina, 25 años de historiografía chilena*, Santiago: Editorial Universidad Finis Terrae.
- González, M. (2019). "Los estudios historiográficos en la Universidad Católica de Chile. Aproximación histórica a la fundación del Instituto de Investigaciones Históricas y de la revista Historia, 1954-1970", en *Cuadernos de Historia* n° 50.
- Grez, S. (2019). *Historiografía, memoria, ciudadanía y política. Reflexiones desde el oficio de historiador*. Valparaíso: América en Movimiento ediciones.
- López, F.(2013). "El factor "migración" en el metarrelato de Gonzalo Vial. Una mirada desde la narratividad." En Jara, M. y López, F. (Compiladores) *Migraciones. Una mirada interdisciplinaria*. Concepción: Ediciones Universidad Católica de la Santísima Concepción.
- Pinto, J. (2016). *La historiografía chilena durante el siglo XX. Cien años de propuestas y combates*. Valparaíso: América en Movimiento ediciones.
- Vial, G.(1961). "Reseña de Hernán Ramírez Necochea: Antecedentes Económicos de la independencia de Chile", *Historia* N° 1.

- Vial, G. (1964). “Reseña El problema racial en la conquista de América y el mestizaje. Editorial Austral, Santiago de Chile, 1963.” En *Historia* n° 3.
- Villalobos, S. (2007). *La historia por la historia. Crítica a la historiografía actual*, Osorno: Ediciones Universidad de los Lagos.

.

INSTRUCCIONES A LAS Y LOS AUTORES

AUTHOR GUIDELINES

1. ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL

La revista Divergencia, fundada en el año 2011, es editada por el Taller de Historia Política O.C.F., en Chile, con una periodicidad semestral. Publica trabajos originales de carácter científico y de opinión, en torno al área de las Ciencias Sociales, enfocándose específicamente en la Historia Política Contemporánea con el objetivo de difundir, discutir y debatir ampliamente los avances de las nuevas investigaciones que en esta materia se realizan. El contenido de la revista está dirigido a especialistas, investigadores, estudiantes de pre y posgrado, como también al público en general.

Los artículos deben ser originales y deben circunscribirse a una investigación propiaya finalizada o en estado avanzado y no pueden estar postulando de manera simultánea a otras revistas u órganos editoriales (impresos o electrónicos).

Los originales serán sometidos a un proceso editorial que se desarrollará en varias fases. En primer lugar, los artículos recibidos serán objeto de una evaluación preliminar por parte de los miembros del Comité Editorial, y/o los Editores quienes determinarán la pertinencia de su publicación. Una vez establecido que el artículo cumple con los requisitos temáticos y formales indicados en estas instrucciones, será enviado a dos pares académicos externos, quienes determinarán a través de la modalidad "doble ciego", a fin de resguardar la confidencialidad tanto de evaluadores como de autores: a) el publicar sin cambios, b) publicar cuando se hayan cumplido correcciones menores, o c) rechazar. En caso de discrepancia entre ambos resultados el texto será enviado a un tercer árbitro, cuya decisión definirá su publicación. Los resultados del proceso de dictamen académico serán inapelables en todos los casos.

Divergencia acepta artículos de preferencia en idioma castellano, pero también acepta trabajos en inglés.

Además de los artículos científicos originales, Divergencia publica reseñas bibliográficas y ensayos de opinión, los cuales están enfocados en promover el debate y pensamiento crítico de la realidad actual tanto chilena como latinoamericana.

Las colaboraciones pueden ser enviadas en el período de convocatoria señalado en la web: www.revistadivegencia.cl.Sin perjuicio de lo anterior, Divergencia recibe trabajos durante todo el año, los cuales se incluirán para su evaluación en la convocatoria inmediatamente siguiente a la fecha de recepción.

2. FORMA Y PREPARACIÓN DE LOS ARTÍCULOS ORIGINALES

Los autores enviarán sus colaboraciones sólo vía e-mail, en formato compatible con el procesador de texto Microsoft Word (extensiones ".doc" o ".docx").

Los escritos, podrán tener una extensión máxima de 30 páginas tamaño carta con interlineado simple (1,5) en letra Arial 12, incluyendo notas, cuadros, gráficos, ilustraciones, citas y referencias bibliográficas.

Los artículos deben incluir un resumen de máximo 100 palabras (10 líneas aproximadamente), explicitando los principales objetivos, fuentes y resultados de la investigación. Además de 3 a 5 palabras claves. Tanto el resumen como las palabras claves deben estar en idioma castellano e inglés.

La estructura formal del artículo debe ser la siguiente: 1) título (centrado y negrita), 2) identificación del autor (alineado a la derecha señalando nombre y dos apellidos, filiación

institucional y correo electrónico), 3) resumen (centrado), 4) palabras claves (centrado), 5) abstract (centrado), 6) keywords (centrado), 7) introducción, 8) cuerpo del trabajo (capítulos y subcapítulos), 9) conclusión y 10) bibliografía. Los puntos del "7" al "10", deben estar justificados.

Los criterios de evaluación y selección de los artículos serán los siguientes:

a. Aspectos Formales: cumplimiento de las normas ortográficas, de redacción y otras que establecen en estas "instrucciones a los autores"

b. Título y resumen: descripción de manera clara y precisa del tema del artículo.

c. Presentación clara de la(s) problemática(s), objetivos e hipótesis de trabajo.

d. Fundamentación teórica y metodológica: explicitar claramente la metodología a utilizar y la perspectiva teórica adoptada.

e. Bibliografía y fuentes: utilización de bibliografía actualizada y variedad de fuentes en relación a la problemática adoptada. Se evalúa positivamente el uso de fuentes primarias.

f. Resultados: presentación clara y explícita de los resultados de la investigación en las conclusiones.

Las citas y referencias bibliográficas se realizaran bajo el sistema APA-Harvard que establece, entre otras, las siguientes formas:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Las referencias bibliográficas se deben insertar dentro del texto indicando entre paréntesis el apellido del autor, el año de publicación y la(s) página(s). Ejemplo:

(Garretón, 1991, pp.43-49)

Cuando el autor es nombrado en el texto, sólo se indica el año y la(s) página(s). Ejemplo:

...considerando lo anterior, Garretón (1991, pp. 43-49) sostuvo que los llamados procesos de transición democrática...

Cuando se citan varios trabajos de un mismo autor se debe anotar:

(Garretón, 1991; 1995; 2007)

Cuando un autor tiene más de una publicación en el mismo año, se acompaña el año de la publicación con una letra minúscula. Por ejemplo:

...en dos textos recientes (Gómez, 2010a, p. 15; Gómez, 2010b, p. 69) se señala que...

Cuando es más de un autor en una obra (2 o 3) se anota de la siguiente manera:

(Alcántara y Freidenberg, 2003, p. 83); (Valdivia, Álvarez y Pinto, 2006, p. 25)

Cuando son más de 3 autores:

(Garretón *et.al.*, 2004, p.37)

Las referencias bibliográficas deben ubicarse al final del artículo, cumpliendo un estricto orden alfabético y cronológico, siguiendo las siguientes formas:

Libro con un autor

Angell, A. (1993). *Chile de Alessandri a Pinochet: en busca de la utopía*. Santiago: Editorial Andrés Bello.

Libro con dos autores

Cristi, R. y Ruiz, C. (1992). *El pensamiento conservador en Chile*. Santiago: Editorial Universitaria.

Libro con tres autores

Valdivia, V., Álvarez R. y Pinto, J. (2006). *Su revolución contra nuestra revolución*. Santiago: Lom Ediciones.

Libro con más de tres autores

Fontaine, A *et.al*. (2008). *Reforma de los partidos políticos en Chile*. Santiago: PNUD, CEP, Libertad y Desarrollo, Proyectamérica y CIEPLAN.

Libro con editor

Ríos, N. (ed.). (2010). *Para el análisis del Chile contemporáneo. Aportes desde la Historia Política*. Valparaíso: Ediciones Taller de Historia Política.

Capítulo en libro editado

Gómez, J. C. (2010). Democratización y Democracia en la Historia Política reciente de Chile. En Ríos, N. (ed.), Para el análisis del Chile contemporáneo. Aportes desde la Historia Política (pp. 49-60). Valparaíso: Ediciones Taller de Historia Política.

Artículo en Revista con un autor

Godoy, O. (1999). *La transición chilena a la democracia: Pactada*. En *Estudios Públicos* (Nº 74), 79-106.

Artículo en Revista con dos autores

Barozet, E. y Aubry, M. (2005). *De las reformas internas a la candidatura presidencial autónoma: los nuevos caminos institucionales de Renovación Nacional*. Revista Política (n°45), 165-197.

Referencias de Internet

Moya, P. (2006). *Pinochet en Londres: análisis comparativo de la prensa que cubrió su arresto, aproximación desde el Análisis Crítico del Discurso*. En Cyber Humanitatis (Nº37). Consulta 27 de Agosto de 2011: http://www.cyberhumanitatis.uchile.cl/CDA/texto_simple2/0,1255,SCID%253D18483%2526ISID%253D646,00.html

FUENTES PRIMARIAS

Referencias de periódicos y/o revistas no científicas.

Se debe incluir dentro del texto indicando entre paréntesis nombre del periódico, fecha y página(s). Ejemplo:

> ... tal como se indicó en aquellos tiempos (La Tercera, 18 de Febrero de 1998, p.6), el gobierno debió ceder...

Referencias Audiovisuales

Se deben incluir dentro del texto indicando entre paréntesis el nombre del director y la fecha de realización. Ejemplo:

> ... tal como se señalo en un documental reciente (Said, 2001), la sensibilidad de la derecha chilena...

En el caso de la referencia bibliográfica se debe anotar al final del texto indicando Apellido del director, año de realización entre paréntesis, nombre del documental o filme en letra cursiva y duración. Ejemplo:

> Said, M., (2001). I love Pinochet. 53 minutos.

3. NOTIFICACIONES Y CESIÓN DE DERECHOS

La revista Divergencia requiere a los autores que concedan la propiedad de sus derechos de autor, para que su artículo y materiales sean reproducidos, publicados, editados, fijados, comunicados y transmitidos públicamente en cualquier forma, a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier tecnología, para fines exclusivamente científicos, culturales, de difusión y sin fines de lucro.

En caso de ser aceptado un artículo, se enviará junto con la notificación de aceptación un modelo tipo de "declaración de originalidad y cesión de derechos del trabajo escrito", la cual debe ser firmada, escaneada y enviada de forma digital al correo contacto@revistadivergencia.cl o en su defecto a j.ponce@revistadivergencia.cl

El plazo para reenviar firmada por parte de los autores la "declaración de originalidad y cesión de derechos del trabajo escrito" es de siete días desde que le es comunicada la aceptación. En caso de no cumplir con este plazo se entenderá que el autor renuncia a su posibilidad de publicar en Divergencia.

Revista Divergencia se reserva el derecho a corregir errores gramaticales, ortográficos, de sintaxis, etc. que pudiesen existir en el escrito, sin previo aviso a los autores, y sin que estos cambios afecten el contenido ni el sentido último del artículo.

4. FORMA Y PREPARACIÓN DE LAS RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS Y LOS ENSAYOS DE OPINIÓN

Los autores enviarán sus colaboraciones sólo vía e-mail, en formato compatible con el procesador de texto Microsoft Word (extensiones ".doc" o ".docx").

Las reseñas bibliográficas podrán tener una extensión máxima de 8 páginas tamaño carta con interlineado simple (1,5) en letra Arial 12, y deben versar sobre un libro cuya antigüedad no supere los 5 años a partir de la fecha de la convocatoria. Los ensayos podrán tener una extensión máxima de 12 páginas tamaño carta con interlineado simple (1,5) en letra Arial 12, y deben abordar críticamente, temas de la contingencia política chilena y/o latinoamericana, con el ánimo de generar debate, propuestas y en definitiva opinión crítica del tema abordado.

Para el uso de citas se utilizará la norma APA-Harvard, la cual fue detallada en la "Forma y preparación de los artículos originales" presentada mas arriba.

La selección de las reseñas bibliográficas y de los ensayos será realizada por los editores y/o algunos miembros del Consejo Editorial.

ENVÍO DE COLABORACIONES

Los artículos deben ser enviados a:

José Ponce López - Editor responsable
contacto@revistadivergencia.cl

1. SCOPE AND EDITORIAL POLICY

Divergencia Journal, founded in 2011, is produced by the Taller de Historia Política O. C. F, in Chile and it issued every semester. It publishes original scientific and opinion works in the Social Sciences area, focusing specially in the Contemporary Political History, with the aim of spreading, discussing, and debating broadly the new research progress in this area. The content of the Journal is aimed to specialists, researchers, undergraduate and graduate students, as well as the general public.

The articles must be original and they must confine themselves to an original investigation already finished or in an advanced progress and they cannot be applying simultaneously to other journals or publishing organizations (printed or electronic).

The originals will be submitted to an editing process that will be done in several stages. First the received articles will be assessed preliminary by the members of the editing committee, and/or the editors who will determine the appropriateness of its publishing. Once it is established that the article matches the thematic and formal requirements pointed out in these instructions, it will be sent to two external academic peers who will determine through a "double blind review", in order to maintain confidentiality not only of the assessors but also of the authors: a) to publish without changes, b) to publish after the minor corrections had been done, or c) to reject. In case of disagreement between both results, the text will be sent to a third referee, whose decision will decide its publishing. The results of the process of the academic report will be unappealable in all cases.

Divergencia accepts all articles preferably in Spanish, but articles in English are also accepted.

In addition to original scientific articles, Divergencia publishes book reviews and opinion essays, which focus on promoting debate and critical thinking of current reality of Chile and Latin America.

Collaborations must be sent during the official announcement period pointed out on the website: www.revistadivegencia.cl. Notwithstanding the aforesaid, Divergencia accepts articles during the whole year, which will be considered for assessment in the immediate following official announcement according to the reception date.

2. FORMAT AND PREPARATION OF THE ARTICLES

The authors will send their collaborations only via e-mail, in a format compatible with Microsoft word ("doc" or" docx").

The articles can have a maximum length of 30 pages, letter page format with default line spacing (1,5), Arial 12 font, including notes, tables, graphs, illustrations, quotes and bibliographic references.

The articles must include a summary of maximum 100 words (10 lines approx.), specifying the main objectives, sources and the results of the investigation. After the abstract, you must provide a list of three to six key words, which should be preferably selected from the Thesaurus of Unesco (http://databases.unesco.org/thessp/). Both the summary and the key words should be in Spanish language and English.

The formal structure of the article should be as it follows: **1) title** (centre and bold), **2) author identification** (aligned to the right specifying name and both surnames, institu-

tional affiliation and e-mail address), **3) summary** (centered), **4) key words** (centered), **5) abstract** (centered), **6) keywords** (centered), **7) introduction**, **8) work team** (chapters and subchapters), **9) conclusion** and **10) bibliography**. Points 7 ad 10 must be justified.

The criteria and selection of the articles will be the following:

a) Formal aspects: compliance of the orthography rules, writing and others included in "the instructions for the authors".

b) Title and summary: clear and precise description of the topic of the article.

c) Clear presentation of the problem(s), objective and hypothesis of the investigation.

d) Theoretical and methodological justification: specify clearly the methodology to be used and the theoretical perspective adopted.

e) Bibliography and sources: use of updated bibliography and variety of sources related to the adopted problem. It is positively assessed the use of primary sources.

f) Results: clear and explicit presentation of the investigation results in the conclusions.

Quotes and bibliographic references will be done using the APA-Harvard system that establishes, among other, the following format:

SECUNDARY SOURCES

Book with one author

Angell, A. (1993). *Chile de Alessandri a Pinochet: en busca de la utopía*. Santiago: Editorial Andrés Bello.

Book with two authors

Cristi, R. y Ruiz, C. (1992). *El pensamiento conservador en Chile*. Santiago: Editorial Universitaria.

Book with three authors

Valdivia, V., Álvarez R. y Pinto, J. (2006). *Su revolución contra nuestra revolución*. Santiago: Lom Ediciones.

Book with more than three authors

Fontaine, A et.al. (2008). *Reforma de los partidos políticos en Chile*. Santiago: PNUD, CEP, Libertad y Desarrollo, Proyectamérica y CIEPLAN.

Book with editor

Ríos, N. (ed.). (2010). *Para el análisis del Chile contemporáneo. Aportes desde la Historia Política*. Valparaíso: Ediciones Taller de Historia Política.

Chapter in a published book

> Gómez, J. C. (2010). Democratización y Democracia en la Historia Política reciente de Chile. En Ríos, N. (ed.), Para el análisis del Chile contemporáneo. Aportes desde la Historia Política (pp. 49-60). Valparaíso: Ediciones Taller de Historia Política.

Article in journals with one author

> Godoy, O. (1999). La transición chilena a la democracia: Pactada. En Estudios Públicos (Nº 74), 79-106.

Article in journals with two authors

> Barozet, E. y Aubry, M. (2005). De las reformas internas a la candidatura presidencial autónoma: los nuevos caminos institucionales de Renovación Nacional. Revista Política (n°45), 165-197.

Internet references

> Moya, P. (2006). Pinochet en Londres: análisis comparativo de la prensa que cubrió su arresto, aproximación desde el Análisis Crítico del Discurso. En Cyber Humanitatis (N°37). Consulta 27 de Agosto de 2011: http://www.cyberhumanitatis.uchile.cl/CDA/texto_simple2/0,1255,SCID%253D18483%2526ISID%25 3D646,00.html

PRIMARY SOURCES

References from newspapers and/or not scientific journals

They must be included in the text, indicating between brackets the name of the newspaper, date and page(s). example:

> ... tal como se indicó en aquellos tiempos (La Tercera, 18 de Febrero de 1998, p.6), el gobierno debió ceder...

Audiovisual references

They must be included in the text, indicating between brackets the name of the director and the release date(s). Example:

> ... tal como se señalo en un documental reciente (Said, 2001), la sensibilidad de la derecha chilena...

In the case of the bibliographic reference it must be written at the end of the text the surname of the director, release date in brackets, name of the documentary or film in italics and length. Example:

> Said, M., (2001). I love Pinochet. 53 minutos.

3. NOTIFICATION AND RIGHTS CESSION

Divergencia journal requests the authors to grant the author's rights in order to reproduce, publish, edit ,include , communicate and broadcast the materials and articles publicly, in any way, through electronic means, optical or any technology, for exclusive scientific, cultural, of diffusion and nonprofit purposes.

If an article is accepted, it will be sent attached to the acceptance notification, a model type of "declaration of originality and rights cession of written work", which must be signed, scanned and sent by email to contacto@revistadivergencia.cl or to j.ponce@revistadivergencia.cl.

The deadline to forward the "declaration of originality and rights cession of written work" is seven days after been informed about the acceptance. If you do not meet the deadline it will be understood that you renounce the possibility to publish in Divergencia .

Divergencia journal reserves the right to correct grammar, orthography syntax, etc. errors that might exist in the articles, without informing the authors in advanced and without affecting the content or sense of the article with these changes.

4. FORMAT AND PREPARATION OF THE BIBLIOGRAPHIC REVIEWS AND OPINION ESSAYS

The authors will send their collaborations only via e-mail, in a format compatible with Microsoft Word ("doc" or" docx").

The bibliographic reviews can have a maximum length o f 8 pages, letter page format with default line spacing (1, 5), Arial 12 font, and it must be about a book not older than 5 years starting from the announcement date.

The essays can have a maximum length o f 12 pages, letter page format with default line spacing (1,5) ,Arial 12 font, and they must embark critically upon topics of political convergence, either Chilean or/and Latin-American, in order to generate debate, proposals and in short, to generate critical opinion regarding the topic mentioned.

For quotations, it will be used APA-Harvard, which was explained in "Format and preparation of the articles", presented above.

The selection for the bibliographic reviews and the opinion essays will be made by the editors and/or by some members of the Editorial committee.

COLLABORATIONS FORWARDING

The articles must be sent to:

José Ponce López - Chief Editor
contacto@revistadivergencia.cl

El año 2007 marco a fuego a la Universidad de Valparaíso. La crisis en la que estaba sumergida esta casa de estudios, causada por las negativas políticas educacionales provenientes del gobierno, trajo una serie de movilizaciones que develeron dicha situación. Al calor de ese movimiento, estudiantes, académicos y funcionarios de la UV, remecieron a las y los porteños con sus demandas por un mayor financiamiento estatal y una estructura que permita la participación democrática de todos quienes nos vinculamos con la Universidad.

Esa experiencia de participación activa en un movimiento social y político en la que se afianzó nuestra conciencia como actores sociales, fue la chispa que encendió el camino para construir el Taller de Historia Política, el que se plantea como una instancia de discusión, difusión y producción historiográfica impulsada por y para los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, con el fin de aprehender los procesos políticos, económicos y sociales en que se ha visto inmersa la historia de nuestro país a lo largo del siglo XX.

De manera concreta, nuestro trabajo se ha materializado internamente en la realización de talleres de discusión dirigidos por profesores invitados. En el plano externo, destaca la organización de foros periódicos en que distintos académicos y/o actores político-sociales se han dirigido al estudiantado de la Carrera y la Universidad, refiriéndose a variados temas de interés y contingencia. En la misma dirección, una gran acogida han tenido las Jornadas de Historia Política que a la fecha han celebrado cinco versiones.

Entre las publicaciones que ha realizado el Taller, se encuentran "Para el análisis del Chile contemporáneo: Aportes desde la Historia Política", en el que se condensan algunas ponencias de las Jornadas; y "Vitalizando la Historia Política. Estudios de Chile reciente (1960-2010)" que, siendo distribuído de manera gratuita en los establecimientos educacionales de la V Región y las escuelas de Historia del País, incluye investigaciones originales de los miembros del Taller.

Esperamos con nuestro trabajo ser un aporte a la historiografía y a su difusión, pues frente a las amnésicas construcciones de futuro que algunos sectores políticos impulsan, postulamos firmemente que solo sobre la base del estudio y el conocimiento del pasado por parte de la sociedad en su conjunto, será posible el entendimiento del presente y la proyección de un mañana en que las injusticias y desigualdades de hoy ya no existan. En esa proyección estaremos siempre de parte de la clase trabajadora y de los sectores sociales que nuestro estudio de la historia y en nuestra vida cotidiana, hemos identificado como aquellos para quienes las palabras "desarrollo" o "progreso" (por mencionar algunas de las tan recurrentes en el discurso de la elite política), encuentran poco asidero en sus reales condiciones de vida, no poseyendo una significancia diferente a la paradójica clasificación que les da la gramática, vale decir, la de meros sustantivos abstractos.